

AGUA, PODER Y TECNOLOGÍA

Megaproyectos hídricos y movilización social en Ecuador

JUAN PABLO
HIDALGO
BASTIDAS



ABYA
YALA





Esta obra, de una manera extraordinaria e inspiradora, nos revela las íntimas conexiones entre el agua, los megaproyectos y las relaciones de poder en la costa ecuatoriana. Con gran capacidad intelectual y precisión investigativa, el autor examina los procesos de diseño e implementación de tres megaobras hídricas. Más allá de quitar la máscara de los juegos de poder burocráticos y neoliberales, la fascinante búsqueda empírica y conceptual nos deja ver las luchas y estrategias sutiles de resistencia social. Las familias marginadas y las comunidades perjudicadas reclaman justicia ambiental y una vida digna. Este magnífico libro es de gran interés para docentes, investigadores y estudiantes de ecología política, geografía crítica, políticas de desarrollo y estudios rurales.

RUTGERD BOELENS, profesor titular de Ecología Política del Agua y Gobernanza del Agua, Universidad de Wageningen, Universidad de Ámsterdam y Universidad Central del Ecuador.

Agua, poder y tecnología ofrece una exquisita arqueología de cómo el poder social, el manejo del agua y los sistemas tecnológicos dan forma y transforman las vidas de las personas, mientras se reproducen paisajes hidrosociales de inequidad y desigualdad en Ecuador. Después de leer este libro, usted nunca más mirará al agua de la misma manera.

ERIK SWYNGEDOUW, profesor titular de Geografía, Universidad de Manchester.

Agua, poder y tecnología cuenta la fascinante historia política del Ecuador de los últimos setenta años. Lo hace a través del estudio cuidadoso del dominio del agua en la forma de tres megaproyectos hídricos, considerados hitos del desarrollo, y de las resistencias que se han organizado para detenerlos. La ecología política, el discurso del poder y los estudios de la tecnología conducen esta lectura académica, amena y honesta.

MELISSA MOREANO, profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar e integrante del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.

Una excelente comparación histórica de tres megaproyectos hídricos en Ecuador, que presenta el sueño tecnocrático y los costos sociales en torno a estas obras. Después de leer este libro, su pensamiento sobre grandes proyectos hidroeléctricos nunca volverá a ser el mismo.

MICHAEL BAUD, profesor titular de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Ámsterdam.



AGUA, PODER Y TECNOLOGÍA
Megaproyectos hídricos y movilización social en Ecuador

AGUA, PODER Y TECNOLOGÍA

Megaproyectos hídricos y movilización social en Ecuador

JUAN PABLO HIDALGO BASTIDAS



AGUA, PODER Y TECNOLOGÍA:
Megaproyectos hídricos y movilización social en Ecuador

JUAN PABLO HIDALGO BASTIDAS

Serie Agua y Sociedad, 28

Sección Justicia Hídrica

- © JUSTICIA HÍDRICA
Coordinado por Water Resources Management Group
Wageningen University & Research
Droevendaalsesteeg 3
6708 PB Wageningen The Netherlands
Telf. +31 (317) 484190
www.justiciahidrica.org

- © EDICIONES ABYA-YALA
Av. 12 de Octubre N24-22 y Wilson bloque A
Casilla: 17-12-719
Teléfonos: (593-2) 2506-267 / (593-2) 3962-800
Correo electrónico: editorial@abyayala.org / www.abyayala.org>

- © CEDLA CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN LATINOAMERICANOS
Universidad de Amsterdam
Roetersstraat 33 1018 WB Amsterdam The Netherlands
Telf.: +31 20 525 3498 / <http://www.cedla.uva.nl>

ISBN: 978-9942-09-689-0

Primera edición: junio de 2020

Impreso en Quito, Ecuador

Tiraje: 400 ejemplares

Coordinación general de Justicia Hídrica: Universidad de Wageningen / WRM

Editor académico de la serie: Rutgerd Boelens, Universidad de Wageningen

Corrección: Juan Pablo Hidalgo Bastidas y Mercedes Dioses

Diagramación: Mercedes Dioses

Composición de portada: Ricardo Ponce D.

Fotografía de portada: «Ingenieros hidráulicos de la SENAGUA, contemplando parte del megaproyecto multipropósito Chone durante la etapa de construcción, 2014», tomada por Juan Pablo Hidalgo Bastidas

Fotografía de contraportada: «Campesino argonauta navegando en las aguas del embalse Daule-Peripa, Ecuador. 2015», tomada por Juan Pablo Hidalgo Bastidas

Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este libro por cualquier medio sin permiso de los editores.

JUAN PABLO HIDALGO BASTIDAS

Agua, poder y tecnología: megaproyectos hídricos y movilización social en Ecuador. Juan Pablo Hidalgo Bastidas. Quito: Justicia Hídrica, CEDLA, Abya-Yala. 2020 (Agua y Sociedad, 28; Serie Justicia Hídrica).

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, ECOLOGÍA POLÍTICA, TECNOCRACIA, SEGURIDAD HÍDRICA, GOBERNANZA DEL AGUA, JUSTICIA HÍDRICA, MOVIMIENTOS SOCIALES, RELACIONES DE PODER, ESTUDIOS RURALES, GEOGRAFÍA CRÍTICA, POLÍTICAS DE DESARROLLO, DISCURSO DE PODER

CONTENIDO

| | |
|--|-----|
| Prólogo..... | 11 |
| 1. El desarrollo de megaproyectos hídricos en Ecuador | 17 |
| 2. Períodos clave en el desarrollo de megaproyectos hídricos en Ecuador: Estado, tecnocracia y movimientos sociales..... | 59 |
| 3. Los megaproyectos hídricos como una apuesta tecnocrática: el caso del sistema multipropósito Daule-Peripa..... | 91 |
| 4. Política de los gobernados y construcción social de la tecnología hídrica: el caso del sistema multipropósito Baba..... | 129 |
| 5. Controlando el agua, gobernando la sociedad: el caso del sistema multipropósito Chone | 177 |
| 6. Discusión comparativa y conclusiones generales | 223 |
| Referencias bibliográficas | 251 |
| Anexos | |
| 1. Metodología utilizada para cada estudio de caso, reflexiones metodológicas finales y recomendaciones para una investigación futura..... | 267 |
| 2. La relación entre el artefacto y los diferentes grupos sociales relevantes en Bijker, Hughes y Pinch | 273 |

| | |
|---|-----|
| 3. Tasa de crecimiento del sector público durante gran parte del período desarrollista | 273 |
| 4. Gasto del sector público no financiero (porcentaje del PIB) durante el período progresista. | 274 |
| 5. Perfiles de los ministros y secretarios de Estado más importantes durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana. | 274 |
| 6. Ideología y motivaciones del desarrollo integrado de la cuenca del Guayas con relación a la TVA | 276 |
| 7. Aspectos claves de la historia de la CEDEGE y del sistema Daule-Peripa en el contexto nacional e internacional | 277 |
| Siglas y acrónimos | 292 |
| Nota sobre el autor | 294 |
| Sobre la alianza Justicia Hídrica | 295 |

LISTA DE CUADROS, MAPAS, FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS

CUADROS

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Principales megaproyectos hídricos construidos durante el Gobierno liderado por Correa | 83 |
| 2. | Promesas y resultados del sistema multipropósito Daule-Peripa | 113 |
| 3. | Afectaciones socioambientales y especificaciones técnicas del diseño original según los planes oficiales | 141 |
| 4. | Afectaciones socioambientales y especificaciones técnicas del diseño alternativo según los planes oficiales | 158 |
| 5. | Tenencia de la tierra en la zona de inundación de la presa en Río Grande, Chone | 187 |

MAPAS

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Ubicación de los tres megaproyectos hídricos estudiados y de los centros poblados | 16 |
| 2. | Esquema hidráulico del sistema Daule-Peripa: sistema de sistemas | 103 |
| 3. | Diseño original de Proyecto Baba y principales caseríos afectados | 138 |
| 4. | Diseño alternativo de proyecto Baba y principales caseríos | 160 |
| 5. | Ciudad de Chone y los principales ríos que drenan sus aguas en el valle | 180 |

FIGURAS

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Evolución del diseño de los sistemas de riego en las márgenes del río Daule | 114 |
| 2. | Periodización histórica de la ejecución de la central hidroeléctrica Marcel Laniado | 119 |

| | | |
|----|---|-----|
| 3. | Corte transversal de presa y vertedero y vista superior de vertedero..... | 140 |
| 4. | Vertedero pico de pato..... | 161 |
| 5. | Tipos de propiedades afectadas por el diseño alternativo del proyecto Baba | 162 |

FOTOGRAFÍAS

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Gabarra cruzando el embalse del sistema multipropósito Daule-Peripa | 23 |
| 2. | Cultivo de Maracuyá junto al dique principal y embalse del sistema multipropósito Baba | 24 |
| 3. | Vista panorámica de la represa en construcción y zona de inundación del sistema multipropósito Chone | 26 |
| 4. | Cartel de protesta al sistema multipropósito Chone | 47 |
| 5. | Ciudadana de un barrio del norte de Quito saludando al ciudadano presidente previo a una de sus apariciones sabatinas..... | 77 |
| 6. | Brazos del embalse cubiertos por «maleza» acuática que forma una alfombra flotante, sector de Barragenete | 121 |
| 7. | Isla cultivada con maíz y arroz por afectados al interior del embalse Daule-Peripa..... | 123 |
| 8. | Puente flotante sobre un brazo del embalse, sector El Mate | 124 |
| 9. | Volante promocional «100% chonero»..... | 199 |
| 10. | Cartel de promoción del sistema multipropósito Chone ubicado en la ciudad de Chone | 199 |
| 11. | Letrero ubicado en la entrada del futuro reasentamiento Ciudad Jardín..... | 210 |
| 12. | Vista panorámica de la Comunidad del milenio Ciudad Jardín..... | 211 |
| 13. | Letrero de entrada a la Comunidad del milenio | 212 |
| 14. | Vista nocturna de calles y casas al interior de la Comunidad del milenio | 213 |
| 15. | Cartilla de juego de EEEP diseñado para el módulo sobre hidroeléctricas..... | 214 |

PRÓLOGO

La audiencia de Chone

Corría el año 2011. Llegamos a Manta en el primer vuelo desde Quito. En el aeropuerto nos esperaban dos camionetas con vidrios oscuros y el logo de la Secretaría Nacional del Agua. Tan pronto salimos de la sala de arribo los choferes nos ayudaron con el equipaje. Éramos cuatro funcionarios públicos en total, dos de alto rango y dos técnicos. Yo era uno de los técnicos. Esa mañana debíamos trasladarnos hacia la ciudad de Chone para atender una audiencia en el juzgado local. Un campesino había solicitado varias semanas atrás una acción de protección para impedir la afectación de su finca, debido al avance del megaproyecto multipropósito Chone. Yo sabía que el Gobierno pretendía construir una represa, sin embargo, no estaba al tanto de los pormenores. En ese entonces yo trabajaba en otro tema: la reactivación de un sistema de riego inconcluso y sobredimensionado, construido por el Gobierno anterior al de la Revolución Ciudadana.

El sol empezaba a calentar en Manta. Tan pronto subí al asiento trasero de uno de los vehículos salimos hacia la ciudad de Chone. El viaje, que normalmente toma poco más de dos horas, aquella vez lo hicimos en hora y pico. Cuando llegamos a Chone ya eran cerca de las diez de la mañana. Nos dirigímos a la plaza central. Al entrar al centro de la ciudad nos dimos cuenta que las calles aledañas al juzgado habían sido cerradas por la policía local. El atento chofer aparcó nuestro vehículo en una transversal cerca de la plaza. Me bajé y mientras cubría con la vista la gran cantidad de personas agolpadas en las calles, el calor chonero empezaba a aplastarme contra el pavimento.

Continuamos nuestro trayecto a pie por un par de cuadras. La calle parecía una fiesta. Había tarima, bailarinas, orquesta, personas gritando, y un penetrante olor a mandarina recién pelada. Conforme nos alejábamos de la plaza y nos acercábamos al edificio en donde se encontraba el juzgado, empecé a distinguir una muralla de policías al final de la calle; y detrás, gente levantando carteles. No tomé mucha importancia y continué caminando. No quería perderme de mis colegas entre la multitud. A pesar del ambiente festivo, me sentía un tanto abrumado. El aire estaba enrarecido por una tensión atípica. Sin duda, era distinto a mis anteriores visitas. La puerta del edificio, en donde se ubicaba el juzgado, estaba resguardada por varios policías. Aunque sabía que iba acompañando a los jefes de la Secretaría a una audiencia, una vez en el sitio no entendía con exactitud lo que sucedía, ni qué función debía cumplir yo (un simple técnico) en ese tema. Tampoco supe muy bien, entonces, de qué o quiénes se protegía el estamento judicial. ¿Por qué la muralla de policías? ¿Por qué había tantas mandarinas en la calle?

Al aproximarnos a la puerta del edificio pude darme cuenta de que la policía solo permitía el ingreso a funcionarios de la Secretaría. De algún modo, en ese preciso momento, me sentí privilegiado. Ahora me incomoda reconocerlo. Entre gritos y empujones ingresamos al edificio. Adentro estaba algo oscuro y sentí una agradable frescura. Había una decena de oficinas y locales comerciales cerrados a lo largo de un extenso corredor. En las paredes resaltaba un color satín verde pastel. Mientras caminábamos hacia el segundo piso del edificio, la música paró por un momento y pude escuchar un lejano: ¡No a la represa! ¡No a la represa!, precisamente al otro lado de la tarima y las bailarinas. Como símbolo de la rica producción de sus fincas, decenas de campesinos habían llevado al sitio de protesta ríos de mandarinas. Con ello querían demostrar a los funcionarios públicos la importancia que tenía el sector de Río Grande para los campesinos, para la ciudad y para la provincia de Manabí.

A pesar de la insistencia, los protestantes no podían ingresar al edificio. Ni siquiera el campesino demandante. Después de subir por una treintena de gradas estrechas y oscuras llegamos, finalmente, a un cuarto pequeño y muy caluroso, provisto de una ventana a la calle y una especie de balcón notablemente inútil. Como todo el interior del edificio, ese cuarto también tenía paredes satín verde pastel. El sol seguía quemando afuera, el cuartito era un horno. Extrañé la frescura de la entrada. En su interior ya se encontraban altos funcionarios de otros ministerios, de la presidencia de la República, políticos locales y otras personas que no lograba identificar.

Después supe que muchos eran también funcionarios públicos de bajo rango. Solo en ese momento terminé de entender que mi única función era «hacer fuerza de choque» durante la audiencia. Mi jefe estaba representando al proyecto Chone en la querella jurídica. Todavía sin la presencia del campesino demandante, recuerdo que la jueza se acercó a uno de los directivos de la Secretaría. Yo estaba solo a un par de metros detrás de ellos. Logré esgrimir un intercambio de preguntas y respuestas sobre el litigio, mientras mi jefe asentía con la cabeza. Se proyectaba una suerte de empatía entre ellos. Me pareció un momento por demás incómodo. No quería participar de él, no quería escuchar, pero ya lo había hecho. Me senté en una de las tres decenas de sillas de plástico blanco del abarrotado cuartito, que estaban perfectamente dispuestas en filas y columnas.

Pasados unos minutos de la hora acordada, después de la entrada apresurada del campesino demandante, se inició la audiencia. Sereno, pero con voz firme, preguntó: «¡¿por qué no me dejaban entrar?! ¡¿Y mi abogado?!». Recuerdo que aquel hombre pequeño, pero de contextura gruesa, proyectaba una elegancia peculiar: mezcla de sudor y perfume barato de barbería. Empacado en una camisa blanca impecable, metida en un pantalón de dril grisáceo, retiró de la cabeza su sombrero de cuero y se sentó frente a la jueza, junto a la ventana. Parecía que el quemante sol le era indiferente.

Mientras hurgaba entre los papeles, la jueza pidió que bajaran el volumen de la música de afuera. Uno de los técnicos se paró y salió presurosamente con el mensaje. Enfundada en terno de pantalón rojizo y abanicándose con una carpeta de cartón amarillo, evidentemente desgastada por la acción del implacable sol, la jueza empezó a indagar a los protagonistas. Yo estaba en tercera fila. Solo una detrás de ellos. A pesar del adormecimiento que me causaba el bochorno durante la audiencia, me pareció distinguir un par de temas de la conversación previa entre uno de mis jefes y la jueza. Recuerdo que trascurrió cerca de una hora de intercambio de argumentos. Luego de la excelente argumentación del campesino y los gritos de apoyo desde la calle, la jueza le negó la demanda y dio paso al avance de la represa en su propiedad. Al terminar la audiencia salimos del juzgado y fuimos a la alcaldía que se ubicaba a la vuelta. Ahí se había organizado una rueda de prensa. Las autoridades del Gobierno nacional junto al alcalde de Chone anunciaron al país la continuación inobjetable del megaproyecto. Se actuó de acuerdo con el «debido proceso», dijeron las autoridades. Al poco rato, los gritos en la calle mermaron. Los campesinos regresaron a Río Grande, pero quedaron muchas mandarinas y cáscaras de la fruta perfumando las calles. Se retiró la tarima y la policía nuevamente abrió paso al tráfico vehicular.

A esa hora, la amigable brisa de la tarde ya entibiaba el ambiente. La música se apagó y yo me fui a intentar sacarle un par de horas de trabajo a lo que quedaba del día.

Semanas más tarde, sentado en mi escritorio en Quito, me enteré que la policía había ingresado a Río Grande, a las cuatro de la madrugada, y desalojado por la fuerza al campesino demandante que protegía su propiedad, junto a decenas de campesinos que se encontraban en la misma situación.



A finales del año 2010 inicié entusiasta mi trabajo como técnico en el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Después de una profunda crisis social, económica y política en la que había caído el Ecuador, desde finales de la década de los noventa, en el año 2007, un nuevo gobierno asumió el poder. El palacio presidencial ecuatoriano, Carondelet, recibió a un huésped con un discurso de izquierda y una agenda progresista: Rafael Correa, líder de la autodenominada Revolución Ciudadana. Correa —personaje temperamental, carismático y preparado economista— lideró un proceso, hasta el año 2017, que ofreció devolver la esperanza al pueblo a través de la refundación de la patria.

Después de varios meses en el sector público, hechos como el relatado, en relación a «la audiencia de Chone», despertaron mi inquietud y preocupación en torno al desarrollo de megaproyectos hídricos en el país. ¿Por qué bajo un gobierno progresista (de ciudadanos, inclusivo, etc.) se da este tipo de acciones, aparentemente contradictorias? ¿Cómo puedo entenderlo? Con esta curiosidad, a finales del 2013 decidí iniciar la presente investigación.

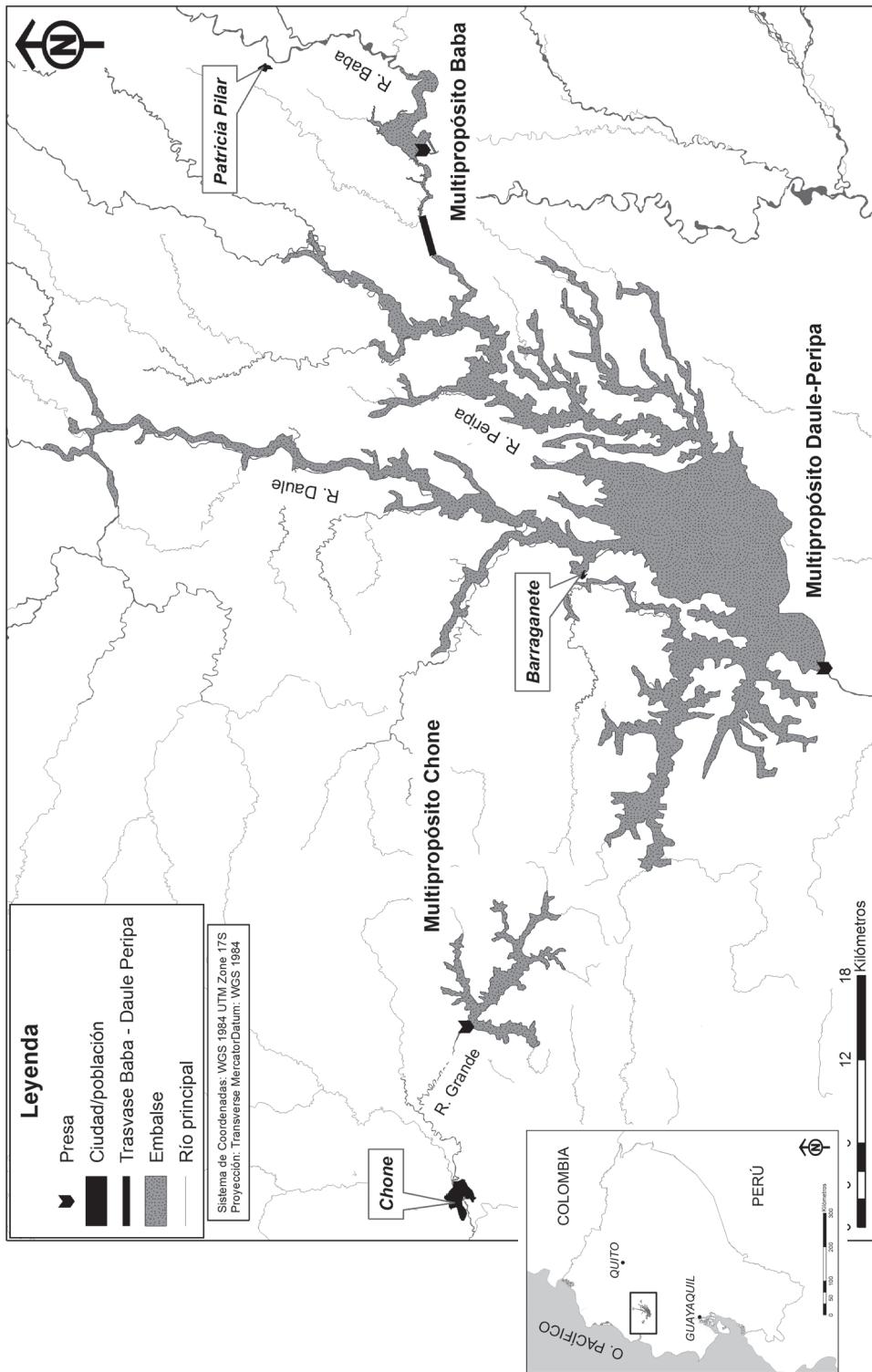
Como parte de su agenda de transformación energético-productiva (Villavicencio 2014), el Gobierno de la Revolución Ciudadana retomó y aceleró la implementación de decenas de megaproyectos hídricos, planificados décadas atrás (Foro de los Recursos Hídricos 2017; Warner, Hoogesteger, y Hidalgo 2017). Gracias al alto precio del petróleo y a las jugosas regalías obtenidas del extractivismo metálico a gran escala —impulsado por el gobierno nacional—, en diez años el régimen invirtió cerca de un billón de dólares americanos en la actualización de estudios y construcción de megaproyectos hídricos (MICSE 2015). Varias de estas obras y políticas enfrentaron fuertes protestas provenientes de comunidades locales y otros actores supralocales críticos. A pesar de ello, el Gobierno siguió adelante, cargando sobre sus hombros, por un lado, la responsabilidad que demandaba su discurso ideológico progresista; y, por

el otro, el peso de las consecuencias que arrojaban a su paso la política de megaproyectos y extractivismo.

¿Cómo entender este *boom* megahidráulico durante un gobierno progresista, con un discurso garantista de derechos como el de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo explicar sus tensiones y ambigüedades? Este libro trata de entender, entre otros hechos, lo que sucedió durante el Gobierno liderado por Correa. Pero para hacerlo, se necesita, además, comprender la reciente historia de la implementación de megaobras hídricas en el país, ya que «el manejo contemporáneo del agua es necesariamente moldeado por las elecciones tecnológicas, sociales e institucionales del pasado»; en consecuencia, a partir de dichas «herencias [...] los gestores del agua actuales deben proponer sus propias acciones» (Crow-Miller, Webber, y Rogers 2017a: 235).

Esta investigación examina las relaciones políticas y de poder, los actores sociales y los factores contextuales que han influido en el desarrollo de megaproyectos hídricos en Ecuador, desde mediados del siglo xx. Muestra los discursos, prácticas y políticas que constituyen este tipo de megaobras a partir de un contexto nacional específico. La investigación se inspira en el Gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. Analiza dicho período y lo presenta no como un período aislado en el tiempo, sino como parte de un proceso histórico contingente del desarrollo de megaproyectos hídricos en el país.

La investigación se fundamenta en el estudio de tres megaproyectos hídricos ubicados en la costa ecuatoriana: sistema multipropósito Daule-Peripa, sistema multipropósito Baba y sistema multipropósito Chone (Mapa 1). Cada uno de ellos es una ilustración de distintos, pero enlazados, períodos sociopolíticos, institucionales, ambientales y económicos de la historia reciente del Ecuador.



Mapa 1. Ubicación de los tres megaproyectos hidráulicos estudiados en este libro y de los centros poblados en donde establecí mi base de investigación de campo.

Elaboración: propia.

CAPÍTULO 1

EL DESARROLLO DE MEGAPROYECTOS HÍDRICOS EN ECUADOR

Grandes represas han sido símbolos potentes de orgullo patriótico y la conquista de la naturaleza por el ingenio humano. [...] Las represas, las mayores estructuras alguna vez construidas por la humanidad, han simbolizado el progreso, sea que ese concepto amorfo represente la creación de riqueza capitalista, la propagación de los frutos del socialismo, o la gran marcha del comunismo. (McCully 2001, 1, traducción propia).

Introducción

Desde mediados del siglo xx, el Ecuador emprendió una decidida carrera hacia el *megahidraulismo* como parte de la solución para problemas estructurales de la sociedad, como la pobreza (Orellana 2008) y la escasa provisión de servicios básicos (por ejemplo: agua potable y electricidad) (CEPAL 1954),¹ al tiempo que promovía una imagen de modernidad y desarrollo. Desde entonces, bajo el liderazgo del Estado, se han ejecutado varias decenas de enormes proyectos hídricos, principalmente en la región costa. A partir de los años cincuenta, tras la influencia de experiencias internacionales como el *Tennessee*

-
1. El megahidraulismo se refiere a la apuesta «técnica» y casi «natural» del ser humano para dominar y transformar los cursos del agua a través de la planificación, construcción e implementación de megainfraestructuras hidráulicas como represas, transvases, sistemas de riego, etc. El megahidraulismo no concierne únicamente a la política de construcción de represas como expresiones materiales, sino que abarca también al régimen de conocimiento, los procesos institucionales, tecnocráticos y financieros que la legitima dentro de un marco de «buena» gobernanza del agua y de gestión de cuencas hidrográficas. Como referencia acerca del megahidraulismo véase los trabajos de Wittfogel (1981); Banister (2014) y Boelens y Post Uiterweer (2013). Aunque Wittfogel adopta una posición bastante determinista, es interesante conocer su análisis relacionando los grandes sistemas de riego, la burocracia hídrica y el poder.

Valley Authority (TVA) (Ekbladh 2002), principalmente en las tierras del litoral, la planificación y construcción de megaobras hídricas se incrementaron en tamaño y número.² A diferencia de los embalses de la serranía ubicados en montañas escarpadas, en donde un gran volumen de agua se contenía en una superficie relativamente reducida, la topografía semiplana de la región costa hizo inevitable la afectación de inmensas áreas de tierras campesinas y bosques tropicales. Los impactos socioambientales de estas primeras obras no se experimentaron enseguida, sino en los períodos sociopolíticos posteriores, conocidos como desarrollismo.

A partir de los años ochenta hasta finales de los noventa, durante el período neoliberal, la planificación, construcción e implementación de estos megaproyectos hídricos, al igual que en muchas otras partes del mundo, empezaron a despertar mucha controversia y resistencia (McCully 2001; Khagram 2004; Kaika 2006; Roy 2010; Finer y Jenkins 2012; Everard 2013; Baghel 2014). En Ecuador, en el ámbito local, se empezó a experimentar la desigual distribución de los impactos y beneficios de las primeras obras implementadas en distintas áreas geográficas y poblaciones. Mientras que ciertos sectores de la sociedad —mejor posicionados geográfica, social, política y económica— gozaban de beneficios en el riego, el acceso al agua potable, electricidad, seguridad contra inundaciones, etc., las comunidades campesinas locales soportaban el aislamiento involuntario, la falta de acceso a la tierra, la exclusión del agua para riego y la carencia de servicios básicos, como la electricidad y el agua potable (Hidalgo-Bastidas, Boelens e Isch 2018). Las campañas internacionales de concientización y censura por los daños causados por las megaempresas durante el neoliberalismo, junto a los impactos negativos, generaron el reclamo de las comunidades locales por la construcción de nuevos megaproyectos hídricos. Es así como en los años cincuenta, las iniciativas tecnológicas de manejo del agua llegaron al Ecuador, pero con el correr de los años se adaptaron a través de renovados discursos y prácticas de gobierno (Warner, Hoogesteger e Hidalgo 2017).

A pesar de las controversias y conflictos que este tipo de megaproyectos implicó en el pasado, no solo en Ecuador sino también a nivel mundial (McCully 2001; Moore, Dore, y Gyawali 2010; Everard 2013; Fearnside 2016;

2. La TVA o «Autoridad del Valle del Tennessee» fue creada en 1933 por el presidente norteamericano Roosevelt. El fin de esta institución fue controlar las riadas del río Tennessee a través de megarepresas e hidroeléctricas, y a través de ello generar progreso y desarrollo social. Desde entonces se convirtió en un ejemplo institucional para manejar el agua y se promocionó a lo largo del mundo. Detrás de esta institución se ha nutrido el paradigma del control técnico de la naturaleza para ponerla al servicio del ser humano.

Crow-Miller, Webber, y Rogers 2017; Kirchherr 2018), los megaproyectos hídricos, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, tuvieron un auge sin precedentes. En su mayoría, los proyectos que se retomaron fueron planificados a lo largo del período desarrollista, y quedaron semiestancados durante el neoliberalismo. Por tanto, las grandes obras hidráulicas ejecutadas en el Gobierno de la Revolución Ciudadana han sido herencia de sueños hidráulicos del pasado. Sin embargo, las políticas y megaproyectos impulsados entre el 2007 y 2017, por el régimen progresista, tienen una contingencia histórica que, sin su acucioso abordaje, la tendríamos como una lectura incompleta e insuficiente del presente. Por esta razón es que para entender el último Gobierno que estuvo en el poder, y su política en este ámbito, se aborda en esta publicación una perspectiva diacrónica, sobre la base de tres megaproyectos hídricos construidos en distintas épocas sociopolíticas.

El primer capítulo desarrolla un breve contexto histórico y la problemática de los megaproyectos hídricos en Ecuador. Enseguida presenta los tres estudios de caso que ilustran y caracterizan esta investigación. Luego explica el marco teórico diseñado como paraguas para entender el desarrollo de este libro y sus estudios de caso. A continuación expone la metodología y métodos utilizados para realizar la investigación. Finalmente, ofrece una guía sobre la estructura y contenidos de los capítulos que conforman el libro.

Caracterización regional y los estudios de caso

Los tres megaproyectos hídricos estudiados en este libro se ubican en la región costa (Mapa 1). Si bien cada proyecto está inmerso en un contexto socioeconómico, agrario, político, cultural y ecológico particular, existen denominadores comunes que los conectan. El área de influencia abarcada por los tres megaproyectos se extiende a cuatro provincias: Los Ríos, Guayas, Manabí y Santa Elena.³ A excepción de Manabí y Santa Elena, las tierras de esta región son regadas por ríos que se originan del deshielo de colosos andinos, como el Chimborazo, y de la cosecha natural de agua de los extensos páramos ecuatorianos. Aparte de recibir agua andina, la región que nos ocupa en este estudio presenta un alto índice de precipitación, pero con una enorme variabilidad temporal y espacial (Cedeño y María Concepción 2010). En un año normal, es decir, sin fenómeno de El Niño, gran parte de la precipitación

3. El Ecuador se divide político-administrativamente en provincias, cantones y parroquias.

cae entre diciembre y mayo (invierno); mientras que en el resto del año se puede experimentar severas sequías (verano), como en el norte de Manabí.

Esta región se ha caracterizado a lo largo de la historia por poseer ricos suelos, resultado del depósito de nutrientes dejado por las periódicas inundaciones y por los cambios de cauce de sus principales ríos: Guayas, Baba, Quevedo, Chone, entre otros. Por esta razón, desde mediados del siglo XIX, los moradores originarios y colonizadores han puesto sus ojos en las tierras de esta región, convirtiéndola desde entonces en el centro agroindustrial y agroexportador del país y, a la vez, en la vivienda de miles de pequeños y medianos campesinos. Mientras los últimos cultivan árboles frutales como cítricos y cacao, pasando por arroz, verduras y hortalizas, hasta coco y badea,⁴ los principales cultivos de exportación que históricamente han pasado por los suelos de esta región son: tabaco, algodón, café, cacao (Chiriboga 1980; Ayala Mora 1993a) y, más recientemente, banano, palma aceitera, caña de azúcar, mango, maíz y soya.

Esta gran región ha sido destino de personas provenientes de distintas zonas del país. En un principio, los espesos bosques con los que contaba esta zona no permitieron que sus tierras sean extensamente colonizadas, tal como sucedió en la sierra (Ferrín-Schettini 1986). A partir del siglo XX empezaría a ser ocupada de forma más agresiva, especialmente por trabajadores de la sierra y capitalistas costeños. Tal ocupación no fue homogénea en toda la extensión de la región estudiada. En la zona centro-norte de Manabí, lugar de ubicación del sistema multipropósito Chone, los colonizadores que se mezclaron con pequeños y medianos campesinos fueron extranjeros. En la actualidad, la zona no presenta grandes haciendas ni propiedades dedicadas a la agroexportación. Por el contrario, prevalecen el minifundio y pequeñas y medianas propiedades (Chiriboga 1980; Brassel, Herrera, y Laforgue 2008).

En la zona fronteriza entre la actual provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, lugar del sistema multipropósito Baba, la colonización masiva tuvo lugar posteriormente. En tanto, las comunidades afrodescendientes provenientes del norte de Colombia y de la provincia de Esmeraldas ya se habían asentado en la zona desde el siglo XIX. Desde los años sesenta, con la primera reforma agraria, empezaron a llegar otros actores, entre ellos campesinos pobres y sin tierra de la sierra y otras provincias de la costa, y agroempresarios capitalistas. Como producto de esta migración mixta en la zona, conviven pequeños y medianos campesinos, grandes agroempresarios capitalistas y contadas comunidades afrodescendientes ancestrales, ubicados

4. La badea es una planta (*Passiflora quadrangularis*) que crece en la zona intertropical del Ecuador. Su fruto es consumido en varias zonas de la costa ecuatoriana.

principalmente a orillas del río Baba. La zona del sistema multipropósito Daule-Peripa, por su lado, fue colonizada también por pequeños y medianos campesinos que llegaron por las reformas agrarias de los años sesenta y setenta. En este caso, debido a lo irregular del terreno, no proliferó más que una sola gran hacienda, que en los años setenta fue dividida y ocupada por campesinos provenientes, en su mayoría, de Manabí.⁵

Cada megaproyecto hídrico multipropósito, en este libro, es emblemático de la política hidráulica de su época y de su contexto sociopolítico y económico.⁶ Por esta razón es que los tres estudios de caso son presentados en orden cronológico, lo que permite la adopción de una perspectiva histórica para explicar el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador.

El primer caso a tratar es el del sistema multipropósito Daule-Peripa. Este es tomado como caso de referencia por ser uno de los primeros y el mayor megaproyecto hídrico construido en Ecuador. Bajo el rol dominante del Estado, este sistema introdujo en el país un modelo tecnocrático de manejo del agua. Materializó, sin duda, varios beneficios para sectores privilegiados de la sociedad (p. ej.: ciudades e [agro]industria); pero también ocasionó graves impactos socioambientales en comunidades locales rurales y en sectores urbanos más deprimidos (Swyngedouw 2004). Por tal razón, el estudio de esta megaobra es fundamental para entender su propio contexto, pero también las políticas hídricas, obras hidráulicas y luchas sociales subsiguientes.

El segundo es el sistema multipropósito Baba. Este se encuentra ligado conceptual e hidráulicamente al Daule-Peripa y es un símbolo de un Estado neoliberal. Es relevante para este estudio, principalmente, por dos razones: por un lado, ilustra la evolución y el rol de los movimientos sociales locales frente a las políticas del Estado ecuatoriano en torno a megaproyectos hídricos; y, por otro lado, es un caso de transición entre el neoliberalismo y progresismo o posneoliberalismo. Finalmente, el sistema multipropósito Chone es uno de los megaproyectos insignia del Gobierno de la Revolución Ciudadana y su política megahidráulica. Esta megaobra es la ventana que permite analizar las continuidades y discontinuidades con respecto al desarrollo de megaproyectos hídricos en el Gobierno progresista, y su problemática contingencia histórica.

-
5. Esta caracterización es resultado de la sistematización de historias de vida y entrevistas de campo, y revisión de fuentes secundarias de historia agraria de la zona.
 6. El adjetivo *multipropósito* se refiere a que los proyectos en cuestión tienen la finalidad o han sido planificados con el objetivo de proporcionar varios servicios: riego, agua potable, generación eléctrica, control de inundaciones, etc.

Sistema multipropósito Daule-Peripa (1982-1988) ⁷

Este megaproyecto es la obra más grande de su tipo y una de las primeras en haber sido construida bajo la premisa del manejo integrado de cuencas hidrográficas en el país.⁸ Surgió en 1957, en pleno período desarrollista. Emergió como expresión de políticas tecnocráticas nacionales e internacionales de manejo de agua. A pesar de que hasta la fecha, varios de los componentes que fueron contemplados inicialmente no han sido ejecutados, el sistema Daule-Peripa es un extenso y complejo entramado de canales, trasvases, acueductos, reservorios, represas, sistemas de riego y de agua potable.⁹ El corazón hidráulico de este sistema multipropósito, la megarepresa sobre los ríos Daule y Peripa, se localiza a unos 160 km al norte de Guayaquil (mapa 1, foto 1). Inició su construcción en 1982 y fue inaugurada en 1988. El área de influencia de esta megaobra abarca cuatro provincias de la costa: Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos. Con sus 78 m de altura, capacidad máxima de almacenamiento de 6 000 000 000 m³ y espejo de agua de cerca de 30 000 ha, es un referente ecuatoriano de conocimiento experto, puesto al servicio del ser humano, y representa también una de las más graves crisis socioambientales del Ecuador. Afectó irreversiblemente a cerca de 40 000 familias campesinas ubicadas en su cuenca aportante. Esta megarepresa y todos sus componentes anexos costaron cerca de USD 1,5 billones y fueron financiados mediante arreglos crediticios de tipo bi y multilateral bajo el liderazgo del Estado (CAIC 2008a). Entre sus importantes aunque contenciosos beneficios cuentan: incrementar 50 000 ha bajo riego en el valle del río Daule (en ambos márgenes); transferir agua desde el río Daule hasta la península de Santa Elena para incorporar otras 42 000 ha con riego y garantizar agua potable para varias poblaciones; asegurar la cobertura de agua potable para Guayaquil y poblaciones cercanas a la represa; controlar las inundaciones de la cuenca baja del valle del río Daule; controlar la salinidad de los ríos en la desembocadura al mar; mejorar la navegabilidad en los ríos Daule y Peripa;

-
7. El periodo de tiempo ubicado junto al nombre de cada estudio de caso corresponde al tiempo en el que se construyó la estructura principal de cada multipropósito (p. ej.: represa).
 8. La capacidad de almacenamiento es sesenta veces superior al embalse Poza Honda (1971), quince veces mayor a la presa La Esperanza (1995), treinta veces mayor al embalse Tahuín (1987) y sesenta veces superior a la de Amaluza, del proyecto hidroeléctrico Paute (1976-1991). Tanto la Esperanza como Tahuín fueron también inspirados por un manejo «integrado» del agua; sin embargo, su alcance y efecto político, económico, social y ambiental fue significativamente menor al alcanzado con el sistema Daule-Peripa.
 9. El sistema Daule-Peripa, tal como se le nombra en este libro, fue llamado oficialmente sistema Jaime Roldós Aguilera. No obstante, en esta publicación se hace referencia a este como Daule-Peripa, debido a que todos los entrevistados lo identifican como tal.



Foto 1. Gabarra cruzando el embalse del sistema multipropósito Daule-Peripa.

Fuente: archivo propio.

generar energía hidroeléctrica y transferir agua a la provincia de Manabí para llenar otros grandes embalses también multipropósito. A pesar de haberse construido hace más de treinta años, sigue siendo, para muchos hacedores de política e ingenieros, un hito nacional, ejemplo de un manejo racional del agua. A través de su estudio, desarrollado con detalle en el capítulo 3, intento dar respuesta a las interrogantes: ¿por qué y cómo se introdujo el modelo de gobernanza tecnocrático de agua que formó la base de su desarrollo?, y ¿cómo ha transformado la vida de las comunidades locales?

Sistema multipropósito Baba (2006-2013)

Este sistema multipropósito es una ilustración del período neoliberal y de la capacidad de cambio e influencia que adquirió la lucha social sobre la tecnología. A pesar de haber sido ideado como complemento del proyecto Daule-Peripa, el proyecto denominado por sus promotores como multipropósito Baba-Vinces, o Baba, tuvo su propia trayectoria. A finales de los años setenta, la megarepresa Baba empezaba a planificarse. Sin embargo, la prioridad política que tenía el Daule-Peripa en aquella época, y la cada vez más evidente crisis económica del país, hizo que su reinicio quedara relegado hasta principios de los años 2000. Su diseño original incluía una represa de 55 m de altura, una central hidroeléctrica, y estaban proyectadas cerca de 3760 ha de afectación directa. En este caso, la movilización social organizada por los pobladores de la parroquia rural Patricia Pilar tendría un rol protagónico en



Foto 2. Cultivo de Maracuyá junto al dique principal y embalse del sistema multipropósito Baba.

Fuente: archivo propio.

el cambio del diseño del megaproyecto. Los impactos socioambientales sobre muchas comunidades locales disminuirían drásticamente. Así, después de varios años de enfrentar fuertes protestas de las comunidades de Patricia Pilar, los proponentes se vieron obligados a cambiar el diseño, bajando la altura de la presa a 20 m, y el área de afectación directa a un tercio del original (foto 2). A pesar de los reclamos de las comunidades locales, el proyecto multipropósito Baba inició su construcción en el año 2006 con el diseño alternativo, y se inauguró en el 2013.

Esta obra costó cerca de USD 600 000 000 y, a diferencia del Daule-Peripa, tuvo en sus inicios una gran participación del sector privado en su promoción y financiamiento. Al final, gran parte de la obra terminó financiándose con créditos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Sus ofrecidos aunque también cuestionados beneficios son: la generación de energía eléctrica (42 Mw), el control de inundaciones, y el riego y trasvase de agua al embalse Daule-Peripa para potenciar la generación de energía en su sobredimensionada central hidroeléctrica. A través de su estudio, presentado en el capítulo 4, se intenta responder,

¿cómo influyó el contexto neoliberal en el desarrollo de este megaproyecto?; y, ¿cómo y hasta qué punto las comunidades locales lograron influenciar sobre su diseño e implementación final?

Sistema multipropósito Chone (2011-2015)

Este megaproyecto multipropósito es emblemático del período posneoliberal o progresista. Al igual que las dos anteriores, esta obra empezó a idearse a finales de los setenta y sus primeros diseños estuvieron listos en 1984. Después de una larga paralización, este proyecto fue retomado por el Gobierno de Correa en el año 2008. Después de un largo periodo de conflictos locales, inició su construcción a finales del 2011 y se inauguró en noviembre del 2015. El sistema multipropósito Chone comprende una represa de 59,5 m de altura sobre el río Grande (foto 3), y la extensión de un canal de desagüe que atraviesa por un costado de la ciudad de Chone. La represa sobre el Río Grande es la infraestructura central del sistema y la que más impacto ha conllevado (mapa 1). Por tal razón, esta infraestructura se convirtió en el centro de tensiones entre el Gobierno y las comunidades campesinas locales (y sus aliados).

El costo total de este megaproyecto ascendió a cerca de USD 130 000 000. A diferencia de los otros dos sistemas construidos durante el período desarrollista y neoliberal, el sistema multipropósito Chone fue financiado completamente con fondos directos del presupuesto general del Estado, sobre la base de regalías mineras y excedentes petroleros. Entre los esperados beneficios cuentan: control de las inundaciones de la ciudad de Chone y áreas aledañas, la provisión de agua potable para la ciudad, y el incremento de alrededor de 2200 hectáreas bajo un nuevo sistema de riego. A través de su estudio, detallado en el capítulo 5, se intenta contestar las interrogantes: ¿cómo y a través de qué discursos y prácticas, el Gobierno de la Revolución Ciudadana negoció e impulsó su construcción e implementación?

La presente investigación profundiza acerca del desarrollo de estos tres megaproyectos, su contexto sociopolítico, proceso tecnológico y consecuencias socioambientales, de manera individual. Además, intenta dar respuesta a varios desafíos analíticos que intrigán el desarrollo de estos proyectos en su conjunto, tales como: ¿hasta qué punto los megaproyectos hídricos son (in)dependientes al contexto sociopolítico y económico-institucional en el cual están inmersos?; ¿quién propone dichos proyectos, desde qué epistemologías y cómo interactúan con la diversidad de actores que están inmiscuidos en los procesos de diseño, construcción e implementación de dichos proyectos?; ¿únicamente los actores dominantes dan forma a este tipo de tecnologías, o aquellos subalternos también juegan un rol?; ¿estas tecnologías son



Foto 3. Vista panorámica de la represa en construcción y zona de inundación del sistema multipropósito Chone.

Fuente: archivo propio.

únicamente informadas por los eventos, conocimiento y actores contemporáneos aislados, o también son un producto contingente e interconectado de experiencias, prácticas y conocimientos de actores locales, supralocales e internacionales a lo largo del tiempo?; ¿cuál es el papel de la tecnología en conflictos en torno a los megaproyectos hídricos? A partir de ello, ¿cómo entender las consecuencias socioambientales de este tipo de proyectos?

Tal como dejan entredicho estos desafíos, en la formación de megaproyectos existe una relación que va más allá de «lo técnico» y lo material. El estudio de este tipo de proyectos implica la interlocución entre varias disciplinas. Este estudio plantea una aproximación interdisciplinaria del agua y su gestión, una mirada crítica de la tecnología y su desarrollo, y una lectura matizada de las relaciones sociales de poder que han dado sentido a la relación agua-sociedad-tecnología con respecto a este tipo de proyectos en el Ecuador. Con la finalidad de entender tal relación y dar respuesta a mis preguntas de investigación en este estudio, propongo un marco teórico-conceptual que se orienta a partir de la ecología política (Forsyth 2003; Bakker 2012; Leff 2012; Robbins 2012), de la teoría posestructuralista acerca del poder y de la gubernamentalidad (Foucault 1980, 1991; Li 2007; Fletcher 2010; Boelens 2015b), y de las teorías sobre la construcción social de la tecnología (scot, por

sus siglas en inglés) (Winner 1980, 2014; Law 1991; Pfaffenberger 1992a; Bijker, Hughes, y Pinch 2012).

A través de estas aproximaciones teóricas intento dar respuesta a la siguiente pregunta principal de investigación, que se subdivide en tres aspectos: ¿Cómo las relaciones de poder se han empotrado e influenciado en el diseño, construcción e implementación de los tres megaproyectos en cuestión?; ¿Hasta qué punto las diferentes reacciones sociopolíticas tanto dominantes como subalternas han influenciado sobre estas soluciones tecnológicas?; y, ¿qué continuidades y discontinuidades se han presentado en el desarrollo de este tipo de obras en el país?

Es interesante el análisis de los tres casos en conjunto, no solo porque permite entender mejor las relaciones de poder que dan forma a cada uno de los megaproyectos en cuestión y sus contingencias históricas particulares, sino porque también aporta un mejor entendimiento de las continuidades y diferencias entre los distintos proyectos, períodos y contextos en el desarrollo de megaproyectos hídricos en Ecuador. Lo que esta investigación busca, además, no solo es entender cómo los megaproyectos hídricos *son* o si su conocimiento *es* válido o no en, y para, el contexto estudiado, sino que pretende indagar acerca de cómo y por qué tales proyectos, y sus argumentos de legitimación, *han sido* producidos y legitimados a través del tiempo, como verdades absolutas para el manejo del agua y de las sociedades relacionadas a esta.

Consideraciones teórico-conceptuales: relaciones de poder en el desarrollo de megaproyectos hídricos

En términos generales, un megaproyecto es un emprendimiento que involucra la movilización de enormes cantidades de recursos materiales, seres humanos y conocimiento. Necesita de multimillonarias inversiones de capital (comúnmente transnacional), proveniente a menudo de organismos multilaterales de financiamiento, de la contratación de gigantes y monopólicas empresas consultoras, de la intervención de enormes consorcios y empresas constructoras, y del despliegue de conocimiento experto que legitima su concepción, promoción, construcción y funcionamiento. En particular, los megaproyectos hídricos se caracterizan por ser tecnologías utilizadas, o por lo menos promocionadas, para gestionar el agua. En este libro me centro en un tipo particular de esos megaproyectos: las represas multipropósito. Estas son, en principio, gigantescas obras que sirven para controlar,

acumular y distribuir el agua. En su discurso, y muchas veces en la práctica, estos proyectos materializan el agua para el consumo humano, electricidad, riego, control de inundaciones, navegabilidad, etc. De acuerdo con la Comisión Internacional de Megareservas (ICOLD, por sus siglas en inglés), una megareserva, para ser considerada como tal, debe sobrepasar los 15 m de altura desde la base hasta la corona de la presa, y/o ser capaz de acumular tras la pared de la presa 3 000 000 m³ de agua o más.

En este libro, los megaproyectos hídricos también son concebidos como tecnologías socialmente construidas y artefactos políticamente informados que, a su vez, moldean la sociedad sobre la que se instalan (Winner 1980; Pfaffenberger 1992a). Asumo, además, que distintos actores (Estado, comunidades locales, élites locales, ONG, empresas constructoras, financieras, expertos, etc.) participan de manera desigual en los procesos de diseño, construcción e implementación de estas megaobras. En consecuencia, los impactos y beneficios asociados a estos proyectos también se manifiestan de forma desigual en los distintos sectores sociales involucrados. De aquí que dichos emprendimientos son altamente contenciosos y contestados a nivel local, supralocal e internacional.

Con el fin de entender esta problemática, propongo las siguientes consideraciones organizadas en tres grandes ejes teórico-conceptuales. El primer eje se basa en la *ecología política* y sus aportes directos para el desarrollo de una ecología política del agua, que permite abordar la gobernanza de este recurso desde una mirada crítica. Este es el paraguas interdisciplinario que me posibilita entender mejor las relaciones de poder que dan cuenta de las tensiones socioambientales en torno a la política y práctica de los megaproyectos hídricos. El segundo es el *entendimiento del poder* y su relación con la producción de conocimiento y los regímenes de «verdad». En este eje abordo de forma concreta la gubernamentalidad y la actitud crítica, ambas desde una perspectiva posestructuralista. El tercer eje parte del debate acerca de la *construcción social de la tecnología*. Este permite la integración de la tecnología como dominio explícito en el desarrollo de megaproyectos hídricos. A continuación, esta sección presenta el marco teórico paraguas que informa la investigación. En el desarrollo de los capítulos 3, 4 y 5 amplió y profundizó este marco a través de conceptos específicos.

Ecología política: piedra angular para el estudio crítico de megaproyectos hídricos y gobernanza del agua

Gran parte de los ecólogos políticos comparten la idea de que este enfoque adquirió prominencia desde los años sesenta y setenta, a partir de la crisis

ambiental que empezaba a visibilizarse en distintas regiones del planeta (Bryant y Bailey 1997; Forsyth 2003; Leff 2012; Robbins 2012). Por tanto, este enfoque no surgió como un esfuerzo exclusivamente académico, sino que emergió también como una apuesta explicativa desde el activismo político (Leff 2012). Desde entonces, las contribuciones realizadas por múltiples disciplinas han hecho de la ecología política un enfoque *híbrido*, profundamente interdisciplinario y apropiado para examinar y entender las luchas socioambientales.¹⁰

La ecología política indaga y cuestiona elementos alrededor de la gobernanza de los recursos naturales, el conocimiento sobre la naturaleza y nuestra relación con ella, el cambio ambiental, las identidades ambientales y, por supuesto, la degradación ambiental, todos ellos como una cuestión intrínsecamente política (Perreault, Bridge y McCarthy 2015). A partir de estos elementos distintivos, y a la vez comunes, en este libro utilizo la ecología política «como los lentes teóricos y políticos a través de los cuales se pueda entender, retar y estructurar la investigación dentro de las relaciones entre sociedad y naturaleza en el mundo contemporáneo» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 621, traducción propia). Este enfoque me permite estudiar «las categorías, ideologías, y narrativas —colectivamente—, discurso que las personas desarrollan para entender y explicar el cambio ambiental y para movilizar la política en torno al medio ambiente» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 132, traducción propia). Y de manera particular, me posibilita dar un sentido crítico a «cómo el uso [y gobernanza] de los recursos naturales refleja y refuerza las relaciones sociales de poder» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 378, traducción propia).

Siguiendo a Timothy Forsyth (2003) distingo dos generaciones en la evolución de la ecología política: una estructuralista y otra posestructuralista. La primera generación planteaba el problema de la degradación ambiental a partir de aproximaciones estructuralistas como el capitalismo y/o formas

10. Entre las contribuciones que aportan para la formación de este enfoque cuentan: la economía política (p. ej.: Blaikie 1985), la ecología económica (p. ej.: Martínez-Alier y Schulzmann 1987), la teoría de sistemas y ecosistemas, ecología cultural/antropología ecológica (p. ej.: Vayda y Rappaport 1967), los estudios en desastres naturales (p. ej.: Watts 1983), los estudios agrarios y campesinistas (p. ej.: Shanin 1970; Scott 1985), la teoría de sistemas globales, dependencia y marxismo estructural (p. ej.: Bunker 1985; Hecht 1985). Las contribuciones más contemporáneas están inspiradas por el posestructuralismo (p. ej.: Foucault 1980), estudios feministas (p. ej.: Rocheleau 1995), estudios culturales y posmodernismo.

coercitivas desde el Estado, como medios de control y acceso a los recursos naturales (uso del suelo principalmente). Tal como lo plantean Blaikie y Brookfield: «la frase “ecología política”» combina las preocupaciones sobre ecología y una amplia definición de economía política. En conjunto, esto abarca la dialéctica entre sociedad y los recursos con base en el suelo, dentro de clases y grupos dentro de la sociedad misma» (Blaikie y Brookfield 1987, 17). Bajo tal orientación esta generación demostró que, contrariamente a los planteamientos de corrientes deterministas y apolíticas (p. ej.: Thomas Malthus), «los problemas ambientales eran de origen y definición *social*» (Watts 2000, 259). Esta generación sentó las bases para dar explicaciones políticas sobre la degradación ecológica, pero sus aportes no estaban exentos de crítica (Watts 2000). Los principales puntos de crítica giraban en torno a que el enfoque tenía un abordaje muy débil y ambiguo sobre fuerzas externas y causalidades (p. ej.: los derechos de propiedad y el poder del mercado).

[S]us cadenas de explicaciones [de la ecología política] parecen incapaces de aclarar cómo algunos factores se convierten en causas [...]. No hay un intento serio de tratar los medios por los cuales se definen, negocian y contestan el control y el acceso a los recursos o los derechos de propiedad dentro de los ámbitos políticos del hogar, el lugar de trabajo, y el Estado (Peet y Watts 1996, 8-9, traducción propia).

De acuerdo con Watts, excluir los discursos dejaba, en la primera generación, incuestionadas las «leyes naturales» (2000, 263) como, por ejemplo, el ciclo hidrológico u otras formas de naturalizar la relación sociedad-naturaleza.

La segunda generación ha intentado dar mayor atención al poder y lo político, como fenómenos (inter)relacionales e intersubjetivos. En gran medida, desde los aportes foucaultianos, esta generación intentó entender la naturaleza, la degradación ecológica y su relación con la sociedad como una construcción social producto del poder, su relación con el conocimiento y la producción de discursos (Escobar 1996; Watts 2000; Forsyth 2003). Para esta generación, un enfoque constructivista es clave para permitir un análisis crítico de la degradación ambiental (p. ej.: Leff 2012). Así lo recoge Arturo Escobar en una de sus primeras contribuciones sobre una ecología política posestructuralista:

El proyecto refleja una creciente creencia de que la naturaleza es socialmente construida, algo completamente diferente a decir «no hay naturaleza real allá afuera»; pero toma un paso más allá al insistir que tanto los constructos

de la economía política y la ecología, así como sus objetos de estudio, son formas específicas de conocimiento modernas que deben analizarse discursivamente. Es necesario reiterar las conexiones entre la creación y la evolución de los discursos y las prácticas a través de las cuales históricamente se produce y se conoce la naturaleza (Escobar 1996, 46, traducción propia).

A partir de ello, la ecología política empieza a entender las realidades ambientales, la degradación ecológica, la gobernanza de los recursos naturales y sus causalidades como resultado de verdades científicas absolutistas, discursos modernistas, prácticas institucionales y agendas políticas dominantes específicas. La segunda generación se preocupó por analizar sus inquietudes desde la relación entre el conocimiento y poder, expresada en el discurso (Foucault 1980). Como muestro en detalle más adelante, Michel Foucault tuvo una gran influencia en este proceso de retroalimentación de la ecología política. Además, en esta generación se empezaron a incluir otras temáticas que tradicionalmente se estudiaban en campos más disciplinarios y tradicionales como la sociología y su trabajo con movimientos sociales. Por ejemplo, Nancy Peluso muestra que la ecología política no había considerado de forma abierta —en la primera generación— formas de contestación en torno a la cuestión ambiental (1992). Es así que a partir de los años noventa, la ecología política incluyó en su enfoque el estudio de «movimientos ambientalistas, el rol de la sociedad civil, y más tarde la lucha armada [...], profundizando su entendimiento sobre cómo opera el poder» (Watts 2015, 35, traducción propia). Por este motivo es que Watts reconoce que la segunda generación es el resultado de una «polinización cruzada con otros campos como los estudios de la ciencia, historia y justicia ambiental» (Watts 2015, 34). En este punto, la ecología política, explícitamente, se consolida como un campo «alrededor de la política, y sobre el reconocimiento del carácter político de temas que gobiernan y norman al ambiente y los recursos naturales» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 598, traducción propia).

Tanto académicos como activistas ecólogos políticos empezaron a preguntarse, «¿por qué ciertas ideas y prácticas llegan a ser dominantes, y cómo grupos subalternos y oprimidos podrían contestarlas, y a partir de ello construir alternativas a estas prácticas y centros de poder?» (Watts 2015, 35, traducción propia). En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, era necesario entender las formas en las que opera el poder, cómo se produce conocimiento y (sobre todo) quién «tiene» el poder para producirlo e impulsarlo. Una muestra de esta perspectiva se desarrolla en trabajos como el de Tania Murray Li (2007), quien presenta cómo, tras el deseo de mejorar (y gobernar)

las vidas y paisajes agrarios en Indonesia, el Gobierno y los expertos despliegan prácticas y construyen discursos apolíticos mediante la movilización de estrategias de poder gubernamental. Este trabajo expone las formas y relaciones de poder que quedan escondidas detrás del escaparate de «lo técnico».

A partir de los aportes de la ecología política, investigaré *«las relaciones de poder entre sociedad [tecnología] y naturaleza empotradas en los intereses sociales, institucionales, de conocimiento e imaginarios que tejen las formas de vida de las personas»* (Leff 2012, 1, mi énfasis), protagonistas del desarrollo de los megaproyectos hídricos. Además, argumento que la ecología política «es el campo donde las estrategias de poder son reveladas para deconstruir la insustentable racionalidad moderna» (Leff 2012, 1), que sostiene y (re)produce la política en relación con este tipo de megaobras, así como con uno de sus elementos centrales: el agua.

Dos aspectos informan la ecología política y sus diversas (sub)ramas. El primero es la (re)politización del problema ecológico, y el segundo es la lucha contra la injusticia socioambiental. Respecto al segundo aspecto, uno de los recursos naturales cruciales, en torno al cual se materializa la noción de (in)justicia, es el agua (Watkins *et al.* 2006; Swyngedouw 2015; Zwarteveen 2015). Siguiendo los aportes de la justicia ambiental (p. ej.: Schlosberg 2004; Fraser 2012), se configura la noción de *justicia hídrica* tanto como una aproximación académica como una de acción política (Boelens *et al.* 2018).¹¹ La justicia hídrica no solo considera aspectos de distribución socioeconómica alrededor de problemas de base hídrica —como aquellos que se visibilizan por el desarrollo de megaproyectos hídricos, en donde existe una desigual e inequitativa distribución de impactos y beneficios socioambientales—, sino que incluye dimensiones de reconocimiento cultural y participación política (Perreault 2014; Zwarteveen y Boelens 2014).

Considerando que esta investigación no gira únicamente sobre el análisis de impactos y beneficios, sino que estudia las políticas, discursos, prácticas y relaciones de poder que informan el desarrollo de megaproyectos, resulta útil explicitar tanto el nivel de reconocimiento que tienen los distintos actores (sus conocimientos y prácticas), como su participación política (formal e informal) en los procesos de toma de decisiones. Por tal razón, en este libro utilicé como referencia la noción de justicia hídrica, ya que considero «los problemas en torno al agua como problemas de justicia» (Zwarteveen y Boelens 2014, 143). La justicia hídrica es, por tanto, la base complementaria y necesaria de

11. Véase la alianza internacional Justicia Hídrica (<http://justiciahidrica.org/>) como referencia de trabajo entre el activismo político y la producción académica en torno al tema de justicia hídrica y ambiental.

una ecología política del agua. Me permite entender los conflictos alrededor de los megaproyectos hídricos como luchas incrustadas y específicas en contextos históricos y socioculturales particulares (Zwarteveen y Boelens 2014). De este modo, la justicia hídrica cuestiona la pretensión de los promotores de megaproyectos hídricos, de presentarlos como si fuesen tecnologías universalistas y descontextualizadas del manejo de agua.

Una rama de la ecología política: la ecología política del agua argumenta que los problemas en torno al agua no son *solo* técnicos, sino son dilemas social y políticamente producidos e inducidos (Loftus 2009; Bakker 2012). Inclusive argumenta que aquello presentado como técnico es, en sí mismo, social y políticamente mediado (Budds 2009). Un ejemplo es el de las nociones de escasez y sobreabundancia de agua, y que a su vez son frecuentemente utilizados para justificar el desarrollo de megaproyectos hídricos. La gestión del agua está informada por intereses y relaciones de poder que afectan estructuralmente su control, acceso y distribución espacial y temporal (Bakker 2009; Barnes y Alatout 2012; Zwarteveen 2015). Esta característica se evidencia en distintos sectores y entre diferentes tipos de usos: en ciudades (Swyngedouw 1995; Crow 2018), en sectores rurales (Mena-Vásquez, Boelens y Vos 2016; Hidalgo, Boelens y Vos 2017; Hidalgo-Bastidas 2018), y/o en los traslapes entre ambos (Riaz 2002; Hommes y Boelens 2017). Cualquiera sea el caso, el destino del agua (riego, agua potable, industria, etc.) y los medios utilizados para captarla, acumularla, transformarla (calidad del agua) y distribuirla (política pública, leyes, modelos de gobernanza, infraestructura/tecnología, etc.), están profundamente influenciados por nociones jerarquizadas de poder que dan forma a la relación entre el agua y la sociedad (Baghel 2014; Swyngedouw 2015). Comúnmente, actores más poderosos (p. ej.: ciudades, agroempresas, minería, expertos, etc.) establecen normas y universalizan modelos de control de agua (p. ej.: megarepresas, pago por servicios ambientales) que funcionan en su propio beneficio (Rodríguez de Francisco y Boelens 2015; Vos y Boelens 2014), mientras actores más vulnerables (p. ej.: comunidades indígenas, campesinos, pobres de la ciudad, etc.) ven sacrificado su bienestar (Perreault 2014; Boelens *et al.* 2018). Tal proceso se presenta en gran medida a través de la construcción de discursos y el despliegue de estrategias de gubernamentalidad en torno, principalmente, a dos condiciones extremas relacionadas con el control, distribución y acceso al agua: escasez = sequías y (sobre)abundancia = inundaciones.

El potente discurso creado acerca de la escasez de agua y sus amenazas futuras ha impulsado una serie de acciones institucionales, económicas y tecnológicas dirigidas al desarrollo y consolidación de una «buena» gobernanza del agua (Watkins *et al.* 2006). Si bien la escasez es ocasionada por la falta

física del agua o H₂O, comúnmente no se da tanto por su escasez física, sino por una económica o política (Reis 2014). Los actores con mayor poder provocan la escasez a través de la acumulación de agua para su beneficio, occasionando una escasez (física) del recurso a actores más vulnerables. Este caso es evidente, por ejemplo, en el conflicto social entre las grandes empresas florícolas localizadas en el norte del Ecuador y las comunidades campesinas, en donde los grandes empresarios roban el agua de los huertos de los campesinos a los que por derecho les corresponde (Poats, Zapatta, y Cachipuendo 2006; Hidalgo, Boelens, y Vos 2017; Hidalgo-Bastidas 2018). Mientras las florícolas tienen agua garantizada, los campesinos —generalmente ubicados aguas abajo— sufren de una escasez física, pero que en verdad es la manifestación de una escasez económica.

En este sentido, la escasez del agua es relativa y a su vez es utilizada para impulsar modelos y políticas descontextualizadas de control del agua. Michael Goldman (2007) y Barbara Lynch (2013), por ejemplo, muestran críticamente cómo el discurso de la escasez ha sido impulsado por instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial (BM), y adoptado y reproducido por Estados y Gobiernos para justificar sus acciones con miras a una «buena» gobernanza del recurso (p. ej., basada en el mercado o la llamada tecnología de punta). Michael Goldman (2007) lo muestra en torno a las políticas de privatización del agua, legitimadas tras un discurso de escasez impulsado desde el BM. Lynch, por su lado, demuestra que «las prescripciones de política de instituciones internacionales que buscan transformar la gobernanza de agua dulce [...] son motivadas por el miedo a una crisis debido a una *absoluta escasez* de agua dulce» (Lynch 2013, 70, mi énfasis). A través del caso peruano, ella presenta cómo este discurso tiende a mostrar la gobernanza del agua como una cuestión apolítica y natural, a la vez de mantener en la penumbra las relaciones de poder sobre su construcción social, política y económica: aspectos que en el fondo definen quién, cómo, cuándo y bajo qué condiciones se accede al recurso. Este discurso también legitima intervenciones drásticas (construcción de megaproyectos hídricos), deslegitima la capacidad local para lidiar con el problema, y justifica la intrusión del Estado (políticas universalistas) y de los expertos (conocimiento válido). Simultáneamente, este discurso tiende a subestimar o desvalorizar otras nociones de manejo de agua o formas de vida (p. ej.: comunidades campesinas o indígenas).

Así como en el caso de la escasez (Aguilera-Klink, Pérez-Moriana y Sánchez-García, 2000; Mehta, 2006), la sobreabundancia de agua también es

relativa, así como una construcción política (Alatout 2009; Erensu 2013). Tal como mostraré en varios puntos en este libro, el exceso de agua se traduce —a conveniencia de actores poderosos— en riesgo de inundaciones, y esto a su vez se convierte en la justificación para implementar, a cualquier precio, una megarepresa como la solución técnica inevitable. Bajo la lógica naturalizada de la sobreabundancia de agua, con frecuencia, las instituciones estatales y expertos determinan cuáles son las áreas y poblaciones bajo mayor y/o menor riesgo, o qué poblaciones o ciudadanos tienen prioridad para ser protegidos, en desmedro o sacrificio de los más subestimados (Osti 2017). En la definición de dichas áreas existe con frecuencia una directa y dominante correlación entre el aumento del riesgo y la valoración o el interés económico: a mayor valor económico, mayor riesgo y viceversa. Esto se relaciona con lo que para los Estados y sus tecnócratas se definen como áreas fértiles, productivas, con potencial de desarrollo, etc. A su vez, comúnmente, esto tiene relación con estructuras de propiedad y relaciones de poder territorial.

Para disminuir potenciales contingencias de inundación, los gobiernos (junto a sus aliados) lideran el despliegue de distintas acciones (p. ej.: Porter y Demeritt, 2012; Roth y Warner, 2007; Warner, 2010). Una de las soluciones para controlar el riesgo de inundaciones es la construcción de megobrazas, tales como represas en zonas rurales, ubicadas generalmente aguas arriba de centros urbanos y/o centros rurales del capital (véase, por ejemplo, Alatout 2009; Erensu 2013 y Osti 2017). Tal como lo muestra Osti (2017), en el caso italiano, el riesgo de inundaciones en estas zonas es contencioso y tiene que ver con la necesidad de encontrar «espacios rurales para ser ocupados, [...] la imagen de seguridad, y la búsqueda de un balance costo/beneficio urbano-rural» (p. 266, traducción propia). Este tira y afloja entre lo urbano y lo rural muestra que —al igual que para el caso de la escasez— la llamada abundancia de agua no siempre es física y natural, sino que al transformarla en un discurso —riesgo de inundación—, se convierte también en una contingencia que obedece a razones y decisiones profundamente sociales, económicas y políticas (véase Alatout, 2009; Erensu, 2013).

En términos utilitarios, ciertos territorios de menor valor entran a la categoría de «sacrificables» (Nixon, 2010), en función del bien común de aquellos territorios considerados de mayor valor. Desde esta perspectiva, la construcción social del exceso o sobreabundancia del agua se constituye también en un poderoso medio que transforma políticas, instituciones, infraestructura hídrica y la cotidianidad de la vida de las personas y sus medios de vida. En síntesis, comúnmente la «sobreabundancia de agua» no es un fenómeno o condición natural. En muchos casos, es una noción hidropolítica

presentada como si fuese meramente un fenómeno físico, pero que en la práctica esconde relaciones de poder, por definición, desiguales.

La ecología política del agua, por tanto, reconoce la materialidad del recurso hídrico y «arguye convincentemente que no podemos entender la producción de conflictos de agua sin fijarnos, primero, en cómo estos son el resultado de relaciones de poder específicas» (Loftus 2009, 955; Bakker 2010). Se constituye, así, en una apuesta crítica frente a las formas (discursos y prácticas) modernistas y universalistas para categorizar y entender el agua y su gobernanza. Parte de su abordaje, por ejemplo, cuestiona al ciclo hidro-«lógico», entendido como meramente «natural».

Siguiendo a Jamie Linton, este libro plantea —al referirme a la forma naturalizada y despolitizada de planificación y manejo de agua (p. ej.: los megaproyectos hídricos, el ciclo hidrológico, etc.)—: «que el agua moderna es una manera de conocer, dar cuenta y representar al agua separada de su contexto social» (Linton 2014, 111, traducción propia) y político (véase también Johnston 2003; Barnes y Alatout 2012; Bakker 2012). Con el fin de superar esta limitante, varios académicos han planteado una crítica al modo apolítico de entender y representar el agua. Uno de los términos desarrollados que afectan la conceptualización clásica modernista de la epistemología y la ontología del agua, tradicionalmente entendida como H₂O por sus características biofísicas y naturales, es el concepto «ciclo hidrosocial» (Budds 2009; Swyngedouw 2009). Este concepto es «introducido como un proceso en el cual los aspectos sociales cuentan como intrínsecos al agua», y sus formas de acumulación, distribución y uso (Linton 2014, 111). En definitiva, se presenta como un término que permite reconocer la «naturaleza social del agua» (Linton 2010, 231). Pero, ¿cómo estudiar lo hidrosocial?

Boelens *et al.* (2016) proponen dar un paso más allá a través del concepto *territorio hidrosocial*. Este es una aproximación espacial y multiactor al concepto ciclo hidrosocial. Permite explorar diversos y divergentes intereses y poderes que entran en pugna en el control del agua y, por consiguiente, en los procesos de diseño, construcción e implementación de megaproyectos hídricos. En este libro, el territorio hidrosocial es el espacio donde se desarrollan y disputan los megaproyectos hídricos, y es entendido como «el imaginario y la materialización socioambiental disputados de una red multiscalar espacialmente vinculada, en la cual seres humanos, flujos de agua, relaciones ecológicas, infraestructura hidráulica, recursos financieros, arreglos administrativo-legales e instituciones y prácticas culturales son definidas, alineadas y movilizadas de manera interactiva, mediante sistemas de creencias epistemológicas, jerarquías políticas y discursos naturalizadores»

(Boelens *et al.* 2016, 2, traducción propia), que se transforman y adaptan a lo largo del tiempo.

El enfoque crítico —tanto ontológico como epistemológico— que ofrece la ecología política del agua, me permite, en este libro, entender la problemática relación entre el agua, sociedad y tecnología. Concretamente, me posibilita estudiar los discursos, las prácticas y políticas que están construyendo y legitimando los megaproyectos hídricos a través de una dimensión temporal, espacial y relacional. Pensar el agua mediante su naturaleza social facilita la distinción entre diferentes (muchas veces antagónicos) significados y valores sobre lo que es el agua, *cómo* debe ser manejada, según *qué* verdades, modelos y tecnologías, de acuerdo a *qué* actores y con *cuáles* objetivos.

Poder/conocimiento: regímenes de «verdad», gubernamentalidad y actitud crítica

Al escribir acerca de posestructuralismo o ecología política posestructuralista en este libro me refiero, en concreto, a los debates dentro de este campo inspirados por el trabajo de Michel Foucault. Entre los aportes más importantes de su obra cuentan: i) el entendimiento del poder como un elemento móvil, inclusivo (no excluyente), productivo (en lugar de coercitivo) y relacional (Foucault 1980); ii) el cuestionamiento de base genealógica a la aparente solidez de las categorías (las instituciones, la verdad, el conocimiento, el yo) que comúnmente damos por sentadas o normalizadas en la sociedad (Rabinow 1991); iii) el estudio de distintas formas de gubernamentalidad (soberana, neoliberal, disciplinaria) o de «conducir la conducta» (Dean 2010); y iv), el dar sentido a las prácticas de subalternidad (Scott 1985; Chatterjee 2007; Sandoval 2010), de crítica (Foucault 1995; Lemke 2002; Cadman 2010) y/o resistencia (Pickett 1996; Scott 1987), a partir de entender y develar formas dominantes de gubernamentalidad. A continuación desarollo varios de estos aportes y su utilidad para el presente trabajo de investigación.

El poder es relacional. «En la realidad el poder significa relaciones, un más o menos organizado, jerarquizado, coordinado conjunto de relaciones» (Foucault 1980, 198, traducción propia). Por tanto, el poder no puede ser analizado como algo aislado, que se posee y es estático, sino debe entenderse como algo dinámico, temporal y contextual. Al estudiar las relaciones de poder que constituyen el desarrollo de megaproyectos hídricos, me fijo en «su surgir en un lugar y tiempo determinado para así lograr deducirlo, reconstruir su génesis» o genealogía (Foucault 1980, 199, traducción propia); de ahí la necesidad de abordar en este libro una perspectiva histórica o genealógica para entender su desarrollo. De manera concreta, genealogía es «una forma

de historia [no lineal] la cual puede dar cuenta de la constitución de conocimientos, discursos, dominios de objetos, etc.» (Foucault 1980, 117, traducción propia). Considerando que, según Foucault, el poder y el conocimiento se coproducen, la genealogía emerge como una forma de reconocimiento de la historia, como una herramienta para reconstruir y estudiar el poder y las formas en cómo este opera (Foucault 1980). A partir de ello, los ecólogos políticos reconocen que «las verdades medioambientales [como el desarrollo de megaproyectos hídricos] no son ahistóricas, sino producidas en una variedad de sitios y a través de diversos actores, y que varios grupos sociales tienen el potencial de actuar políticamente —no solo el Estado, o las ONG, o el proletariado» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 468, traducción propia).

El poder ha sido asociado tradicional y comúnmente con formas de represión, coerción y miedo como estrategia de dominación, ejercido por actores poderosos sobre aquellos vulnerables (Gaventa 2006; Weber 2007). Sin embargo, en este libro, no entiendo al poder únicamente como esa fuerza negativa que impone desde arriba; a más de esta forma de poder clásica, esta publicación considera el poder dominante como algo *productivo*: como algo que produce e *incluye* (Foucault 2002, 2007). Tal como originalmente lo desarrolla Foucault:

Si el poder siempre fuese represivo, si nunca haría nada más que decir no ¿realmente crees que alguien lo obedecería? Lo que sostiene al poder, lo que lo hace ser aceptado, es simplemente el hecho de que no reposa sobre nosotros únicamente como una fuerza que dice no, sino que atraviesa y produce cosas, induce placer, formas de conocimiento, produce discurso. El poder necesita ser considerado como una red productiva que corre a través de todo el cuerpo social, mucho más que una instancia negativa cuya función es la represión (1980, 119, traducción propia).

Aunque las prácticas utilizadas para construir e implementar megaproyectos son a menudo represivas (p. ej.: desalojos forzados, genocidio, etc.), estas obras no son solo legitimadas con discursos de odio o represión. Sus proponentes las promocionan bajo discursos de progreso, modernidad, desarrollo, energía verde, bienestar, Buen Vivir, etc. Así, los megaproyectos hídricos son presentados como obras que producen y construyen, en lugar de simplemente destruir. ¿Acaso no es irracional estar en contra o resistir al desarrollo o a realizar acciones para disminuir los efectos negativos del cambio climático o resistirse al bienestar? Esto hace que tales proyectos se constituyan en emprendimientos que visibilizan formas de poder productivas, mientras

legitiman otras formas coercitivas de ejercer poder. Los megaproyectos hídricos multipropósito benefician, particularmente (por lo menos en discurso), a todos los sectores de la sociedad. El hecho de que el agua sea un recurso social fundamental convierte a estos proyectos, incluso, en más poderosos y convincentes que otro tipo de industria extractiva. Por tanto, la forma productiva de entender el poder posibilita un entendimiento integral y crítico de este tipo de megaobras.

Otro aspecto importante es estar consciente de que las relaciones de poder se estudian a través de las luchas que tales relaciones generan. El estudio de dichas luchas, entonces, adquiere operatividad a partir de indagar acerca de «quién está involucrado en la lucha, acerca de qué es la lucha, y cómo, dónde, a través de qué medios y de acuerdo a qué racionalidad se desarrolla» (Foucault 1980, 164, traducción propia). En otras palabras, para entender las relaciones de poder que implican el desarrollo de megaproyectos hídricos, uno debe considerar tanto el contenido de las luchas como los actores que participan en ellas y sus estrategias.

El poder tiene una íntima relación con la producción «de verdad». La Real Academia de la Lengua tiene varias definiciones de «verdad». Dos de ellas abarcan ampliamente el significado que le otorgamos en la cotidianidad. La «verdad» significa, i) juicio o proposición que no se puede negar racionalmente; y ii) conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forman la mente.¹² Uno de los aportes más trascendentales de Michel Foucault ha sido cuestionar las definiciones incuestionables de verdad —o regímenes de verdad— como racionalmente innegables y el sentido de conformidad de la sociedad respecto a las construcciones sociales normalizadas en torno a ciertos discursos que pretenden ordenar el mundo. La base de su crítica parte de que el poder está íntimamente relacionado con la coproducción de conocimiento y que el conocimiento es precursor de verdad; por tanto, el poder es (re)productor de verdad y viceversa. En este sentido, la «verdad no está fuera del poder, o carece de poder. [...] Y la verdad induce efectos regulares de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política general” de verdad: que es, los tipos de discurso que acepta y que la hacen funcionar como verdad; los mecanismos e instancias que permiten a alguien distinguir de verdaderos o falsos enunciados, los medios a través de los cuales se sanciona; las técnicas y procedimientos de valores acordados para la consecución de verdad; el estatus de aquellos quienes están a cargo de lo que cuenta o no como verdad» (Foucault 1980, 131, traducción propia). En consecuencia, en el estudio de los megaproyectos

12. Definiciones consultadas en el diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua. <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=bbdGpd4>

hídricos, el poder no solo es una fuerza que destruye y reprime, también moviliza valores y reglas que posicionan como incuestionables a ciertos modelos (tecnocráticos) y tecnologías (megaproyectos) de manejo de agua a través de la (re)producción de regímenes de verdad en torno a ellos.

El cuestionamiento de regímenes de verdad/conocimiento resulta sumamente útil para entender cómo la producción de estos se encuentra ligada a ciertos actores como, por ejemplo, los tecnócratas —que ocupan un lugar de privilegio en el desarrollo de megaproyectos hídricos—, sus formas de intervención y los efectos que tienen en la sociedad y la naturaleza (Dean 2010). Y más aún, ayuda a comprender cómo ciertos discursos y prácticas dominantes para el control del agua llegan a (o intentan) normalizarse, e incluso internalizarse en la mente y el comportamiento de los individuos y/o colectivos. El conocimiento «experto», la tecnocracia y el mercado tienen un rol fundamental en la construcción de megaobras hídricas (Swyngedouw 1997; Lynch 2006; Dye 2016; Fearnside 2016; Hommes, Boelens, y Maat 2016; Serraiva 2016).¹³ Por tanto, arguyo que mediante el entendimiento de cómo se articulan sus actores y redes —llámense comunidades epistémicas (Haas 1992) y/o redes sociotécnicas (Hughes 1983)—, en relación con el llamado «conocimiento experto» o ‘expertise’, y cómo este conocimiento se crea y moviliza, podemos entender de mejor manera lo que impulsa el diseño, construcción e implementación de los megaproyectos hídricos. Esta premisa se fundamenta en que el agua o la naturaleza, que controlamos y buscamos acumular a través de los megaproyectos hídricos, no tiene un valor intrínseco en sí misma, pero sí tiene un valor asignado. En consecuencia, entender los procesos de (re)producción de conocimiento acerca de cómo otorgamos valor al agua

13. Según la Real Academia de la Lengua, *utopía* es un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parecen de muy difícil realización. Además, se refiere a una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Para Foucault, por su lado, las «utopías presentan a la sociedad misma en su perfección máxima o la negación de la sociedad, pero en cualquier caso, las utopías son fundamental y esencialmente irreales» (Foucault y Miskowiec 1986, 24, traducción propia). Los avances científicos y esfuerzos tecnocráticos comúnmente están motivados por los sueños de progreso, modernidad, desarrollo, Buen Vivir, etc. (Centeno y Silva 1998; Ekbladh 2002; Li 2007; Dye 2016). Es así que los emprendimientos tecnológicos como megaproyectos hídricos, como resultado de la ciencia hidráulica aplicada, intentan ser un producto material de la búsqueda de un mundo mejor o perfecto (Lilienthal 1944; Baviskar 1995; Dye 2016). Por tal motivo, los megaproyectos hídricos deben entenderse como artefactos encarnados por visiones utópicas, muchas veces altruistas, de la realidad. Entender a los megaproyectos como utopías permite indagar más allá de su naturalizada concepción técnica. Muestra su condumio político, que frecuentemente parte de nociónes idílicas de bienestar e, inclusive, de buenas intenciones tecnocráticas.

y la naturaleza es fundamental para comprender la base de justificación y reproducción de los megaproyectos hídricos.

En la generación/reproducción de conocimiento hay actores clave, que están en una constante pugna de poder (Foucault 1980). Expertos y/o científicos producen conocimiento comúnmente valorado como superior frente a otros (p. ej.: conocimiento «campesino»), que se legitima y circula a través de comunidades epistémicas y redes. Los actores clave de estas agrupaciones son los tecnócratas. Ellos (gran parte hombres) se encargan de apropiar y reproducir tal conocimiento en los contextos sociopolíticos, culturales y ecológicos donde operan (p. ej.: el sector público o público-privado).¹⁴ Desde su posición de experto, portador de conocimiento objetivo, el tecnócrata —como concretamente se muestra en el capítulo 3— propone su verdad (que es con frecuencia la verdad científica) desde una posición de poder (p. ej.: instituciones públicas, organismos internacionales o consultoras transnacionales). Tal posición le otorga autoridad, credibilidad y superioridad con respecto a su participación en la toma de decisiones en el ámbito político (Silva 1997). O tal como lo describe Richard Olson: «[los tecnócratas] ejercen poder legitimados por su conocimiento técnico» (2015, xiii, traducción propia). Es decir, el tecnócrata es un actor clave en la (re)producción de los regímenes de verdad y poder. Mi interés, a través del estudio de los tecnócratas y sus redes, es entender mejor los centros y sobre todo cómo circula el llamado «conocimiento experto» que legitima y promueve megaproyectos hídricos y sus regímenes de verdad.

El cuestionamiento de regímenes de verdad posibilita no solo entender las formas de control de agua, sino también del gobierno de la sociedad. Las formas de controlar el agua y gobernar la sociedad son coconstituidas. En términos generales, «gobernar es la disposición correcta de las cosas, dispuestas para alcanzar un fin conveniente» (Foucault 1991, 93, traducción propia). A esa disposición de las cosas Foucault le llama también «el arte de gobernar», «gubernamentalidad» o «la conducción de la conducta» (Foucault 1991). La gubernamentalidad se enfoca en el estudio de cómo el pensamiento y la moral operan al interior de nuestras formas de hacer cosas, trata de entenderlo desde nuestros regímenes de prácticas o regímenes de gobierno (Dean 2010). Así, el arte de gobernar es «[el conjunto de] prácticas organizadas a través de las cuales somos gobernados y mediante la cuales nos gobernamos a nosotros mismos» (Dean 2010, 28, traducción propia).

14. Para una reflexión acerca de las masculinidades dentro y en torno a la gobernanza del agua, en la academia y en sectores más amplios, véase al trabajo de Margreet Zwarteeven (Zwarteeven 2015, 2017).

Con el fin de gobernar, el Estado —u otros agentes— movilizan formas de poder por la fuerza (soberano), por el mercado (neoliberal) y/o por la moral (disciplinario). En el caso particular de esta investigación, estudiar la disposición de las cosas y el despliegue de estrategias de poder, que intervienen en el desarrollo de megaproyectos hídricos, permite comprender paralelamente los intentos de gobernar la sociedad y de controlar el agua. Esto se lleva a cabo a través de ciertos discursos (p. ej.: buena gobernanza, eficiencia, técnica), bajo determinadas motivaciones (p. ej.: desarrollo, Buen Vivir), utilizando ciertos medios (p. ej.: megaproyectos), mediante el despliegue de distintas prácticas y formas de poder (p. ej.: fuerza, mercado, moral, educación/capacitación). A lo largo del libro, pero sobre todo en el capítulo 5, se profundizará en las distintas formas de gubernamentalidad y en su utilidad para entender el gobierno de la Revolución Ciudadana en su momento histórico.

Aunque para muchos académicos, esta visión del poder es entendida como una posición en cierto modo determinista, algo de lo que como sociedad no podemos escapar, que paraliza, que no permite espacios para alternativas (Fraser 1981); pensar en la resistencia fue una de las motivaciones de Foucault. Su trabajo, en gran medida, es el estudio de las sutilezas del poder dominante como (pre)requisito para entender (o precisamente permitir) la emergencia de resistencias (Pickett 1996), la «actitud crítica» (Foucault 1995), la insubordinación o «contraconducta» (Foucault 1980). A partir de esta aproximación, la presente investigación busca, desde una perspectiva histórica, entender primero cómo se (re)producen los regímenes de verdad dominante y las prácticas de gobierno apolitizadas que constituyen el desarrollo de megaproyectos hídricos, para luego develar su esencia política.¹⁵

De aquí que el punto de partida para entender las resistencias es que estas existen y emergen en el campo de las relaciones de poder, del poder mismo (Davidson 2012). Tal como Foucault lo propone: «la resistencia nunca está en una posición de exterioridad en relación con el poder» (Foucault 1978, 95; citado por Fletcher 2001, 56). En este libro asumo la resistencia de aquellos en posición de vulnerabilidad frente al poder dominante, como una actitud crítica al «no querer ser gobernado [...], no querer ser gobernado de [una cierta] forma, no querer tampoco aceptar [determinadas] leyes, porque son injustas, porque [...] esconden una ilegitimidad esencial» (Foucault 1995, 7, traducción propia).

Basado en esta noción de resistencia, intento ir un paso más allá en mi análisis al traer sobre la mesa el trabajo del politólogo Partha Chatterjee y su

15. Un ejemplo de esta aproximación en el manejo de recursos naturales y, específicamente, en riego andino se desarrolla en la investigación de Rutgerd Boelens (2008, 2015).

concepto sobre «la política de los gobernados» (Chatterjee 2007). Su trabajo, basado en gran medida en la propuesta foucaultiana de gubernamentalidad, propone que las luchas de contestación protagonizadas por los subalternos corresponden a luchas por reivindicación en torno a una «política de cómo no ser gobernado» (Chatterjee 2007). Por ejemplo, cómo no ser gobernado por los valores de universalidad y de inevitabilidad técnica, encarnados en el tipo de megaproyectos que ocupan esta investigación. Mientras Foucault afirma que, «no querer ser gobernado» es ciertamente no aceptar como verdadero [...] lo que una autoridad dice que es verdad, o por lo menos es no aceptarlo por el hecho de que una autoridad diga que lo es» (Foucault 1995, 7, traducción propia). Chatterjee propone que no querer ser gobernado no se trata únicamente de contestar lo que una autoridad impone como verdad y resistir a ella, sino que se trata de que, a través de una política de los gobernados, los llamados subalternos (la mayor parte del mundo) enseñen a los gobernantes cómo los gobernados quieren o desean ser gobernados (Chatterjee 2007).

En esta propuesta, entender la relación entre los movimientos sociales y el Estado es crucial. Mientras los gobernantes desde los inicios de la República intentan consolidar un Estado-nación moderno, bajo la promesa abstracta de soberanía popular e igualdad de derechos para todos, según Partha Chatterjee, millones de pobres y marginalizados —ubicados en los márgenes entre lo *formal* y lo *real* de ese Estado-nación—, «están vislumbrando nuevas maneras a través de las cuales elegir cómo quieren ser gobernad[os]. [Dicho de otro modo,] están aprendiendo y forzando a sus gobernantes a aprender, cómo [...] prefieren ser gobernad[os]» (Chatterjee 2007, 154). En este sentido, partiendo de una política popular, Chatterjee pone en tensión la gubernamentalidad foucaultina. «Los gobernados no son el pueblo, sujeto ideal de una soberanía unitaria sintetizada en el Estado. Son quienes saben lidiar —apropiarse, rechazar, negociar— con los mecanismos de gobernabilidad de los que son objeto» (Gago 2014, 282). Mientras el Estado-nación, a través de la sociedad civil, promueve una ciudadanía en tiempo homogéneo (liberal), la sociedad política —espacio desde donde opera la política de los gobernados— se constituye en un marco para abordar la heterogeneidad de lo social desde otras categorías (Chatterjee 2004; Gago 2014).

Por tanto, en este libro argumento que «si la gubernamentalización [...] trataba [...] de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad, pues bien, yo diría, que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad; [...] es el arte de la *insubordinación voluntaria*, el de la *indocilidad reflexiva*»

(Foucault 1995, 8 traducción propia y énfasis). Particularmente en el capítulo 4, extiendo esta propuesta acerca de «cómo no ser gobernado». Además, incluyo el rol clave que tienen no solo los llamados gobernados, sino otro grupo de actores en las luchas subalternas: «los intelectuales y líderes populares» (Baud y Rutten 2004). Los intelectuales populares son personas quienes articulan conocimiento reflexivo sobre la sociedad en dónde habitan y son capaces de convertir ese análisis en material ideológico y, eventualmente, en activismo político (Baud y Rutten 2004). Tal como muestra Pablo Bose (Bose 2004) al describir y analizar el rol de los intelectuales populares en el proceso de resistencia antirespresa, en el valle del río Narmada, los intelectuales tienen un rol muy importante al elevar la voz de las poblaciones locales hacia afuera, ubicarla en diferentes podios y traducirla a diferentes idiomas para comunicarla al público objetivo con claridad; sea este un público político, periodístico, académico, campesino, etc.

Para complementar la idea acerca de movimientos sociales y resistencia, traigo a colación algunas contribuciones puntuales de Charles Tilly. Un aspecto esencial es que los movimientos sociales y sus capacidades para movilizar repertorios están condicionados (en parte) por el contexto sociopolítico en el cual están inmersos o actúan (Tilly 2006). El repertorio es el conjunto de acciones, estrategias, medios y discursos que el grupo en protesta o resistencia hace uso para elevar sus reclamos y llevar a cabo la movilización (Tilly 1986). En cualquier contexto, sin embargo, el movimiento social tiende a enmarcar sus demandas en tres tipos: reclamos de identidad, reclamos de posición política y aquellos llamados reclamos de programa (Tilly 2006). El primero plantea sus reclamos desde una identidad colectiva o, en palabras de Chatterjee, una solidaridad moral. El segundo no solo reclama que el grupo existe, sino que ocupa un lugar en el régimen; por ejemplo, los ciudadanos dentro del Estado-nación moderno. El tercero, por su lado, reclama de los gobernantes la implementación concreta de cambios o políticas (p. ej.: suspender la construcción de una presa, cambiar la política estatal de gestión de agua, etc.). Hasta cierto punto, similar a la noción de justicia propuesta por Nancy Fraser, cada uno de estos reclamos es un prerrequisito del otro: si el movimiento social no tiene una identidad reconocida, difícilmente puede reclamar una posición política o lugar; y si el grupo en protesta no tiene una posición o lugar político, es muy difícil que pueda reclamar acciones concretas. Estas nociones de reclamo y repertorio podrían dar la impresión de que los movimientos sociales se desarrollan como entes rígidos en sus propuestas y reacciones. En este libro, siguiendo a Charles Tilly, propongo que son, por el contrario, colectivos orgánicos que tienen una capacidad

de aprender e innovar sus repertorios y formas de reclamo. Y planteo que esa capacidad de innovación en gran medida proviene de «una larga historia de luchas previas» (Tilly 2006, 35, traducción propia).

En síntesis, la aproximación al poder/conocimiento que propongo, me permite, por un lado, entender mejor tanto aquellas verdades tecnocráticas que impulsan este tipo de megaproyectos, los discursos gubernamentales que justifican y legitiman su desarrollo, el rol de actores financieros y constructores, así como las formas de movilización social, resistencia y/o contestación que tales emprendimientos enfrentan. Por otro lado, posibilita develar el carácter productivo del poder y los discursos, prácticas y efectos vinculados al desarrollo moderno de megaproyectos hídricos y sus trayectorias. Finalmente, la noción de genealogía me sirve para entender cómo los discursos (p. ej.: desarrollo, energía limpia, matriz energética, Buen Vivir, etc.) y prácticas (diseño, construcción e implementación) asociadas a dichos proyectos se han convertido y se presentan como verdad incuestionable y apolítica de contingencia histórica. Esta forma relacional y productiva de concebir el poder, aspira sobre todo a entender, cuestionar y (potencialmente) deponer discursos y rationalidades dominantes. En consecuencia, la característica relacional del poder desenmascara «aquellas historias que bloquean la imaginación de las personas, tomadores de decisión, planificadores y científicos, para que alternativas y otras realidades sean posibles» (Robbins 2012, 70, traducción propia).

Construcción social de la tecnología (scot) y megaproyectos hídricos como expresión de (des)encuentros sociales

El estudio de artefactos —cómo son socialmente construidos además de cómo moldean sociedades— genera conocimiento crucial acerca de la historia y desarrollo de la ciencia como sobre la historia y desarrollo de las sociedades. [...] Enfocarnos en «las cosas» que se utilizan para el manejo y gestión del agua puede ayudarnos a entender la composición cultural y democrática de las sociedades, y al mismo tiempo es importante para encarar preguntas sobre el desarrollo sociotécnico de esas sociedades (Bijker 2007, 110, traducción propia).

Parte del cuestionamiento a los discursos dominantes de verdad implica tomar una posición crítica acerca de un dominio fundamental dentro de la política de megaproyectos hídricos: la tecnología. Una entrada para estudiar, a la vez, formas dominantes de conocimiento y aquellas alternativas

(muchas veces subordinadas o ignoradas) es a través de la investigación de la tecnología como intermediaria o como la materialización de epistemologías e intereses económicos que median nuestra convivencia en el mundo entre la sociedad y naturaleza (Leff 2012).

Sumado a los «entretejes y manejos», que son intrínsecos a los megaproyectos: los costos subestimados, ganancias sobrevaloradas, impactos socioambientales minimizados, efectos socioeconómicos y ambientales sobreestimados (Flyvbjerg, Bruzelius, y Rothengatter 2003) y redes de corrupción gigantes (Flyvbjerg 2017), los megaproyectos hídricos multipropósito tienen como elemento central al agua. Esto hace de ellos, proyectos profundamente atractivos para la sociedad en su conjunto, dado que el agua es un recurso esencial para la reproducción de la vida. Los megaproyectos hídricos, y en especial los multipropósitos, tienen la capacidad de generar alta expectativa social, debido a que son presentados por sus promotores, a través de sus múltiples objetivos (eventuales beneficios). Así como tienen la capacidad de generar expectativa positiva, estos proyectos son el centro de una fuerte y extendida crítica y protesta debido a sus (eventuales) impactos como: los desalojos forzados, aislamiento involuntario, destrucción de la biodiversidad, afectación irreversible de los medios de vida, etc.

Cada lucha social en contra de las megarepresas, o que impulsan su modificación, es distinta una de otra. Sus integrantes son distintos, sus estrategias varían de localidad en localidad, sus contextos y espacios de movilización son diferentes, sus tiempos son otros, sus discursos de lucha son múltiples, incluso sus idiomas son disímiles. No obstante, la mayoría de estas luchas tiene una cosa en común: sus acciones van dirigidas a detener o modificar la construcción e implementación de una tecnología. No hay movilización antirepresa que no tenga, por lo menos, un cartel que exprese un «¡No a la represa!». Es decir, estos movimientos ubican a la represa (antes de cualquier otro aspecto) en el centro de sus reclamos. Una muestra de la centralidad que tienen las represas (como tecnología) en las luchas sociales se presenta en la foto 4. A partir de este denominador común es que expanden su contenido a otros actores como a los promotores de esa tecnología (p. ej.: gobiernos, constructores, financieras, tecnócratas, expertos, etc.), y hacia sus discursos (p. ej.: energía verde, bienestar de las mayorías, desarrollo, progreso, cambio climático, democracia, etc.). Por lo tanto, partiendo de este hecho empírico —que la represa es un elemento destacado de las luchas sociales antirepresas— me pregunto: ¿qué nos puede decir la tecnología sobre el conflicto, sobre su propia constitución y la sociedad?, ¿cómo podemos tomar en serio lo que nos dicen los que protestan (afectados, activistas, etc.) en sus carteles?



Foto 4. Cartel de protesta al sistema multipropósito Chone.

Fuente: archivo de Comunidades Campesinas de Río de Grande (CCRG).

Entre las características asignadas a este tipo de tecnologías y los conflictos sociales generados a su alrededor se encuentran varias capas de complejidad que necesitan ser entendidas desde una perspectiva crítica, para lo cual SCOT resulta particularmente útil.¹⁶ SCOT surgió en los años ochenta, tras la influencia de la sociología del conocimiento científico, historia de la tecnología, filosofía de la ciencia y de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (STS, ‘*science and technology studies*’). El punto de partida para el desarrollo de una construcción social de la tecnología ha sido el rechazo al determinismo tecnológico (Pfaffenberger 1988; Law 1991; Bijker, Hughes y Pinch 2012). Por lo tanto, SCOT arguye que la tecnología no se desarrolla autónomamente, y al mismo tiempo objeta la idea de que esta determina en gran medida el desarrollo social, a la vez que refuta una mirada teleológica,

16. Desde los aportes seminales de Wittfogel hasta la actualidad, la inclusión de la tecnología hídrica ha sido bastante fructífera. Uno de los trabajos más relevantes, específicamente en el campo de megareservas, es el de Bijker (2007), en el que resalta el contenido político de la materialidad de grandes represas. Otros esfuerzos muestran el rol central de la megainfraestructura (p. ej.: Kaika 2006; Verbeek 2011; Menga 2015; Dye 2016; Serraiva 2016; Atkins 2018; Dukpa, Joshi y Boelens 2018; Menga y Swyngedouw 2018). Esto se aprecia en la edición especial de la revista *Water Alternatives: Water, Infrastructure and Political Rule*, en donde destaca el artículo de Maimuna Mohamud y Harry Verhoeven (2016), que muestra el papel crucial que han tenido las megareservas en la reingeniería del Estado en Sudán y la consolidación de ciertas élites. Un trabajo muy interesante acerca del diseño de tanques de irrigación se presenta en el trabajo de Esha Shah (2003).

linear y unidimensional del desarrollo tecnológico (Bijker 2015, 136, traducción propia). Este enfoque apuesta por un entendimiento de la tecnología como resultado de visiones políticas y sociales, y que a partir de ello (y su materialización) también tiene efectos sobre la sociedad (Bijker 2015; Pfaffenberger 1988). Con base en esto arguyo que «uno de los principios centrales de este enfoque es la reivindicación; que artefactos tecnológicos están abiertos al análisis sociológico, no únicamente sobre su uso, sino especialmente con respecto a su diseño y “contenido” técnico» (Bijker, Hughes, y Pinch 2012, xlvi, traducción propia).

Tres aspectos informan la construcción social de la tecnología y mi propio trabajo. El primero —tal como lo que orienta a la ecología política posestructuralista— es SCOT, que es un enfoque *constructivista*. Se alega que las verdades científicas, que posibilitan la presentación de artefactos como si fueren únicamente técnicos o científicos (neutrales), son en realidad el resultado de procesos de construcción social (Bijker 2015). Es decir, son procesos que están profunda y estructuralmente informados e influenciados por regímenes de verdad e intereses políticos y económicos (Winner 1980; Pfaffenberger 1992b; Shah 2003). O como lo resalta Wiebe Bijker: «estás cosas [la tecnología] son construcciones sociales [...]. Ellas están [...] impregnadas de relaciones de poder y política» (Bijker 2007, 115, traducción propia).

El segundo es el concepto (de red/sistema) *sociotécnico*. Varios propONENTES de SCOT toman prestado este término del trabajo de Thomas Hughes (Hughes 1983). Así, Bryan Pfaffenberger propone que «aquellos que buscan desarrollar nuevas tecnologías deben preocuparse no solo por las técnicas y los artefactos; también deben [involucrar y tejer] lo social, económico, legal, científico, y el contexto político de la tecnología» (Pfaffenberger 1992a, 498, traducción propia). En otras palabras, el proceso de diseño e implementación de un megaproyecto hídrico no es posible o concebible únicamente a partir de la consideración de los aspectos técnicos o «duros» de este, sino que se debe tener en cuenta aquellos aspectos «blandos» (social, político, económico, cultural) que le dan forma. En consecuencia, si el desarrollo de una tecnología es producto de un sistema o entramado sociotécnico, tal tecnología es en sí misma un ensamblaje sociotécnico.

El tercero es la idea de *coconstrucción* o «*coproducción*» (Jasanoff 2004). En este libro arguyo que no solo la sociedad tiene influencia sobre la tecnología, sino que la tecnología (una vez materializada) también tiene efecto sobre la sociedad, al afectar el contexto en donde se implementa (Pfaffenberger 1988). Resalto que la tecnología expresa visiones sociales de sus diseñadores en el contexto social y ecológico en donde es implementada. O tal como lo

propone Enrique Leff desde la ecología política posestructuralista: «la ciencia está encarnada en la tecnología, y a través de la tecnología en [las vidas de] los seres vivos» (Leff 2012, 18).

La tecnología es socialmente construida y políticamente negociada, o como lo afirma Pfaffenberger (1988: 244): la tecnología es «naturaleza humanizada», con lo que insiste «en que [la tecnología] es fundamentalmente un fenómeno social: es la construcción social de la naturaleza en torno y dentro de nosotros, y una vez lograda [construida e implementada], expresa una intrínseca visión social, y nos involucra en lo que Marx llamaría una forma de vida». Esta aproximación de SCOT, por lo tanto, permite no solo entender cómo se construye la tecnología desde la sociedad, sino también los efectos y función que tiene sobre ella. Es así que la tecnología no es un elemento neutral dentro de los conflictos, sino que se constituye (parcialmente) en un elemento explicativo de ellos. Esto sugiere que la tecnología, no solo es técnica, apolítica y ciencia neutral, sino que está cargada de lenguaje, valores, normas y discursos (p. ej.: Sanchis-Ibor, Boelens, y García-Mollá 2017). En otras palabras, la tecnología no es únicamente infraestructura, hierro, cemento y tuberías, desprovistas de moral, temporalidad y política. En este libro planteo que la tecnología, por el contrario, es esencialmente un producto históricamente contingente y sociotécnico complejo, moldeado por diferentes y muchas veces antagónicas visiones sociales, económicas, políticas y ecológicas, que diversos grupos sociales construyen, promocionan y defienden, con el fin de determinar y ordenar nuestra relación con la naturaleza.

Dicha carga moral de ninguna manera es unidireccional o influenciada únicamente por los diseñadores o un solo grupo de actores sociales dominantes. Tal como se evidencia a lo largo del libro, en especial en los capítulos 4 y 5, las megareservas —como ejemplos de tecnologías complejas— no son construidas e implementadas sin ser contestadas y negociadas por diversos grupos sociales (p. ej.: campesinos, comunidades rurales, indígenas). Si bien los modelos hidráulicos e ingenieriles de megaproyectos, como los abordados a continuación, ya están predefinidos en escritorios y laboratorios de la tecnocracia durante el proceso mismo de diseño, construcción e implementación, distintos actores tienen la capacidad de influenciar sobre el contenido mismo de esos modelos (Bijker, Hughes y Pinch 2012, 22). En este sentido, la tecnología se constituye en un híbrido constituido por distintas visiones de lo que *son* o *deben ser* nuestras relaciones entre sociedad y naturaleza.

En grandes rasgos, hay dos ideas íntimamente interconectadas y coconstituyentes que alimentan una mirada crítica de la tecnología. Por un lado está la idea de que los artefactos tecnológicos «pueden ser juzgados con precisión

no solo por sus contribuciones de eficiencia y productividad, ni meramente por sus efectos socioambientales negativos o positivos, sino también por la manera en la que ellos encarnan formas específicas de poder y autoridad» (Winner 1980, 121).¹⁷ En este sentido, la tecnología cobra importancia en la medida que se relacione o reconozca al sistema social, económico y/o epistemológico en el cual está inmersa (Winner 1980). Con esto no quiero decir que la tecnología es menos importante por sí sola. Por el contrario, bajo esta perspectiva, aquellas características «técnicas» de la tecnología son tomadas muy en serio, ya que develan los significados que informan y dan forma a tales características tecnológicas (Winner 1980; Pfaffenberger 1988). Por otro lado, a partir de este giro ontológico acerca de lo *qué es* la tecnología y *cómo* se forma, algunos académicos proponen el desarrollo de algunos conceptos o «etapas» para estudiarla de manera (re)politizada (Bijker, Hughes y Pinch 2012).

El primer concepto es la *flexibilidad interpretativa*. Este concepto entiende del diseño de tecnología como «un proceso abierto que puede producir diferentes resultados dependiendo de las circunstancias sociales del desarrollo [tecnológico]» (Klein y Kleinman 2002, 29, traducción propia) y de las distintas interpretaciones y significados otorgados por los distintos grupos sociales que «eventualmente» intervienen en el diseño (Bijker 2015). Este concepto permite entender al diseño tecnológico como resultado de negociaciones intergrupales (MacKenzie 1990; Bijker, Hughes y Pinch 2012) que potencialmente derivan en distintos artefactos y/o en la atribución de distintos usos o significados a un mismo artefacto. Un ejemplo de esto es cómo una misma represa puede significar progreso y energía verde para los ingenieros, mientras que, para las comunidades campesinas locales, eventualmente, significa desplazamiento y aislamiento.

En segundo lugar está el concepto de *grupo social relevante*. Este incluye a «los actores quienes se refieren al artefacto de la misma manera» (Bijker 2015, 137). Es decir, el grupo social relevante son «instituciones y organizaciones [...], así como grupos organizados o desorganizados de individuos [; en donde,] el requerimiento clave es que todos los miembros de un cierto grupo social compartan el mismo conjunto de significados, adjuntos a un artefacto específico» (Bijker, Hughes, y Pinch 2012, 23, traducción propia) (p. ej.: científicos hidráulicos, tecnócratas, campesinos). De acuerdo con los proponentes de este concepto, producto de dichas negociaciones, la flexibilidad

17. Además, véase al respecto el trabajo de Pfaffenberger (1988, 1992a, 1992b); Swyngedouw (2007, 2015); Shah (2003); Law (1991); Mollinga y Mooij (1989); y Mollinga (1998).

interpretativa disminuye con el tiempo. Esto sucede cuando un artefacto o ciertos significados sobre el artefacto dominan sobre otros en el proceso de construcción social.

El tercer grupo de conceptos son: *cierre* y *estabilización*. Tanto cierre como estabilización describen el resultado del proceso de construcción social (Bijker 2015); «significa que la flexibilidad interpretativa disminuye. Consenso entre los distintos grupos sociales relevantes sobre el significado dominante de un artefacto emerge» (Bijker 1995, 86, traducción propia), y no más modificaciones ocurren y la tecnología se estabiliza en su forma «final». Si bien Wiebe Bijker reconoce que en el proceso de negociación intergrupal pueden surgir controversias, plantea que el proceso de cierre y estabilización se da mediante el «consenso». Esta suposición es peligrosa, ya que podría estar ignorando la imposición de decisiones y relaciones de poder que entran en juego en las negociaciones intergrupales (Klein y Kleinman 2002).

Dadas las críticas acerca de este aspecto, se integra un cuarto concepto: el *marco tecnológico* (Bijker 1995, 2015). Este concepto aspira integrar el *por qué* ciertos grupos y significados prevalecen sobre otros en los procesos de diseño, construcción e implementación tecnológica. El marco tecnológico, según Bijker, es un marco epistemológico y ontológico que comparten los miembros de un mismo grupo social relevante y que los define como tal (p. ej.: ingenieros, expertos, etc.).¹⁸ Se constituye en un conjunto de visiones comunes que dan forma y significado a un artefacto determinado (Klein y Kleinman 2002, 31). A través de este concepto sus proponentes intentan reconocer que el desarrollo tecnológico involucra pugnas de poder, ya que tiende a promover ciertos actores, significados y acciones más que otros (Bijker 1995, 192). Sin embargo, no profundiza sobre sus efectos, tanto en la tecnología como en los actores que interactúan en el proceso de construcción tecnológica.

El enfoque crítico que ofrece SCOT para el estudio de la tecnología, me permite, en este libro, tomar a la tecnología como un elemento tanto físico como sociopolítico y discursivo que forma parte (como causa/efecto) de las luchas y conflictos en torno al desarrollo de megaproyectos hídricos. Además, en términos generales, esta investigación toma una perspectiva diacrónica, no solo para analizar el desarrollo empírico (los tres casos), sino que también adopta tal perspectiva para el mejor entendimiento de los cuerpos teóricos presentados (p. ej.: ecología política, poder y SCOT). Es así que este

18. Este aspecto podría relacionarse con las características que definen una comunidad epistémica (Haas 1992; Rodríguez de Francisco y Boelens 2015).

libro muestra y entiende estas teorías en el tiempo, como elementos dinámicos y no estáticos.

Metodología de investigación

Métodos y análisis

Este libro se fundamenta en datos empíricos basados, por un lado, en el conocimiento general que obtuve a partir de mi experiencia laboral en el Estado, en el sector hídrico, y, por otro lado, en información empírica, profunda y específica recogida durante períodos extensos de investigación de campo en los tres megaproyectos hídricos que forman parte de este libro.

Respecto al primer momento, entre noviembre del 2010 y febrero 2011 empecé a trabajar como técnico de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, en la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). En ese puesto participé en varios estudios sobre conflictos en torno a la gestión del agua y el uso de otros recursos naturales en la cuenca del río Guayas.¹⁹ Entre marzo 2011 y abril 2012 trabajé en la oficina central de la SENAGUA ubicada en Quito. Durante este tiempo tuve la oportunidad de participar como observador en varios eventos de promoción del entonces proyecto multipropósito Chone, reuniones oficiales y en procesos judiciales en los cuales la SENAGUA se defendió de demandas interpuestas por los campesinos afectados por la represa de río Grande. Además, participé en procesos de planificación y búsqueda de financiamiento de varios megaproyectos hídricos, lo cual involucró trabajo con comunidades campesinas en Santa Elena y Manabí. Al final de mi paso por el sector público, entre abril 2012 y noviembre 2013, trabajé en el Ministerio de Agricultura (MAGAP), en la subsecretaría de riego y drenaje. Uno de los puestos más relevantes, y que me permitió conocer de primera mano las relaciones de poder político y económico en torno a los megaproyectos hídricos, fue el que desempeñé como miembro y administrador del megaproyecto de riego binacional Puyango-Tumbes.²⁰ Durante esta experiencia en el

-
19. Entre los estudios más relevantes para los fines de esta investigación estuvieron: i) el acaparamiento de la tierra y agua para riego por empresas agroindustriales en la península de Santa Elena, en torno al sistema de trasvase Daule-Santa Elena, ii) el estudio socioeconómico de las comunidades locales que serían afectadas con la construcción del sistema de trasvase Chongón-San Vicente (Santa Elena), y iii) el avalúo de árboles de teca de las áreas de amortiguamiento y registro de conflictos relacionados con las comunidades afectadas por el embalse del sistema Daule-Peripa.
 20. Este fue un proyecto emblemático, símbolo de la paz entre Ecuador y Perú desde la década de los setenta. Cada año un representante ecuatoriano o peruano debía asumir

sector público pude adquirir amplio conocimiento para entender *desde adentro* la política de megaproyectos hídricos en el país.

Respecto al segundo momento, mi trabajo de campo consistió en visitas extensas a cada uno de los megaproyectos que ocupan este libro. Entre junio del 2014 y septiembre del 2017 realicé una investigación en campo de quince meses. Primero estudié el sistema Daule-Peripa (cuatro meses), luego el proyecto Chone (cinco meses), y al final el proyecto multipropósito Baba (seis meses). Durante el trabajo de campo, a cada caso le dediqué un período exclusivo de investigación; sin embargo, siempre mantuve contacto con varios de mis informantes en todos los casos y realicé visitas cortas de actualización y validación.

En este libro abordo una perspectiva histórica que me permite enlazar y comparar los casos entre sí. Esta perspectiva se preocupa por «un análisis causal, un énfasis en procesos a través del tiempo, y en el uso de una comparación sistemática y contextualizada» (Mahoney y Rueschemeyer 2003, 6, traducción propia). Adopto esta aproximación diacrónica porque asumo que el desarrollo de megaproyectos hídricos en Ecuador no es un fenómeno estático, que únicamente ha tenido lugar en un punto aislado y específico en el tiempo. Por el contrario, arguyo que es un fenómeno esencialmente dinámico que se ha transformado a lo largo del tiempo, y que cambia (así como sus protagonistas) con base en el contexto en el cual está inmerso. Por este motivo, el Gobierno de la Revolución Ciudadana y su política megahidráulica (si bien, ha sido inspirador) no es el punto de partida de este trabajo, pero sí es el punto de llegada. Mi interés es analizar las continuidades, discontinuidades y aprendizajes que se han presentado en el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador, desde los años sesenta. Esto precisa la inclusión de puntos de referencia en el tiempo. De aquí la importancia de incluir no solo el proyecto multipropósito Chone (emblema de la Revolución Ciudadana), sino también los otros dos megaproyectos, Daule-Peripa y Baba. Esto posibilita no solo colocar en perspectiva el desarrollo de la política de megaproyectos hídricos, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, sino que además permite evaluar su desarrollo como parte de las transformaciones geográficas y los procesos históricos interconectados y contingentes.

Durante mis períodos de trabajo de campo, la investigación se fundamentó en información cualitativa recolectada y analizada en torno al método

la administración del proyecto en nombre de ambos países. Entre abril y noviembre del 2013 asumí tal responsabilidad. Durante mi administración, el proyecto estaba en etapa de estudios. Incluía varias represas, trasvases de agua y sistemas de riego en ambos países.

del estudio de caso extendido. Es un método que se cimienta en una construcción reflexiva del conocimiento, que admite y estimula «la extracción de lo general desde lo particular, un movimiento desde lo «micro» hasta “lo macro”, y una conexión del pasado con el presente, con miras hacia el futuro, todo a través de una teoría preexistente» (Burawoy 1998, 5). Este método me permitió profundizar el conocimiento acerca de la especificidad de cada megaproyecto, como de su contexto general, escala, y diversos actores que les dan forma. Además, me dio la posibilidad de integrar y reflexionar en el proceso investigativo sobre mi conocimiento previo como funcionario público, junto a varios métodos de recolección de información. En la construcción de cada estudio de caso consideré distintos tipos de actores, varias locaciones y diferentes escalas. En todos los casos inicié con un recorrido general por toda el área de influencia del megaproyecto, para familiarizarme con el paisaje y actores, luego introduce otros métodos de recolección de información.

Uno de los métodos utilizados para recolectar información fue la revisión de literatura secundaria. La revisión incluyó informes técnicos gubernamentales, artículos de prensa, estudios sobre el caso y archivos históricos. El acceso a informes técnicos gubernamentales se lo debo, en gran medida, a varios excolegas, tanto de la SENAGUA como del MAGAP, y a mi experiencia laboral previa. Tuve acceso a artículos de prensa y documentos de movimientos sociales, en gran parte a través de los archivos construidos durante años, por varios de mis informantes en campo y de las ONG que han seguido de cerca la trayectoria de cada megaproyecto. Para acceder a los archivos históricos y literatura secundaria realicé investigación de archivo en bibliotecas y realicé entrevistas con historiadores locales.

Otros métodos que apliqué fueron entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales con los protagonistas ligados a los distintos megaproyectos. Considerando que gran parte de mi investigación involucró una reconstrucción detallada de hechos y eventos que sucedieron en el pasado, las entrevistas permitieron trasladarme y conocer lugares donde no estuve y eventos que no observé. Ha sido un método clave en la reconstrucción de conocimiento reflexivo, me proporcionó «acceso [privilegiado] a las observaciones realizadas por otros» (Weiss 1994, 1) sobre la realidad que investigo. Aunque estoy consciente de las críticas (muchas veces poco fundamentadas) sobre la validez de este método, argumento que sin su utilización no hubiese sido posible tener una descripción detallada, diversa, profunda, contrastada y holística de la complejidad en torno a los conflictos, eventos, procesos de toma de decisiones, etc., que han dado forma al desarrollo de los megaproyectos hídricos (Weiss 1994). En todos los estudios de caso, las entrevistas

fueron realizadas en castellano, gran parte de ellas grabadas (audio) y la mayoría transcritas. Seleccioné los informantes a través del proceso de revisión de literatura y método «bola de nieve» (Heckathorn 1997). Utilicé este método también para reconstruir historias de vida relevantes con el fin de entender procesos y cubrir la representatividad geográfica. Los nombres de mis entrevistados son seudónimos, a menos que estos sean figuras públicas.

Realicé, además, observación participativa e investigación-acción. Si bien, en este libro considero importante la perspectiva del Estado y su influencia en la política y ejecución de megaproyectos hídricos, en la misma medida valoro que tal perspectiva no sea la única que tiene efectos significativos sobre este tipo de proyectos y su entendimiento. A través de estancias prolongadas en los hogares de líderes sociales y campesinos, tuve la valiosa oportunidad de «seguir al actor» (Long 1990). La participación como observador en juntas campesinas, reuniones políticas, fiestas locales, cenas familiares y actividades diarias de varios campesinos, funcionarios públicos, activistas ambientales, catedráticos, etc., me permitieron incluir diversas perspectivas en mi trabajo. Esta aproximación metodológica, desde el individuo, me facilitó un mejor entendimiento de las interacciones y relaciones de poder, en las cuales se reconoce el papel central que juega en ellas la acción y conciencia humana (Long 1990, 6). Una parte de este método incluyó el registro etnográfico de un gran número de mis observaciones y mi involucramiento en procesos de investigación-acción. Respecto al último tema, en torno al caso Daule-Peripa, activé un proceso colaborativo entre el Consejo de Pueblo Montubios del Daule-Peripa con la Universidad Central del Ecuador. En ese marco coescribí junto a un líder campesino un artículo popular, organicé un Encuentro Internacional por la Tierra, dirigí un módulo de enseñanza sobre impactos socioambientales con Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras y codirigí dos tesis de pregrado en la zona. En el caso de Baba, la investigación-acción tomó forma de un documental basado en la historia de una mujer afrodescendiente afectada por el megaproyecto.²¹

Finalmente, realicé tecnografía (etnografía+tecnología) (Kien 2008; Jansen y Vellema 2011) cuando fue necesario (p. ej.: Baba y Chone). La gobernanza del agua involucra varios dominios: técnico, organizativo, normativo/sociolegal,

21. Para acceder al artículo escrito conjuntamente sobre el Daule-Peripa, véase <http://www.porlatierra.org/casos/43>. Para acceder a la página web del documental, véase <https://docubellavoz.wixsite.com/bellavoz> y, para acceder a una publicación del documental en un dossier de la Universidad de Koln, Alemania, véase <http://voices.uni-koeln.de/2017-3/socialwateranintroduction>.

cultural e inclusive metafísico. Es común investigar estas áreas por separado, pero sigue siendo un desafío integrar todos estos dominios de una manera interdisciplinaria. La tecnografía, que es la etnografía de la tecnología, provee una aproximación metodológica que trata de integrar los procesos tecnológicos como parte de interacciones sociotecnológicas (Jansen y Vellema 2011). Esto me sirvió para considerar la formación y uso de la tecnología y sus diseños, como parte integral de la política en torno al desarrollo de megaproyectos hídricos.

Trabajé la sistematización y análisis de la información mediante la triangulación de datos, la construcción de matrices cualitativas comparativas, el análisis temático de entrevistas, la periodización histórica contextualizada y el análisis de documentos históricos y reportes técnicos. Al final de cada visita extendida de campo, la información recolectada, los hallazgos empíricos y el análisis preliminar fueron presentados y retroalimentados en talleres con comunidades locales, representantes de las ONG y los académicos en Ecuador. El detalle metodológico de cada estudio de caso lo muestro en el anexo 1, acápite primero.

Estructura y contenidos del libro

El primer capítulo presenta un esbozo de la problemática que ha informado la política de megaproyectos hídricos en Ecuador, desde mediados del siglo xx. Luego muestra, de forma breve, la historia y características más relevantes de cada uno de los megaproyectos que se estudian a lo largo del libro, resaltando su lugar en el hilo conductor general. A continuación, introduce las consideraciones teórico-conceptuales en las cuales se enmarca la investigación. El capítulo finaliza con una descripción de la metodología y métodos utilizados para el desarrollo de la investigación, y la presentación de la estructura general del libro.

El capítulo 2 establece el contexto que informa y posiciona a cada uno de los megaproyectos hídricos estudiados en su periodo histórico. El texto se estructura alrededor de la descripción y el análisis de tres períodos: desarrollismo (1954-1984), neoliberalismo (1985-2006) y posneoliberalismo o Revolución Ciudadana (2007-2017). Basado en la caracterización de esos tres períodos con respecto a la vida institucional, social, económica y ambiental del Ecuador, el capítulo resalta los cambios de la política y desarrollo de los megaproyectos hídricos que se han presentado en cuanto al rol del Estado (y aliados), comunidades locales, movimientos sociales y las ONG ambientalistas, y

sus discursos y prácticas, desde la década de los sesenta hasta el Gobierno de la Revolución Ciudadana.

El capítulo 3 examina cómo el sistema multipropósito Daule-Peripa es la expresión material y epistemológica de una lógica tecnocrática de control del agua, y en qué medida este megaproyecto es el reflejo de políticas regionales y manejo de recursos naturales propias del período desarrollista. A partir de la reconstrucción de los pensamientos y acciones de los principales promotores nacionales del megaproyecto, el capítulo presenta la influencia, rol y relaciones entre la tecnocracia nacional y los expertos internacionales. Analiza, en ese contexto, las tensiones entre los beneficios sobrevalorados e impactos subestimados, y la escasa actividad social desplegada por las comunidades locales (mayormente individual) en busca de justicia social y ambiental.

El capítulo 4 se desarrolla a partir del proceso de diseño y construcción del sistema multipropósito Baba. En un contexto de políticas neoliberales, el capítulo describe y discute el surgimiento de las resistencias protagonizadas por la población de Patricia Pilar. A partir de dicho proceso de organización colectiva, el capítulo muestra cómo las comunidades locales (eventuales afectados por el megaproyecto) logran influenciar en el diseño original del sistema multipropósito. El capítulo presenta cómo y hasta qué punto el cambio de diseños de la tecnología también tuvo efecto sobre el relativo éxito y la capacidad de resistencia del movimiento social.

El capítulo 5 se fundamenta en el análisis de los procesos de construcción e implementación del sistema multipropósito Chone: emblema del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Mediante el estudio de la movilización social y las estrategias gubernamentales de implementación, el capítulo presenta el «retorno» del Estado y la tecnocracia del siglo XXI en relación con la legitimación e implementación del megaproyecto hídrico. Muestra, además, la interacción entre nuevas políticas estatales y las acciones de resistencia. Presenta cómo la construcción e implementación de esta megaobra trasciende el ámbito exclusivo del control del agua, extendiéndose hacia el *reordenamiento* de la sociedad misma.

El capítulo 6 presenta una discusión y mis conclusiones de la investigación. A partir de la comparación entre los tres megaproyectos, sus prácticas y políticas, de acuerdo con el período en el que se desarrolló cada uno. Esta sección presenta un análisis, en perspectiva histórica, acerca de las continuidades y diferencias del gobierno posneoliberal de Correa respecto al neoliberalismo y desarrollismo. Finalmente, presenta reflexiones conclusivas acerca de la teoría y conclusiones generales.

CAPÍTULO 2

PERÍODOS CLAVE EN EL DESARROLLO DE MEGAPROYECTOS EN ECUADOR: Estado, tecnocracia y movimientos sociales

¿Sabe cuál es el secreto de estos grandes proyectos? [*baja el volumen de la voz y lo dice con sigilo*] Cuando viene cualquier presidente de la República nuevo y pregunta: «¿qué obra tenemos que hacer?». Entonces ahí, ¡puup!, le entregamos los megaproyectos ¡Yo mismo le presenté los proyectos a Rafael Correa! [*risas picarescas*]. En el 2007 vino acá a averiguar sobre qué había hecho CEDEGE y ahí le entregamos el plan de la cuenca del Guayas de CEDEGE;²² entonces lo acogió y le bautizó «megaproyectos y el cambio de la matriz productiva». Nueva fachada con el mismo interior [*risas*]. (Ingeniero hidráulico septuagenario, empleado de CEDEGE y actual funcionario de SENAGUA a cargo de los megaproyectos hídricos).²³

Introducción

La confesión discreta del experimentado ingeniero sugiere que muchos de los megaproyectos hídricos retomados por el Gobierno de la Revolución Ciudadana provienen de un pasado hidráulico contingente. Se han realizado importantes esfuerzos para entender la política de ese Gobierno respecto a otros períodos socioeconómicos (p. ej.: Acosta *et al.* 2013; Ospina Peralta 2013). Sin embargo, en lo que respecta al desarrollo de megaproyectos hídricos —aspecto central de la política productivo-energética del Gobierno liderado por

22. La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) fue una poderosa institución a cargo de planificar y construir grandes proyectos hídricos en la cuenca del río Guayas. Para más detalles véase el capítulo 3.

23. Entrevista, 27 de junio del 2014.

Correa—, su indagación ha sido insuficiente.²⁴ Por esta razón propongo que, para entender mejor la política, prácticas y discursos de ese régimen en el desarrollo de los megaproyectos hídricos, debemos abordar una perspectiva histórica. En tal virtud analizo los tres megaproyectos hídricos presentados en el capítulo introductorio como ilustraciones de cada período socioeconómico y político.

Desde que se inició la planificación de megaproyectos hídricos en Ecuador ha transcurrido poco más de medio siglo. Estos proyectos y sus diseños han sido trasmittidos a través del tiempo entre las distintas administraciones del Estado y las personas, al mismo tiempo han sido contestadas por grupos críticos. A pesar de que los megaproyectos, *al parecer* no han sufrido cambios importantes en sus diseños desde que fueron planificados (años sesenta y setenta), existen marcadas diferencias en *cómo* han sido impulsados, construidos e implementados, dependiendo del contexto socioeconómico, político y social en el cual han tenido lugar. Con base en estas consideraciones, las preguntas que intenta contestar este capítulo son, ¿hasta qué punto los procesos de implementación y construcción de megaproyectos hídricos dependen de las coyunturas político-económicas?, y ¿cómo tales construcciones están a su vez influenciadas por las relaciones entre el Estado, el capitalismo global y los actores locales? Más específicamente, intenta dar respuesta a: ¿en qué aspectos y hasta dónde el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido distinto de los períodos socioeconómicos anteriores?

A continuación, presento una caracterización de los tres períodos en los que se han planificado y ejecutado megaproyectos hídricos en Ecuador. Estos períodos se dividen en *desarrollismo* (1954-1984), *neoliberalismo* (1985-2006) y *progresismo o posneoliberalismo* (2007-2017). En este capítulo, cada período se organiza alrededor de dos ejes: i) el papel y el peso del Estado y de la tecnocracia y, ii) el surgimiento y evolución de organizaciones y movimientos sociales. A partir de ello, el capítulo finaliza con una reflexión acerca de las diversas continuidades y cambios evidenciados en el período progresista respecto del pasado.

24. El trabajo realizado por Arturo Villavicencio (2014) es una muy interesante excepción; sin embargo, su análisis es todavía bastante global sobre la política pública, inversión y efectividad de la misma.

El Estado desarrollista (1954-1984):²⁵ fortalecimiento estatal, consolidación institucional tecnocrática e incipiente organización social

Este período se caracterizó por la consolidación de un Estado como motor del desarrollo (Ospina Peralta 2013). Durante esta etapa surgió desde el Estado una preocupación por institucionalizar, normar, tecnificar y racionalizar su relación con la naturaleza (Salgado 1989). El auge y caída del *boom* bananero y petrolero respectivamente, los discursos desarrollistas regionales cepalinos y las políticas nacionales de sesgo modernizador guiaron el inicio de la planificación del Estado y, con ello, gran parte de los megaproyectos hídricos. Entre 1965 y 1980, el Estado ecuatoriano pasó de consumir el 9,5% del PIB a consumir el 22,5%.²⁶ Las consideraciones socioambientales producto de intervenciones estatales eran incipientes o nulas. A continuación, se desarrollan elementos en torno al papel y peso del Estado y la tecnocracia, luego se presenta la situación acerca de los movimientos y organizaciones sociales.

Considerando que el país fue siempre un país agroexportador (Chiriboga 1980), a inicios de siglo se establecieron, a lo largo y ancho del país, varios centros experimentales agrícolas (Ospina Peralta 2016a), y con ellos la primera institución nacional de manejo de agua para riego, la Caja Nacional de Riego (1944). Sin embargo, no sería sino hasta finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta que el Estado expandiría y consolidaría un mayor control sobre la planificación de los recursos naturales como el agua. A través de la creación, en 1954, de la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) (Ojeda 2013) —la primera institución de alcance nacional dedicada a planificar, ordenar y priorizar el manejo de los recursos económicos del país—, se escribió el Primer Plan de Desarrollo Económico y Social 1963-1973 del Ecuador, en el cual se contemplaban la creación de varias instituciones y los

25. Para otros autores como Germánico Salgado (1989), el origen del estado desarrollista en Ecuador se dio a partir de finales de la década de los años cuarenta. Él afirma que tras el triunfo de la Revolución Juliana, conservadores y liberales han promovido este nuevo rol del Estado. Sin embargo, en este libro se toma este período desde 1954, por ser el año en el que se inició el proceso de creación de una de las instituciones públicas regionales más importantes para el desarrollo del megahidraulismo en el Ecuador: la CEDEGE, y por ser el año en el que se entregó el informe de la CEPAL (1954) sobre el desarrollo económico del Ecuador, el cual tuvo gran influencia en el desarrollo de la megainfraestructura hídrica.

26. Diario *El Universo*. <https://www.eluniverso.com/opinion/2014/11/21/nota/4249406/lmites-tamano-estado>. 21 de noviembre del 2014.

primeros megaproyectos hídricos.²⁷ Este plan, que acogió las recomendaciones cepalinas realizadas a mediados de los años cincuenta, en su primer informe sobre la situación económica del país señalaba:

El Ecuador estaría en condiciones de producir el 90% de sus necesidades de energía eléctrica, [...] por aprovechamiento de caídas de agua. Aun en la costa, [...], habría amplias posibilidades de utilizar las corrientes de los ríos que vienen de la montaña (CEPAL 1954, 351).

Durante este período, el Estado adquirió un papel muy importante en el desarrollo económico, social y ambiental (Larrea 2006). El proceso de fortalecimiento del Estado se caracterizó por el impulso de un problemático proceso nacional de modernización e industrialización que se extendió hasta mediados de los años ochenta, momento en el cual inició una progresiva y sistemática neoliberalización de este (Ayala Mora 1993a; Larrea 2006; Núñez-Sánchez 2011; Acosta 2012; Ojeda 2013).²⁸ El Ecuador fue influenciado de manera significativa por el modelo económico y políticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).²⁹ Con una visión neomarxista, la CEPAL marcó las políticas nacionales, en donde el ser humano era superior a la naturaleza y debía dominarla. En esta línea, la CEPAL realizó estudios sobre la economía, política y vida nacional (CEPAL 1954). A partir de ello, tal como lo hizo con el resto de países de la región, esta institución promovió una política nacional de industrialización por sustitución de importaciones (isi) (Ojeda 2013), donde el Estado fuese protagonista.

27. Los proyectos hidroeléctricos como Nayón, Cumbayá, Pisayambo, Paute y Toachi (De la Torre y Salgado 2008, 94).

28. El inicio incipiente del período neoliberal en Ecuador podría ubicarse después de la llamada *sucretización* de la deuda privada, asumida por el Estado durante el Gobierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984). Se le llamó así debido a que la moneda nacional del Ecuador hasta el año 1999 fue el Sucre. La sucretización fue la estatización de la deuda privada; es decir, la deuda adquirida por privados fue asumida por el Estado ecuatoriano. A pesar de esta primera muestra del neoliberalismo, la administración de León Febres Cordero fue la primera que empezó con el proceso abierto de neoliberalización del Estado mediante la adopción de políticas estructurales (Ayala Mora 1993a; Hey y Klak 1999).

29. La CEPAL fue creada en 1948 como el brazo económico de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para promover el *catch-up* ('crecimiento') de los desde entonces mal llamados «países subdesarrollados» o del «tercer mundo». La estrategia de industrialización por sustitución de importaciones intentaba diversificar la economía para promover un modelo de desarrollo independiente, y superar la dependencia del sector externo.

La necesidad de fortalecer el papel del Estado dio paso también al inicio del megahidraulismo ecuatoriano. Este fue posible gracias a la creación de entidades vinculadas al manejo y gestión del agua desde un enfoque centralista, y otras con orientación descentralizada, y a una transformación en el quehacer del Estado. «Los años sesenta señalaron el principio de un proceso de cambio profundo en la manera de abordar las políticas públicas sobre el agua [...] y con ello, el desarrollo nacional» (Récalt 2011, 23).

Bajo la gestión de la Caja Nacional del Riego se construyeron los primeros sistemas de riego estatales, sin duda, con una función importante para el agro. Sin embargo, la Caja era una institución débil, sin alcance nacional, que no tenía las capacidades para asumir el desarrollo de megainfraestructura hídrica. Por tal razón, años más tarde esta sería eliminada. A partir de los años sesenta surgen una serie de instituciones en torno a la gobernanza del agua, con mayor poder económico. En el sector eléctrico se creó en 1961 el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). Esta institución técnica propuso enseguida el primer Plan Nacional de Electrificación y con él las primeras grandes hidroeléctricas. Un año más tarde se creó el Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM) que, por su poder económico y político, estuvo a cargo de la planificación y construcción de importantes obras hidráulicas en la provincia de Manabí. Aunque el INECEL y el CRM iniciaron la planificación y construcción de los primeros megaproyectos hídricos, no tuvieron tanta influencia sobre el desarrollo de estos en el Ecuador como la CEDEGE, creada en 1965. Su importancia radicaba en que estaba a cargo de la planificación y manejo de la cuenca hidrográfica más importante y grande del país: la cuenca del río Guayas. Inspirados por la experiencia del Tennessee Valley Authority (TVA) de los Estados Unidos, tecnócratas y élites costeñas crearon la CEDEGE en Guayaquil.³⁰

Tal como se muestra en el capítulo 3, esta institución marcaría un antes y un después en la forma de gobernanza del agua en el país; no solo por su carga discursiva e ideológica heredada de la TVA, sino también por el gran poder económico y político que le permitió construir el megaproyecto más importante del país: el sistema multipropósito Daule-Peripa. A nivel nacional

30 Los tecnócratas son entendidos (en parte) como «individuos con un relativamente alto nivel de entrenamiento académico especializado, particularmente en los campos de la economía y ingeniería, que parten del principio de que la mayoría de los problemas de la sociedad pueden ser resueltos a través de métodos científicos y técnicos. [...] En su opinión, solo los poseedores de dichos conocimientos científicos específicos estarían en óptimas condiciones para formular y aplicar soluciones coherentes y sustentables» (Silva 1997, 2). Véase en el capítulo 3 una definición y discusión más amplia y detallada sobre el tema.

se creó, en 1966, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI). Esta institución fue altamente técnica, dedicada a la planificación del recurso hídrico, que tuvo un poder centralizado con varias agencias regionales. Sus competencias eran bastante amplias: iban desde el otorgamiento y administración de concesiones de uso de agua, pasando por la construcción y administración de sistemas de riego público y grandes obras hidráulicas, hasta la formulación de políticas públicas y resolución de conflictos en torno al agua. Paralelamente al montaje de la estructura institucional, sobre la cual operaría el Estado, se empezaron a planificar y construir las primeras grandes represas y sistemas de riego.³¹

Los organismos internacionales, como la CEPAL y el Bureau de Reclamación de EE. UU., tuvieron protagonismo a nivel nacional a través de su participación en estudios de megaproyectos y en la promoción de este tipo de proyectos como herramientas de desarrollo.³² Así lo mencionan Axel Dourojeanni y Terece Lee, ideólogos hidropolíticos de la CEPAL, en el estudio presentado en un seminario regional sobre gestión ambiental de grandes obras hídricas:

En principio el agua juega un rol crucial en el desarrollo nacional [...]. [U]n plan de desarrollo de un país o región no puede ejecutarse sin llevar a cabo un plan paralelo previo de construcción de [grandes] obras para aprovechamiento hídrico (Dourojeanni y Lee 1981, 2).

De esta forma, la receta económica desarrollista de la CEPAL se amalgamó con la visión tecnicista y naturalizada de promoción de megaproyectos hídricos. Acogiendo tales recomendaciones, la CEDEGE diseñó el Plan Regional Integrado de la Cuenca del Río Guayas y Península de Santa Elena, en donde se contemplaban una serie de megarepresas y trasvases para «controlar cada gota de agua que entra y sale de la cuenca» (CEPAL/CEDEGE 1982).³³ A pesar de planificarse decenas de megaproyectos, muy pocos fueron contratados y finalizados durante el período desarrollista. La mayoría de los

- 31. En 1971, el CRM inauguró la primera megarepresa del país en la provincia de Manabí: Poza Honda. Por su parte el INERHI construyó varios sistemas de riego en la costa y la sierra, y los embalses San Vicente (1978) y El Azúcar (1979) en la península de Santa Elena. Tanto El Azúcar como San Vicente reciben agua del enorme sistema Daule-Peripa (capítulo 3).
- 32. Como ejemplo, véase la participación del Bureau de Reclamación en el diseño del Sistema Daule-Peripa en Houston (1981).
- 33. Entrevista con técnico de la ex CEDEGE, participante en la formulación del plan. 27 de junio del 2014.

megaproyectos serían concluidos y ejecutados en los siguientes dos períodos. La grave crisis económica con la que terminó este período fue, en parte, la razón.³⁴ El Estado tuvo que acceder a créditos de entidades financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o BM, para seguir financiando proyectos de desarrollo como los megaproyectos hidráulicos. Es importante mencionar que en este período, más del 11% de la deuda externa del país fue a causa de préstamos realizados para construir obras hidráulicas (Cremers, Ooijevaar, y Boelens 2005).

A más de estas contadas iniciativas,³⁵ en el discurso y en la práctica, el Estado era débil en cuestión de legislación e institucionalidad ambiental (Lewis 2016). Las herramientas como los estudios de impacto ambiental (EIA) o los planes de manejo ambiental (PMA) eran casi desconocidas. No existía una institución ambiental nacional o normativa que impulsara estos aspectos. Por esta razón, todos los megaproyectos construidos e implementados en esta época no tenían la obligatoriedad de incluir consideraciones sociales y ambientales.

Parte del peso del Estado en el desarrollo inicial de megaproyectos hidráulicos, durante el período desarrollista, se dio debido al ingreso de técnicos y tecnócratas a las instituciones técnicas recientemente creadas. Tal como en otros países de la región, entre finales de los años cincuenta hasta inicios de los ochenta, se crearon instituciones y con ellas también creció una burocracia técnica (Ayala Mora 1993b, 106-107; véase también Acosta 2012) o tecnocracia —como se le llama en este libro—, con la función de aconsejar a los gobernantes (O'Donnell 1973). En Ecuador, como en otras partes del mundo, el sector hídrico ha sido gobernado típicamente por (hombres) tecnócratas (Zwarteeven 2017). Así, durante el desarrollismo fueron actores clave en procesos de toma de decisiones, sobre la base de su racionalidad técnica, no solo en el ámbito económico (Silva 1997), sino también en el hidráulico. La gran mayoría de servidores públicos, entre ellos tecnócratas, recibieron contratos permanentes e indefinidos. Es la primera vez que, en Ecuador del siglo xx, una clase tecnócrata pretendidamente apolítica (Ayala

34. Existen distintos datos que se manejan sobre la deuda externa ecuatoriana de la época (Larrea 2006, 15: 98); no obstante, presento una referencia que proporciona una idea de su magnitud. En 1970, la deuda externa ecuatoriana era de USD 242 millones (Lewis 2016, 67); para 1982 esta creció dramáticamente a cerca de USD 6500 millones (Ayala Mora 1993a, 14:312). Es decir, la deuda creció en más de 2000% en apenas doce años. En los años ochenta, el país cayó en una profunda crisis, herencia del *boom* petrolero y el afán desarrollista (Acosta 2012).

35. Se expidió, por ejemplo, la Ley de Prevención de la Contaminación (1976) y más tarde la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre (1981). Ambas dirigidas a prevenir y regular la tala indiscriminada de bosques naturales y la contaminación.

Mora 1993b, 106) toma tanta importancia en procesos de toma de decisiones del Estado.³⁶ Los funcionarios públicos de la época se encargaron de diseñar los primeros planes y megaproyectos hídricos del Ecuador, tanto a nivel nacional, en INERHI, como a nivel regional, en instituciones como la CEDEGE.

Todavía los procesos organizativos con respecto al desarrollo de megaproyectos hídricos, durante este período, eran incipientes y débiles. En parte porque, a nivel local, los impactos negativos ocasionados por este tipo de obras no se manifestarían sino hasta la década de los años noventa. Por consiguiente, las comunidades locales todavía no tendrían conocimiento sobre los daños que causarían estos proyectos (Hidalgo-Bastidas, Boelens e Isch 2018), ni se habían formado redes de actores transnacionales que transmitiesen experiencias y apoyasen reclamos locales (Everard 2013). Por ejemplo, en India, a finales de los años setenta, el más influyente movimiento antirespresa a nivel mundial apenas empezaba a ganar voz internacional. Este se organizó en torno a la defensa del río Narmada y sus poblaciones afectadas.³⁷ Es así que, en Ecuador, hasta el final del período desarrollista, tanto organizaciones y movimientos sociales locales y ONG nacionales no aparecían todavía en la escena de los megaproyectos hídricos. La única ONG ambientalista que se formó en este período fue la Fundación Natura (Lewis 2016). Esta organización fue la primera en dedicarse, desde el debate del desarrollo sustentable, a problematizar la relación entre la sociedad y naturaleza. Su trabajo se dirigió hacia la conservación y educación ambiental, con un fuerte vínculo con la agencia estadounidense de apoyo al desarrollo internacional (USAID) (Lewis 2016).

En esta coyuntura, el Ecuador dio la bienvenida al período neoliberal, en el cual se presentarían varios cambios en el peso del Estado, en el papel de la tecnocracia y en el de los movimientos sociales.

El Estado neoliberal (1985-2006): ajuste estructural, continuidad tecnocrática y surgimiento de la organización social

En Ecuador, entre mediados de los años ochenta y finales de los noventa, el modelo cepalino alcanzó sus límites y el neoliberalismo se consolidó como el nuevo modelo económico y social (Hey y Klak 1999; Acosta 2012). A nivel nacional, este período se caracterizó, por un lado, por una paulatina

36. Véase en el anexo 1 un indicador del gran crecimiento del Estado y de los funcionarios públicos durante el desarrollismo, en especial, durante la década de los años setenta.

37. Para más información acerca del caso del río Narmada, véase Bose (2004), y las plataformas sociales: www.narmada.org y www.narmadaandolan.org

adopción de ajustes estructurales que consistieron en políticas de desregulación de la economía, privatización de instituciones públicas, incentivos de inversión extranjera directa y apertura al libre mercado internacional (Araujo-Moreno 1994). Entre los cambios más incisivos del neoliberalismo estuvo la reducción del tamaño del Estado, del gasto público y de la burocracia (Acosta 2012). Por otro lado, durante este período se empezaron a evidenciar daños ambientales causados por la explotación petrolera (Larrea 2006) y los impactos de los primeros megaproyectos hídricos como el sistema Daule-Peripa. Acogiendo estas preocupaciones y de la mano del «vacío» que dejó el Estado en algunos sectores, surgieron y se consolidaron organizaciones sociales (Pacari 1996; Hoogesteger *et al.* 2017) y ONG ambientalistas nacionales (Lewis 2016).³⁸ Estas iniciativas sociales lograron, además, conectar con pares a nivel internacional que les sirvieron para fortalecer sus luchas locales en contra del desarrollo de megaproyectos hídricos en particular.³⁹ No obstante, la explotación de los recursos naturales continuaba, pero para beneficio principalmente de empresas privadas.⁴⁰ A continuación, esta sección se organiza en dos ejes orientadores: el rol del Estado y el papel de la tecnocracia y, el surgimiento y peso de la organización y movilización social.

Contrario al papel que tenía el Estado durante el desarrollismo, a lo largo del neoliberalismo, este fue paulatinamente delegando al mercado su función protagónica en el camino hacia el desarrollo (Acosta 2001). En el nuevo discurso nacional e internacional, el Estado pasó de ser protagonista, a ser un obstáculo para la sociedad y la economía. En 1979, el país volvió a la democracia bajo el mando del presidente Jaime Roldós Aguilera, quien tenía un fuerte discurso antimperialista y de soberanía nacional (Sarmiento 2013). Sin embargo, debido a su posición crítica frente la injerencia de Estados Unidos en los países latinoamericanos, fue asesinado en 1982 (Perkins 2005; Sarmiento 2013). Enseguida subió al poder su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, quien dio los primeros pasos hacia el neoliberalismo (Hey y Klak 1999). Tal como él mismo lo reconoce:

-
38. Hasta 1984 solo existía Fundación Natura. Entre 1985 y el 2000 ya había por lo menos doce organizaciones no gubernamentales ambientalistas (entre ellas Acción Ecológica-AE) (Lewis 2016, 84). Para información sobre el surgimiento y rol de organizaciones sociales en el sector de riego, véase Hoogesteger (2014).
39. Entre 1983 y 1993 crecieron exponencialmente las organizaciones no gubernamentales ambientalistas transnacionales. Decenas de ellas trabajaban directamente en impactos de megarepresas (Khagram 2004, 12).
40. Un ejemplo de ello es el crecimiento sostenido que experimentaron las empresas petroleras privadas (Ospina Peralta 2013).

[Hay un] cambio en ideas, un cambio en la realidad, un cambio ideológico producido en el mundo... que desacredita al socialismo, que desacredita al estatismo, que desacredita el intervencionismo, que desacredita la planificación económica formal [...]. Y [este cambio] legitima [...] otro modelo económico que está basado en las fuerzas del mercado (palabras del expresidente Osvaldo Hurtado, citado por Hey y Klak (1999, 66).

La gigantesca deuda externa que produjo el desarrollismo dejó al Ecuador en estado de vulnerabilidad frente a sus principales acreedores (Acosta 2012). La grave crisis económica nacional, la presión internacional para liberalizar el mercado, y la satanización del Estado fueron parte del contexto en el que los Gobiernos del conservador León Febres Cordero (1984-1988) y el del centroizquierdista Rodrigo Borja (1988-1992) iniciaron la adopción progresiva de una serie de ajustes estructurales que exigían los acreedores de la deuda: el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tal como lo ratifica Francisco Carrión, uno de los asesores del expresidente Borja:

El FMI simplemente condiciona [el préstamo], diciendo: «bien, para llegar a un acuerdo para la próxima renegociación de la deuda, tiene que aceptar ciertas condicionalidades». El FMI requiere ciertas políticas para obtener crédito (Hey y Klak 1999, 82).

Durante los gobiernos abiertamente neoliberales de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y subsiguientes, estas presiones se materializaron en la expedición de leyes que tenían como objetivo atenuar las «cargas» económicas que soportaba el Estado. Con su aplicación se lograría reducir el tamaño y las responsabilidades que había adquirido el Estado durante el período desarrollista. Por ejemplo, esto se refleja en el artículo 41 de la Ley de Privatización y Modernización del Estado: «El Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de los servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, [...], u otras de naturaleza similar».⁴¹ Esto abrió las puertas para la privatización de varias instituciones estatales, como símbolo del desarrollismo.

Los ajustes estructurales a la economía implicaron además ajustes en el sector hídrico (Terán 2005). Esto tuvo efecto sobre el desarrollo de megaproyectos hídricos. En 1994 se disolvió el INERHI y se creó el Consejo Nacional

41. Ley expedida en diciembre de 1993.

de Recursos Hídricos (CNRH).⁴² En contraste con el fuerte rol que caracterizó al INERHI, durante el desarrollismo, el CNRH se encargó únicamente de la administración de las concesiones y, la creación y gestión de normativas y políticas públicas. Su capacidad y recursos (económicos y humanos) para la construcción de infraestructura eran limitados (Cremers, Ooijevaar y Boelens 2005). Entre las políticas más importantes que marcaron al sector hídrico fue la transferencia de sistemas de riego «públicos» a los regantes y la ostensible reducción de personal.⁴³ Se crearon varias Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD) y se conservaron otras creadas durante el período desarrollista como la CEDEGE.⁴⁴ Así, mientras se desmantelaban instituciones centralistas como el INERHI, la CEDEGE, por ejemplo, se fortaleció ya que encajaba en el proyecto descentralizador neoliberal. Así lo resalta el expresidente Durán Ballén:

Los organismos regionales de desarrollo, al formar parte del proceso de modernización, se han constituido en auténticos gestores del progreso del país [...]. Es un hecho de absoluta justicia, destacar la labor cumplida por la CEDEGE, institución que constituye el mejor ejemplo de la responsabilidad, la ejecutividad y la eficiencia que debe caracterizar a la acción gubernamental (CEDEGE 1995, 1).

A través de cuestionados créditos internacionales, las CRD con mayor capacidad económica y poder político como la CEDEGE y el CRM lograron implementar varias megarepresas y enormes trasvases de agua en la costa (CAIC 2008a). Entre los megaproyectos construidos en este período cuentan Tahuín (1987-PREDESUR), Daule-Peripa (1988-CEDEGE), Chongón (1991-CEDEGE), La Esperanza (1996-CRM), el Sistema de Trasvase Daule-Santa Elena (1994-CEDEGE) y San Vicente (1993-CEDEGE). Muchos de ellos se implementaron gracias a que varios ya venían contratados desde el final del desarrollismo (p. ej.: Daule-Peripa) y/o gracias al endeudamiento externo

42. Decreto Ejecutivo N.º 2224. 25 de octubre de 1994.

43. En la década de 1990, con un préstamo del BM, el Estado transfirió cerca de 38 sistemas públicos a juntas de regantes. Entre el año 1994 y el 2000 se implementó esta política con el objetivo de reducir el gasto y tamaño del Estado. Para profundizar sobre la política y programas de transferencia de sistemas de riego públicos a regantes y juntas de regantes, véase Hoogesteger (2014); Cremers, Ooijevaar y Boelens (2005).

44. Entre las CRD preexistentes estaban CREA, CRM, PREDESUR y CEDEGE. Entre las nuevas estaban las Corporaciones Regionales de El Oro, sierra centro, sierra norte, Chimborazo y Cotopaxi (CODELORO, CORSICEN, CORSINOR, CODERECH y CODEREKO, respectivamente).

proveniente de organismos multilaterales (p. ej.: BID, BM) que se canalizó a través de instituciones como la CEDEGE.

A través de herramientas legales e institucionales, el Estado «delegó» al sector privado la inversión en infraestructura pública como hidroeléctricas y otros megaproyectos hídricos.⁴⁵ Muestra de ello en este sector es la privatización de INECEL, que fue dividida en varias empresas privadas (sociedades anónimas).⁴⁶ Esto provocó que las inversiones, entre los años 1995 y 2005, que ascendían a cerca de USD 1300 millones, en su mayoría, no se realizaran (Acosta y Villavicencio 2007). Como se ha mencionado, la poca inversión en megaproyectos fue canalizada a través de instituciones descentralizadas, como la CEDEGE, la cual se focalizó en megaproyectos hídricos con el objetivo tácito de beneficiar a actores capitalistas. Así lo reconocía uno de los directivos del directorio de la CEDEGE:

Caso especial merece dentro de este apretado análisis el Trasvase de las Aguas del Río Daule a las provincias de Santa Elena [parte del sistema Daule-Peripa], obra de singular importancia, cuyo inmenso costo [...] de nada serviría si no se implementa un *gran plan de desarrollo agroindustrial* que justifique tan importante esfuerzo. [...] La gran empresa agrícola y los propietarios que han vivido toda su vida en la zona deben [...] ayudarse fundamentalmente en la búsqueda de mercados hacia dónde exportar una producción agrícola de alta sofisticación, de enorme rendimiento y, por ende, de alto costo (Carlos Luis Estrada, expresidente de CEDEGE) (CEDEGE 1995, 2, mi énfasis).

Claramente, para el entonces presidente de esta institución, la relación desigual entre propietarios comuneros y empresarios fue subestimada en la planificación de la CEDEGE, lo cual derivó en un despojo masivo de la tierra comunal desde los comuneros hacia las empresas privadas (capítulo 3).

En materia ambiental, aunque con limitaciones, hubo varios avances en el papel del Estado. Bajo el efímero Gobierno del populista Abdalá Bucaram,

-
- 45. Este fondo (FEIREP) se creó a partir de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal. Se alimentaba de la participación estatal en la producción privada de petróleo y del 45% de los excesos de ingresos petroleros sobre los presupuestados (Correa 2009).
 - 46. El INECEL concluyó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999. Véase Decreto Ejecutivo N.º 773. Fue dividido en seis empresas: Hidropaute s. A., Hidroagoyán s. A., Hidropucará s. A., Termoesmeraldas s. A., Termopichinchá s. A. y Electroguyas s. A. El CEDEGE se hizo cargo de la hidroelectricidad generada por Daule-Peripa y la construcción del proyecto multipropósito Baba.

en 1996, se creó el Ministerio de Ambiente.⁴⁷ En 1999 se fusionó el Ministerio de Medio Ambiente con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) y,⁴⁸ en el mismo año, se expidió la Ley de Gestión Ambiental. Pocos años más tarde se promulgó el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente y varios reglamentos de aplicación. Esto permitió, en alguna medida, que el Estado se involucrara más en la regulación y control de los efectos de las actividades productivas y proyectos de infraestructura sobre el medio ambiente. No obstante, estos avances institucionales y legislativos no fueron suficientes para detener o regular las actividades extractivas de gran escala, como la construcción de la represa más grande del Ecuador (Daule-Peripa), la expansión de áreas petroleras en la Amazonía y el crecimiento de monocultivos agroindustriales en la costa (Larrea 2006).

Los ajustes estructurales cambiaron muchos aspectos del rol del Estado. Sin embargo, lo que no cambió más bien se profundizó. Fue un modelo económico primario exportador y extractivista (Ayala Mora 1993b). Siguiendo a Larrea (2006, 15:120-30), presento varios efectos socioambientales que devinieron con la entrada del neoliberalismo y de una suerte de reprimarización económica. Primero, como producto de la crisis económica, el incentivo a la exportación de productos primarios y de los ajustes estructurales en lo social, aumentó la pobreza —en especial en las áreas rurales—, el desempleo y la inequidad social. Esto llevó a experimentar un aumento significativo de la presión social sobre los recursos naturales, como los bosques tropicales, páramos, ecosistemas marinos y fuentes hídricas. Segundo, a pesar de la institucionalidad y la legislación ambiental, el retiro del Estado dejó sin regulación las actividades económicas y sus eventuales impactos negativos sobre los recursos naturales. Por consiguiente, la construcción de infraestructura de gran impacto, como vías y megaproyectos hídricos en áreas frágiles, quedó a merced de los estándares de los financieros internacionales (p. ej.: BID o BM), empresas constructoras, y de sus poco transparentes contrapartes estatales (p. ej.: CEDEGE). Y tercero, el modelo de gobernanza basado en las leyes del mercado no permitió incorporar costos socioambientales en las inversiones y proyectos emprendidos, tanto por el sector privado y el sector público, como por aquellos productos de alianzas público-privadas.

Los tecnócratas tomaron el poder, primero sobre la economía y luego sobre la sociedad entera. Según Patricio Silva, «los tecnócratas han participado

47. Decreto Ejecutivo N.º 195.

48. Decreto Ejecutivo N.º 505.

también activamente en Gobiernos democráticos» (1997, 2), y no solo en regímenes dictatoriales y autoritarios (O'Donnell 1973); también han estado presentes en gran parte del período desarrollista ecuatoriano. Silva resalta que durante el regreso a la democracia de varios países latinoamericanos —incluido el Ecuador— «los tecnócratas han pasado a convertirse en importantes actores nacionales, cuya influencia se extiende mucho más allá de los ámbitos estrictamente económicos y financieros» (1997, 1). Con base en esto, sugiero que si bien el Estado estaba satanizado en Ecuador, la tecnocracia seguía con una eventual «buena reputación».⁴⁹ Además, la legitimidad que habían ganado los megaproyectos hídricos, como herramientas para apalear la crisis energética y apuntalar el desarrollo (Dourojeanni y Lee 1981), hizo necesaria la permanencia de tecnócratas en varias instituciones como la CEDEGE y el CRM. Los tecnócratas que ingresaron durante el desarrollismo y que se encargaron de planificar los primeros megaproyectos hídricos poseían el *know-how* ('conocimiento'); por tanto, era apenas lógico mantener la confianza en ellos y en su conocimiento técnico-político. Esto muestra que, si bien la política económica e ideología habían cambiado en el rol del Estado, el impulso de los megaproyectos continuó a través de la continuidad de la racionalidad técnica de muchos tecnócratas, que se extendió hacia otros ámbitos de sociedad.

Contrario al periodo anterior, a lo largo del neoliberalismo surgieron con mucha fuerza los movimientos sociales locales y organizaciones no gubernamentales ambientalistas (Lewis 2016). Las principales razones de esta efervescencia social fueron tres. La primera, la creciente degradación ambiental (p. ej.: derrames petroleros, pérdida de biodiversidad, deforestación, expansión de frontera agrícola, contaminación y acaparamiento de fuentes de agua, etc.). Esto se traducía en pérdida de biodiversidad debido, principalmente, a la extracción petrolera en la Amazonía, que fue uno de los más importantes motivantes (Lewis 2016). La segunda, el descontento social que iban dejando los ajustes neoliberales. Y la tercera, el «vacío» dejado por el Estado en algunos sectores. En el proceso de movilización social, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue muy importante desde mediados de los años ochenta.⁵⁰ Lideró varias protestas masivas y, en 1995,

-
49. Polanyi (1957) y Hayek (2016) ya lo dijeron: el neoliberalismo no significa un «retiro» o salida del Estado, sino transformarlo, mantenerlo y, sobre todo, hacerlo funcional/instrumental a la operación del libre mercado.
 50. Esta organización se conformó el 16 de noviembre de 1986 (www.conaie.org). Desde entonces, el movimiento indígena ha tenido un protagonismo político fundamental en la vida política nacional. Una de las manifestaciones más importantes fue la de junio de 1990, en reclamo, principalmente, por conflictos de tierras y reivindicación social (Larrea 2006). Su capacidad de movilización y poder político han sido clave en el derrocamiento

conformó el movimiento político Pachakutik, cuya misión era representar los intereses del movimiento indígena. En sus inicios confluyeron, además, la Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC-CNC) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (cms). A pesar de que sus reclamos no giraban en torno al agua (Becker y Tutillo 2009; Becker 2010), su base política se involucraría en el movimiento social en contra de la construcción de la megarepresa Baba (capítulo 4).

Desde mediados de los años ochenta, de la mano de la organización social, el Ecuador experimentó un *boom* de ONG ambientalistas y ecologistas. Entre las organizaciones más representativas que se formaron a nivel nacional están la Sociedad de Defensa de la Naturaleza (SODENA), fundada en 1985. Con el apoyo de esta nació, en 1986, el proyecto Acción Ecológica (AE) conformado por un grupo de biólogas y comunicadoras sociales.⁵¹ Año seguido, se estableció la Corporación por la Defensa de la Vida y se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional Ambiental en donde participaron las ONG y colectivos existentes hasta el momento. Como resultado de este encuentro ambiental se formó el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) (Lewis 2016). Si bien el impacto de megaproyectos como el Daule-Peripa ya se empezaba a sentir en comunidades locales, las ONG no se involucrarían con las comunidades locales sino hasta finales de los años noventa. El surgimiento de las ONG hizo posible influenciar sobre el desarrollo de algunos megaproyectos hídricos. Esto se debió también porque a nivel internacional, durante el primer quinquenio de los años noventa, los temas ambientales, el agua y el modelo de desarrollo económico empezaron a visibilizarse rápidamente. Con ellos surgieron también movimientos sociales y ONG antireservas (Khagram 2004).

Acción Ecológica sería un actor muy importante en las luchas contra la política de megaproyectos hídricos. A partir de la movilización social de comunidades locales, que empezaban a sentir los impactos negativos de estas megaobras, y el trabajo realizado por organizaciones antireservas, a nivel internacional, es que Acción Ecológica empezó a incluir esta temática en su trabajo activista.⁵² Una de las organizaciones que contribuyó de manera importante fue la ONG International Rivers (1985) y su red de movimientos y

de varios Gobiernos y en la elección de presidentes. Para un estudio a profundidad sobre el movimiento indígena en Ecuador, véase Becker 2010.

51. Acción Ecológica se autoidentifica como un grupo ambientalista que critica el modelo de desarrollo extractivista y tiene una perspectiva crítica con respecto a la dialéctica «ser humano-naturaleza».
52. Entrevista con cofundadora de Acción Ecológica. 27 de septiembre del 2017.

organizaciones sociales a nivel mundial. Esta es una organización que trabaja con «una red internacional de afectados por represas, movimientos sociales, ambientalistas, comprometidos con la detención de la destrucción de los ríos y la promoción de mejores opciones».⁵³ Así como Acción Ecológica e International Rivers, varios movimientos sociales y organizaciones surgieron en América Latina. Uno de los más grandes es el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), que se formó en 1991 en Brasil (Gómez *et al.* 2014). A partir de ello, decenas de movimientos y organizaciones empezaron a presionar al BM, principal financista de las megarepresas en el planeta (McCally 2001), para que forme parte de una iniciativa para transparentar los impactos de estos megaproyectos en comunidades locales (WCD 2000). El resultado fue el establecimiento, a finales de los años noventa, de la Comisión Mundial de Represas (CMR), como una instancia independiente y multilateral de evaluación de estas megaobras. Después de un par de años surgió la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) (Gómez *et al.* 2014).

Producto de esta luchas, en el año 2000 se publicó uno de los documentos más influyentes en la lucha en contra de las megarepresas: el *Reporte de la Comisión Mundial de Represas* (WCD 2000). Este documento junto al libro *Ríos Silenciados* de Patrick McCally (McCally 2001) fueron aportes importantes para las crecientes luchas contra las represas a nivel local y latinoamericano.⁵⁴ Gran parte de esta inquietud internacional fue canalizada a través de las ONG y activistas nacionales. En esta coyuntura internacional, Acción Ecológica se nutrió de información y llegó a formar parte de REDLAR y consolidó redes regionales. A través de esta experiencia es que Acción Ecológica desempeñó un rol importante (aunque también criticado en el ámbito local) en los conflictos en torno a los sistemas multipropósitos Baba (capítulo 4) y Chone (capítulo 5), y al apoyo de comunidades afectadas por el sistema multipropósito Daule-Peripa (capítulo 3). Es así que, tanto organizaciones sociales locales, movimientos sociales supralocales, como las ONG ambientalistas confluyeron, durante el neoliberalismo, para resistir y negociar la construcción e implementación de megaproyectos hídricos.

El período terminó con una crisis profunda en el país a raíz del modelo neoliberal. La crisis política, social y económica en la que estaba sumido el

53. Para más detalles sobre el trabajo de International Rivers, véase <https://www.internationalrivers.org/resources/about-international-rivers-3679>

54. Para el detalle de las principales organizaciones y movimientos sociales que surgieron entre 1990 y 2006, véase Gómez *et al.* (2014, 83); y, para conocer la trascendencia de la CMR, véase Baghel y Nüsser (2010).

Ecuador, durante el primer quinquenio de la década del 2000, desgastó a los partidos políticos tradicionales que habían gobernado el país desde el regreso a la democracia (Acosta 2012). En este contexto se abrieron espacios para actores políticos distintos, caras relativamente nuevas, alejados de la tradicional partidocracia (Lucas 2007). Es así como en el 2006 fue lanzado un nuevo movimiento político: Patria Altiva i Soberana-PAÍS, liderado por Rafael Correa. Este movimiento encabezado por Correa ganaría las elecciones presidenciales a finales de ese año, con un programa de gobierno progresista.

El Estado posneoliberal (2007-2017):⁵⁵ «retorno» del Estado, tecnocracia carismática y gubernamentalidad progresista

Hemos invocado el ajuste de cuentas con la historia, porque la lucha por la segunda y definitiva independencia demanda *retomar los sueños y utopías* hasta alcanzar una Patria unida y soberana, donde florezcan la verdad y la justicia (Manifiesto ideológico de Alianza PAIS s/f, 6 mi énfasis).

[D]ebemos concebir al ser humano no como un simple consumidor sino como un portador de derechos y responsabilidades hacia los otros (SENPLADES 2007, 46).

Este período se caracterizó por el «retorno» del Estado. Es calificado por muchos como la etapa posneoliberal (Grugel y Riggiorzi 2012; Elwood *et al.* 2016). La crisis social, política y económica que dejó el neoliberalismo abrió espacios para la entrada de propuestas alternativas al modelo de desarrollo fracasado (Lucas 2007). En este contexto, en el 2007 asumió el poder

55. Me refiero a este período como «posneoliberal», no porque considere que este calificativo signifique que el neoliberalismo se terminó a partir del año 2007. Más bien considero que fue un período en el cual, sobre todo en Ecuador, el mercado y varios actores sociales (entre ellos las élites empresariales) pasaron por un proceso de adaptación (Ospina Peralta 2013). Un ejemplo de ello se evidencia en la gobernanza de los recursos naturales (p. ej.: minería a gran escala, gas, petróleo, agua, monocultivos). Concretamente, me refiero al mantenimiento y, muchas veces, a la profundización de un modelo de desarrollo extractivista, utilizado por el Gobierno de Rafael Correa (y otros de la región) para mantener su discurso y programas sociales y de infraestructura (Gudynas y Acosta 2010). Mi intención no es entrar en el amplio debate y aristas profundamente estudiadas sobre el llamado posneoliberalismo (p. ej.: Grugel y Riggiorzi 2012; Yates y Bakker 2013; Elwood *et al.* 2016). En el presente libro, el uso del término me sirve para diferenciar al período gobernado por el régimen de la Revolución Ciudadana (2007-2017), y para caracterizar sus políticas y prácticas de gobierno.

la autodenominada Revolución Ciudadana. Dos aspectos marcaron este período. Primero, bajo este Gobierno el papel y peso del Estado se fortaleció. Se «reestablecieron» instituciones desmanteladas por el neoliberalismo —sobre todo del ejecutivo (Ospina Peralta 2013)— y se retomaron los empolvados megaproyectos hídricos, planificados durante el período desarrollista. A pesar de las relativamente sólidas organizaciones sociales que había dejado el período neoliberal (p. ej.: Hoogesteger 2014) y las críticas en contra de los megaproyectos hídricos dentro y fuera del país, el oficialismo logró imponer una agenda megahidráulica ambiciosa. China y Brasil fueron importantes actores en la política nacional de megaproyectos hídricos (Warner, Hoogesteger e Hidalgo 2017). Segundo, debido al accionar del Estado y la criminalización de la protesta (Amnistía Internacional 2012) se debilitaron y extinguieron varias ONG ambientalistas (Lewis 2016) y organizaciones sociales críticas al oficialismo (Becker 2011; Ospina Peralta 2013). A continuación, se presenta los cambios en el papel del Estado, la tecnocracia, y en las organizaciones y movimientos sociales.

Durante el posneoliberalismo, el Estado fue (o intentó ser) el motor de la sociedad y el regulador de la economía (Ospina Peralta 2013). La bandera de lucha del Gobierno fue refundar la patria, con base en una revolución *para* los ciudadanos y bajo la figura tecnocarismática del ciudadano Correa (De la Torre 2013). En la foto 5 se muestra la cercanía del presidente con la ciudadanía y su carisma.

El mismo Correa fue un claro ejemplo del estilo de su Gobierno. Él fue la personificación de una mezcla entre liderazgo carismático y orientación tecnocrática (De la Torre 2013). Correa se dio a conocer como funcionario público (y político) durante el Gobierno de Alfredo Palacio. Fue ministro de Economía por pocos meses.⁵⁶ Asumió el cargo con una posición de izquierda y crítica hacia organismos multilaterales como el BM. Al final de su efímero paso por ese Gobierno neoliberal, Correa adquirió bastante aceptación y legitimidad entre la clase política y la opinión pública, a tal grado que fue considerado enseguida como una figura presidenciable.

Esta trayectoria personal de Correa, de tecnócrata a presidente, podría ser una de las razones por las que no es extraño que la tecnocracia haya tenido un rol tan importante durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana (De la Torre 2013). Varios de los ministros que acompañaron a Correa fueron tecnócratas con similares perfiles, es decir, con un alto grado de educación

56. Desde que Alfredo Palacio asumió la presidencia, tras la estremenda caída del expresidente Lucio Gutiérrez, Rafael Correa fue nombrado como ministro de Economía. Se mantuvo en el cargo desde abril hasta agosto del 2005.



Foto 5. Ciudadana de un barrio del norte de Quito saludando al ciudadano presidente previo a una de sus apariciones sabatinas.

Fuente: archivo propio.

—especialmente en economía e ingeniería—, con ciertas habilidades en el campo de la política y una fuerte ideología modernizante (anexo 3).

A lo largo de este período, el Estado se bañó de una fuerte carga ideológica: construida en torno al «Socialismo del siglo XXI» o «Socialismo del Buen Vivir» (Alianza PAÍS 2013).⁵⁷ Fue una etapa en donde la materialización del Buen Vivir se alcanzaría mediante la participación de los ciudadanos en el poder a través de su representante: el *ciudadano presidente*. Según el entonces presidente, su Gobierno dejaría atrás «la larga y triste noche neoliberal» (Correa 2009). A diferencia del neoliberalismo, la Revolución Ciudadana sostenía que:

57. «Entendemos por desarrollo, la consecución del Buen Vivir de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a la vez— valoran como objetivo de vida deseable. Nuestro concepto de desarrollo nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros, a fin de posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir compartido» (SENPLADES 2007, 54).

El rumbo hacia una nueva agenda de desarrollo comienza por modificar la naturaleza y el estatus del análisis económico y por reconocer la necesidad de otorgar mayor legitimidad a [...], el, hasta ahora, vilipendiado sector público esquilmando, moral y materialmente, con el argumento de reducir el tamaño del Estado (SENPLADES 2007, 13).

Otro aspecto que guio (por lo menos en el discurso) este retorno del Estado fue el cambio de paradigma de la relación entre sociedad-Estado-naturaleza. Según el expresidente Correa:

Los seres humanos no somos lo único importante de la naturaleza, pero seguimos siendo *lo más importante* de esa naturaleza. Y tenemos que aprovechar todos nuestros recursos para superar lo más rápidamente posible la pobreza.⁵⁸

En esta misma línea, y a diferencia del desarrollismo, la Revolución Ciudadana sostenía que «el desarrollo es un problema político y que para alcanzarlo había que cambiar las relaciones de poder dominantes: ubicar al ser humano sobre el capital y al poder ciudadano como base de la democracia».⁵⁹ Estas posiciones auguraban un cambio radical en el modelo económico y la supremacía del capital sobre el ser humano.

Durante los primeros meses de Gobierno, PAIS no estuvo solo en sus esfuerzos refundacionales. Varias fuerzas políticas y movimientos sociales lo acompañaron. Entre los más sobresalientes cuentan el movimiento indígena, partidos socialistas y de izquierda, académicos críticos, ONG, organizaciones campesinas y sindicatos (Becker 2011). Tales alianzas le permitieron a Rafael Correa ganar legitimidad para que en el año 2007 disuelva el Congreso Nacional y, de paso, le permitió establecer una Asamblea Constituyente, en la cual alcanzó una rotunda mayoría (Becker 2011). Esta Asamblea Constituyente redactó una nueva carta magna. El período de redacción y aprobación de la nueva constitución tuvo dos momentos. El primero, con el académico y activista Alberto Acosta como su presidente, tuvo una gran participación de organizaciones sociales, campesinas e incluso indígenas. Durante este momento se lograron incluir los aspectos más progresistas de la constitución (Becker 2011). En un segundo momento, tras el descontento de

-
58. Discurso en la inauguración del sistema multipropósito Baba, 27 de junio del 2013.
 59. Discurso del expresidente Rafael Correa en el Segundo Encuentro Latinoamericano Progresista: «Democracias en revolución, la soberanía y la justicia social». <https://www.youtube.com/watch?v=MqtSxrYsV78>. Septiembre del 2015.

Alberto Acosta y de varios representantes de organizaciones sociales, debido a serias divergencias con el Ejecutivo con respecto a los reclamos sociales, Acosta renunció y asumió la presidencia de la asamblea un político cercano a Correa. Una de las contradicciones giraba en torno al reconocimiento real de la plurinacionalidad propuesto por el movimiento indígena frente a la idea de ciudadano universal del Ejecutivo (Becker 2011). Después de haber sido aprobada con el voto popular, en el 2008 entró en vigencia la nueva carta constitucional. A pesar de los problemas presentados en sus procesos de construcción, fue una constitución que garantiza los derechos, como ninguna otra en la historia (Gudynas y Acosta 2011; Daly 2012). Fue, por ejemplo, la primera Constitución a nivel mundial en reconocer los derechos de la naturaleza y una de las primeras en posicionar el derecho humano al agua a nivel constitucional. Tal como rezan los artículos 71 y 12 de la Constitución, respectivamente:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. [...] El mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza, entre ellos uno de los más importantes, el del agua, no implica solamente el cuidado y gestión sustentable de ecosistemas fundamentales para el agua, como los páramos, bosques y humedales; sino también el manejo integral del agua en sus diversos usos, desde la captación hasta la descarga, una vez que el agua es utilizada.

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

Ambos aspectos hacen del Ecuador un caso único a nivel mundial. Con base en el tratamiento y cobertura que se le da al agua en la Constitución, se puede afirmar que la Constitución ecuatoriana es «una Constitución hecha de agua» (García 2006, 173). De los 444 artículos que componen la Constitución, 71 mencionan explícitamente el tema del agua y/o mencionan aspectos relacionados con ella (García 2006). Entre los enunciados más importantes también constan la prohibición expresa de la privatización del agua (Art. 318), la gestión pública y comunitaria del agua (Art. 318) y la urgencia por garantizar una (re)distribución y acceso equitativo al agua para riego, en particular, a favor de los pequeños y medianos agricultores (Disposición transitoria

vigesimoséptima). La participación ciudadana, la inclusión social y el reconocimiento de la plurinacionalidad fueron temas que también destacaron en la carta magna (Acosta y Martínez 2010). Estos aspectos se reflejaron también en el primer Plan Nacional de Desarrollo, en donde el Buen Vivir se introdujo como alternativa de desarrollo, como medio y fin.

Parte de la hoja de ruta para lograr este «cambio de época» involucró una profunda modernización del Estado, lo que supuso ordenar el caos en el que estaba sumido el país. Esto incluyó la recuperación y (re)creación de una nueva institucionalidad (Asamblea Nacional 2007). El cambio en el peso del Estado se refleja, en parte, en «la proporción del sector público no financiero en el PIB, que pasó de menos del 25%, en el 2006, a casi el 50% en el 2011» (Ospina Peralta 2013, 199) (anexo 2), y en la creación de entidades públicas adscritas al Ejecutivo. Entre el 2007 y 2015 se crearon cuarenta entidades adscritas o pertenecientes directamente al Ejecutivo. En total existían cerca de 127 instituciones relacionadas con el Ejecutivo.⁶⁰ Esto coincide con el hecho de que en el mismo período de tiempo, la mayoría de leyes aprobadas estaban relacionadas con reformas del Estado o con temas administrativos (Ospina Peralta 2013). Un sector concreto que muestra el retorno del Estado es el petrolero. Se renegociaron contratos con varias empresas, se recuperó el papel mediador de la empresa estatal petrolera (Petroecuador) y se revirtieron campos de explotación como el de la empresa Occidental (Ospina Peralta 2013). Por tanto, durante los más de diez años que duró este período, gracias a los altos precios internacionales del petróleo entre 2008 y 2013, a la mejora en la recaudación tributaria efectiva,⁶¹ a las regalías mineras y al endeudamiento externo —que se incrementó ostensiblemente al final del período 2014-2017—, el Estado realizó una importante inversión en lo social y en obras públicas. Se construyeron y reconstruyeron carreteras, hospitales, centros de salud, escuelas, hidroeléctricas y megareservas. El resultado parcial del regreso del Estado, y de su rol central como redistribuidor de riqueza, se refleja en la reducción de la tasa de extrema pobreza nacional del 15,5%, en junio del 2008, al 8,6%, en el mismo mes del 2016 (Banco Central del Ecuador 2016).

La gestión del agua tuvo un papel protagónico en el Estado posneoliberal y la posesionó como un recurso estratégico: el Estado necesitaba controlarla para cumplir con sus objetivos relativos al cambio de matriz energética-

60. Diario *El Comercio*. <http://www.elcomercio.com/actualidad/ejecutivo-administra-entidades-publicas-ecuador.html> . 8 de septiembre del 2015.

61. En el año 2006 la recaudación tributaria fue de USD 4672 millones, mientras que en el 2016 ascendió a USD 13.387 millones. www.sri.gov.ec.

productiva (SENPLADES 2013). Para alcanzar el control y manejo de este recurso, al inicio de la administración de Correa se crearon nuevas instituciones: el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE),⁶² la Empresa Pública Ecuador Estratégico (EEEP),⁶³ y, en el sector hídrico directamente, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).⁶⁴ El primero fue la entidad a cargo de la política pública nacional, coordinación y supervisión de proyectos e inversiones sobre los llamados recursos estratégicos y sus ministerios.⁶⁵ La segunda fue una empresa pública, encargada de contratar y construir proyectos de compensación social y económica para las comunidades afectadas por la construcción e implementación de proyectos estratégicos nacionales a partir de la renta petrolera y minera.⁶⁶ La tercera fue un esfuerzo para recentralizar la institucionalidad del sector hídrico. Esta última se creó con base en la extinción y absorción de varias instituciones (entre ellas CEDEGE y CRM) que funcionaban como parte de los modelos desarrollista y neoliberal.⁶⁷ La SENAGUA fue creada con el fin de dictar política nacional sobre la gobernanza del agua y construir grandes proyectos hídricos.⁶⁸ Esta institución se podría presentar como un intento de simular al extinto INERHI, antes de la época neoliberal. Sin embargo, la diferencia con el INERHI radica en que SENAGUA debía reconciliar y juntar varias instituciones, que en la época neoliberal habían adquirido vida en sí mismas, con poderes locales diversos (Boelens, Hoogesteger, y Baud 2015). A pesar de que este fue un esfuerzo sectorial interesante para instituir una nueva institucionalidad, en la práctica lo que sucedió fue un *reciclaje* de viejos programas, proyectos y personal técnico.

El fortalecimiento del Estado se fundamentó en gran medida en decisiones basadas en la heredada y nueva tecnocracia (De la Torre 2013). Bastante

62. Decreto Ejecutivo N.º 849. 3 de enero del 2008.

63. Decreto Ejecutivo N.º 870. 14 de septiembre del 2011.

64. Decreto Ejecutivo N.º 1088. 15 de mayo del 2008.

65. Entre los recursos estratégicos además del agua cuentan: el petróleo, la minería y las telecomunicaciones.

66. Véase el capítulo 6 para más detalles acerca de su rol.

67. Un ejemplo es la absorción del CRM por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) en el año 2009. Decreto Ejecutivo N.º 40, 9 de septiembre del 2009.

68. En los últimos años de Gobierno, la SENAGUA se ha subdividido en la Empresa Pública del Agua (EPA) y en la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). La EPA se dedica exclusivamente a la infraestructura hídrica y la ARCA a la regulación y control administrativo de las juntas de agua y las autorizaciones de uso y aprovechamiento del recurso. Durante el Gobierno de Lenín Moreno se intentó fusionar la SENAGUA y el Ministerio del Ambiente como una sola institución. Esto demuestra la débil institucionalidad y la falta de importancia que le otorga el nuevo Gobierno a la gestión del agua.

similar al período desarrollista, durante la Revolución Ciudadana, la toma de decisiones adquirió mucho protagonismo con base en evidencias objetivas, pensamientos racionales y procedimientos técnicos.

El sector hídrico mantuvo (y revivió) durante el posneoliberalismo la base técnica y política que lo caracterizó antaño. A pesar de que durante el posneoliberalismo «desaparecieron» las entidades estrella en la construcción de megaobras —así como en el desarrollismo y neoliberalismo, instituciones como la CEDEGE y CRM, del mismo modo que el INERHII durante el neoliberalismo—, muchos funcionarios públicos de esas instituciones en la época del desarrollismo siguieron trabajando en la SENAGUA. Esto explica, en gran medida, la razón de que la mayoría de los megaproyectos hídricos, construidos durante la Revolución Ciudadana, fueran proyectos antiguos: seguían las viejas utopías desarrollistas de los ingenieros hidráulicos y políticos.

Con el fortalecimiento del Estado en este período, ingresaron nuevos funcionarios públicos a las áreas técnicas y administrativas del sector hídrico. Un ejemplo fue Walter Solís, exsecretario de la SENAGUA, con quien se materializaron la mayoría de megaproyectos hídricos de la Revolución Ciudadana. Personajes como él fueron clave para el desarrollo de este tipo de megaproyectos, ya que varios de estos oficiales eran cercanos a poderosas empresas constructoras privadas como Hidalgo&Hidalgo, y también estaban dispuestos a abrir espacios para nuevos financieros y constructores como los chinos y brasileños. Así lo reconoció el mismo exsecretario de la SENAGUA durante una reunión de trabajo sobre megaproyectos hídricos: «Prefiero no abordar ese tema [sobre las contrataciones de obras] ya que como todos saben yo tengo una relación cercana con Hidalgo&Hidalgo».⁶⁹

Esto evidencia un aparente conflicto de intereses entre sus nuevas funciones y su relación con la empresa privada. La relación de funcionarios públicos de alto rango, como el entonces secretario de la SENAGUA, con empresas constructoras con gran capital, y la adherencia de estos funcionarios a comunidades epistémicas, que promocionaban el paradigma epistemológico megalhidráulico, hicieron que gran parte de los megaproyectos sean ejecutados. Por otro lado, esto evidencia que el Gobierno progresista de Correa, similar al período neoliberal, se relacionó con los actores del mercado muy de cerca. El cuadro 1 muestra que, a pesar del fuerte discurso de soberanía que manejó el Gobierno, la influencia de actores internacionales de moda en el desarrollo de megaproyectos hídricos, como los acreedores de la deuda y constructores chinos y brasileños, tuvieron un rol destacado en el período posneoliberal.

69. Notas tomadas durante la reunión de trabajo en el año 2012.

CUADRO 1
PRINCIPALES MEGAPROYECTOS HÍDRICOS CONSTRUIDOS
DURANTE EL GOBIERNO LIDERADO POR CORREA

| MEGAPROYECTO | CONTRATISTA | PAÍS DE ORIGEN |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Trasvase Chongón-San Vicente | Hidalgo&Hidalgo | Ecuador |
| Control de inundaciones Bulubulu | Gezhouba | China |
| Trasvase Daule-Vinces | Odebrecht | Brasil |
| Sistema multipropósito Chone | Consorcio Tiesiju y Equitesa-Equitransa | China y Ecuador |
| Control de inundaciones Naranjal | China International Water& Electric | China |
| Control de inundaciones Cañar | China International Water& Electric | China |
| Sistema multipropósito Baba | Odebrecht y oas | Brasil |
| Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair | Sinohydro | China |

Fuente: SENAGUA; Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

A propósito de la relación de instituciones y funcionarios ecuatorianos con empresas brasileras para la construcción de megaproyectos hídricos, la constructora Norberto Odebrecht protagonizó grandes escándalos de corrupción no solo en Ecuador, sino en varios países de América Latina y el mundo.

Esta empresa tuvo un gran protagonismo en la gobernanza del agua en Ecuador. Antes del Gobierno de la Revolución Ciudadana se involucró en megaproyectos como el subutilizado sistema de riego Carrizal-Chone, la hidroeléctrica San Francisco y el sistema multipropósito Baba. Fue expulsada por Correa al inicio de su mandato, por negligencias en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco; sin embargo, la empresa regresó un año más tarde y consolidó su relación con el Gobierno y los funcionarios públicos de alto rango que han sido acusados de haber recibido cerca de USD 33,5 millones en coimas, a cambio del otorgamiento de contratos. Esta empresa refleja la tremenda influencia del capital, de los sistemas epistemológicos dominantes (hidráulica-tecnicista, economicista), la corrupción y la falta de transparencia en la toma de decisiones que envuelve la gobernanza de megaproyectos hídricos en el Ecuador y en varios países del mundo.

Las empresas chinas no solo participaron en la construcción y financiamiento de megaproyectos hidráulicos, sino que tuvieron voz y voto privilegiado en la planificación de la política nacional sobre gobernanza de agua. Después de que Ecuador declaró su resistencia a pagar la deuda externa, a inicios del período progresista, y cortara relaciones con organizamos multilaterales, varios financieros tradicionales como el BM y el FMI le dieron la espalda (Warner, Hoogesteger, y Hidalgo 2017). En ese contexto, China fue uno de los únicos que estuvo dispuesto a prestar dinero a cambio de petróleo y de la participación de sus constructoras en el sector hidráulico ecuatoriano. Una ilustración de esta coyuntura se muestra cuando la SENAGUA contrató, en el 2012, la Formulación e Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador, con el Changjiang Institute Survey, Planning, Design & Research (CISPDR) de China. Fue un contrato de USD 15 000 000 dedicado, en gran parte, a proponer una cartera de grandes proyectos hidráulicos a nivel nacional. A más del elevadísimo costo, resulta paradigmático haber contratado, para la elaboración del plan nacional, a especialistas que no hablaban español y tampoco conocían el contexto ecuatoriano. Además, es una institución con un sesgo dominante hacia la infraestructura como solución a los problemas hídricos. Este instituto fue uno de los que diseñaron la megaobra Tres Gargantas y el proyecto de Transferencia de Agua South-to-North en China.

Según un estimado del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), la inversión china en hidroeléctricas (sin contar con las represas multipropósito, ni el control de inundación y estudios) asciende a más de USD 4 000 000 000. En obras multipropósito, de control de inundaciones y grandes trasvases, la inversión sobrepasa los USD 1 000 000 000 (SENAGUA 2014; MICSE 2015). Esto iba de la mano con el afán megalómano del entonces vicepresidente de la República Jorge Glas, quien fue el principal impulsor de este tipo de obras. Al mejor estilo del programa «Megaconstrucciones: Ingeniería de lo Imposible» del canal de televisión prepagada *Discovery Channel*, la vicepresidencia de la República lanzó el programa Las megaconstrucciones ecuatorianas, como muestra de soberanía y chauvinismo, y de su fascinación por el conocimiento ingenieril como válido y superior a otros. A pesar del mandato constitucional para respetar los derechos de la naturaleza y el discurso gubernamental de «el ser humano más importante que el capital», las empresas chinas —con sus megaconstrucciones— coparon el oficialismo. Además, al parecer el Estado ecuatoriano escogió un socio que iba en sentido contrario a los derechos de la naturaleza y a sus discursos iniciales de participación. Las empresas

chinas tienen la fama de tener las peores prácticas socioambientales y de estar guiadas por principios netamente técnicos y capitalistas (Tilt 2015).

Las grandes obras de infraestructura realizadas (o retomadas) durante este período, los datos estadísticos y los indicadores macroeconómicos, esconden las particularidades por las cuales el Gobierno de la Revolución Ciudadana fue criticado. Los grupos sociales y políticos que inicialmente lo apoyaban, marcaron distancia a los pocos meses de entrar al poder. Por ejemplo, el movimiento indígena (p. ej.: Pachakutik), grupos ambientalistas (p. ej.: Acción Ecológica) y académicos críticos (p. ej.: Alberto Acosta, Arturo Villavicencio) se alejaron del proyecto político y engrosaron una oposición crítica casi al final del proceso constituyente (Becker 2013). En parte, la crítica surgió por el fracaso del Gobierno en su tibio «intentó» de cambiar las estructuras del modelo de desarrollo, y, por el contrario, promover un modelo neoextractivista (Gudynas y Acosta 2010).

A lo largo de su período el Gobierno de la Revolución Ciudadana se vio envuelto en fuertes paradojas. Mientras intentaba mantener el discurso progresista de los primeros días de gobierno, sus prácticas y políticas entraban cada vez más en contradicción con tales aspiraciones iniciales. Varios temas muestran dichas paradojas en torno al manejo de recursos naturales, la participación social y en el sector hídrico. Una de las contradicciones más controversiales es el de la atropellada iniciativa Yasuní ITT. El objetivo de esta iniciativa era dejar el petróleo en el subsuelo a cambio del apoyo económico de la llamada comunidad internacional (Larrea y Warnars 2009). Esta fue una iniciativa que provino de las organizaciones sociales y ecologistas que el Gobierno la tomó como propia. Después de varios años de campaña desde el oficialismo, para dejar el petróleo en el subsuelo, en el 2013, el Gobierno dio la espalda a esta iniciativa y decidió extraer el petróleo en el Yasuní: uno de los sitios más biodiversos del planeta (Acosta 2014). Esto provocó el reclamo de personas agrupadas en la organización Yasunidos. Otro punto álgido fue cuando en el 2009 se aprobó la Ley de Minería, y en el 2013 su reforma. A más de declarar a los recursos mineros como estratégicos y de propiedad del Estado, estas normativas no regulaban la expansión de la minería a gran escala, por el contrario, otorgaban varias «facilidades» para su acceso (Van Teijlingen *et al.* 2017).

Otro aspecto muy criticado fueron los límites impuestos a la organización social. Se la normó a través de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. A pesar de que con esta ley se reconocía la participación social como parte del quehacer estatal (un tema reclamado por organizaciones sociales y movimientos por décadas) y la consulta previa informada, en la práctica fue

una camisa de fuerza en donde se señalaba *cómo* participar y *cuál* debía ser el comportamiento de las organizaciones para ser consideradas como tal. Esto empeoró tras la expedición del Decreto N.º 16, en donde se limitaba la participación y la capacidad de realizar la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales al Estado. Parte de la estrategia de reprimir la protesta y la organización social incluyó su criminalización a través de la activación del Código Penal promulgado en 1964, durante la dictadura militar (Ospina Peralta 2013; Amnistía Internacional 2012).

Los cambios en el sector hídrico también dejaron a la vista tales contradicciones. Tras varios años de negociaciones y protestas sociales en contra de la propuesta oficialista sobre una nueva ley de aguas, en el 2014 se aprobó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Debido a que la versión aprobada fue en gran parte redactada a puerta cerrada por tecnócratas nacionales e internacionales, en las oficinas de la SENAGUA, su articulado incluyó varios aspectos que contradecían los reclamos sociales en torno a la gestión plurinacional del agua y al rechazo a la privatización del agua. Así, por ejemplo, entre sus artículos se abre un camino disimulado para la privatización del recurso. Mientras en el artículo 6 se prohíbe la privatización del agua, en el artículo 7 se deja abierta la puerta para que empresas privadas puedan realizar su gestión:

La prestación del servicio público del agua es exclusivamente pública o comunitaria. *Excepcionalmente* podrán participar la *iniciativa privada* y la economía popular y solidaria, en los siguientes casos:

- a) Declaratoria de emergencia adoptada por la autoridad competente, de conformidad con el ordenamiento jurídico; o,
- b) Desarrollo de subprocesos de la administración del servicio público cuando la autoridad competente no tenga las condiciones técnicas o financieras para hacerlo. El plazo máximo será de diez años, previa auditoría».

A pesar del discurso antineoliberal a través de este artículo de «excepcionalidad», por ejemplo, se dejó incuestionada la gestión privada del agua potable del municipio de Guayaquil, mediante la empresa Interagua. Esta es concesionaria de la transnacional Bechtel que ha sido muy cuestionada desde los años noventa por su deficiente servicio e intereses económicos (Swyngedouw 1995; Carrillo, Bellettini, y Coombs 2007) (capítulo 3). Después de diez años de gobierno tampoco se logró realizar la revisión ni redistribución de las aguas de riego concentradas, casi en un 80%, en manos de grandes agroempresarios (Gaybor 2011).

Además de las transformaciones en el papel del Estado y la tecnocracia, los movimientos sociales y ONG ambientalistas experimentaron profundos cambios. La materialización de las contradicciones en la participación social se reflejó en la desaparición de varias ONG, y en la criminalización de la protesta social. Durante este período, por ejemplo, cerró sus puertas la Fundación Natura, que fue la primera ONG ambientalista del país (Lewis 2016). El Gobierno dio a entender que con un Estado fuerte, basado en una democracia representativa, ya no se necesitaba de otro tipo de organizaciones sociales que hicieran el trabajo del Estado. En especial, el mensaje era que *la política* se debía circunscribir al Estado y a sus instituciones (p. ej.: partidos políticos), y no a organizaciones sociales (que se supone no son políticas). Así lo deja en claro el Decreto 16, en el artículo 16, como causal de disolución de una organización social:

Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de *injerencia en políticas públicas*, que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado, o que afecten la paz pública (mi énfasis).

Así, un efecto directo del cambio en el Estado fue la regulación y el ordenamiento de las organizaciones sociales y ONG ambientalistas, en especial de aquellas que como Acción Ecológica se oponían al modelo neoextractivista impulsado por el «Estado-Gobierno». Por supuesto, la interpretación de este decreto ejecutivo se sujetaba a la apreciación de Correa y de sus asesores jurídicos. Por ejemplo, entre el 2007 y el 2017 se cerraron varias organizaciones no gubernamentales o se entorpeció su trabajo. Los casos más significativos fueron la clausura de la Fundación Pachamama o el doble intento de cierre de Acción Ecológica. A pesar de que las ONG son entidades con agendas e intereses propios —muchas veces, incluso, ponen esos intereses sobre los de las comunidades locales en las que intervienen—, las políticas, normas y acciones adoptadas por el Estado, durante este período posneoliberal o progresista, obligaron a callar a varios grupos no gubernamentales, cuyo papel es de crítica frente a las acciones y proyectos impulsados por el Estado. La descalificación y anulación de los actores críticos al régimen fueron significativas (Amnistía Internacional 2012). Esta administración terminó en mayo del 2017. Correa fue relevado del poder por el presidente Lenín Moreno quien, a pesar de haber ganado las elecciones bajo la bandera del movimiento Alianza PAIS, tomaría un rumbo inesperado y distinto al de su predecesor.

Reflexiones finales

En este capítulo he explicado hasta qué punto los procesos de implementación y construcción de megaproyectos hídricos han dependido de las coyunturas sociopolíticas, y cómo este tipo de proyectos han sido influenciados por las relaciones entre el Estado, el capitalismo global y los movimientos sociales. De manera particular, he indagado acerca de las similitudes y discontinuidades que la Revolución Ciudadana ha presentado, con respecto a los períodos político-económicos anteriores, en lo relacionado con la política y práctica en la evolución de los megaproyectos hídricos.

Para desarrollar estas inquietudes, el presente capítulo se dividió en tres períodos: desarrollismo (1954-1984), neoliberalismo (1985-2006) y progresismo o posneoliberalismo (2007-2017). Este estudio muestra cómo el manejo del agua (y la naturaleza) ha sido influenciado por los cambios experimentados por el Estado (papel, peso, ideología), la tecnocracia y la evolución de organizaciones y movimientos sociales. Se sostiene que este tipo de megaproyectos son relativamente nuevos y que sus tecnologías (diseño e implementación) dependen, significativamente, de la relación entre el Estado nacional y los representantes del capitalismo transnacional (financistas, constructoras y grupos de expertos). Muestra cómo, en este panorama dinámico, la sociedad responde. Obliga a entender el período de la Revolución Ciudadana desde una perspectiva histórica, es decir, este último período y sus políticas hídricas están interconectados con fases pasadas del desarrollo megahidráulico.

Respecto al papel y peso del Estado, se han presentado varios cambios y continuidades que han afectado el desarrollo de los megaproyectos hídricos. Mientras que en el desarrollismo y posneoliberalismo se establecieron instituciones nacionales (centralistas) para la gestión del agua y la construcción de megaproyectos, durante el neoliberalismo, gran parte de estas instituciones desaparecieron. Varias, como el INERHI, se descentralizaron y otras se privatizaron, dejando gran parte de la responsabilidad del desarrollo de megaproyectos hídricos a actores privados o entidades públicas regionales con capacidades limitadas. La única entidad que se mantuvo e incluso se fortaleció durante el neoliberalismo fue la CEDEGE. Esto se debió a su rol estratégico en la planificación técnica de la cuenca hídrica más importante del país, y por tener una cartera de megaproyectos hídricos pendiente para ser desarrollada. Durante el período posneoliberal, la CEDEGE fue absorbida por la SENAGUA. La absorción no solo implicó la desaparición de instituciones regionales, sino que supuso la transferencia de conocimiento y de proyectos a

la nueva institucionalidad del agua. De esta manera, la SENAGUA fue un intento de recentralizar la gestión del agua en el Ejecutivo (Boelens, Hoogesteger y Baud 2015). A través de dichos cambios, la herencia megahidráulica fue transferida mediante el accionar de los experimentados técnicos y políticos del sector público. En este período, además, el tema medio ambiental y la defensa de la naturaleza tomó cierta centralidad desde el Gobierno. No obstante, esa centralidad no pasó de ser una posición discursiva y los derechos de la naturaleza quedaron en gran medida como letra muerta (p. ej.: iniciativa Yasuní ITT). La naturaleza, tal como repetía el expresidente Correa, es importante, pero tenía que ser funcional al bienestar del ser humano. Esto hizo que los movimientos sociales ecologistas, que venían luchando por el medio ambiente desde hace décadas, tomaran fuerza contra el Gobierno y sus estrategias de cooptación de la lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza.

Tales cambios se sustentan en gran medida en el contexto sociopolítico, ideológico y económico que ha orientado el accionar del Estado en cada período de su historia reciente. Mientras que durante el desarrollismo —en gran parte, por influencia cepalina— el Estado tenía una aproximación más tecnicista frente al manejo del agua y de los recursos naturales, durante el período progresista esta orientación estuvo bañada, además, ideológicamente por el ideal del Buen Vivir y del Socialismo del siglo XXI. Mientras en el primer período sobresalía la idea de que el ser humano es superior a la naturaleza y que debía dominarla para permitir su desarrollo económico, el posneoliberalismo estuvo informado por el discurso de que el ser humano es parte —pero la más importante— de la naturaleza. El ser humano debía dominar la naturaleza, pero con el objetivo de alcanzar el Buen Vivir, en donde el ser humano estuviese por encima del capital. Por tanto, durante este último período «lo técnico» no fue lo único ni lo principal que informó el desarrollo de los megaproyectos hídricos. La idea de la defensa de la sociedad fue central, esto a través de una figura presidencial tecnopopulista (De la Torre 2013) y de un discurso ideológico poderoso. Por su lado, la dominación de la naturaleza (agua) durante el neoliberalismo estuvo enmarcada dentro de la idea utilitaria de beneficiar al ser humano y el mercado. A diferencia del desarrollismo y el posneoliberalismo, los principales beneficiarios en este período debían ser los actores del mercado. Durante el neoliberalismo, el Estado sufrió una doble transformación; por un lado, se retiró dejando espacio a otros actores como el mercado, y, por otro, se volvió funcional a las leyes del libre mercado.

En parte de las continuidades y cambios presentados en el Estado, la tecnocracia ha sido un elemento importante. A lo largo de los tres períodos

ha existido una cierta continuidad en el papel de la tecnocracia alrededor de la promoción e impulso de los megaproyectos hídricos. El primer período en el que los tecnócratas jugaron un papel protagónico fue durante el desarrollismo. Con la creación de instituciones centralistas, como el INERHI, o regionales, como la CEDEGE y el CRM, ingresaron al Estado decenas de funcionarios públicos quienes planificaron (junto a consultoras extranjeras) los primeros megaproyectos hídricos. Durante el neoliberalismo, los tecnócratas tuvieron una importante presencia, pero no tanto como en el primer período. Si bien se lograron impulsar varios megaproyectos, la transformación del Estado y la mayor presencia del sector privado y de las organizaciones sociales dejó en un segundo plano su accionar. Durante el posneoliberalismo o progresismo, la tecnocracia volvió a revitalizarse bajo el liderazgo del académico/técnico/político Correa y el discurso del Buen Vivir. Los experimentados tecnócratas que venían alojados en instituciones del pasado formaron parte de las «nuevas» o recicladas instituciones del Estado posneoliberal. Durante este período desaparecieron instituciones poderosas como la CEDEGE y el CRM. Con ellos se trasladaron también los megaproyectos de antaño y las experiencias en torno a su implementación (p. ej.: el manejo de conflictos sociales, impactos socioambientales, cartera de proyectos, etc.). De esta manera, bajo un segundo *boom* petrolero, la herencia megahidráulica fue retomada con entusiasmo durante el período progresista.

Durante el desarrollismo se planificaron la mayoría de los megaproyectos implementados en Ecuador. Sin embargo, sus impactos negativos no fueron todavía experimentados en ese período, sino a partir del período neoliberal en adelante, en el ámbito local. El vacío dejado por el Estado en varios sectores, y el malestar experimentado por la degradación socioambiental, hizo que florecieran varias ONG ambientalistas y organizaciones sociales. Junto al auge de las ONG y los movimientos sociales antírepresas, a nivel internacional, los megaproyectos hídricos implementados durante el neoliberalismo fueron altamente contestados. Así, el período posneoliberal llegó con dos experiencias: organizaciones sociales fuertes y con el peso de los impactos socioambientales causados por las megaobras del pasado.

Con el fin de ilustrar y profundizar el entendimiento de varios de estos cambios y continuidades en el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador, en los siguientes capítulos presentaré en detalle y en orden cronológico los tres estudios de caso que ocupan esta investigación. Inicio con el sistema multipropósito Daule-Peripa, continuo con el sistema multipropósito Baba y termino con el sistema multipropósito Chone.

CAPÍTULO 3

LOS MEGAPROYECTOS HÍDRICOS COMO UNA APUESTA TECNOCRÁTICA El caso del sistema multipropósito Daule-Peripa

Buscando una entrevista con el joven gerente de megaproyectos hídricos de la SENAGUA llegué a Guayaquil. En el último piso del renovado edificio, en donde antes funcionaba la CEDEGE, la secretaría de gerencia me informó, con un tono amable (supongo que me recordaba por mi paso por la SENAGUA años atrás), que «el gerente estaba muy ocupado en una reunión y que estaría disponible en un par de horas». Decidí esperar al gerente y me senté junto a uno de los ingenieros hidráulicos más antiguos de la institución. Cuando le mencioné al ingeniero que me interesaba conocer sobre la historia del Daule-Peripa, se le iluminó la mirada, me dijo muy orgulloso: «¡Al Daule-Peripa en pocas palabras le llaman “La Joya de la Corona” porque fue un éxito! Garantiza agua para las provincias de Guayas, Manabí y la Península de Santa Elena y da energía a todo el sistema nacional, además de utilizarlo como el corazón hidráulico para controlar toda la cuenca del río Guayas». La charla con el septuagenario ingeniero duró cerca de dos horas. Fue muy entretenida e informativa. Entre documentos escritos en máquina de escribir y viejos mapas, me introdujo a una cara del sistema hidráulico más grande del Ecuador que yo poco conocía. Mientras tanto, a pesar de haber acordado una reunión con anticipación con el gerente, este nunca me recibió.

Introducción

Desde el primer informe de la CEPAL sobre el desarrollo económico del país, el manejo del agua ha ganado relevancia como un recurso de importancia nacional (CEPAL 1954, 2012). Antes de esto, el agua había sido considerada

como un recurso importante, pero manejado desde una perspectiva bastante sectorial. El sistema Daule-Peripa es una ilustración del megahidraulismo introducido durante el período desarrollista. En este contexto, este capítulo analiza los orígenes y la construcción del primer megaproyecto hídrico y el más grande del Ecuador. El objetivo de este capítulo es explicar por qué y cómo se introdujo, a través del sistema multipropósito Daule-Peripa, un modelo de gobernanza tecnocrático de agua, y cómo dicho modelo ha transformado la cotidianidad de las comunidades afectadas. Para ello presento el modo en que el proceso de diseño, construcción e implementación de esta megaobra ha sido informado por las relaciones de poder inmersas en redes sociotécnicas y contingentemente históricas, presentes en Ecuador desde el período desarrollista. Contrariamente a las idealizaciones expresadas con entusiasmo por el ingeniero hidráulico de la SENAGUA, el capítulo muestra hasta qué punto los planteamientos desarrollistas relacionados con el impulso de este proyecto multipropósito, a lo largo de los años, han derivado en escenarios socioambientales negativos, experimentados por comunidades locales.

El capítulo está organizado de la siguiente manera. La segunda sección, ampliando el marco teórico expuesto en el primer capítulo, desarrolla el concepto de tecnocracia. La tercera sección mostrará el proceso de planificación del megaproyecto, los discursos y la institucionalidad que lo promovió. La cuarta sección presentará cómo este sistema multipropósito se construyó e implementó con base en promesas químéricas de desarrollo y bienestar. Se enfocará en lo que ha ocurrido en la cuenca aportante (aguas arriba de la ubicación de la presa), y también abordará ilustraciones de otras áreas de influencia del sistema multipropósito. La quinta sección pasará revista a los resultados negativos provocados por este sistema. En la sexta sección se detallarán las acciones individuales y contadas luchas colectivas que las comunidades afectadas han emprendido durante tres décadas de funcionamiento del megaproyecto. En la última sección se presentarán reflexiones finales en torno a las luchas locales, el proceso utópico-tecnocrático que construyó el Daule-Peripa y su legado megahidráulico para el Ecuador.

Tecnocracia y megaproyectos hídricos

No hay casi nada, por fantástica que esta sea, que [...] un equipo de ingenieros, científicos y administradores no pueda hacer hoy en día. Cosas imposibles pueden ser realizadas [...]. Siempre que estos hombres posean imaginación y fe, pueden mover montañas. [...] Ellos pueden crear una

forma de vida nueva para este mundo» (Lilienthal 1944, 3, traducción propia).

El libro *Democracy on the March* de David Lilienthal (1944) es una de las manifestaciones más explícitas de esto. En él, Lilienthal presenta en detalle cómo la Tennessee Valley Authority (TVA) fue una institución que desde inicios de los años treinta reflejó el sueño de progreso norteamericano, basado en el control y manejo del agua mediante grandes represas (Ekbladh 2002). Este proyecto hidropolítico se sustentó en que los «ríos alrededor del mundo [deben] ser controlados por el hombre», lo cual es importante porque «en cualquier sitio, lo que suceda con [...] el agua determina lo que ocurría con las personas» (Lilienthal 1944, 2, traducción propia). Gran parte de su propuesta involucró construir megarepresas como parte de una aspiración más amplia de intervención en la sociedad y la naturaleza (Ekbladh 2002). Esto deja en claro que, a pesar de que los megaproyectos hídricos se proyectan como panaceas de cambio a partir de «lo técnico», son en esencia tecnologías que personifican ideales políticos que comúnmente son resultado de la amalgama entre el conocimiento experto y las redes sociotécnicas presentes en un contexto específico. Un contexto que, por ejemplo, en el Ecuador desarrollista y cepalino, se orientaba por el ideal de la modernidad y la industrialización (capítulo 2). Así lo deja sentado Bakker (2010, 58), al referirse a la construcción de megarepresas durante el siglo XX en otras partes del mundo: «las represas fueron, en resumen, un proyecto utópico central en los esfuerzos de modernización e industrialización» (2010, 58, traducción propia). Estas tecnologías, además de constituirse en un reflejo de las pretensiones modernas de gobernanza de agua y orden social, engendran, entre sus grietas, efectos socioambientales profundamente perjudiciales (McCully 2001; Gellert y Lynch 2003; Lynch 2006; Nixon 2010; Fearnside 2016; Boelens 2017).

Las megaobras de control de agua como el sistema Daule-Peripa, sin duda, entran en la categoría de lo fantástico. Estos proyectos son emprendimientos humanos con los que se ambiciona (y en cierta medida se logra) controlar el agua y, por ese intermedio, transformar la sociedad (Zwarteeven 2015). Ejemplos abundan. Desde la India poscolonial (Baviskar 1995; Baghel 2014), pasando por la España de Franco (Swyngedouw 2007, 2015; Boelens y Post Uiterweer 2013), hasta la ola de modernización de Rwanda (Dye 2016). Entre otros, esos ejemplos muestran la estrecha relación que este tipo de proyectos tiene con discursos y procesos más amplios de transformación social.

Es importante mencionar que los grandes capitales y sus aberraciones (corrupción, falta de transparencia en la toma de decisiones, conflicto de intereses, acumulación de riqueza en pocas manos) están entre las motivaciones por las que se ejecutan grandes hidroeléctricas y megaproyectos hídricos (véase, por ejemplo, Ahlers *et al.* 2014); sin embargo, mi análisis intenta entender este tipo de tecnologías y su problemática desde un enfoque distinto. Los entiende desde una visión centrada en las relaciones de poder en torno a la construcción del conocimiento y las redes —comunidades epistémicas y redes sociotécnicas— que participan en sus procesos de diseño, construcción e implementación. Arguyo que una capa fundamental en el desarrollo de megaproyectos hídricos es cómo se reproducen y legitiman formas particulares de conocimiento o epistemologías sobre el agua, la tecnología, la naturaleza y, en última instancia, acerca de la sociedad (Swyngedouw 2015). Mi interés en este capítulo es entender mejor la influencia de los tecnócratas y sus redes en el diseño, construcción e implementación del megaproyecto hídrico más controversial del Ecuador: Daule-Peripa.

Los tecnócratas son actores que ejercen autoridad a través del conocimiento presentado como experto, técnico y objetivo (Silva 2010). Ser portadores de dicho conocimiento les hace merecedores de una posición tecnopolítica única en la sociedad. Tal como lo afirman Miguel Centeno y Patricio Silva: «los expertos legitiman sus reglas a través de apelar a la superioridad del conocimiento científico» (1998, 4). En consecuencia, el tecnócrata es el interlocutor, por excelencia, entre el conocimiento técnico y la política. Esto da pie a que comúnmente se dé por sentado que «los expertos *pueden ver* lo que personas ordinarias no pueden [...]» (Baghel 2014, 123, mi énfasis). Un tecnócrata —experto técnico y político a la vez—, es un burócrata técnico o social, que no solo en «virtud de su conocimiento [y posición] ejerce poder» (Olson 2015, xiii), pero que, como mencioné anteriormente, también ha adquirido capacidades para navegar e influenciar en el ámbito político. Estas características han hecho que sus decisiones, que en realidad pertenecen al campo de la política, sean percibidas como objetivas y apolíticas (Silva 2010). Tal situación es reafirmada por Silva, al citar a Frank Fisher (1990), cuando subraya «que la tecnocracia es la adaptación supuestamente apolítica de la experticia a las tareas del Gobierno. De esta manera, los tecnócratas buscan justificarse, apelando exclusivamente a su experiencia técnica, fundamentada en formas científicas de conocimiento, argumentando que pueden proporcionar soluciones técnicas a los problemas políticos» (Silva 2010, 22). Basados en las soluciones objetivas y «perfectas», que supuestamente derivan del conocimiento técnico, se convierten hasta cierto punto en predicadores

de utopías megahidráulicas. Este afán por la perfección social, natural e hídrica subyace en la base del pensamiento tecnocrático, que es motivado y persigue un deseo de orden, de justicia social y alta valoración del esfuerzo personal (Silva 2010). En ese marco, Centeno y Silva sugieren, además, que los tecnócratas, con frecuencia, tienen un fervor y deseo casi revolucionario de recrear sociedades de acuerdo con sus propios imaginarios (1998, 4). Comúnmente, ingenieros, economistas, sociólogos, entre otros profesionales, adoptan proyectos símbolo del megahidraulismo, como emprendimientos de cambio social y económico ideales.

Estos actores son dominantes en el desarrollo de los megaproyectos hídricos; sin embargo, no trabajan solos. Como mencioné anteriormente, son parte de redes sociotécnicas o comunidades y, con frecuencia, navegan entre el sector público o en la administración del Estado y el sector privado. Por tanto, en ellos se amalgama el conocimiento experto, el poder del Estado y la «mano invisible» del mercado. Tal situación permite la movilización y coincidencia de discursos, normas, dinero, personas, instituciones y tecnología (Wester, Rap, y Vargas-Velázquez 2009; Duarte-Abadía, Boelens, y Roa-Avendaño 2015).

En este libro se entiende al ámbito en donde navegan como «lo tecnocrático». Tal aclaración es necesaria ya que en este libro propongo a lo tecnocrático como una categoría de análisis que permite no solo fijarnos en las personas —tecnócratas— como los actores que planifican e impulsan megaproyectos hídricos, sino, sobre todo, como acabo de argumentar, me permite enfatizar en el conocimiento reproducido y movilizado para tales fines. Es así que lo tecnocrático es una categoría de análisis que permite visualizar y estudiar explícita y críticamente la producción, reproducción, flujo y materialización del conocimiento experto, que se autopresenta como superior en relación con otros tipos de conocimiento. De esta manera, se dejan eventualmente al descubierto las relaciones de poder que lo legitiman como «adecuado» para gobernar el agua y transformar la sociedad (Ekbladh 2002; Mitchell 2002; Kaika 2006; Baghel 2014; Dye 2016).

El nacimiento de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE): la «TVA ecuatoriana»

He aquí, la historia de una obra que cambió la vida de una extensa zona de enorme riqueza agrícola, obra que promoví tenazmente hasta verla convertida en realidad, gracias al apoyo de unos cuantos visionarios ansiosos,

como yo, de satisfacer [...] las aspiraciones de bienestar de los ecuatorianos (Orellana 2008, prólogo).

Una red compleja de discursos internacionales y nacionales, personas, conocimiento, instituciones y recursos se conjugaron para preparar el suelo en donde más tarde germinaría el homólogo ecuatoriano de la Tennessee Valley Authority (TVA) y su obra estrella. Dicha preparación incluyó la construcción de una imagen, tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre la cuenca del río Guayas y su potencial para encarrilarse en la senda del desarrollo al país. Tal proceso podría cumplirse con éxito solo si la presentación de esa imagen proviniese de actores con la suficiente credibilidad y el legítimo *expertise*.

Uno de los organismos con las credenciales adecuadas para impulsar el «desarrollo» en América Latina fue la CEPAL. Tanto los técnicos de la CEPAL como los nacionales coincidían en que la distribución «natural» del agua tanto espacial como temporal era errática, lo que derivaba en inundaciones (sobreabundancia de agua) en ciertas épocas del año y zonas, mientras en otras se sufría de escasez (CEPAL 1954). De esta manera, se fue naturalizando el problema del agua, así como se fueron justificando formas apolíticas de enfrentarlo. Es por esto que, en gran medida, las sequías e inundaciones han sido percibidas desde entonces, principalmente por planificadores públicos y gobernantes, como eventos naturales perjudiciales para el desarrollo de la sociedad y sus actividades productivas. Sumado a esto, el afán de usar «eficientemente» el agua, propuesto por la CEPAL, fortaleció el imperativo de controlar el recurso para evitar que se «desperdicie» en el océano (CEPAL 1954).

La importante presencia regional de la CEPAL coincidió con el inicio de una etapa de estabilidad democrática nacional (1948-1963) que, junto a la recuperación económica experimentada en base al auge bananero de la época, hizo del Ecuador tierra fértil para las propuestas cepalinas (capítulo 2) (Fitch 1988). Después de la crisis cacaotera del primer tercio del siglo xx (Schettini 1991; Núñez-Sánchez 2011), la denominada «fiebre del banano» fue un elemento clave que hizo que la región litoral renueve su importancia en la economía nacional (Acosta 2012). Así, la expansión del banano estimuló aun más los procesos de colonización y migración de mano de obra serrana hacia la costa (Núñez-Sánchez 2011).

En ese contexto, la CEPAL (1954) publicó una de las más influyentes investigaciones de la época: *El desarrollo económico del Ecuador*. Según Ojeda (2013), el estudio cepalino fue de tal influencia a nivel nacional que estimuló

la creación de la institucionalidad nacional de planificación y, a partir de ello, se dictaron políticas que marcaron en gran medida el futuro socioeconómico del país. El objetivo de este estudio fue presentar una caracterización de los problemas fundamentales del desarrollo económico, la estructura de la economía (agricultura, minas y petróleo, industria y energía), además, el investigador planteó recomendaciones para la capitalización de la economía nacional. Dado el *boom* bananero y la existente tradición agrícola de la costa, no es extraño que a lo largo de este trabajo se fortaleciera la imagen aún inexplotada de la región y sus «inmensas posibilidades de desarrollo» (CEPAL 1954, 147). Es interesante resaltar que dentro de este diagnóstico se distinguió «la cuenca del río Guayas por ser la más propicia para el cultivo de productos exportables, pero que requiere de un manejo apropiado para evitar *sequías o inundaciones*» (CEPAL 1954, 26).

Ligado a esta sugerencia se instituyó, además, la urgencia de resolver el problema energético futuro. «El problema de la energía en Ecuador consiste en una demanda en fuerte aumento frente a un escaso aprovechamiento de los recursos, abundantes pero inexplotados. [...] *Los recursos hidráulicos podrían resolver el problema*, [...] habría grandes posibilidades de instalar centrales hidroeléctricas» (CEPAL 1954, 75, mi énfasis). La explícita preferencia tecnicista de la CEPAL por la región litoral y el manejo adecuado de sus recursos hídricos iba a tono con la tendencia de manejo del agua, expresado en el *Reporte Social y Económico de las Naciones Unidas* de 1956: «el desarrollo de cuencas hidrográficas es ahora reconocido como un elemento fundamental de desarrollo económico» (Ludwik 1967, 155). Así, a raíz de la publicación de la CEPAL, el potencial de la cuenca del río Guayas cobraba mayor atención nacional. Tal como lo proyectó Orellana:

La Cuenca del Guayas es, sin duda, la más extensa y rica del territorio occidental de América del Sur. [...] Era imprescindible divulgar su importancia haciendo conciencia en todos los niveles sociales, políticos y administrativos sobre hacer estudios técnicos y económicos, [...] me propuse utilizar todos los medios posibles [...], contando con la colaboración de técnicos, empresas consultoras y organismos especializados en la materia (Orellana 2008, 2).

A diferencia de las otras CRD que influenciaron la gobernanza del agua en Ecuador, el origen de la CEDEGE se destacó, según sus fundadores, por su profunda ideología tecnocrática y por haber nacido tras intereses altruistas de élites económicas, políticas y tecnocráticas.

Los guayaquileños y ecuatorianos, cercanos a la élite intelectual, política y económica del país del siglo anterior, consideran al economista agrícola Felipe Orellana como el principal precursor de lo que en su momento se llamó la CEDEGE y del plan de desarrollo de la cuenca del río Guayas, donde se incluyó como elemento central el sistema Daule-Peripa. Orellana fue un convencido de su rol histórico en la búsqueda de justicia social y el desarrollo para la cuenca del río Guayas. Tal como lo expresa en su autobiografía:

[E]n un ambiente donde frecuentemente se ignoran las posibilidades del país para acelerar su desarrollo socioeconómico [...], y donde, al mismo tiempo, predominan la incomprendión, el egoísmo y la inestabilidad política, como obstáculos que dificultan el cumplimiento de *propósitos altruistas* y patrióticos, se requiere una profunda convicción y un enorme esfuerzo para vencerlos y lograr aspiraciones colectivas (Orellana 2008, prólogo).

Así, su afán altruista empezaba a articular la nueva visión cepalina sobre la cuenca del Guayas con los políticos y técnicos nacionales e internacionales, para sentar las bases de la CEDEGE y del sistema Daule-Peripa. La cuenca baja del Guayas y Guayaquil estaba dominada por grandes haciendas y sus élites tenían una gran presencia en los gobiernos de turno y sus instituciones. En vista de estos intereses, el control del río Guayas y su cuenca resultaba ventajosa para estos grupos de poder.

En el invierno de 1957, el joven economista, entonces gerente del Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Ecuador, junto al director general de ese organismo, recorría en un avión las zonas inundadas de la cuenca del río Daule (cuenca baja del río Guayas). Durante ese viaje se empezó a materializar la preocupación por manejar eficientemente el agua en toda la cuenca.

Comentábamos, entonces, sobre las enormes pérdidas que causaba el desbordamiento de los ríos de ese gran colector que es la cuenca del Guayas y el desperdicio de ese tremendo volumen de agua que desemboca en el golfo [de Guayaquil] (Orellana 2008, 1).

A pesar del impacto que tuvo el estudio de la CEPAL (1954) en las esferas gubernamentales e intelectuales nacionales, hasta esa fecha, el proyecto todavía permanecía como una aspiración personal de Orellana y otros guayaquileños. Más tarde, en 1959, Orellana fue promovido a Washington D. C.

para trabajar como economista agrícola en la OEA. Desde el ámbito internacional, el megaproyecto tomó más impulso. Una de las primeras gestiones de Orellana fue proponerle al entonces presidente de la República del Ecuador, Velasco Ibarra, la realización de «una obra de drenaje y riego y un programa de reforma agraria en la gran cuenca del río Guayas y de sus afluentes, los ríos Daule y Peripa». Después de un breve intercambio de ideas entre ambos, Orellana adelantó en una nueva comunicación que «las necesidades financieras del proyecto podrían ser cubiertas con los fondos del nuevo plan de ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, [...] citando como ejemplo el financiamiento del proyecto del valle del Cauca» en Colombia (Orellana 2008, 2).

Para mayor comprensión de la propuesta, por parte del presidente, Orellana adjuntó a la carta una copia del decreto con el que se creó la Corporación Autónoma del Valle del Cauca. Tras estas gestiones, Orellana se estableció como un articulador crucial. Así, el proyecto insertaba en el imaginario político las similitudes «naturales» entre el valle del río Guayas, del Tennessee y del río Cauca, lo cual sugería también la creación de una institución y forma de manejo homóloga. Así también lo recuerda una de las septuagenarias tecnócratas de la ex CEDEGE: «Fue una utopía, querían hacer una réplica del Tennessee. No parecía que podría ser una realidad». No era extraño que en esa época, este joven economista naturalizara tales similitudes, ya que la experiencia del Tennessee constituía un ejemplo técnico de éxito en el manejo integral de cuencas y, por lo tanto, un modelo a seguir por países «subdesarrollados» (Dourojeanni 2001, 20).

El modelo institucional de la TVA resulta inspirador para las aspiraciones de Orellana, tal como lo expresa en una carta dirigida al entonces director de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID): «[...] si los estudios determinan las factibilidad del proyecto, una autoridad organizacional tipo, como la TVA, por ejemplo, podría proponerse para administrar el proyecto [Daule-Peripa]». Otra de las instituciones con el conocimiento que influenció en el proyecto de Orellana, y con la que tuvo comunicación y asesoramiento fue el *Bureau of Reclamation* de EE. UU., tal como lo manifiesta en una carta dirigida a un político guayaquileño: «El Bureau of Reclamation, [...] ha indicado, por medio de su representante, León W. Damours, que la dependencia a su cargo, que indudablemente es la mayor experiencia en los Estados Unidos, está lista para colaborar en la realización del proyecto [en la cuenca del Guayas]». Esto deja en claro que el economista ecuatoriano tenía conocimiento del modelo de gestión que necesitaba implementarse en la cuenca del Guayas, y que estaba en contacto

cercano con sus representantes en norteamérica. A través de una emergente red sociotécnica, el conocimiento técnico y *expertise* empezaba a fluir.

En agosto de 1961, durante el Consejo Interamericano Económico y Social organizado por la OEA en Uruguay, un encuentro precursor del programa estadounidense Alianza para el Progreso, Orellana tuvo la oportunidad de presentar formalmente su «Proyecto de Estudio sobre las posibilidades de desarrollo de la cuenca del río Guayas» (Orellana 2008). Por parte del Gobierno ecuatoriano asistió a la cita el emergente político perteneciente a oligarquía guayaquileña, Jaime Nebot Velasco, quien era el flamante ministro de Fomento del Gobierno de Velasco Ibarra. El ministro Nebot mostró un interés particular por la propuesta de Orellana y decidió apadrinarla. Días más tarde presentó el proyecto al secretario general de la OEA, para solicitarle el envío de una misión técnica con el fin de realizar los estudios de factibilidad de la cuenca del Guayas (Orellana 2008). Hasta esa fecha, parte de las gestiones de Orellana ya empezaban a dar frutos. A través del Fondo para Préstamos de Desarrollo de EE. UU. se otorgó al Gobierno ecuatoriano USD 1.8 millones para el levantamiento fotogramétrico de la cuenca del Guayas (Orellana 2008).

Para entonces, la importancia de la cuenca del río Guayas, presentada por la CEPAL en 1954 y promocionada por Orellana, ya no estaba en duda y las redes financieras y políticas, tanto nacionales como internacionales, empezaban a coincidir en sus intereses. Por un lado, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA), a cargo de Clemente Yerovi, empezó a respaldar el proyecto. Por otro lado, más tarde, según recomendación personal del subsecretario interino de Asuntos Económicos y Sociales de la OEA, este organismo envió un equipo de expertos de la Unidad de Ingeniería y Recursos Naturales al Ecuador. Como resultado de esa misión, la OEA publicó el primer «Inventario de los Recursos Naturales de la Cuenca del Guayas», en donde ya se recomendaba la construcción de una obra multipropósito de gran magnitud sobre los ríos Daule y Peripa (Orellana 2008). De esta forma se dio a luz al emblemático Daule-Peripa.

En 1963, Orellana regresó al país después de finalizar sus funciones en la OEA. Para entonces sus gestiones habían insertado el proyecto en los planes de varios expertos internacionales, y en la clase política y élite porteña nacional. Es así que el entonces presidente del Consejo Provincial del Guayas, el representante del Comité de Vialidad del Guayas, la organización ciudadana Operación Daule, y las élites vinculadas al diario *El Universo* de Guayaquil apoyaban el ideal de la cuenca del Guayas. Tras la caída del Gobierno de Julio Arosemena Monroy y el ascenso al poder de la Junta Militar de

Gobierno (1963), en pleno desarrollismo, una persona cercana al visionario economista fue nombrado como ministro de Fomento (Economía): Corsino Cárdenas. Es preciso señalar que durante la estadía de Orellana en EE. UU., Cárdenas trabajó como director de Asuntos Económicos del BID, en Washington D. C. Ahí tuvieron la oportunidad de conocerse. Es por esto que su nombramiento como ministro de la cartera, que manejaba la política económica del país, fue un espaldarazo para el megaproyecto hídrico, ya que Cárdenas apoyó decididamente la creación de una comisión para el estudio y manejo de la cuenca del Guayas (Orellana 2008). Como Orellana había propuesto la creación de tal comisión, el ministro le dio a él mismo la redacción y el diseño del decreto de formación.

Dada la cercanía de Orellana con las propuestas de la OEA sobre el manejo eficiente e integral de las cuencas, la experiencia inspiradora de la TVA y la asesoría técnica del Bureau of Reclamation, la CEDEGE se conformó bajo similar visión. Surgió además como iniciativa de élites locales. Es así que a puertas del nacimiento de la CEDEGE «en mayo de 1965 [Orellana convocó] a un selecto grupo de profesionales guayaquileños a una reunión en los salones del Guayaquil Tennis Club, con el auspicio del diario *El Universo*. [...] A este grupo de apoyo se resolvío denominarlo Comité Técnico Prodesarrollo de la Cuenca del Guayas» (Orellana 2008, 12). Al cabo de pocos meses, y tras un intenso lobby político realizado por el Comité técnico, la CEDEGE tomó forma institucional formal bajo la presidencia interina del Ecuador de Clemente Yerovi, quien de manera coincidente presidió años atrás la JUNAPLA, que había respaldado el proyecto. Así, el 2 de diciembre de 1965, mediante Decreto Supremo se creó lo que hasta el año 2009 se denominaría la CEDEGE. Esta institución fue establecida como el organismo regional a cargo del estudio y desarrollo de la cuenca del río Guayas y la actual provincia de Santa Elena, con autonomía financiera y base técnica.

Durante el quinto período de Gobierno de Velasco Ibarra, marcado por sus alianzas con la oligarquía y la derecha de entonces (Núñez-Sánchez 2011), se firmó, en 1971, el Decreto 70 mediante el cual se declaró como prioridad nacional la cuenca del río Guayas. Esto fortaleció la importancia estratégica de la institucionalidad de la CEDEGE. La naciente institución se inclinaba hacia «una política planificada de desarrollo integral», en la cual «el aprovechamiento racional del recurso hídrico [exigía] la construcción de embalses de regulación para asegurar una dotación de agua controlada y eficiente a las actividades económicas de la región» (CEDEGE 1985, 13). Siguiendo la tradición de las otras instituciones de su tipo en la región (Jouravlev y Chávez 2002), la CEDEGE no solo obtuvo un gran poder económico y político, sino

que estaba señalada como el potencial *think-tank*, en el que se fundamentó el desarrollo futuro, no solo de la cuenca del Guayas, sino de todo país (CEDEGE 1974).

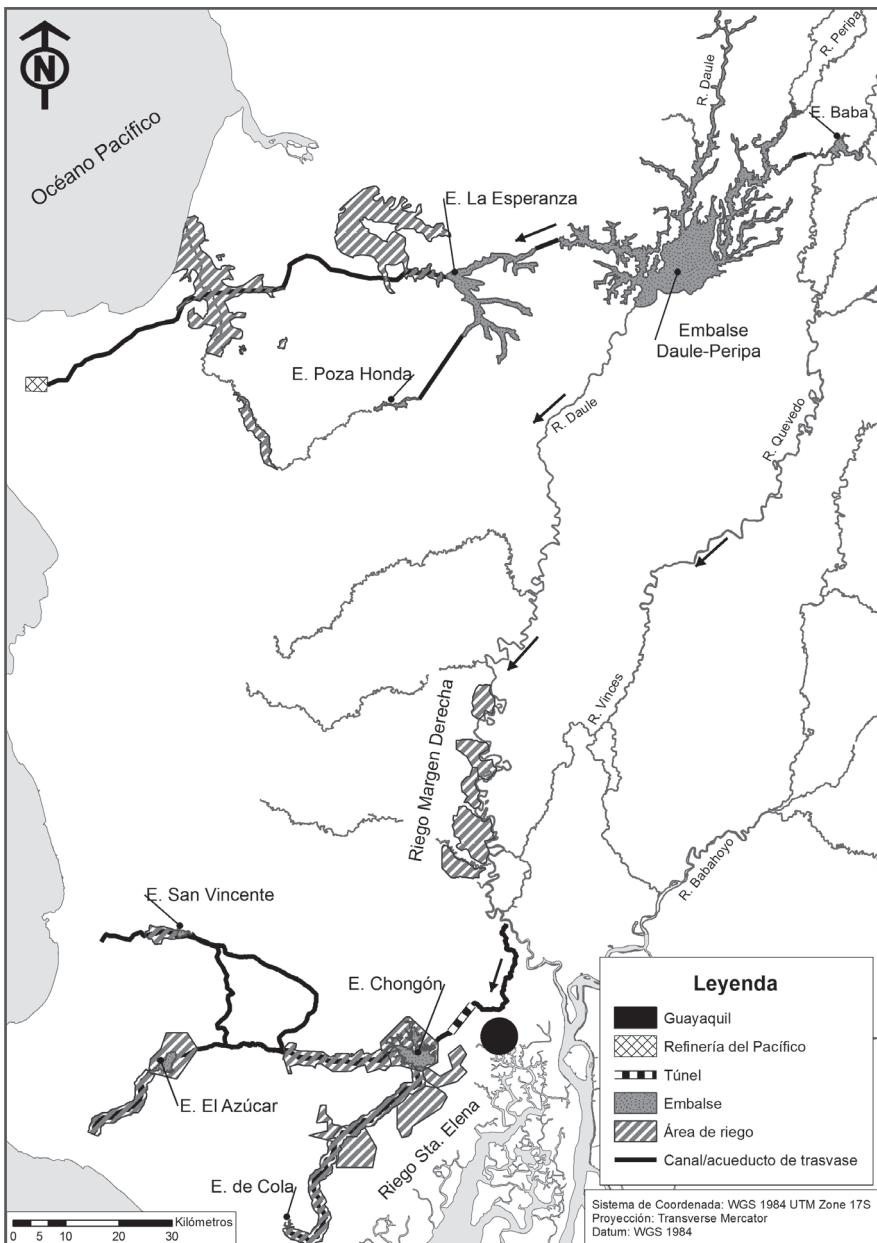
De acuerdo con el criterio de su principal impulsor, la creación de la CEDEGE fue clave no solo para construir obras de manejo y control del agua fundamentales, sino que, sobre todo, introdujo una visión institucional «técnica, eficiente y apolítica, con medios suficientes para llevar adelante un programa de desarrollo económico y social». Así lo galantea en su autobiografía el mismo Orellana:

[L]a CEDEGE pudo [acelerar] los estudios de ingeniería de la represa Daule-Peripa, que es la obra fundamental, la base para la construcción de otras obras que, en conjunto, representan el desarrollo integral de la cuenca. [...] el más grande proyecto del país en el siglo xx (Orellana 2008, 12, negrillas del texto original).

De esta forma nació en Guayaquil la CEDEGE y con ella el megaproyecto Daule-Peripa. Ambos fueron producto de la movilización de conocimiento, mediante el trabajo de una comunidad epistémica selecta. Este proceso demuestra que, tanto en la CEDEGE como en las redes sociotécnicas, lo fundamental son las personas que forman parte de ellas. En este caso son cierta élite política, económica y experta afincada en Guayaquil.

Dichas personas comúnmente generan conocimiento, pero también lo movilizan y juntan ideologías/paradigmas (desarrollismo) con modelos tecnológicos (TVA-megaproyectos hídricos): hacen coincidir necesidades socioeconómicas con ideales de progreso y viceversa.

Como arquetipo de tal coincidencia, en 1988 empezó a funcionar la megarepresa Daule-Peripa, parte del sistema multipropósito Jaime Roldós Aguilera. Sus características físicas han hecho de este un referente ecuatoriano de conocimiento experto y racional. Por la gran extensión de su área de influencia (cuatro provincias), y por ser el origen de un sinnúmero de otros «subsistemas», el Daule-Peripa se constituye en un *sistema de sistemas* (mapa 2). Su infraestructura es el corazón hidráulico de la cuenca del Guayas del pasado, presente y, seguramente, del futuro (CEDEGE 2002). Es por esto que su estudio es relevante no solo para entender sus obras y las transformaciones socioterritoriales, directamente ligadas a ellas, sino por su legado social, ecológico, institucional e ideológico que se manifiesta en las políticas hídricas, obras hidráulicas y luchas sociales contemporáneas en el Ecuador.



Mapa 2. Esquema hidráulico del sistema Daule-Peripa: sistema de sistemas.
Fuente: SENAGUA. Elaboración: propia.

Diseño, construcción e implementación del sueño tecnológico en la cuenca del río Guayas

La llave maestra que permitirá la regulación y control del comportamiento del agua, sometimiento a la voluntad del hombre gran parte que corre anualmente por los ríos de la cuenca hacia el mar, será la presa Daule-Peripa (CEDEGE 1985, 20).

En pleno período desarrollista, la CEDEGE tenía la gran responsabilidad de aprovechar «el verdadero potencial que posee la cuenca del Río Guayas, [...] que permita cristalizar el tan ansiado desarrollo» (CEDEGE 1995, s/n). La única forma de lograrlo, de acuerdo con la racionalidad experta, era «utilizando la capacidad de los técnicos ecuatorianos y de consultoras y constructoras nacionales y extranjeras [...] mediante el uso adecuado de los recursos naturales [y] el empleo de la técnica» (CEDEGE 1995, s/n). Es así que una vez sentadas las bases institucionales e ideológicas del manejo integral de la cuenca, la materialización, desde donde se impartiría el dogma megahidráulico, se volvió realizable. El sistema Daule-Peripa fue pensado desde los años cincuenta, y empezó a diseñarse a mediados de la década de los setenta. En 1991, el reservorio, tras el muro de la represa, se llenó completamente. La relativa lentitud en la ejecución de estudios (prefactibilidad y factibilidad), la inestabilidad política nacional y la insegura disponibilidad de recursos económicos hicieron que el espacio de tiempo entre sus bosquejos iniciales y su construcción se dilate un poco más de 25 años.

El diseño

El proyecto Daule-Peripa es el primer paso a un enfoque global para controlar los recursos hidráulicos de toda la cuenca del Guayas (CEDEGE 1974, 13).

La decisión de avanzar con los estudios y diseños del megaproyecto Daule-Peripa estuvo informada, exclusivamente, por las visiones de los técnicos y políticos nacionales e internacionales. En 1967, con financiamiento del BID y de la Agencia Canadiense de Cooperación para el Desarrollo (CIDA), la CEDEGE contrató al consorcio ecuatoriano-canadiense GuayasConsult para elaborar un estudio integral de la cuenca y de los potenciales sitios de aprovechamiento hídrico. Esta firma propuso un esquema de control de inundaciones que, a la larga, no fue adoptado por la CEDEGE. No obstante, de acuerdo

con la misma CEDEGE, el «Departamento Técnico [priorizó y] concluyó que era conveniente continuar las investigaciones sobre la represa Daule-Peripa por su carácter de *obra universal*, idónea para cualquier esquema de regulación» (CEPAL/CEDEGE 1983, 3). Esta decisión no obedecía simplemente a una coincidencia. La importancia de la represa como pieza clave en el modelo TVA logró materializarse en la CEDEGE, a partir de la gran influencia que Orellana, como vector de dicho modelo y conocimiento, tuvo sobre los fundamentos del credo institucional. Este credo se basó, según Orellana, en que «el desarrollo integral de una cuenca implica el *total* aprovechamiento de sus recursos naturales, mediante la ejecución [...] racional de una serie de obras que, partiendo de la captación, control y distribución de sus aguas, permiten el aumento y la diversificación de la producción y el mejoramiento del nivel de vida de la población de la cuenca beneficiada y de sus regiones adyacentes. En realidad, el núcleo alrededor del cual giran las obras de desarrollo es la represa, pero no como única obra, sino como unidad generadora de una cadena de obras» (Orellana 2008, 102).

A finales de los años sesenta e inicios de los setenta, el poder administrativo, técnico y político se había concentrado en la TVA ecuatoriana. Entrada la década de los setenta, tras la euforia del primer *boom* petrolero y la interpelación de las dictaduras militares, el despegue de grandes proyectos de infraestructura (carreteras, embalses, hidroeléctricas) auguraba «una siembra eficiente e inteligente del petróleo» (Galarza 1972). El Gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) creó el escenario económico que le daría un empuje fundamental a la principal obra de la CEDEGE. Esa administración tuvo un fuerte discurso desarrollista, nacionalista y modernizador que, aprovechando el primer *boom* petrolero, consolidó un vigoroso sector estatal y sus capacidades de inversión en construcción, industria y servicios (Núñez-Sánchez 2011).

Los estudios de la represa continuaron por parte de la CEDEGE. Más tarde, entre 1976 y 1980, se contrató un consorcio consultor liderado por dos firmas extranjeras TAMS (EE. UU.) y AHT (Alemania), y una nacional (INTEGRAL) que realizaron los estudios de factibilidad y los diseños de licitación de la megarepresa. En ese tiempo, la institucionalidad ambiental y organización no gubernamental ambientalista en Ecuador estaba en cierres (Lewis 2016) (capítulo 2), por lo cual el debate acerca de los posibles impactos socioambientales no tenía mayor atención desde el Estado. Una muestra de ello son los procesos de construcción y uso de los estudios de impacto y planes de manejo ambiental. Es por esto que el mismo grupo consultor que diseñó la obra elaboró su propio Estudio de Impacto Ambiental

(TAMS-AHT-INTEGRAL 1980), dejando en evidencia un claro conflicto de intereses.

Después de casi una década de Gobiernos militares y dictaduras vinculadas a la oligarquía agroexportadora y élites nacionales (Núñez-Sánchez 2011; Acosta 2012), a finales de los setenta, un Gobierno de corte progresista y democrático asumió el poder. Jaime Roldós Aguilera, el flamante presidente, inició las gestiones para obtener un nuevo crédito del BID con el que más tarde se iniciaría la construcción del sistema multipropósito. Así, en 1982, después del asesinato de Roldós (Perkins 2005), el crédito fue aprobado durante el Gobierno de Osvaldo Hurtado, su entonces vicepresidente y sucesor. Un requerimiento del banco para aprobar el crédito era que el proyecto cuente con un EIA. Para cumplir con tal requisito, el mismo banco recomendó y contrató a un consultor cercano al banco para la elaboración de un segundo estudio de impacto ambiental. La información utilizada para elaborar este nuevo estudio fue recolectada tras únicamente ocho días de trabajo de campo (Jenkins 1979). Tal como la práctica evidenciada con el grupo consultor que diseñó la obra, el procedimiento seguido por el banco se construyó de manera funcionalista a sus propios intereses y de los otros actores de este «grupo social relevante». En ese contexto se inició la construcción del principal componente del sistema multipropósito.

La influencia de modelos expertos como la TVA y el Bureau of Reclamation no solo fueron inspiración para la creación de la institucionalidad de la cuenca, sino que tuvieron gran protagonismo durante el proceso de diseño del sistema multipropósito. Durante las etapas de diseño, construcción e implementación se experimentó un poderoso flujo de conocimientos, desde los modelos norteamericanos de manejo de cuencas hacia los ingenieros nacionales a cargo del proyecto Daule-Peripa. Si bien esta relación ya se había iniciado durante las gestiones que llevó a cabo Orellana, una vez que el BID aprobó créditos, para finalizar los estudios e iniciar la construcción, se consolidó. Tal como lo expresa Arthur Harold, consultor hidráulico y exfuncionario del Bureau of Reclamation en sus entrevistas con Brit:

Comencé mi trabajo ahí [en el Daule-Peripa] en [19]78, y el trabajo fue completado en [19]91. Cuando llegué, ellos [CEDEGE] habían recientemente completado los estudios de factibilidad para este gran proyecto. Y Ecuador había asegurado financiamiento del BID. El banco quería un equipo consultor que aconsejara al Gobierno ecuatoriano, porque ellos [el BID] temían que el Gobierno no tuviera el *expertise* nacional para evaluar el trabajo realizado por sus consultores. Así, la tarea incluyó investigación

adicional, la preparación de los diseños finales, [...] nosotros monitoreamos la construcción, control de calidad y todo lo demás hasta el final (Brit 2000, 266).

La relación entre la principal entidad financiera del proyecto (BID) y los «poseedores» del conocimiento experto permitió, en gran medida, el involucramiento de entidades como el Bureau de Reclamación en el diseño de la obra. Esto queda en evidencia, por ejemplo, en la sección introductoria del estudio del vertedero de la represa que realizó el Bureau para CEDEGE: «Quiero expresar mi aprecio a [...] Harold Arthur, consultor en ingeniería. Su rol como coordinador entre los diseñadores de TAMS, los directores del proyecto en Ecuador y el Bureau de Reclamación fueron invaluables» (Houston 1981, ii). Si bien la obra estaba a cargo de actores nacionales, el flujo de conocimiento desde «afuera» informó, de primera mano, el proceso de materialización de este megaproyecto.

Con la inyección de capital desde el BID, después de un proceso de licitación internacional, la CEDEGE contrató a la empresa española AGROMAN para que convierta en concreto y hierro los estudios definitivos de la represa. Al igual que con el proceso de creación de la CEDEGE y de diseño de la obra, la construcción incluyó a un actor con una trayectoria consistente a las visiones utópicas tecnicistas nacionales: AGROMAN, que fue una de las empresas mimadas del franquismo español y que tuvo un crecimiento significativo durante «el período internacional» del fascismo español (Sánchez 2007; Swyngedouw 2015). Fue una constructora de represas y grandes obras públicas que creció y se aprovechó del «hidropopulismo» (Agudo y Naredo 1997, 37) del franquismo. Ganó su nombre a partir de su conocimiento hidráulico. Contribuyó, en gran medida, al posicionamiento de España como uno de los países con mayor número de megarepresas en el mundo (Swyngedouw 2015). Dada la relación de la España franquista con Estados Unidos, en lo concerniente al conocimiento y el modelo de construcción de represas (Agudo y Naredo 1997), la contratación de AGROMAN para la edificación del proyecto Daule-Peripa muestra cómo las redes sociotécnicas son espacios estrechamente conectados.

La construcción e implementación

La represa y su reservorio fueron los primeros en construirse (1982-1988). Con el impulso de los mismos ideales, años más tarde se ejecutaron los canales, trasvases, sistemas de riego, planta hidroeléctrica y redes de agua

potable (mapa 2). El sitio de construcción de la represa, el corazón del sistema multipropósito, fue seleccionado entre cerca de 150 lugares promisorios. La CEDEGE escogió el sitio de presa por tratarse del sitio más económico y que permitía el mayor volumen de almacenamiento de agua. Este criterio se refleja en la escasa longitud de la presa: 250 metros.

Desde la visión de los promotores, las etapas de construcción e implementación de la represa consistieron, de manera general, en cuatro fases. La primera involucró la recolección o levantamiento de la información social, económica y productiva acerca de la zona afectada y sus pobladores; la segunda fue la presentación del proyecto y de los beneficios a las comunidades que serían afectadas; la tercera fue el proceso de indemnizaciones por la tierra y bienes inundados; y la cuarta, el proceso de construcción misma que involucró, además, la implementación de beneficios compensatorios (vías, agua potable, electricidad, transporte, turismo).

La primera etapa del proyecto se inició con varios recorridos de los técnicos levantando información para elaborar los EIA (BID y TAMS) y las líneas base. Este proceso consistió en la recopilación de información a través de los pobladores locales, sin mayor interés en recibir una retroalimentación proveniente de los pobladores. Así lo recuerda un campesino que vive a dos kilómetros del sitio de la presa:

Cuando vino un ingeniero, vino a preguntar que cuántos habitábamos, que qué queríamos aquí, qué beneficios. Si necesitábamos escuela, carretera [...]. Recuerdo que hasta preguntó que cuántos huevos pone una gallina [risas]. Una sola vez vino para hacer una encuesta. Nos dijo que la encuesta es para un proyecto, pero nada más.

De igual manera, este accionar se refleja en la metodología con la que se realizó el EIA, elaborado para cumplir con los requerimientos del crédito del BID. La mayor parte de las observaciones y recolección de información se realizó desde una canoa, navegando por los principales ríos y mediante la revisión de información secundaria, casi sin interacción con los campesinos. Según los técnicos de la CEDEGE, este proceso se dio de esta manera por lo complicado que resultaba el acceso a la zona de influencia del futuro proyecto, y por la dispersión de las viviendas y fincas que iban a ser afectadas (Jenkins 1979).

En la segunda etapa, los técnicos de la CEDEGE y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) organizaron varias charlas en los sitios que serían afectados. Sin embargo, su implementación fue subestimada

por las autoridades a cargo del proyecto. Tal como lo comenta el ingeniero de la CEDEGE a cargo del proceso de socialización: «No estuvo bien dirigido porque para ese componente [socialización] no había mucho recurso económico». El principal objetivo de las charlas era «dar a conocer las obras del proyecto. Llevábamos maquetas, planos, listados de agricultores afectados y predios afectados. Nada más». Las charlas las hacían en los centros poblados que eran pocos y pequeños. La mayor parte de gente vivía alejada y dispersa en el área de afectación. Además, el proceso en sí mismo evidenciaba un desbalance en las relaciones de poder en torno a quién tiene el conocimiento «adecuado» para gestionar el agua. Así lo recuerda una de las técnicas que acompañaban la socialización: «las socializaciones eran casi inútiles porque los pobres campesinos entendían poco lo que se venía, ellos sabían que habría un proyecto, pero exactamente no sabían qué. Entre los técnicos y campesinos eran mundos diferentes, lenguajes diferentes hasta mentalidades diferentes. Imposible que los campesinos entiendan a los técnicos». Como las especificidades «técnicas» no eran, según los técnicos, entendidas por los receptores, las charlas estaban dedicadas, en gran medida, a transferir el ideal tecnocrático a los campesinos, tal como los técnicos lo imaginaban. Así lo recuerda amargamente un líder campesino participante de las charlas: «nos trajeron una maqueta en donde se veía esto como un paraíso. Nos decían que vendrían turistas y que viajaríamos en yates [...] ¡decían que seríamos el mejor pueblo!». O como lo recuerda una de las profesoras de la escuela de El Mate: «Todos estaban entusiasmados por la represa. La gente estaba contenta, porque antes era difícil navegar por el río cuando estaba seco. Con la represa eso mejoraría dijeron los ingenieros». Tal como se evidencia en estos testimonios, el proyecto y sus pretensiones de perfección ya no eran solo un proyecto de los expertos, los pobladores también eran parte de él, pero de forma bastante utilitaria a los intereses de los proponentes.

En la tercera etapa, se empezaron a realizar mediciones de cota para identificar hasta dónde llegaría el nivel del agua del embalse. Se inició el avalúo y catastro de fincas, y se comenzó la indemnización de los afectados. En tanto, los trabajos de construcción de la infraestructura ya habían arrancado en algunos sitios (campamento, vías de acceso). Estos pasos eran importantes para «limpiar» el vaso de la presa y cubrir, en parte, las consideraciones socioambientales que, aunque de manera escueta, estaban contempladas en el Plan Regional de Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas y de la Península de Santa Elena (CEPAL/CEDEGE 1982, 331) y en el EIA (Jenkins 1979). La CEDEGE y el IERAC desplegaron técnicos que empezaron a hacer mediciones y colocar hitos que señalaban la cota hasta la cual subiría el espejo de agua.

Además, instalaron en el campamento de AGROMAN una oficina hacia donde los campesinos debían acercarse para presentar sus documentos y cobrar las indemnizaciones económicas.

El subestimado proceso de comunicación y participación social, con todas las personas ubicadas en el área de influencia del embalse, hizo que muchas sean identificadas mediante información subjetiva. La definición de muchos de los afectados y del área se basó en cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM). Esta información debía ser validada en campo, pero el área a ser cubierta con las mediciones topográficas era muy grande (cerca de 40.000 hectáreas), y el personal técnico escaso (dos equipos de no más de cinco personas). Un equipo realizaba la medición de la cota, mientras el otro realizaba el levantamiento planímetro de cada predio. Según el técnico a cargo de la socialización: «el trabajo era complicado por lo vasto del área. Las mediciones a veces sufrían desfases. A veces no se colocaba la cota donde era, posiblemente se ponía la estaca en una cota menor o mayor». Esto demuestra que a pesar de la legitimidad «técnica» con la que se presentó el proyecto, varios aspectos de este han obedecido, en la práctica, a contingencias políticas. Además, el mismo técnico ha reconocido la incapacidad de realizar «la medición» de manera completa: «el agua nos ganó. Cuando subió el agua [del reservorio] quedaron todavía un 20 por ciento más o menos de los predios sin medir».

Estas «imprecisiones técnicas» afectarían aun más a los campesinos. Los estudios finales con los que se construyó la represa establecieron una altura a la corona de la presa de 90 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con las normas técnicas, el nivel máximo *normal* de operación de la presa a la cota es de 85 msnm, en donde se inundan alrededor de 27.000 hectáreas, y el nivel máximo *extraordinario* es a la cota 88 msnm, inundando cerca de 30.000 hectáreas (CELEP-EP 2013).

Estos detalles de operación de la presa no fueron comunicados a los campesinos. De acuerdo con uno de los técnicos: «todas las áreas de afectación se hicieron hasta la cota 85, no más arriba». Considerando que la cota máxima de operación de la presa es la cota 88, en inviernos extraordinarios el espejo de agua subiría tres metros más de lo señalado por la CEDEGE, afectando, sin advertencia, a tierras campesinas. En 1991, por ejemplo, cuando el nivel del espejo del agua alcanzó su máximo extraordinario, muchos campesinos fueron sorprendidos por la crecida de los ríos más allá de lo «pronosticado» por los técnicos. La crecida ocasionó que más tierras y cultivos quedaran bajo el agua. Las familias campesinas afectadas reclamaron a la CEDEGE un pago extra por la afectación de esos tres metros extra, pero a ninguno se le resarcío.

A inicios de los años noventa, el Daule-Peripa inició su operación y se consolidó como un símbolo de modernidad y conocimiento experto, que transformaría la sociedad a través de «corregir los desbalances de la naturaleza».⁷⁰ A partir de esta visión se diseñaron y construyeron los diferentes componentes del sistema. Con el pasar de los años, los efectos negativos causados por el proyecto se materializaron en promesas incumplidas y resultados cuestionados.

Paradojas del megahidraulismo: beneficios optimistas *versus* resultados problemáticos

Tan pronto terminó la implementación de la represa, empezaron a surgir los primeros impactos negativos, principalmente, en torno al pago por las tierras y, ligado a este, al cálculo de las áreas susceptibles a inundación. La ambigüedad con la que los técnicos aplicaron las leyes de reforma agraria y colonización (1964 y 1973), Ley de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura (1970) y Ley de Reforma Agraria Codificada (1979), marcó el proceso de implementación de expropiaciones. Todas las leyes reconocían que el campesino poseedor de la tierra por más de tres o cinco años podía pasar a ser titular de su predio (Barsky, Furche y Mizrahi 1982). Sin embargo, para los técnicos del Gobierno, aquellos campesinos que no habían realizado el trámite de titulación hasta antes de iniciado el proceso de expropiación para la ejecución de la obra no se les reconocería el pago de la tierra. Así lo recuerda amargamente uno de los afectados: «perdí 19 hectáreas, ellos no me pagaron por la tierra. Pagaron únicamente por los cultivos. Yo me quejé, [...] aquellos que solo tenían su tierra [sin título] no les pagan un sucre».⁷¹ Esto es corroborado por uno de los técnicos a cargo de la obra: «¡era drástico! Se iba, se expropiaba y se acabó. El que no tenía títulos no podía cobrar nada».⁷² Este proceder afectaba más a los pequeños y medianos campesinos que habían accedido a la tierra tras procesos de cooperativismo agrícola, de manera individual o por herencia, ya que no tenían título de tierra.

70. Ingeniero hidráulico, extécnico de la CEDEGE, involucrado en el diseño, construcción e implementación del sistema Daule-Peripa. Actualmente es consultor técnico de la SENAGUA, en el área de megaproyectos hidráulicos. 27 de junio del 2014.

71. Entrevista, 9 de julio del 2014.

72. Entrevista, 27 de junio del 2014.

A partir de estas normas oficiales y de la interpretación subjetiva de los promotores del proyecto, los afectados sin título de propiedad quedaron a expensas de escuetas indemnizaciones económicas, solo por cultivos o inversiones realizadas, más no por la tierra inundada. Esto se sumaba a los cotidianos inconvenientes que se experimentaban en la zona directa de inundación.

«¡Compadre, estamos rodeados de agua, ahogándonos de agua y no tenemos agua, solo tenemos mosquitos! [risas]».⁷³ Con esta frase, uno de los campesinos octogenarios, afectado por la represa, recuerda las paradojas del megaproyecto. Si bien esto es una muestra de cómo los afectados directos experimentaron el efecto negativo, los impactos se reflejan en cuestionados «beneficios», muchos de ellos experimentados. Tal como lo muestra el cuadro 2, entre los beneficios más controversiales están: el cuestionado incremento de las áreas de riego, el inequitativo acceso al agua potable, el deficiente o inexistente servicio eléctrico, y el perjuicio en las posibilidades de movilización al interior del embalse.

El incremento de hectáreas bajo riego tanto en el valle del río Daule como en la península de Santa Elena fue significativamente menor al prometido, y los costos económicos y sociales fueron más altos de lo previsto. Con respecto al valle del Daule, se construyeron únicamente sistemas de riego en la margen derecha del río (San Jacinto, Higuerón, El Mate y América-Lomas) (mapa 2). Estos funcionan con bombeo y menos de la mitad del área planificada es efectivamente regada.⁷⁴ Idealmente deberían servir con riego a cerca de 2700 usuarios.

Las otras 33.000 hectáreas ofrecidas (margen izquierda) estaban planificadas, pero no se implementaron. Según un técnico de la ex CEDEGE, estas últimas no se implementaron por culpa de los mismos agricultores:

Para las 33.000 hectáreas, CEDEGE ya había iniciado el estudio de factibilidad, pero solo llegó hasta ahí porque hubo una mala experiencia con los agricultores [de la margen derecha]. Cuando les dijimos: «miren ya están listas las obras para que utilicen y ahora tienen que pagar», entonces ellos manifestaron que no iban a pagar nada porque los agricultores no habían llamado a CEDEGE para hacer esas obras. Por eso se tomó la decisión de no hacer nada en el otro lado del río.⁷⁵

73. Entrevista, 5 de julio del 2014.

74. Entrevistas con funcionarios del Ministerio de Agricultura, 2014.

75. Entrevista, 27 de junio del 2014.

CUADRO 2**PROMESAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA MULTIPROPÓSITO DAULE-PERIPA**

| PROMESAS | RESULTADOS |
|--|--|
| 50.000 ha con riego ambas márgenes de río Daule (17.000 ha margen derecha y 30.000, margen izquierda). | Distritos de riego construidos en 13.269 ha en la margen derecha (CEDEGE 2002). Sin embargo, no más de 8000 ha están bajo riego. No se construyó sistema de riego en la margen izquierda. |
| 42.000 ha con riego y acceso al agua potable en península Santa Elena. | No más de 9000 ha son regadas (MAGAP 2011). Despojo de tierra a comuneros y concentración en pocas manos. Acceso inseguro (calidad y cantidad) al agua potable. |
| Acceso al agua potable en Guayaquil y poblaciones cercanas a la represa. | Acceso inseguro (calidad y cantidad) y costoso al agua potable en Guayaquil. Ninguna población del interior del embalse tiene acceso al agua potable segura. |
| Control de inundaciones en cuenca baja río Daule. | Mitigación de inundaciones limitada debido a la ocurrencia simultánea de crecientes en los afluentes occidentales del Daule y las descargas máximas del vertedero de la presa (CEDEGE 2002, 64). |
| Mejora en navegabilidad de ríos y esteros. | Poblaciones ubicadas al interior del embalse aisladas o parcialmente aisladas por presencia de lechuguín. |
| Transferencia de agua para Manabí. | Transferencia efectiva. |
| Producción de energía eléctrica para el SNI. | Planta hidroeléctrica subutilizada hasta el año 2015. Poblaciones ubicadas al interior del embalse sin servicio adecuado y algunos sectores sin acceso. |

Fuente: CEDEGE 1995, 1985; CAIC 2008a; Corral 2006.

Este testimonio sugiere que la «perfección» planificada por la CEDEGE y su cuerpo de ingenieros no se realizó por falta de entendimiento o rechazo por parte de los agricultores, y no por fallas en las propuestas técnicas desde la CEDEGE. De acuerdo con la experiencia lógica, los agricultores debían haber agradecido por la obra y aceptado tal como fue diseñada.

La siguiente ilustración (figura 1) presenta el modo en que las decisiones que se consideraron para el diseño y la ejecución de la tecnología de riego fueron producto de decisiones informadas por visiones políticas de sus diseñadores. Al revisar la trayectoria histórica del cambio de diseños en los

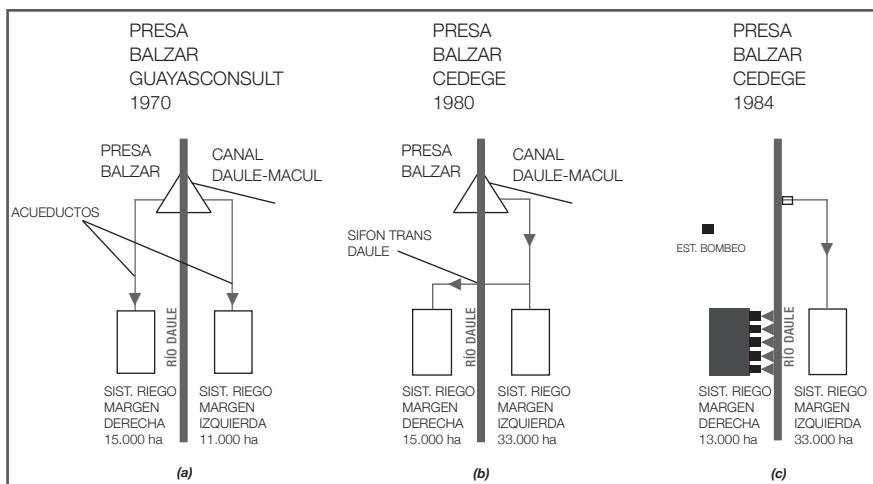


Figura 1. Evolución del diseño de los sistemas de riego en las márgenes del río Daule.
Fuente: CEDEGE (2002).

sistemas de riego del valle del Daule, se evidencian motivaciones que obedecen a un razonamiento utilitarista que al final se expresa en la tecnología. GuayasConsult propuso que los sistemas de riego a ambas márgenes sean servidos desde una presa de derivación (Balzar), ubicada aguas debajo de la represa Daule-Peripa, y por dos canales de aducción mediante gravedad (véase figura 1, [a]). En una segunda versión del diseño, aduciendo problemas técnicos relacionados con la complicada topografía de la margen derecha del río, la CEDEGE mantuvo la conducción por gravedad, pero modificó el diseño, quitando un canal de aducción y proponiendo en su lugar un sifón (b). En la versión definitiva y construida (c) la CEDEGE suprimió la presa Balzar, el canal de aducción y el sifón. Estos fueron reemplazados por un sistema de bombeo eléctrico que serviría individualmente a cada sistema de riego. La principal razón para haber adoptado el diseño (c) fue que la energía eléctrica podría ser suministrada por la hidroeléctrica del Daule-Peripa a un «valor cero» y, además, se ahorrarían costos en la construcción de otras obras presentes en los diseños (a) y (b). Es decir, los costos por energía eléctrica para el bombeo serían nulos en épocas de baja demanda (CEDEGE 2002). Considerando que este sistema de riego se construyó en la época de consolidación del neoliberalismo en el país, la medida de ahorro de recursos al Estado iba acorde con las medidas de ajuste estructural (y, en la práctica, con la transferencia de los costos a los usuarios).

Esta ilustración permite analizar cómo fue el proceso de la construcción tecnológica, en el caso del megaproyecto Daule-Peripa, y en varios de

sus componentes. Demuestra que las decisiones «técnicas» fueron informadas, en gran medida, por el contexto sociopolítico y económico.

Además, presenta el modo en que las etapas o conceptos de desarrollo tecnológico, tal como han sido propuestas por SCOT, están transversalizadas por relaciones de poder. El ejemplo de sistema de riego muestra que la flexibilidad interpretativa estuvo dominada por un solo grupo social relevante: los técnicos y políticos de la CEDEGE. El proceso de negociación entre los distintos grupos sociales fue casi inexistente. De esta forma, la etapa de consenso (cierre y estabilización) estuvo influenciada mayormente por las normas y valores que los proponentes tenían acerca de la tecnología y cómo esta debía ser diseñada y utilizada. Inclusive, el desarrollo tecnológico fue un instrumento para «castigar» a agricultores que presentaron reclamos a las decisiones de los técnicos.

Bajo esta lógica, no solo los costos de operación y mantenimiento fueron transferidos, los costos de energía eléctrica también se los cargó a los regantes. Hasta el final del trabajo de campo realizado para la elaboración de este libro, las juntas de regantes de la margen derecha enfrentaban grandes dificultades para pagar las tarifas de energía eléctrica que son demasiado altas.⁷⁶ La propuesta de tarifa cero nunca funcionó y el servicio de riego es deficiente. En la actualidad, los regantes afirman que los canales por gravedad serían mucho más económicos en el largo plazo y que les ayudaría a mejorar la rentabilidad de sus cultivos.

Aunque los técnicos de CEDEGE consideran que construyeron la opción «más económica», la infraestructura implementada para cerca de 2500 usuarios, en la margen derecha, resultó ser un componente sumamente costoso. De acuerdo con la CAIC (2008), su costo final ascendió a USD 118 millones; es decir, correspondió a una inversión no menor a USD 42.000 por usuario. Según una estimación realizada por la SENAGUA y el MAGAP, en el año 2013, una inversión de este tipo en la región litoral superior a USD 8000 por usuario ya es excesiva (SENAGUA/MAGAP 2013). A pesar de ello, bajo la idealización de la tecnología, los tecnócratas de la CEDEGE siguen defendiendo sus decisiones con el argumento de que fue un proyecto muy barato y que además

76. Más del 60% de la recaudación anual del sistema de riego América-Lomas, por concepto de tarifa de riego, debe ser destinado para el pago de la energía eléctrica utilizada para el bombeo del río Daule al canal principal. La situación es aun más compleja si consideramos el pago que cada regante incurre en un segundo bombeo para llevar el agua desde el canal primario o secundario a su propia parcela. Entrevista a Geovanna Pila, consultora AVSF - Proyecto InunDaule y junta de regantes del sistema América-Lomas. 24 de mayo del 2017. Esta situación también es reconocida por la misma CEDEGE (2002).

ha sido «la mejor forma de promover el desarrollo integral del hombre, especialmente del pequeño agricultor, mediante el uso adecuado de los recursos naturales, el empleo de la técnica y las obras de infraestructura» (CEDEGE 1995, 5).

Una situación similar se experimenta en la península de Santa Elena. A pesar de ser una región ubicada a cientos de kilómetros aguas abajo de la megarepresa, está conectada hidráulicamente con ella (mapa 2). Esta es una de las zonas más secas del país. Gracias al trasvase realizado desde el río Daule, esta región, según el discurso de la CEDEGE, sería futuro polo agroindustrial y productivo del país. Tal como lo anunciaba el diario *Hoy* en su emisión de agosto de 1994:

El Granero de América. El trasvase del río Daule a la península de Santa Elena permitirá la irrigación de terrenos secos e incorporará a la producción agrícola alrededor de 42.000 hectáreas, lo que impulsará el desarrollo de la zona, a más de convertir a ese sector en el primer granero de América del Sur.⁷⁷

En la actualidad, no más de 9000 hectáreas están siendo efectivamente regadas (MAGAP 2011). Irónicamente, la mayor parte de las tierras con acceso al agua para riego, tanto las ubicadas dentro de las áreas de los sistemas de riego como las que están junto a los canales abiertos de trasvase, están concentradas y acaparadas por grandes terratenientes quienes despojaron a las comunidades de sus tierras, haciendo uso de acceso privilegiado a la información (Scazza 2015; Espinel y Herrera 2008). La afectación a los derechos colectivos locales ha sido grave. De acuerdo con el censo de riego del MAGAP, actualmente, la comunidad posee oficialmente *una hectárea* bajo riego en todo el sistema de riego Daular, mientras el resto está en manos de actores privados individuales o compañías agroexportadoras (MAGAP 2011).

El discurso del «granero de América» contribuyó al fortalecimiento del sector agroexportador en la península y fue en desmedro de los habitantes locales, que fueron engañados por élites capitalistas sobre la base de la especulación de tierras y el pago del nuevo servicio de riego. Mientras los actores con más poder tenían acceso a la información sobre el trazado de la nueva infraestructura de riego, los campesinos —que nunca habían pagado por el uso de agua para riego— estaban asustados, ya que con la llegada de los

77. Diario *Hoy*. Fuente: <http://hoy.tawsa.com/noticias-ecuador/el-granero-de-america-29847.html>. Consultado: 12 mayo del 2017.

sistemas de riego deberían pagar una tarifa todavía desconocida por ellos. Esta coyuntura facilitó la transferencia de tierra desde las comunas a los inversionistas (Espinel y Herrera 2008). En resumen, los beneficios en riego ofrecidos inicialmente por los proponentes del proyecto multipropósito se han cumplido parcialmente. Se incrementaron hectáreas bajo riego, pero esta intervención estuvo directamente conectada con formas de despojo de la tierra y altos costos de construcción y operación, cargados comúnmente a campesinos y comuneros.

Otro componente del sistema multipropósito que ha tenido un desarrollo controversial es la provisión de agua potable. Esta ha sido privatizada, provocando un acceso inequitativo y, en muchos casos, con un servicio deficiente. Esto se evidencia en la ciudad de Guayaquil y en las comunidades al interior del embalse. En el caso de Guayaquil, la empresa municipal de agua potable concesionó este servicio a la compañía International Water Services (Bechtel) por cincuenta años, a través de la subsidiaria local Interagua (Swyngedouw 1997; CEDEGE 2002; Swyngedouw 2004; Carrillo, Bellettini y Coombs 2007). A consecuencia de la privatización, las tarifas se elevaron en un 188% (CAIC 2008a). Con esto se restringió y suspendió el servicio de agua a los usuarios de escasos ingresos económicos, ya que no podían costear los costos extremadamente altos (Carrillo, Bellettini, y Coombs 2007). Como resultado de estas políticas orientadas desde el mercado, barrios de clase media y media-alta tenían casi exclusivamente acceso al servicio. En el caso de las comunidades afectadas por el embalse, el problema es aun peor. Paradójicamente, el agua embalsada es utilizada para «supuestamente» abastecer a poblaciones lejanas como Guayaquil; sin embargo, ninguna comunidad en el área del embalse cuenta con un servicio adecuado ni seguro de agua potable. La inequidad se evidencia, además, mediante el costo que representa para los afectados por el embalse, en relación con el correspondiente a un habitante de la ciudad en Guayaquil. Mientras que en Barraganete (población ubicada en el centro del embalse, véase mapa 1) una familia paga USD 0,05/litro de agua potable (que solo se encuentra disponible embotellada), en Guayaquil la tarifa es de USD 0,00061/litro.⁷⁸ La inequidad en el acceso y la mala calidad del agua que consumen en la zona del embalse afecta la salud de los habitantes, como lo advierte el médico del centro de salud de Barraganete: «la mayor parte de enfermedades con la que llegan los pacientes son de origen hídrico, el agua que consumen y con la que se bañan es de pésima

78. Diario *El Universo*. 11 de noviembre del 2015. <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/11/nota/5235029/guayaquil-no-hay-desperdicio-agua-no-subiran-tarifas-dice-jaim>

calidad».⁷⁹ Tal como sucede en riego, los beneficios ofrecidos en torno al acceso de agua potable son altamente cuestionables.

El proceso de rediseño, financiamiento, licitación y operación de la central hidroeléctrica, y el acceso real al servicio eléctrico de las comunidades afectadas por el embalse hacen que la promesa de energía eléctrica sea también controversial y paradójica. Sumada al riesgo de déficit energético, pronosticado en el informe de la CEPAL de 1954, en el año 1993, en medio de grandes racionalizaciones de energía, se incrementó la preocupación de que la central hidroeléctrica Paute (capítulo 2) no llegara a cubrir la demanda nacional durante todo el año (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale 2008). Con esto en mente, la construcción de la central Marcel Laniado, al pie de la represa Daule-Peripa, fue plenamente justificada por los expertos. La ubicación geográfica de esta última —localizada en un régimen de precipitaciones antagónico al de la sierra central, en donde se ubica la central Paute— cubriría el desbalance temporal en precipitaciones; y, en consecuencia, el déficit de producción energética.

No obstante, un análisis del proceso de ejecución muestra que la materialización de este componente fue profundamente mediado por intereses empresariales y políticos. La instalación de una central hidroeléctrica, al pie de la represa, se inició cuando el presidente Rodrigo Borja (período neoliberal) incluyó al proyecto en la cooperación italoecuatoriana. Esto condicionó a que el proceso de financiamiento, licitación y construcción se abriera exclusivamente hacia empresas italianas (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale 2008). Tal como se aprecia en la periodización histórica (figura 2), la capacidad instalada de la central cambió a lo largo del tiempo, a pesar de no disponer del volumen de agua embalsada suficiente para su uso. Esto provocó, en parte, que con el transcurrir de los años se registrara una generación mucho menor a la posible, con la capacidad instalada (CAIC 2008a). Inclusive, en el año 2013, el expresidente Correa seguía criticando la capacidad de esta central: «las tres turbinas [del Daule-Peripa] nunca se utilizaron por falta de agua.... ¡es una vergüenza!».⁸⁰ Esto lo dijo días después de haber inaugurado la represa multipropósito Baba (capítulo 4), construida con el fin de corregir la falta de agua del Daule-Peripa y así poner en funcionamiento toda la capacidad sobredimensionada de la hidroeléctrica Marcel Laniado.⁸¹ Además, el costo final de la obra se incrementó en más del 160% respecto a su costo original (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale 2008). Esto significó

79. Entrevista, 10 de junio del 2014.

80. *Enlace ciudadano* 328. 29 de junio del 2013.

81. Véase en mapas 1 y 2 la relación hidráulica de los megaproyectos Baba y Daule-Peripa. En el capítulo 4 se presenta el estudio de caso de Baba en detalle.

| DISEÑO | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN | OPERACIÓN |
|---|---|---|--|
| 1984-1988 Dos unidades de turbina c/u de 65 MW USD 53 M | 1990 Ejecutivo incluyó el proyecto en cooperación italo-ecuatoriana entre empresas italianas | Ago. 1991 Primera Convocatoria desierta a convocatoria | Dic. 1991 Segunda Convocatoria y mismo consorcios |
| | | 1993 Firma contrato consorcio Ansaldo | Ene. 1996 Primer contrato complementario complementario |
| | | | Jun. 1996 Segundo contrato |
| | | | 2000 Operación al 30% de su capacidad |
| | | | 2008 |

Figura 2. Periodización histórica de la ejecución de la central hidroeléctrica Marcel Laniado.
 Fuente: CRBM (2008); CAIC (2008).

un beneficio para los financieros y empresas constructoras, en desmedro del Estado ecuatoriano (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale 2008).

La producción de energía generada por esta hidroeléctrica se conecta al sistema nacional interconectado, desde donde se distribuye la energía a todo el territorio nacional. Paradójicamente, al interior del embalse, muchas comunidades no cuentan con el servicio o, en caso de tenerlo, no es adecuado ni permanente. Tal como lo expresa un afectado que vive en una isla, a pocos kilómetros de la central hidroeléctrica: «Nosotros que vivimos a dos kilómetros de la planta deberíamos tener gratis la energía, pero ni eso nos dieron. ¡A mí mismo, con mis ahorros me tocó traer la energía a la casa!».⁸² En sectores como El Mate, el servicio eléctrico llegó recién en el 2012. Desde que el megaproyecto entró en funcionamiento, los campesinos afectados han experimentado esta situación paradójica.

Los beneficios respecto de la navegabilidad en el interior del embalse tampoco se han cumplido de acuerdo con lo promocionado. La abundancia de lechuguín sobre el espejo de agua ha dificultado la navegabilidad y encarecido la movilidad de las comunidades aisladas. Tal como lo menciona un campesino aislado por la represa: «El invierno pasado estuvimos totalmente aislados, por más de quince días»; además acota: «Cruzar este brazo de embalse que no son más de 300 metros es caro. Cuando la gabarra está funcionando nos cobra USD 2».⁸³ En muchos sectores, los habitantes del embalse tienen que sortear «valles» de lechuguín para lograr transportarse (foto 6). Parte de la causa de este problema es que no se retiró la vegetación del vaso de la presa antes de la inundación, tal como se había mencionado en los EIA. Otro aspecto que permite la reproducción de esta planta es el diseño mismo del embalse: grandes volúmenes de agua permanecen estancados durante gran parte del año, en especial en época invernal.

Estos efectos negativos han dado pie a la implementación de «soluciones» que han afectado aún más a los afectados al interior del embalse. Desde que la CEDEGE empezó a evidenciar los problemas ocasionados por la proliferación descontrolada de esta planta acuática ha tratado de solucionarlo de distintas maneras. Primero, realizó aspersión aérea con el agroquímico 2-4 D Amina. Esta medida resultó ser sumamente costosa y con efectos nocivos para el agua y las poblaciones afectadas.⁸⁴ Actualmente se están colocando

82. Entrevista, 11 de julio del 2014.

83. Entrevista, 8 de julio del 2014.

84. Según Nufarm el agroquímico 2-4 D al entrar en contacto con los ojos o ser inhalado puede causar problemas a la salud, además tiene posibles efectos carcinogénicos en los seres humanos. www.nufarm.com/assets/17040/1/24-DAMINA6.pdf.



Foto 6. Brazos del embalse cubiertos por «maleza» acuática que forma una alfombra flotante, sector de Barragenete.

Fuente: archivo propio.

cables como barrera en ciertos sectores del embalse y se ha contratado a una empresa privada para que coseche el lechuguín con barcazas cortadoras y lo industrialice. De acuerdo con los afectados, su implementación está dirigida, en gran medida, a las inmediaciones de la bocatoma de la central hidroeléctrica. El interés primordial es permitir la adecuada generación eléctrica. Por tanto, las comunidades más alejadas del sitio de presa son las más perjudicadas.

Han transcurrido cerca de tres décadas desde que se construyó este megaproyecto y la reparación ha llegado a cuentagotas desde el Estado. Al final del proceso de construcción e implementación se expropiaron alrededor de 40.000 hectáreas y cerca de 100.000 personas quedaron involuntaria y permanentemente aisladas por el embalse. Hasta el 2014, de acuerdo con los archivos de la SENAGUA, 120 familias campesinas todavía esperaban indemnización por sus cultivos y tierras sumergidas. En general, la emigración de centenas de pobladores ha sido inevitable. La mayoría de ellos regresaron a sus tierras de origen (p. ej.: Manabí), y muchos otros migraron a las ciudades y poblados cercanos de reciente formación como Patricia Pilar, en la vecina provincia de Los Ríos (capítulo 4).

Formas campesinas de adaptación y resistencia individual

A continuación presentaré el modo en que estos efectos negativos han sido contestados desde comunidades locales, a lo largo de los años, mediante formas de adaptación y resistencia (mayormente) individuales. En las tres últimas décadas, las comunidades aisladas han sido agentes activos —aunque marginales— que han intentado, a través de la organización social y reclamos individuales, mejorar su calidad de vida y demandar una reparación integral. A más de su acción local, los impactos socioambientales experimentados en torno al sistema Daule-Peripa han inspirado a varias ONG ambientalistas (p. ej.: Acción Ecológica) y otras organizaciones de la sociedad civil.

Una de las acciones más extendidas de los afectados es la reapropiación de la tierra que fue expropiada (no siempre indemnizada) por la CEDEGE durante la etapa de construcción del megaproyecto. Los campesinos ocupan de manera informal tierras expropiadas para ubicar sus viviendas y/o implementar cultivos (foto 7). La gran mayoría de tierra reocupada corresponde a terrenos que eran de los propios campesinos. Así, por ejemplo, las cimas de las colinas (ahora islotes en medio del gran reservorio) son cultivadas por sus antiguos propietarios. Estas acciones no son una manifestación explícita de resistencia o protesta, sino son iniciativas que buscan garantizar una fuente de ingresos económicos familiares y de subsistencia. Mientras el Estado, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), actual administradora del megaproyecto Daule-Peripa, reclama las tierras como propiedad estatal,⁸⁵ los campesinos han sido denunciados como invasores y en varias ocasiones han sido atemorizados por patrullas de la fuerza militar o policial para que abandonen tal actividad «ilícita».⁸⁶ La reapropiación campesina se extiende a las áreas de protección del embalse, a las islas expropiadas y a las áreas del perímetro del embalse que quedan expuestas en la época seca,⁸⁷ tal como se muestra en la foto 7: una isla con plátano y cacao ubicada en las cercanías al sitio de presa.

Además de estas formas de adaptación, se han presentado formas de reclamo, tanto individuales como colectivas, entre otros, con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad de los moradores. Por ejemplo, como respuesta a una protesta de tres días realizada por varios habitantes

85. Entrevista a representante de la CELEC. 18 de septiembre del 2015.

86. Entrevistas a campesinos entre 2014 y 2015, y señalado en la Resolución Defensorial N.º 0007-DPE-DNDCNA-2016. 10 de noviembre del 2016.

87. Las «islas» corresponden a lo que alguna vez fue la cumbre de las lomas que no se inundaron por sobrepasar la cota 85.



Foto 7. Isla cultivada con maíz y arroz por afectados al interior del embalse Daule- Peripa.

Fuente: archivo propio.

de Barraganete y comunidades aledañas en las oficinas de la CEDEGE y CELEC, ubicadas en la represa, la CEDEGE instaló, desde el 2008, una gabarra que presta servicio de transporte sin costo para los afectados, durante los siete días de la semana en horario diurno. Antes de esto, los pobladores habían construido varias gabarras de madera de manera artesanal para adaptarse a su nueva condición de movilidad. La situación es tan precaria que varias personas han muerto en el trayecto, sea a causa de una enfermedad o, en el caso de algunas mujeres, por complicaciones en el parto.

Otra ilustración de la acción de los afectados se evidencia en El Mate, uno de los sitios más afectados con la sobre población de lechuguín durante el invierno. Ahí, una familia que habita en la orilla del embalse construyó un puente flotante. El puente tiene una extensión aproximada de 300 metros (foto 8). Con base en el conocimiento y experiencia local sobre el flujo del agua y del lechuguín, el puente fue construido en dos partes. Cada parte está anclada a un extremo del embalse. Con esta adaptación, el puente puede ser desmontado en el centro durante las crecidas del embalse, para así evitar que sea arrastrado y destruido por la corriente.

Por último, las acciones enfocadas en la organización colectiva y el reclamo al Estado de una reparación integral han sido casi ausentes, pero importantes para visualizar los problemas de injusticia socioambiental en el que viven las comunidades del embalse. A más de los comités promejas, formados en varios sectores,⁸⁸ varias familias empezaron a organizarse. En 1999,

88. Los comités promejas se organizan por iniciativa de los habitantes de los sectores que no son atendidos por ningún nivel de Gobierno. Su trabajo es canalizar proyectos hacia



Foto 8. Puente flotante sobre un brazo del embalse, sector El Mate.

Fuente: fotografía de Jimmy Pérez.

por ejemplo, la Federación de Organizaciones Campesinas y Urbanas de Los Ríos (FOCUR), liderada por Lorena Zambrano (véase capítulo 4), junto a unos pocos líderes locales iniciaron la evaluación sistemática de los impactos causados por la construcción de la represa y, a partir de ello, reclamar al Estado la implementación de servicios públicos básicos. Más tarde, en el 2005, un líder local, casi de manera quijotesca, juntó a varias personas y formó la organización de hecho Fernán Sánchez Castaño, con similares objetivos que la FOCUR. Ambas iniciativas lograron canalizar la atención de las organizaciones sociales y ONG ambientalistas nacionales e internacionales que habían emergido desde mediados de los años ochenta (capítulo 2).⁸⁹ A pesar de estos esfuerzos, la reparación integral ha llegado a cuentagotas. Estos esfuerzos aislados muestran que, durante el desarrollo de este megaproyecto, la resistencia y movilización social colectiva no ha sido significativa. Las formas de adaptación individuales han sido predominantes. La falta de organización social podría explicarse desde la débil cohesión social que tenían las comunidades afectadas antes de la llegada del proyecto. Esto se dio, posiblemente,

los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones del Estado central para que los atiendan con obras y mejoras en servicios públicos. Los miembros de estas organizaciones generalmente no reciben salario y sus representantes tienen un status social sobresaliente en el sector o comunidad.

89. Evidencia de estas relaciones se muestran en por ejemplo Corral (2006); Alvarado (2009).

mente, porque gran parte de sus pobladores llegaron a finales de los años sesenta e inicios de los setenta, a raíz de la Reforma Agraria (capítulo 1). Es así que a inicios de los años ochenta, las comunidades afectadas no tuvieron la suficiente capacidad organizacional y de movilización colectiva.

Discusión y reflexiones finales

En este capítulo he mostrado cómo la creación de la CEDEGE y la implementación del sistema multipropósito Daule-Peripa introdujeron y consolidaron una noción tecnocrática de gobernanza de agua en el Ecuador. Además, se muestra cómo este proyecto ha materializado visiones tecnocráticas acerca del control del agua y, a través de ellas, ha provocado profundos impactos negativos en las poblaciones locales. Tanto la CEDEGE como el Daule-Peripa surgieron como resultado de la promoción, tanto de las potencialidades como de los «desbalances naturales» de la cuenca del río Guayas señalados por expertos y tecnócratas. Potencialidades que según organismos regionales (p. ej.: CEPAL) y tecnócratas nacionales servirían para impulsar el desarrollo socioeconómico de la cuenca y del país. La CEPAL y la OEA, a través de diagnósticos, estudios técnicos y *expertise*, contribuyeron de forma directa en el proceso de concepción y construcción de los sueños de progreso en torno a la transformación de la cuenca del río Guayas. La autoridad y legitimidad de tales informes tuvo más acogida a través del trabajo articulador de los tecnócratas como Orellana, y varios otros personajes provenientes de la élite económica, con gran influencia sobre la política local y nacional. Ellos se encargaron de conectar los discursos desarrollistas/tecnicistas cepalinos y modelos de gobernanza de agua (p. ej.: TVA) con las necesidades urgentes de desarrollo nacional. Con la conformación de tales redes sociotécnicas y comunidades epistémicas es que se logró traducir los informes y diagnósticos técnicos en la institucionalidad e infraestructura hídrica.

Por dos razones, megaproyectos como el Daule-Peripa han llegado a ser «sistemas de sistemas». Por un lado, contrario a lo profesado por sus promotores, el sueño tecnocrático no siempre logra realizarse a entera conformidad. Tales deficiencias e inconformidades como, por ejemplo, las evidenciadas en el Daule-Peripa, deben ser superadas o cubiertas. Para superar sus deficiencias «técnicas» (p. ej.: falta de agua para generación eléctrica) es que los tecnócratas se ven comúnmente «obligados» a planificar e implementar otras obras «complementarias». Por ejemplo, el sobredimensionamiento de la central hidroeléctrica Marcel Lanido ha requerido, como mostraré en el capítulo 4, que se implemente otra re-

presa aguas arriba (el sistema multipropósito Baba) que permita aprovechar toda la potencialidad instalada de la central Laniado. Por otro lado, partiendo de que este megaproyecto ha sido planificado para ofrecer múltiples propósitos (p. ej.: riego, agua potable, control de inundaciones, etc.), la represa por sí sola no es suficiente para alcanzar el cumplimiento de tales promesas. Bajo esa lógica es que se justifica la construcción de otras megaobras. Tal como se muestra en el caso de la península de Santa Elena (el granero de América) o del valle del río Daule, a partir del corazón hidráulico del sistema Daule-Peripa se han construido gigantescos trasvases, embalses, canales y sistemas de riego con efectos también cuestionables. Así, el sistema de sistemas se extiende como una cadena inconclusa de obras conexas al corazón del megaproyecto. El concepto de «cierre y estabilización» (Bijker, Hughes, y Pinch 2012), ciertamente en este tipo de proyectos no se cumple, dado que estos proyectos son como una cascada interminable de infraestructuras.

En este capítulo se demuestra cómo las decisiones presentadas como técnicas sobre la tecnología hidráulica responden comúnmente a urgencias de tipo político y económico, inmersas en la dinámica tecnocrática. Por esta razón, estudiar los procesos de toma de decisiones, discursos y estrategias de movilización de conocimientos de tecnócratas es clave para entender los procesos políticos que residen en la base de los megaproyectos hídricos. A través de ello, los tecnócratas materializan en proyectos e infraestructura hídrica discursos de desarrollo como si fuesen verdades absolutas. Los tecnócratas son actores clave para que los megaproyectos se mantengan en el ámbito de «lo técnico», a pesar de ser tecnologías profundamente políticas (Winner 1980). De igual manera, estos actores se encargan de reproducir el conocimiento y las nociones hidrosociales dominantes.

Los megaproyectos hídricos se constituyen en sueños tecnocráticos. Por un lado, los megaproyectos son percibidos como estructuras simbólicas muy poderosas (p. ej.: modernidad, desarrollo, energía limpia, etc.). Por otro lado, el trabajo de los tecnócratas comúnmente es guiado o motivado por sentimientos y pensamientos altruistas. Por esta razón, los proyectos como el Daule-Peripa son emprendimientos presentados como resultado del conocimiento experto (incuestionable), pero al mismo tiempo son guiados por la construcción de una sociedad perfecta con base en la corrección de los «malos» sociales y naturales. Así, en este capítulo demuestro que los sueños del megahidraulismo son imaginarios (parte de esas nociones universalistas y modernas de territorio hidrosocial), pero construidos por personas (tecnócratas) de carne y hueso que forman parte de redes sociotécnicas complejas, y relaciones de poder y conocimiento.

El capítulo muestra formas de contestación y resistencia individual, similares a las mostradas por James Scott (Scott 1985, 1987). La organización y movilización social no tuvo un rol preponderante en el desarrollo de este megaproyecto y, en general, en el desarrollo de los primeros megaproyectos durante los años setenta y ochenta. Esto posiblemente se debió a que cuando se inició la intervención de la CEDEGE, muchos de los campesinos apenas habían llegado a la zona y no tenían una sociedad lo suficientemente cohesionada como para movilizarse colectivamente. Los actores sociales locales no tuvieron las capacidades para reclamar reconocimiento político y un repertorio consolidado. Por tanto, durante el período desarrollista, los megaproyectos hídricos fueron casi exclusivamente influenciados por élites económicas y tecnócratas inmiscuidas en la gestión del agua. La casi nula presencia de organizaciones sociales y de movilización en contra de la construcción de megaproyectos, durante esta época, se podría explicar desde tres puntos. Primero, a pesar de que el Daule-Peripa fue una de las primeras experiencias que derivó en grandes impactos socioambientales a nivel local —aparte del desplazamiento a menudo forzoso que los moradores locales han experimentado—, dichos impactos se empezaron a presentar únicamente desde los años noventa (período neoliberal) en adelante. Básicamente, bien sea en el ámbito local como en el nacional se desconocían exactamente los efectos negativos de este tipo de obras, por consiguiente, no había un debate al respecto. Segundo, durante el período de construcción e implementación del Daule-Peripa, las ONG ambientalistas, como Acción Ecológica, recién se estaban formando y su principal preocupación giraba en torno a la contaminación por la extracción petrolera (Lewis 2016) (capítulo 2). Ligado al primer punto, las organizaciones no gubernamentales críticas no tenían el interés en el tema sobre megaproyectos hídricos, y tampoco contaban en esa época con el conocimiento al respecto. Incluso, las mismas instituciones del Estado no le prestaban demasiado interés a los impactos socioambientales. No había institucionalidad ni legislación específica que regule y/o sancione. Tercero, los campesinos afectados habían llegado de varias regiones, en su mayoría desde finales de la década del sesenta e inicios del setenta. Esta, relativamente, corta estancia hasta antes de iniciado el proyecto, a principios de la década del ochenta, posiblemente contribuyó a que la organización social sea incipiente.

En resumen, este capítulo muestra que los encargados de ejecutar la obra estaban convencidos de ser los emisarios de la verdad «única» y «superior», en donde los campesinos, habitantes del área de inundación, constituían simples poseedores de información, únicamente útil para sistematizarla en estudios de impacto ambiental no vinculantes, que servían solo para garantizar

el cumplimiento de requisitos utilitarios solicitados por entidades financieras. En ese contexto y coyuntura, los campesinos fueron meros receptores, primero, de información «técnica», y muchas veces incomprensible, sobre el proyecto; y segundo, fueron receptores de todos los impactos negativos de las obras del megaproyecto. Se muestra cómo el conocimiento experto se asume de manera premeditada —muchas veces tácitamente— como «mejor» o «adecuado». Sin embargo, las acciones de contestación y adaptación, emprendidas por los afectados *a posteriori* (durante la etapa de operación del megaproyecto), evidencian que no fueron víctimas impávidas de una imposición hegemónica, sino que son agentes activos, aunque con limitadas posibilidades de reconocimiento y participación en los procesos de toma de decisiones del proyecto.

CAPÍTULO 4

POLÍTICA DE LOS GOBERNADOS Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA HÍDRICA: El caso del sistema multipropósito Baba*

En una mañana lluviosa, me dirigí a las oficinas de CELEC en Guayaquil. A las once en punto, tal como estaba agendado, el gerente estaba listo para recibirmé. Cuando entré a su oficina me sorprendió encontrarme con otras personas. Se trataba de un par de funcionarios de SENAGUA que conocía. Igual que yo, ellos estaban algo sorprendidos. Después de sentarnos en una pequeña salita, saturada por un aromático olor a café recién filtrado, empecé a contarle al gerente sobre mi interés de conocer más acerca de los megaproyectos hídricos y, en particular, sobre el multipropósito Baba. Lo que había planificado como una entrevista al gerente, se convirtió inevitablemente en una conversación de cuatro. Después de una corta introducción, por parte del titular de la empresa pública anfitriona, uno de los técnicos de SENAGUA se dirigió a mí y mencionó con tono un tanto arrogante y cínico: «Todas estas represas sufren de la misma enfermedad: necesitan trasvase de agua porque en algún momento presentan deficiencia...».⁹⁰ Sin duda, tal generalización intentaba responder a mi inquietud sobre el motivo detrás de la construcción de Baba. Me acomodé en mi butaca, tomé un último sorbo de mi café y seguí escuchando con interés.

* Este capítulo corresponde a una versión extendida del artículo Hidalgo-Bastidas y Boelens (2019a).

90. Declaraciones de un técnico de la SENAGUA, exfuncionario de la CEDEGE, encargado de varios megaproyectos hidráulicos que en ese tiempo estaba ejecutando la SENAGUA. 15 de enero de 2016.

Introducción

El sistema multipropósito Baba fue ideado durante el período desarrollista, tal como el sistema Daule-Peripa. Sin embargo, a diferencia de este último, Baba fue retomado a inicios de la primera década del siglo XXI por los Gobiernos neoliberales de turno. Fue reiniciado durante un momento de crisis social, económica y política, como producto de las políticas de ajuste estructural implementadas desde mediados de la década de los ochenta. Así lo advierte el técnico de la SENAGUA, al referirse al plan hidráulico de toda la cuenca del Guayas y, en particular, al rol que tiene el megaproyecto Baba: el cual fue retomado en gran medida, con el fin de «sanar» las deficiencias que sufría el corazón hidráulico del Guayas. El sistema Baba, ubicado en la cuenca alta del Guayas, nació hidráulicamente ligado al Daule-Peripa (mapa 1). A pesar de que la planificación de ambos proyectos (Daule-Peripa y Baba) se inició durante el desarrollismo y tuvieron un origen similar, Baba se desarrolló de una manera distinta a su predecesor.

El sistema multipropósito Baba se compone de cuatro diques, un canal de conducción o transvase y una planta de generación hidroeléctrica. El dique principal alcanza los 20 metros de altura sobre el lecho del río Baba y una longitud de 1,2 km. El canal de trasvase tiene una longitud de 8 km y la central hidroeléctrica tiene una capacidad de generación de 42 Mw. Además, como elemento emblemático, que mostraré más adelante, tiene un vertedero «pico de pato» que está ubicado en el dique principal.

A finales de 2005, cerca de 31 comunidades campesinas —entre ellas cuatro afrodescendientes— lograron llamar la atención nacional tras algunos días de paro y bloqueo de la principal vía terrestre que comunica Quito y Guayaquil, a la altura del centro urbano de la parroquia rural Patricia Pilar (mapas 1 y 3). Esta medida, de hecho, cúspide de una serie de reclamos populares, fue organizada para protestar en contra de la construcción de la represa Baba. Días después de haberse registrado la más fuerte jornada de protestas en esta parroquia rural de la provincia de Los Ríos,⁹¹ el diario *El Mercurio* informaba: «Cambios en el proyecto Baba: Según la presidenta de la CEDEGE, cambiará sustancialmente el trazado de la presa Baba a fin de afectar a menor cantidad de campesinos en la provincia de Los Ríos, que [...]

91. Parroquia es una subdivisión político-administrativa del Ecuador. En nivel de jerarquía, se ubica por debajo de la provincia y el cantón.

protestaron públicamente por ello».⁹² ¿Por qué los promotores del proyecto decidieron cambiar el diseño? ¿Cuál fue la influencia real de los protestantes sobre ello? ¿Cómo se logró y qué efectos han tenido estos cambios en la vida de ellos? Este proceso local estaba circunscrito en un contexto más amplio. Durante el período neoliberal, en parte por el retiro o transformación del Estado, surgieron organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que ganaron protagonismo. Además, fue el período en el cual los primeros impactos socioambientales de megaproyectos, como el Daule-Peripa, se empezaron a experimentar en comunidades locales.

El objetivo de este capítulo es entender, en un contexto neoliberal, cuál fue su influencia sobre el desarrollo del megaproyecto Baba y cómo los procesos de resistencia en torno a este informaron sobre su diseño tecnológico. A partir de la movilización y resistencia protagonizada por los habitantes de Patricia Pilar y las comunidades aledañas, en contra de la construcción del sistema multipropósito Baba, el capítulo explora qué formó la base del desarrollo de este megaproyecto, y cómo y hasta qué punto las comunidades locales lograron influenciar sobre su desarrollo. Para analizar este caso, amplió el marco teórico interdisciplinario presentado en el capítulo 1 sobre la «política de los gobernados» (Chatterjee 2004), y el rol de los «intelectuales populares» (Baud y Rutten 2004). Lo combino, además, con la propuesta de SCOT —como una ventana para entender los procesos de construcción tecnológica (Winner 1980; Pfaffenberger 1988; Bijker 2015)—. Utilizo estas (en apariencia desconectadas) aproximaciones teóricas para argumentar que dentro de las megaobras (tecnología) residen las contingencias del contexto social y político. Por tanto, mi interés está en analizar los factores y contexto que posibilitaron los cambios en el desarrollo de este megaproyecto; y en qué medida dichas modificaciones, introducidas en la tecnología, son expresiones contextuales y representan un relativo éxito de la lucha subalterna.

El capítulo se organiza de la siguiente manera: primero, se complementa el marco conceptual sobre la política de los gobernados e intelectuales populares, presentada en el capítulo 1. Enseguida se describe brevemente la parroquia rural Patricia Pilar y su proceso de formación social. Luego se explica el desarrollo del diseño original del megaproyecto, seguido del nacimiento de la organización social en Patricia Pilar y sus alrededores. En la penúltima sección se presenta el cambio de diseños y cómo la implementación

92. Diario *El Mercurio* (Cuenca), 24 de noviembre de 2005. http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=24530&umt=el_mercurio_cuenca_cambios_en_proyecto_baba. Más tarde, el 12 de diciembre del mismo año, el diario *Hoy* publicó: «Presa Baba cambia en su diseño».

de tal alternativa influenció sobre las comunidades locales y el proceso de lucha social. Finalmente, el capítulo expone una sección de discusión y reflexiones finales.

Política de los gobernados y el rol de los intelectuales populares en la construcción de los megaproyectos hídricos

Se han hecho varios intentos de acercamiento con el presidente de la República, pero todo ha sido infructuoso, sigue con la errada decisión [de construir la represa], de expulsar a miles de familias de su hábitat, y empujarnos a la miseria, las medidas de fuerza son la única posibilidad para que el presidente se dé cuenta que aquí también vivimos ecuatorianos, *ciudadanos*, con derechos y deberes y que su obligación es escucharnos (Declaración de habitante de Patricia Pilar).⁹³

Desde los años sesenta, el Estado ecuatoriano ha incluido, como parte de sus políticas desarrollistas y modernistas, la planificación e implementación de megainfraestructura hidráulica (capítulo 2). Estas intervenciones estatales han sido el detonante de distintas reacciones desde las comunidades locales afectadas. Tomando como referencia la amarga experiencia de los vecinos de Daule-Peripa, varias poblaciones de Patricia Pilar se organizaron para luchar en contra de la entrada del megahidraulismo en sus territorios y, a la par, *negociar* con el Estado y sus representantes una posición más real de ciudadanía. El Estado es uno de los principales proponentes que hace posible la implementación de megaproyectos hidráulicos (Parenti 2016), los cuales distribuyen sus impactos y beneficios de manera desigual. Por consiguiente, en este libro se consolida la noción de que el Estado-nación moderno trata de manera desigual a «la mayor parte del mundo», que no entra en ese gran relato de igualdad y ciudadanía universal (Chatterjee 2007). Es así cómo a partir de este tratamiento desigual que las poblaciones vulnerables han tomado conciencia y surgido, en gran medida, movimientos sociales inconformes con las políticas estatales promegarespresas.

Por esta razón, el estudio de los movimientos sociales antirespresa está obligado a ser encarado desde su relación con el Estado. Sobre la base de esta premisa es particularmente útil el abordaje de la «política de los gobernados»,

93. Diario digital *Ecuador Inmediato*, 15 de noviembre de 2005. http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/incidentes_en_canton_patricia_pilar_por_oposición_a_construcción_de_una_represas--24003

para entender el funcionamiento de estos movimientos sociales con relación al Estado y sus políticas hídricas. En su propuesta, Partha Chatterjee hace una distinción entre *ciudadanos* y *poblaciones*. Mientras los primeros se movilizan en el ámbito *teórico* (o formal), los segundos pertenecen al ámbito *político* (o real) (Chatterjee 2007, 6; Simon Thomas 2013). En la práctica, lo que este dualismo representa es que mientras los ciudadanos, como parte de la sociedad civil, forman asociaciones basadas en sus propios intereses —y que, a partir de dichas asociaciones, amparados en la formalidad y las leyes, se relacionan con el Estado para plantear sus demandas y reclamos—, aquellos a quienes el Estado no ha logrado incluir y/o considerar totalmente como «ciudadanos» —es decir, los individuos con goce pleno de derechos, con demandas igualitarias, participantes activos de las decisiones del Estado-nación—, los llamados gobernados, entablan una relación distinta con ese Estado en lo real y desde lo político (Chatterjee 2007, 8). En lugar de actuar desde el marco de la sociedad civil, los gobernados toman acción y se movilizan desde el campo de la *sociedad política*. La sociedad política, entonces, se constituye en «un espacio de negociación y contestación» que navega entre lo legal y paralegal, apelando y/o (re)construyendo lazos de solidaridad moral para lograr reivindicaciones colectivas frente al Estado y sus instituciones (Chatterjee 2007, 150). «Es precisamente en este ámbito donde gran parte de la movilización política tiene lugar, y en donde el Estado está obligado a encontrar y reproducir su legitimidad como proveedor de bienestar a sus ciudadanos» (Baud 2007, 22). A pesar de que el ámbito de acción de la sociedad política es fundamentalmente desde lo paralegal, esto no quiere decir que los gobernados no puedan hacer uso de las leyes e instituciones propias del ámbito de la sociedad civil para alcanzar el éxito de sus acciones y reclamos. Por el contrario, su capacidad para navegar y utilizar las herramientas formales les provee de una característica singular.

En países como Ecuador es, generalmente, desde la sociedad política que los marginalizados logran reorientar (aunque muchas veces parcialmente) en su favor beneficios, políticas y programas estatales, al aplicar en la coyuntura oportuna y en el tiempo apropiado «la presión [precisa] en los puntos adecuados del aparato gubernamental» (Chatterjee 2007, 139). No obstante, una política de los gobernados «efectiva», «viable y con capacidad para obtener resultados implica una considerable dosis de mediación» (Chatterjee 2007, 137). Es así que el éxito de una política de los gobernados depende, por un lado, de la capacidad de los individuos o grupos particulares «para movilizar apoyos y para influir en la implementación de las políticas públicas en favor suyo» (Chatterjee 2007, 132); y, por otro lado, de la capacidad

que tienen los líderes o mediadores de generar una cohesión social mediante el revestimiento «a la forma empírica de un grupo de población con los atributos morales de una comunidad» (Chatterjee 2007, 128). Sin embargo, aunque estos requerimientos se cumplan es preciso anotar que el éxito de una política de los gobernados es altamente contextual, estratégica, moralmente solidaria, históricamente específica y, por lo tanto, inevitablemente provisional (Gago 2014, 287). Como la sociedad política se mueve (predominantemente) en el campo de la política, si el contexto político en el que se desenvuelve cambia, es muy posible que esta se afecte y no alcance sus objetivos o lo haga parcialmente.

Si bien la noción de sociedad política es, sin duda, útil para iluminar el proceso de movilización en contra del megaproyecto Baba, ofrece una lectura parcial acerca de los individuos que también forman parte de este tipo de movimientos sociales. Me refiero a los activistas e intelectuales críticos provenientes tanto del espacio urbano como rural que, siendo parte de las ONG, organizaciones campesinas, organizaciones de derechos humanos, universidades, o en nombre propio, hacen parte del trabajo discursivo y de soporte de luchas sociales. Por esta razón incorporo la idea de «intelectuales populares o líderes populares» (Baud y Rutten 2004). Estos no pertenecen necesariamente a la categoría de «gobernados»; sin embargo, también forman parte de la sociedad política, al transgredir las membranas semipermeables entre la sociedad política y la sociedad civil. En términos de Chatterjee, ellos vendrían a constituir, en alguna medida, los «mediadores» de la sociedad política. Tales acciones demandan de estos individuos el desarrollo de tres capacidades fundamentales: i) la de comunicarse con las comunidades locales para ganar legitimidad, atraer apoyo y enmarcar adecuadamente sus ideas/reclamos para (re)crear una solidaridad moral, ii) la de traducir, conectar y comunicar esas ideas con problemas más amplios de la sociedad (p. ej.: desarrollo, globalización, cambio climático, etc.) y a otras escalas, y iii) la de exigir tener un grado de carisma y credibilidad para navegar con legitimidad en los distintos espacios en conflicto.

Los intelectuales populares son, además, quienes con frecuencia «tienen una posición de autoridad dentro de los movimientos sociales» (Baud y Rutten 2004, 7, traducción propia). Al margen de su origen, su liderazgo y mediación «deben suscitar reconocimiento y respeto» (Baud y Rutten 2004, 9, traducción propia) por parte los distintos actores en conflicto. Estos actores son, comúnmente, los rostros e interlocutores más sobresalientes de la movilización, por lo que suelen estar sujetos, aunque no exclusivamente, a falsas acusaciones, críticas, intimidaciones u hostigamientos. Eventualmente, esto podría

lesionar su credibilidad y fracturar las bases de su legitimidad al interior del movimiento social. Así se muestra a lo largo del caso Baba, en el que lograr y mantener la autoridad y apoyo de las bases sociales de la movilización es un cometido crucial para el sostenimiento de la lucha. Aunque sus ideas y argumentos sean fuertes, los intelectuales y/o líderes populares pierden fuerza si no representan a una base social que los respalde.

Patricia Pilar: una parroquia rural en tiempo heterogéneo

Patricia Pilar es una parroquia perteneciente al cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos.⁹⁴ Está ubicada en la parte alta de la cuenca del río Guayas, a unos 150 kilómetros al suroeste de Quito y a unos veinte de la cola del embalse Daule-Peripa (mapas 1 y 3). Como muchos otros «pueblos de carretera» del litoral ecuatoriano, Patricia Pilar es un asentamiento humano que surgió, por un lado, al calor de la colonización de «tierras baldías y ociosas», bajo los intentos de reforma agraria de los años sesenta y setenta (Barsky, Furche y Mizrahi 1982; Ditto 1986; Brassel, Herrera y Laforge 2008); y, por otro lado, por su convivencia con el proceso de expansión y consolidación de grandes plantaciones agroempresariales como el caucho, balsa, banano y palma aceitera. El gran interés por estas tierras surgió por la alta fertilidad de sus suelos y por estar bañadas por las aguas del río Baba y decenas de sus afluentes.

La zona se constituye como un mosaico social heterogéneo, conformado por personas con diverso origen, trayectorias e intereses. Desde la primera mitad del siglo XX han convivido en este espacio campesinos, comunidades afrodescendientes, agroempresarios capitalistas, comerciantes y trabajadores rurales. Por ejemplo, un miembro de una de las comunidades afrodescendientes así lo recuerda: «mis antepasados, o sea mis abuelos, vinieron del sur de Colombia hace más de cien años. Imagínese que mi mamá ya es nacida y criada aquí».⁹⁵ Otro campesino comenta sobre su origen andino: «Yo soy del Quinche [provincia de Pichincha], vine en el año 1973 en busca de trabajo, por la Reforma Agraria».⁹⁶ Incluso, en la zona habitan desplazados por otras represas, como aquellos afectados por el megaproyecto Daule-Peripa. Así lo recoge Diario *El Universo*:

94. Patricia Pilar entró a formar parte del mapa político-administrativo formal del país, el 19 de septiembre de 1996, después de que se le concediera la categoría de parroquia.

95. Entrevista, 6 de octubre de 2015.

96. Entrevista, 28 de octubre de 2015.

A José Guamán se le humedecen los ojos al recordar cómo su vivienda y finca quedaron bajo el agua [...] cuando en 1990 se produjo el embalse de agua Daule-Peripa. [...] En su caso, el dinero [cobrado] lo invirtió en la compra de cuarenta hectáreas en Santa María del Toachi, donde hoy reside.⁹⁷

Esta heterogeneidad está tan normalizada y legítimada que, inclusive, la junta parroquial reconoce este origen diverso:

En el año 1963, el filántropo orense Demetrio Encalada construye un local escolar, para que reciban las enseñanzas los hijos de los trabajadores de los predios de su hacienda. [...] En el año de 1974 se obtiene, de la compañía MONAPEL, la compra de otras cinco hectáreas en donde se planifica correctamente el pueblo con miras futuristas.⁹⁸

La tenencia de la tierra se estructuró de manera diferenciada. En la zona cercana a la ceja de montaña, en la margen este del río Baba, se ubicaron mayoritariamente pequeños y medianos campesinos que fueron conformando caseríos (mapa 3). Solo pocas haciendas han desarrollado sus actividades en esa zona, por lo difícil de mecanizar las tierras (p. ej.: hacienda Marianela, hacienda La Francia y hacienda San José). La mayoría de las grandes plantaciones y hacendados se fueron ubicando hacia la costa (margen oeste del río Baba). Los únicos pobladores que se encontraban en esa zona han sido las comunidades afrodescendientes, quienes colonizaron esas tierras desde inicios del siglo xx y, desde entonces, han tenido que adaptarse a los nuevos vecinos.

Gran parte de pobladores llegaron principalmente de las provincias de Manabí, Loja, Pichincha y El Oro.⁹⁹ Los afrodescendientes llegaron desde el sur de Colombia y la provincia de Esmeraldas. De esta manera, Patricia Pilar fue configurándose en lo social, productivo y económico, por actores sumamente diversos. Tener en este espacio geográfico personas con distintas procedencias, da cuenta de una sociedad aparentemente fragmentada: sin un pasado reciente común sobre el cual construir un sentido de «comunidad». Sin embargo, como muestro más adelante, el proceso de lucha en contra del mega-proyecto Baba evidencia que sus habitantes son capaces de generar niveles

97. Diario *El Universo*. 2 de mayo de 2004.

98. Publicación realizada en el año 2008 por la Junta Parroquial, por los doce años de parroquialización de Patricia Pilar.

99. Esta migración fue impulsada, en parte, por las extensas e intensas sequías en varias provincias como Manabí, El Oro y Loja.

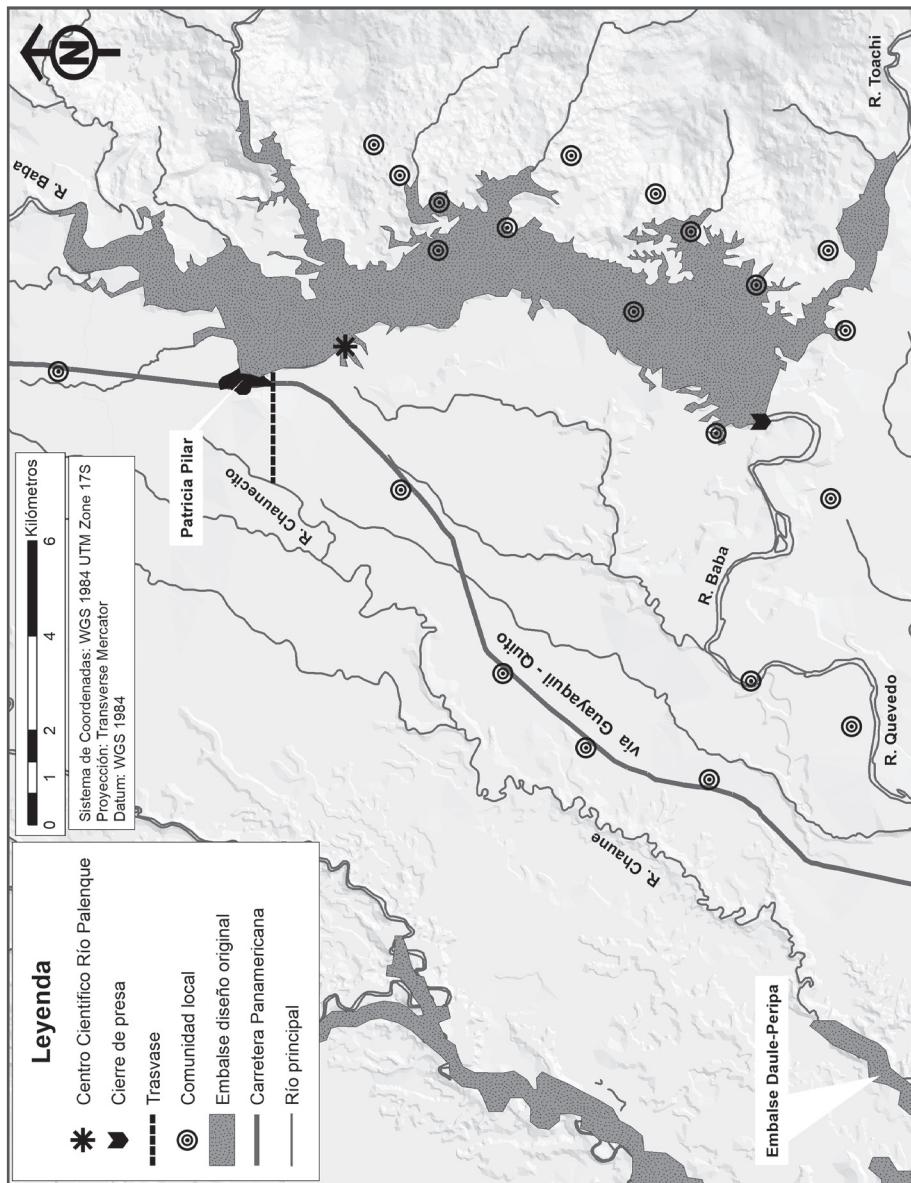
de cohesión social bastante fuertes, con efectos significativos tanto sobre su propio bienestar, como sobre las decisiones de los gobernantes.

El diseño original de Baba (1977-2005): lo megahidráulico frente a la política de los gobernados

Multipropósito Baba y su desarrollo tecnocrático

Al tiempo que se establecían las comunidades en Patricia Pilar, a orillas del río Baba, y construyendo sus propias nociones acerca del territorio hidrosocial, en los escritorios de la CEDEGE la planificación del proyecto multipropósito se iniciaba bajo las ideas tecnocráticas desarrollistas. A fines de los años setenta, la CEDEGE contrató los servicios del Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) español con el fin de realizar una primera propuesta del megaproyecto. El CEH diseñó una presa con una capacidad de embalse de 2000 hm³. Sin embargo, en los años ochenta, la propia CEDEGE, redujo la capacidad del embalse a 1700 hm³, alegando que la propuesta del CEH estaba sobredimensionada. Más tarde, la CEDEGE le entregó a TAMS-GEA (la misma consultora norteamericana que hiciera los estudios del Daule-Peripa) esta segunda alternativa para que continuara con los estudios. Como resultado de este trabajo, en 1994, la CEDEGE recibió estudios en fase de factibilidad, listos para ser construidos (CEDEGE 1999). No obstante, por la prioridad que en aquella época tenía el sistema Daule-Peripa, el proyecto Baba quedó en lista de espera por varios años; mientras tanto, el proyecto no se quedó quieto.

En 1997, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España (CEDEX) y la empresa multinacional de energía española IBERDROLA, ambas contratadas por la CEDEGE, entregaron un estudio de justificación en donde resaltaban el grave problema energético nacional, y la subutilización de la central Marcel Laniado, respecto al volumen de agua embalsada por la represa Daule-Peripa (CEDEGE 1999). En esa coyuntura, para la CEDEGE resultaba ineludible la revisión e implementación del proyecto Baba, «debido a que la central Daule-Peripa [...] con los tres grupos [de generación], con los que finalmente se ha equipado, resulta que su rendimiento máximo queda al 81% [...] debido a las demandas prioritarias de usos consultivos existentes y en construcción, por lo que admite incluso más agua de la que normalmente afluye procedente de su propia cuenca» (CEDEGE 1999, 3). El megaproyecto Baba, a través de un trasvase, abastecería de agua al embalse Daule-Peripa para aumentar su volumen en épocas secas y así lograr incrementar su generación



Mapa 3. Diseño original de Proyecto Baba y principales caseríos afectados.
Fuente: HidroPacífico. Elaboración: propia.

de energía (mapa 3). Tanto las «deficiencias» del Daule-Peripa, como las necesidades de sistema eléctrico nacional fueron justificativos suficientes para desempolvar los estudios del proyecto Baba, que para ese entonces no contemplaba el aprovechamiento energético con una central propia. Así se reconoce en un informe del proyecto: «Ni en el esquema original ni en sus variaciones se consideró la posibilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico del caudal regulado en el embalse sobre el río Baba» (Caminosca 2004a, 4). La principal justificación era casi enteramente basada en «curar la enfermedad» del sobredimensionamiento de la central hidroeléctrica del Daule-Peripa.

En 1998 se realizó una primera revisión de la propuesta de TAMS-GEA. Se propuso trasvasar agua desde el futuro embalse de Baba, a la altura de Patricia Pilar, hacia el Daule-Peripa, mediante un túnel al río Chaunecito. Finalmente, los estudios definitivos realizados en su momento por TYP SA¹⁰⁰ y Caminosca¹⁰¹ plantearon la implementación de una presa de 600 hm³ que tuviese dos trasvases, uno inferior al río Chaune y otro superior —a la altura del poblado de Patricia Pilar, similar a la propuesta de TAMS-GEA— en el río Chaunecito, con un área de inundación de 3760 hectáreas (mapa 3). En esta propuesta ya se incluyó una central hidroeléctrica de 54 Mw de potencia, en la parte baja, y una altura de presa de 55 metros. Una de las principales características de este diseño incluía un vertedero de excesos de sección recta, controlado por compuertas, similar al diseño implementado en el sistema Daule-Peripa (figura 3). Tal como muestro más adelante, este elemento se modificaría por completo para dar respuesta a los reclamos de las comunidades de Patricia Pilar. La CEDEGE escogió esta propuesta como el diseño definitivo, que llamaré en adelante «diseño original» (cuadro 3 y mapa 3).

De manera similar al proceso seguido para el Daule-Peripa, los ingenieros de la CEDEGE, en 1999, con estudios bajo el brazo, solicitaron a la Secretaría Nacional de Planificación la declaratoria de prioridad nacional para el proyecto Baba. Ellos argüían que el mismo «forma parte del proceso de racionalización del aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Río Guayas». ¹⁰² La prioridad fue extendida y ratificada por la Secretaría General de la Presidencia de la República.¹⁰³ Estas acciones cubrieron al proyecto con una mayor legitimidad.

100. Empresa consultora de ingeniería civil y arquitectura española, fundada en 1966.

101. Empresa consultora internacional con 130 oficinas alrededor del mundo, fundada en 1976.

102. Oficio de la CEDEGE N.º 1000-E-0435. Marzo de 1999.

103. Oficio de la Secretaría General de la República del Ecuador N.º ODEPLAN-99-605. 28 de mayo de 1999.

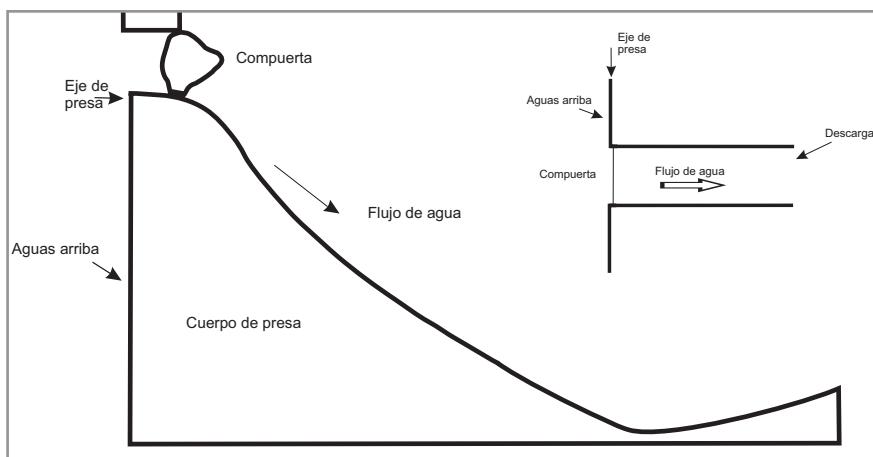


Figura 3. Corte transversal de presa y vertedero (izq.) y vista superior de vertedero (der.). Elaboración: propia.

Lo de «multipropósito» fue una denominación ambigua desde el inicio del proyecto. Solo dos propósitos constan explícitamente en los planes oficiales del diseño original, muchos otros han sido supuestos de los técnicos. Entre los beneficios que constan en los documentos oficiales están: el trasvase de agua al Daule-Peripa y la generación eléctrica tanto en su central propia como en la central Marcel Laniado. Entre los «supuestos» beneficios están el control de inundaciones, el incremento de áreas de riego, y el abastecimiento de agua potable.

Lo que no anticiparon los diseñadores (o probablemente fue subestimado) es que el diseño original afectaría a un gran número de comunidades ya asentadas en la parte baja del río Baba y Toachi.¹⁰⁴ Tal como se aprecia en el mapa 3, la ubicación de este diseño inundaba gran parte de los caseríos y fincas de pequeños y medianos agricultores. Así lo recordaba el párroco de Patricia Pilar:

Cuando hicieron la exposición del proyecto dijeron que el proyecto fue elaborado cuando no existía Patricia Pilar. O sea, no existían más que

104. Son cerca de 31 comunidades que se originaron, en su gran mayoría, a partir de 18 cooperativas conformadas para acceder a la tierra, a partir de las reformas agrarias de la segunda mitad del siglo xx. Los documentos oficiales no cuentan con el número exacto de familias, pero los datos del movimiento social antirempresa y del GAD parroquial de Patricia Pilar hacen mención de más de 2000 mil familias en total.

CUADRO 3
AFFECTACIONES SOCIOAMBIENTALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL DISEÑO ORIGINAL SEGÚN LOS PLANES OFICIALES

| DESCRIPCIÓN | CIFRAS |
|--|--|
| Impactos sobre la población desplazada y receptora | 778 habitantes |
| Viviendas afectadas por el embalse | 240 viviendas (incluye caseríos) |
| Infraestructura afectada por la creación del embalse | 6 escuelas/2 iglesias/ 6 puentes |
| Área de inundación del embalse | 3760 hectáreas |
| Expropiaciones | 4420 hectáreas |
| Seguridad de la población aguas abajo (altura de la presa) | 55 metros |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 600 hm ³ |
| Potencia instalada para la generación eléctrica | 54Mw |
| Calidad del agua del embalse e impacto en salud pública | Embalse regulado por compuertas (agua semiestancada) |
| Riego | Agroexportadoras en perímetro del embalse |
| Agua potable | No especificado |

Fuente: Caminosca (2004); Efficacitas (2006a). Elaboración: propia.

poblaciones aisladas de campesinos. Entonces, para ese entonces, al Estado no le hacía mucho problema botar a todos esos finqueros de sus tierras.¹⁰⁵

A pesar de tener un origen tecnocrático similar al del Daule-Peripa, el sistema multipropósito Baba experimentaría un desarrollo distinto. Los parámetros técnicos del diseño original cambiaron después de un largo e intenso proceso de negociación y contestación con las comunidades de Patricia Pilar. Así lo recuerda uno de sus líderes: «¡quizás es el único proyecto que no se ha realizado porque el pueblo se levantó!». ¹⁰⁶

105. Entrevista, 28 de noviembre de 2015.

106. Entrevista, 16 de octubre de 2016.

La política de los gobernados en Patricia Pilar: surgimiento y evolución del movimiento social antirepresa

A inicios del siglo XXI, la sociedad ecuatoriana estaba sufriendo los embates de una profunda crisis social, económica, institucional y política que dejaban a su paso las políticas neoliberales. El retiro del Estado y la desregulación del mercado eran los principales detonantes (Acosta 2012). Esto se veía reflejado en la incapacidad del Estado para cumplir el mandato liberal de garantizar los derechos de la ciudadanía universal, y en el surgimiento de otros actores que llenasen ese vacío dejado por el Estado. Entre los segundos estaban las empresas privadas y la organización social (capítulo 2). En este contexto de crisis, durante el período neoliberal, surgió el movimiento antirepresa.

Transcurría el año 2002, cuando la CEDEGE retomó el megaproyecto Baba, al tiempo que en Patricia Pilar se empezaban a escuchar rumores sobre la eventual construcción de una represa. Algunos líderes campesinos y políticos locales empezaron a movilizarse en búsqueda de información oficial para desmentir los rumores. Uno de los primeros dirigentes en involucrarse fue el entonces presidente de la junta parroquial, Carlos Méndez.

Carlos era, entonces, un hombre de cincuenta años de edad, y un ejemplo más de la heterogeneidad social que constituye a Patricia Pilar. Él llegó de la provincia de Manabí a esta zona del país con sus padres, cuando era un niño. Su familia fue adquiriendo tierras y con ello poder, llegando a constituirse en una de las familias mejor acomodadas de Patricia Pilar. Entre sus principales actividades económicas cuentan la crianza de ganado vacuno y el cultivo de palma africana. Su poder y popularidad le permitió involucrarse en la política local. En las elecciones seccionales celebradas un par de años antes fue electo presidente de parroquia Patricia Pilar, de la mano de un partido político de la democracia cristiana.¹⁰⁷ Al margen de su cuestionada posición de poder, su visibilidad como presidente parroquial lo convirtió en un líder local, sobre todo en la zona urbana de Patricia Pilar.

A finales de 2002, Carlos fue abordado por algunos campesinos que habían escuchado sobre el futuro proyecto. «Los campesinos empezaron a contarme que varios técnicos estaban haciendo mediciones. El problema fue que los técnicos vinieron a hacer los estudios por debajo, sin avisar a nadie o

107. Este partido tuvo su mayor auge a finales de la década de los noventa, con la elección del expresidente Jamil Mahuad, su máximo líder en aquella época. El partido comulgaba con políticas de libre mercado y cayó en una profunda crisis después del llamado «feriado bancario», decretado por Mahuad.

engaño a la gente»,¹⁰⁸ así lo recordaba el político. Esto coincide con lo experimentado por un campesino de un recinto afrodescendiente, que se sintió timado por los técnicos:

Vinieron a hacer los estudios. Nosotros les autorizamos para que hagan los estudios, sí. Pero ellos querían algo más, pedían las copias de las escrituras de los terrenos [...]. Nos dijeron que los estudios serían solo en 4 meses, pero después se pasaron largo 6 meses, 8 meses, y así. Además, nos habían hecho algunos daños en nuestras propiedades. ¡Nos engañaron!.¹⁰⁹

Tras estas denuncias, Carlos convocó a una reunión a los representantes de las 17 comunidades aledañas a Patricia Pilar, en las oficinas de la junta parroquial, para tratar de forma abierta el problema. Se convirtió en el primer *mediador* de las inquietudes locales frente a otros actores. Envío cartas a la CEDEGE y a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para solicitar información y comunicar la naciente preocupación popular.

A finales de 2003, paralelamente a estas acciones de Carlos, sectores campesinos y de mujeres contactaron por su lado a Lorena Zambrano. Lorena era una joven lideresa manabita con residencia en Buena Fe.¹¹⁰ Su principal carta de presentación era el trabajo con los afiliados al Seguro Social Campesino de Los Ríos, pertenecientes a la CONFEUNASSC-CNC, y como coordinadora de la FOCUR.¹¹¹ Esta última es una organización que años atrás inició su apoyo a varias comunidades de afectados por el embalse Daule-Peripa, liderada entonces por la misma Lorena. Su relación con la problemática del Daule-Peripa, como se presenta más adelante, tendría un rol central en el proceso de organización de la protesta en Patricia Pilar. A pesar de su corta edad, Lorena ya tenía trayectoria como dirigente social en sectores urbanos y rurales. En 1999, mientras trabajaba con los afectados en Daule-Peripa, Lorena llegó a vincularse con un partido político indígena de relativa reciente creación, Pachakutik, como resultado de los levantamientos indígenas de la

108. Entrevista, 26 de octubre de 2015.

109. Entrevista, 13 de octubre de 2015.

110. Ciudad pequeña de la provincia de Los Ríos, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Patricia Pilar.

111. La CONFEUNASSC-CNC es la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina que surgió como respuesta de los campesinos a las políticas neoliberales que se implementaron en la década de los noventa.

década de los noventa.¹¹² Con esa bandera política postuló como candidata a concejala en las elecciones seccionales para el municipio de Buena Fe. Debido a su trabajo con organizaciones sociales locales había madurado relaciones con varias ONG ambientalistas como Acción Ecológica, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. Esto sería clave para fortalecer el proceso de lucha que estaba surgiendo en Patricia Pilar.

A pesar de sus capacidades de liderazgo, la aceptación de esta joven por los campesinos y habitantes de Patricia Pilar inicialmente no fue buena.¹¹³ «Al principio no me tomaban en serio, creo que también por ser mujer».¹¹⁴ Lorena asegura que, en la medida que ganaba aceptación por las comunidades, los otros dirigentes «al parecer sentían celos o eran incrédulos» de sus capacidades. Lo afirmado por la dirigente, respecto a su «condición» de mujer «inxperta», refleja las relaciones de poder al interior del movimiento, con respecto al género. Según comenta Lorena, ella tenía que asumir un poco el rol de «macho dirigente» para ser aceptada.

No obstante haber ganado legitimidad y una posición de lideresa, siempre tenía que lidiar con este tipo de problemas dentro de la organización. Sin embargo, Lorena tuvo un rol fundamental en las primera luchas en Patricia Pilar. Recuerda que «en esa época todavía no llegaba nadie, ni Acción Ecológica, ni el FIAN; solo estaban Carlos y otros dirigentes de la parroquia y de los afros»,¹¹⁵ tanto de las zonas urbanas como rurales. Entre los dirigentes más representativos se encontraban Patricio Hurtado y Galo Alcívar.

Patricio era representante de un sector importante de las comunidades afrodescendientes y del sector rural. Contrariamente a los otros dirigentes y a la mayoría de campesinos, él había nacido en la zona. Vivía en la comunidad Peripa del Baba, ubicada junto al río Baba (mapa 3). Pertenecía a una familia asentada en el sector hace más de cien años. Por esta razón alegaba que

112. Pachakutik es un partido político que surgió en 1995, con la finalidad de representar políticamente al movimiento indígena que se había fortalecido y tenía un protagonismo especial desde inicios de los años noventa. Si bien, el movimiento indígena ha tenido una trayectoria importante en diferentes épocas en Ecuador, uno de los momentos de mayor fortalecimiento fue precisamente durante el apogeo y consolidación del neoliberalismo. Para mayor detalle sobre el tema, véase Becker (2010); Hoogesteger (2013); Boelens, Hoogesteger y Baud (2015).

113. Entrevista, 26 de noviembre de 2015.

114. Entrevista, 26 de noviembre de 2015.

115. FIAN es una organización no gubernamental internacional que lucha principalmente por la defensa del derecho humano a la alimentación. Su base está asentada en Alemania y desde hace varios años trabaja en Ecuador.

las tierras de sus comunidades debían ser categorizadas como ancestrales.¹¹⁶ Con el fin de fortalecer este aspecto, Patricio fundó la Asociación de Trabajadores Agrícolas Afroecuatorianos SEGURA.¹¹⁷ Desde este espacio gestionaba proyectos agrícolas para su comunidad y congregaba apoyo para la lucha en contra de la represa. Trabajaba en una finca de mediano tamaño (26 hectáreas) perteneciente a su madre, donde había cultivos de ciclo corto a la orilla del río; frutales y cacao fino de aroma como principal cultivo. A pesar de que su finca no iba a ser afectada directamente por el diseño original de la presa, decidió apoyar la lucha de Patricia Pilar y de las otras comunidades campesinas y afrodescendientes. Según Ana, una de sus hermanas: «otras comunidades afro, como La Ceiba, que sí serían afectadas, le pidieron apoyo... por ser dirigente».

Por su lado, Galo era un agricultor de unos cincuenta años, que aunque se considera a sí mismo pequeño, la extensión de su propiedad (cien hectáreas) y el tipo de cultivos que tiene (papaya, bambú, cacao «ramilla») lo ubican —de acuerdo con las características de la zona— como un agricultor capitalista.¹¹⁸ Del mismo modo que muchos otros habitantes de Patricia Pilar, él es de «afuera» y llegó con sus padres cuando era aún niño. Permanecía en su finca durante los días de la semana y los fines de semana viajaba a Quevedo donde residía. Él fue un dirigente muy involucrado en la lucha desde sus inicios y su familia estaba involucrada en la política local. Cuando habla sobre el proceso social lo hace con orgullo. Se presenta a sí mismo como uno de los dirigentes más destacados y resalta la lucha en contra de la represa como un éxito.

A finales de 2003, mientras la CEDEGE preparaba la licitación para lanzar la etapa constructiva del proyecto, los líderes de Patricia Pilar habían logrado fortalecer una base organizativa con 31 comunidades. La capacidad de (re)crear un fuerte discurso en torno a la eventual afectación por la represa fue clave. Los líderes lograron explicar los impactos del Daule-Peripa y ubicaron entre las comunidades de Patricia Pilar como una afectación grave a sus formas de vida. Los campesinos no querían perder sus tierras, ni quedar aislados. La memoria del pasado y el arraigo al presente fortalecieron

116. Entrevista con una de sus hermanas. 10 de septiembre de 2017.

117. Esta asociación registrada por el Ministerio de Agricultura, el 31 de marzo de 2004, es una iniciativa formada con el fin de agrupar a todos los trabajadores afrodescendientes de la comunidad Peripa y promover el cultivo de parcelas agrícolas y el desarrollo de proyectos agrícolas con base en la solidaridad y el trabajo colectivo.

118. En la zona, el cacao ramilla o CCN51 se encuentra predominantemente en las fincas de agricultores capitalistas y empresarios con grandes extensiones de tierra.

los argumentos que llevó a la consolidación de una solidaridad moral. Así lo presentaba, a inicios de 2004, el diario *El Comercio*:

Mala experiencia de Daule-Peripa alerta sobre la presa Baba. «Jaime Giler se niega a perder sus cultivos por segunda vez. Este agricultor, hoy asentado en la zona, al pie del río Baba, ya lo perdió todo en 1982 por causa de la represa Daule-Peripa, y no es el único».¹¹⁹

La solidaridad formada alrededor de la memoria del Daule-Peripa jugó un rol tan central que, incluso, organizaciones internacionales apelaban a ello:

Las comunidades de esta cuenca también se oponen a la construcción de la represa Baba porque han sido testigos de cómo el embalse del Daule-Peripa sobre el río Guayas ha impactado a las comunidades afectadas y a la economía local. Hasta ahora, las comunidades y los propietarios de tierras afectados por el embalse no han recibido compensación adecuada por sus pérdidas (carta enviada desde International Rivers Network al BID, el 24 de abril de 2007).

Esta memoria fue utilizada ampliamente por los entonces líderes para motivar la lucha. Organizaban visitas de intercambio con testimonios e historias de vida de los afectados. Tal como lo recuerda la joven lideresa: «hicimos recorridos en el Daule-Peripa con la gente de Patricia para que conozcan la realidad allá. [...] Invitábamos también a afectados del Daule-Peripa a las asambleas para que compartan sus experiencias acá [en Patricia Pilar]».¹²⁰ Los resultados fueron decisivos. Así lo recuerda también Carlos: «ellos [los afectados del Daule-Peripa] nos abrieron los ojos».¹²¹ Los impactos socioambientales causados por el Daule-Peripa fueron la bandera de lucha que motivó la protesta y cohesión en contra de la construcción de la nueva represa Baba.

Bajo esta identidad colectiva, las reuniones de la naciente organización empezaron a crecer en número de participantes. Cada domingo, estas tomaron forma de asambleas generales en el sector urbano de la parroquia, y reuniones más pequeñas durante la semana en las comunidades rurales. Lorena junto a Carlos y Galo hicieron un trabajo político importante. Gozaban de

119. Diario *El Comercio*. 17 de mayo de 2004.

120. Entrevista, 26 de noviembre de 2015.

121. Entrevista, 16 de octubre de 2015.

la confianza y respaldo de las comunidades, y también de las buenas relaciones con las ONG, partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos. Mientras Carlos alertaba a los actores políticos externos a la parroquia, Lorena y los otros líderes organizaban y participaban de reuniones en cada comunidad para alentar a los campesinos. Así lo recuerda Lorena:

Nos preparamos por varios meses, con reuniones en cada comunidad para hacer una gran asamblea. [...] El proceso de la organización no fue fácil. Había que caminar. Había que dialogar mucho. Esto [la organización] es un diálogo, es como formar una *familia* en donde logras comprenderte y comprometerte, ¡si no, te vas pa'l carajo!¹²²

En un momento determinado las personas que asistían a las asambleas ya no cabían en la iglesia —que era prestada varias veces por el sacerdote, quien también apoyaba abiertamente la lucha y se definía también como dirigente—. Tampoco cabían en la sala de juntas de la parroquia. Entonces optaron por realizar las asambleas en el parque central de la parroquia, donde asistían con regularidad alrededor de 500 personas. A pesar de que para entonces la molestia local ya atraía a distintos actores cada domingo (p. ej.: congresistas nacionales, académicos, activistas, etc.), la fuerza de la lucha y la organización social provenía de las comunidades rurales. Tal como lo recuerda uno de los dirigentes campesinos: «las reuniones se hacían en Patricia Pilar, pero el cuerpo principal era aquí en los recintos».¹²³

Esta efervescencia social y solidaridad permitió que, a inicios de 2004, las 31 comunidades campesinas y afrodescendientes, ubicadas tanto en la provincia de Los Ríos como en la entonces provincia de Pichincha se organizaran bajo el nombre de «Comité Biprovincial por la No Construcción de la represa Baba-Vinces».¹²⁴ El Comité se constituyó como una organización de hecho, con la única y principal finalidad de evitar la construcción del megaproyecto Baba. Así, su tiempo de vida estaba marcado desde su nacimiento por la duración del proceso de lucha en torno al proyecto Baba. Paralelamente a estas acciones del Comité, a inicios del mismo año, subestimando las preocupaciones locales presentadas formalmente mediante una carta al Gobierno nacional, el directorio de la CEDEGE resolvió implementar el proyecto Baba.

122. Entrevista, 26 de noviembre de 2015.

123. Entrevista, 28 de octubre de 2015.

124. A partir del 6 de noviembre de 2007, la provincia de Pichincha redujo su superficie, dando origen a la actual provincia Santo Domingo de los Tsáchilas que actualmente es vecina con la provincia de Los Ríos.

En abril de 2004, el Comité se fortaleció aún más y fue ganando atención tras el primer incidente entre opositores y técnicos. Así lo anunciaba el diario *La Hora*:

Habitantes impidieron estudios de suelo. Aproximadamente 200 habitantes de la parroquia Patricia Pilar se trasladaron la mañana de ayer hasta donde se construirá la presa Baba, para impedir la realización de la obra.¹²⁵

Esa acción, de acuerdo con el recientemente creado Comité y sus líderes, fue un paso importante para demostrar a los pobladores que la amenaza de la represa era real y muy cercana. Tal como lo recuerda Lorena: «Llegamos al sector a donde estaban trabajando. Y sacamos la maquinaria. [...] Enseguida llevamos toda esa maquinaria a recorrer el pueblo para que la gente viera la realidad de las cosas».¹²⁶ Este acto sirvió para que los líderes consiguieran mayor apoyo a nivel local.

Con esa legitimidad, Lorena y otros dirigentes hicieron una visita a Quito para pedir apoyo a Acción Ecológica y Pachakutik. Tan pronto regresó a Patricia Pilar, ella recuerda, decidieron empezar una de las múltiples movilizaciones y reclamos en la carretera. Ella lo relata orgullosa:

Les dije que hagamos una prueba. Vamos a hacer un pequeño cierre de vía. Era para ver cuánto apoyo teníamos. Yo mismo oficé a la policía informando que íbamos a parar la vía por un par de horas. Ese día salieron los comerciantes de Patricia Pilar y varios sectores nos apoyaron ¡Estaba feliz porque habíamos logrado organizar! Iniciamos con esa movilización. Acción Ecológica dijo que iría a Patricia Pilar, periodistas del diario *La Hora* de Quevedo también. ¡Después de eso, la cantidad de gente que llegó a la asamblea era impresionante!¹²⁷

A partir de este evento otros actores y futuros dirigentes empezaron a unirse. Las protestas ya aparecían en las primeras planas de los medios locales y, junto a las comunicaciones escritas despachadas desde la junta parroquial, el protagonismo y cohesión de este grupo fue ganando atención. En esta coyuntura, un personaje que enseguida se sumó fue Andrés Jobo, quien se enteró del conflicto por la radio y la prensa.

125. Diario *La Hora*. 7 de abril de 2004.

126. Entrevista, 26 de noviembre de 2004.

127. Entrevista, 26 de noviembre de 2015.

Andrés era un hombre de aproximadamente cuarenta años con residencia en Quevedo. Era zootecnista de formación, pero se consideraba a sí mismo como agroecólogo, campesino y académico-activista. En el momento que se unió al Comité era profesor de la universidad de Quevedo y presidente de un centro agrícola en la misma ciudad. Al igual que Lorena, Andrés conocía sobre la problemática suscitada en la represa Daule-Peripa, ya que desde la universidad había trabajado con campesinos afectados por esa represa. Una de sus características era su gran capacidad oratoria, legitimada por su posición como académico local. Ello le permitió viajar a encuentros latinoamericanos antirepresas en Argentina y Guatemala. Su comunicación con las ONG ambientalistas y políticos fue clave.

A pesar de haber llegado sin invitación a una asamblea dominical, Andrés pronto se convirtió en un líder más. Con su gran elocuencia enlazó el conflicto con debates más amplios (p. ej.: agronegocio regional, cambio climático, agrocombustibles, IIRSA¹²⁸), definiendo su participación en el Comité. Sus argumentos no solo involucraban al proyecto Baba con espacios geográficos más amplios, sino con problemáticas más complejas:

El tema Baba no es un tema aislado, forma parte de la transformación de la cuenca del río Guayas. Y el tema Baba no está desarticulado de la transformación de los grandes capitales. Baba tiene que ver con todo el proyecto de desarrollo de palma africana, de teca, de banano. Baba tiene que ver con el tema de Daule-Peripa. Tiene que ver con el tema de los agrocombustibles. Con el eje multimodal Manta Manaos. [...] O sea, lo discuto profundamente en términos ambientales, en términos de economía, en términos de geopolítica.¹²⁹

Pronto se consolidó como un intelectual y líder popular, con legitimidad para actuar tanto al interior como fuera de la organización. En julio de

128. IIRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. Fue creada en el año 2000 y está conformada por los doce países de Sudamérica. El objetivo de este foro de diálogo es la coordinación y planificación de proyectos de infraestructura en transporte, energía y telecomunicaciones. Cuenta con el apoyo financiero de varios organismos multilaterales como el BID y CAF. La IIRSA acarrea una serie de críticas, entre las más sobresalientes están las que giran en torno a que esta iniciativa ha sido presentada como una plataforma de impulso al «desarrollo», mientras sus proyectos y programas impulsan la agenda de mercados capitalistas como la minería a gran escala (p. ej.: Van Dijck 2013). Para mayor información y una mirada crítica a esta iniciativa regional, véase el trabajo de Raúl Zibechi (2006).

129. Entrevista, 16 de octubre de 2015.

2004 formó un organismo de carácter regional junto a Galo: la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Naturaleza en la Cuenca del Río Guayas (COORDENAGUA). A diferencia del Comité conformado por los campesinos de las 31 comunidades, la Coordinadora estaba constituida por otro tipo de actores, casi todos eran organizaciones provinciales fuera de la zona de influencia directa de la represa —centros agrícolas de Valencia, Buena Fe y Quevedo, la asociación de artesanos de Los Ríos, los choferes profesionales, la asociación de comedores de Patricia Pilar, etc.—. Desde ese instante se empezaron a marcar varias diferencias entre el Comité (y sus integrantes) y la Coordinadora. Así lo ratifica el mismo Andrés:

[La Coordinadora era] el ente más político, más visible, más vocero. El Comité biprovincial [en cambio] era el que estaba a la vanguardia, el que resistía frontalmente en terreno. Éramos nosotros [la Coordinadora] los que teníamos ruedas de prensa, participábamos en los debates y en los espacios públicos. Entonces [en la lucha] teníamos como niveles para darle una visibilidad y hacerlo crecer al tema: visibilizarlo en el contexto local, territorial, regional y a nivel de América Latina.¹³⁰

A pesar de que en papel el Comité formaba parte de la Coordinadora, en la práctica su articulación no era fuerte, en tanto los participantes del Comité tenían el objetivo de no permitir la construcción de la megarepresa Baba, mientras que la Coordinadora aspiraba a constituirse en una organización más regional, llevando como bandera de lucha no solo la construcción de Baba.

Tal como he mostrado en esta primera parte de la lucha en Patricia Pilar, un aspecto que desde temprano caracterizó la vida de este movimiento fue la presencia de varios líderes populares, provenientes tanto de «fuera» como del «interior» del movimiento. Cada uno contaba con capacidades, pero también con intereses propios, lo cual era una debilidad del movimiento. Cada uno se define y se presenta orgullosamente como líder de la lucha y, muchas veces, durante las entrevistas, mencionan la desconfianza o hasta cierto punto «celos» por los otros dirigentes. Así lo revela Lorena, por ejemplo: «Cuando yo ya tenía más aceptación [en el Comité], Carlos, como presidente de la junta ya no apoyó con la entrega de invitaciones para convocar a la asamblea. El parque estaba lleno de gente, unas 800 personas. Eran celos de él. [...] La junta parroquial nos trató de sabotear la asamblea quitándonos

130. Entrevista, 16 de octubre de 2015.

la electricidad». Inclusive, según Lorena, «la Coordinadora, de Andrés y Galo, fue la apertura para la división del Comité. [...] Los centros agrícolas empezaron a ver la posibilidad de sacar provecho económico mediante CEDEGE». Esta desconfianza también la reconoce el entonces sacerdote de Patricia Pilar, quien a su vez se autocalificaba como un dirigente honesto y confiable: «el rol de la iglesia Católica fue clave, porque se carecía de líderes confiables. Líderes había, pero no honestos».¹³¹ Por su lado, Andrés recuerda: «hubo traición de líderes. Se comenta que a muchos les dieron plata. Dicen que incluso a mí me han dado».¹³² Estos testimonios muestran el otro lado del movimiento social: en el que los distintos intereses y posiciones personales, sobre las que se fundamenta la lucha, están en constante pugna al interior de la organización.

A pesar de estos desencuentros internos entre los líderes —en su mayoría desentendimientos tácitos—, pronto se unieron más actores. El movimiento que se inició como una preocupación local, pronto escaló a nivel nacional e internacional. A nivel nacional se unieron políticos y representantes de las ONG Acción Ecológica y FIAN, y de las universidades de Quevedo y Agraria del Ecuador.¹³³ Las ONG y universidades apoyaron, especialmente, con capacitación sobre el debate internacional antirepresas, estrategias de lucha e inclusive con recursos económicos para movilizar a las personas. En particular, a través de Acción Ecológica y FIAN se logró atraer el apoyo de organizaciones internacionales como de International Rivers Network, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA),¹³⁴ EarthJustice,¹³⁵ Alianza Mundial para el Desarrollo Ambiental (ELAW),¹³⁶ Tribunal Latinoamericano del Agua y del relator especial de la Organización de Naciones Unidas

131. Entrevista, 28 de noviembre de 2015.

132. Entrevista, 16 de octubre de 2015.

133. El rector de la Universidad Agraria del Ecuador envió mediante oficio N.º 023-R-04 su rechazo al proyecto Baba y apoyo a la resistencia en Patricia Pilar. 24 de marzo de 2004.

134. AIDA es una organización regional que fortalece y hace cumplir el derecho internacional, con oficinas que van desde Estados Unidos hasta Chile. <https://AIDA-americas.org/es>

135. EarthJustice es una ONG internacional que se dedica a la defensa legal del medio ambiente. <https://earthjustice.org/>

136. La Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW, por sus siglas en inglés), ayuda a comunidades a manifestarse acerca del aire limpio, el agua limpia y un planeta más saludable. Es una alianza mundial de abogados(as), científicos(as) y otros(as) defensores(as) de la naturaleza, colaborando para promover los esfuerzos a nivel de base para construir un futuro sustentable y justo. <https://www.ELAW.org/>

para el derecho a la alimentación.¹³⁷ El papel de estas últimas fue fundamental, sobre todo, para ser guía en las querellas legales interpuestas al Estado ecuatoriano a nivel nacional y para ejercer presión internacional ante organismos financieros como el BID.

Si bien, el proceso de lucha estuvo fuertemente influenciado por la amarga experiencia del Daule-Peripa, con la llegada de otros actores como las ONG, la crítica internacional sobre la construcción de represas también jugó un rol importante en el ámbito local. Las ONG como Acción Ecológica habían construido un capital social desde finales de los años ochenta, que les permitió involucrarse con organizaciones internacionales que estaban luchando por los derechos de la naturaleza y en contra de megaproyectos como las represas. De esta manera, el discurso y apoyo internacional adquirió relevancia a nivel local. Esto se muestra, por ejemplo, en varias de las misivas de Andrés, en donde cita reiteradamente el informe de la Comisión Mundial de Represas (WCD 2000) y a Patrick McCully (2001) con su famoso libro *Ríos silenciados*.¹³⁸ Fue tal la influencia del contexto internacional, en el marco de la lucha local, que durante uno de mis primeros días de investigación en Patricia Pilar, el capitán de los bomberos, también participante de la protesta, me facilitó orgulloso su propia fotocopia —extensamente subrayada y resaltada— del libro de McCully, que el líder afroecuatoriano le había regalado. El capitán recordaba: «Patricio viajaba mucho con esa ONG [Acción Ecológica], ahí le dieron este libro».¹³⁹

En este contexto, entre el 2002 y 2004, las principales críticas y argumentos contra el proyecto Baba tomaron forma. Primero, a los habitantes de Patricia Pilar les inquietaba que la extensión del área inundada dejaría aisladas a miles de personas e inservibles miles de hectáreas de tierra productiva, así como la estación científica Río Palenque (mapa 3).¹⁴⁰ Segundo, con relación al agua estancada, les preocupaba las enfermedades que provocaría el

137. El Tribunal Latinoamericano del Agua es un tribunal científico-técnico y ético, no vinculante, que durante diecisiete años ha juzgado casos de problemas y conflictos hídricos y de violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento en América Latina. <http://tragua.com/>

138. Lo muestra en su comunicado «Impactos del Proyecto de Propósito Múltiple Quevedo-Vinces. Primera etapa: presa Baba y trasvase hacia Daule Peripa».

139. Entrevista, 2 de octubre de 2015.

140. Este centro es catalogado como el último remanente de bosque tropical primario de toda la costa ecuatoriana. Se estableció en 1970 como tal por la Universidad de Miami. Se le declaró como área protegida por el Gobierno nacional y, en 1998, fue adquirido por la Fundación Wong, que es una institución del grupo económico Wong, uno de los más grandes terratenientes de la provincia y el país.

aumento de mosquitos. Tercero, les intranquilizaba las afectaciones que podrían tener a consecuencia de la acumulación incontrolada de lechuguín por el agua estancada. Cuarto, debido a que el desarrollo del proyecto no incluyó la información adecuada y consulta previa a las comunidades locales, les preocupaba los impactos «escondidos» del megaproyecto. En este aspecto, las comunidades se acogieron al artículo 88 de la Constitución de la República de 1998, que señalaba: «Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su participación»; así como a la Ley de Gestión Ambiental, que en el artículo 28 estipulaba: «Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, [...], entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. [...] El incumplimiento del proceso de consulta [...] tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos». Quinto, las comunidades de Patricia Pilar reclamaban que el riego no beneficiaría a los finqueros o pequeños campesinos, sino a los grandes empresarios agroindustriales. Sexto, afirmaban que el control de inundaciones no era algo real pocos kilómetros aguas abajo del embalse, en tanto que la represa no controlara el afluente de otros ríos aguas abajo. Las demás críticas se enmarcaban en un discurso más amplio de cuestionamiento, por ejemplo, en torno a la represa como fuente de energía limpia, ya que esa infraestructura formaba parte de un sistema económico capitalista excluyente.¹⁴¹

La diversidad de capacidades de sus líderes hizo que la lucha involucrare una amplia gama de estrategias: desde el envío de oficios formales a otras entidades de Gobierno regional y nacional, a actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, hasta la utilización de los medios de prensa para publicar artículos propios, lanzamiento de amenazas a funcionarios de la CEDEGE, así como el entablamiento de querellas legales contra el Estado por el acceso a la información y medidas cautelares de protección.

A finales de 2004, las manifestaciones de inconformidad no fueron suficientes para lograr acceder a la información oficial, ni tampoco para abrir espacios de negociación con el Gobierno. Por el contrario, el entonces presidente Lucio Gutiérrez decretó: «Declárese al proyecto Multipropósito Baba, que comprende la presa de Baba, la Central Hidroeléctrica de Baba y

141. Documento «Impactos del Proyecto de Propósito Múltiple Quevedo-Vinces. Primera etapa: Presa Baba y Trasvase hacia Daule Peripa».

el Trasvase Baba-Daule Peripa, como una obra de prioridad nacional».¹⁴² Sumado a esto, a inicios de 2005, como producto de la crisis económica y de las políticas neoliberales adoptadas para promover la participación de empresas privadas en el sector eléctrico,¹⁴³ la CEDEGE lanzó una convocatoria para buscar un socio estratégico privado que apoyara financiera y técnicamente en la construcción del proyecto.

[D]ebido a la falta de recursos estatales se decidió promover la participación privada [...] en un esquema en que el privado se beneficiaría de la generación, mientras que CEDEGE sería usufructuaria de los otros componentes de la regulación del Baba (Efficacitas 2006, viii-3).

A diferencia de las fuentes de financiamiento que tuvo el sistema Daule-Peripa (a través únicamente de entidades multilaterales como el BID), el megaproyecto Baba se retomó mediante la creación de varios fideicomisos, en donde empresas privadas participaban (anexo 8). Así, a tono con el contexto neoliberal, en este caso, las empresas privadas aparecían como las principales inversoras y beneficiarias (IDB 2007).

Mientras la CEDEGE y sus socios privados seguían impulsando neciamente el megaproyecto, las medidas de hecho y reclamos de Patricia Pilar continuaban y cada vez con más fuerza. Un evento que, por un lado, motivó la intensificación de las protestas, pero que, por otro, debilitó a una parte de las comunidades, fue que a mediados de 2005, el líder afrodescendiente, Patricio, fue asesinado. Esto sucedió, precisamente, días después de haber sido nombrado presidente del Comité y de haber pronunciado un enérgico discurso en contra de la construcción de la represa. Según familiares, campesinos y otros líderes involucrados en la lucha, su muerte, presuntamente, estuvo relacionada con su postura frente al proyecto. Tal como lo menciona uno de sus familiares: «él me dijo que unas semanas atrás lo habían amenazado de muerte seis sujetos de Patricia Pilar, porque se oponía a la construcción de la represa Baba».¹⁴⁴ No obstante, no son claros los móviles de su muerte. Al margen de ello, este evento marcó la participación en la lucha y, más adelante, el destino de las comunidades afrodescendientes. A partir de este trágico suceso,

142. Decreto Ejecutivo N.º 2174. Registro Oficial N.º 446. 20 de octubre de 2004.

143. Con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en 1996 y las reformas a la Ley Básica de Electrificación del año 1998, el Estado se reservó la facultad de delegar «al sector privado, la actividad de generación y los servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica» (Díaz-Bautista 2005, 126).

144. Diario *El Comercio*. 23 de junio de 2005.

las comunidades afrodescendientes no tuvieron otro líder que lo reemplazara y fueron paulatinamente quedando con menos voz dentro del Comité y de las movilizaciones.

A pesar de este hecho, el 2005 fue decisivo para las aspiraciones del Comité y la Coordinadora. En medio de la intensificación de las protestas en Patricia Pilar, a finales de octubre, la CEDEGE escogió al socio estratégico, Consorcio Hidroenergético del Litoral (CHL),¹⁴⁵ para que implemente un diseño de represa alternativo. El Comité y la Coordinadora, en ese año, protagonizaron tres cierres de la carretera Panamericana (mapa 3), se presentaron dos acciones de amparo constitucional y un arduo trabajo de difusión a través de medios nacionales e internacionales. La estrategia de mayor importancia, de acuerdo con todos los dirigentes y exfuncionarios de la CEDEGE, fue el cierre de la carretera Panamericana a la altura de Patricia Pilar. El paro más fuerte se registró en noviembre de 2005. Así lo recuerda con gran emoción el entonces secretario del Comité:

¡La carretera estaba llena de gente por todas partes. Para pensar en la estrategia vinieron de Quito, ONG y otras organizaciones. Estábamos totalmente preparados. Esto estaba lleno de trailers y carros. Todos colaboraron. ¡El paro fue una cosa fuera de serie!¹⁴⁶

Este fue sin duda el momento clímax de la lucha. Durante el paro se materializó una fuerte solidaridad moral, construida ya por algunos años. En este evento también se evidenció el accionar de la sociedad política, como un espacio que navega sus luchas desde lo paralegal y legal. En el desarrollo de esta estrategia no solo se involucró a los gobernados y líderes populares, sino también a instituciones del Estado, como el cuerpo de bomberos local. Así lo recuerda su capitán:

Yo organicé un plan de seguridad. Primero un círculo de seguridad para todo Patricia Pilar. Luego pusimos a cubrir los puntos con los voluntarios para manejar materiales peligrosos.¹⁴⁷

145. Este consorcio estaba conformado por la constructora brasileña Norberto Odebrecht s. a. y los inversores locales Cartopel, Aquamar s. a., SONGA s. a., Importadora El Rosado s. a., Negocios Industriales Real s. a., IPAC s. a., y Papelera Nacional s. a., en donde la encargada de construir el proyecto era la constructora Odebrecht (IDB 2007).

146. Entrevista, 13 de octubre de 2015.

147. Entrevista, 2 de octubre de 2015.

La carretera se cerró completamente por tres días. Inclusive, las vías de segundo orden estaban bloqueadas de manera estratégica. Cada comunidad con su presidente se organizó para trasladar a los campesinos hasta la vía Panamericana. Participaron cerca de 3000 personas. Los alimentos fueron traídos desde el campo y cocinados por las decenas de comedores instalados a cada lado de la carretera.

La fuerza y legitimidad de la protesta (y tal vez, la «debilidad» del Estado neoliberal) se manifestaron cuando los protestantes empezaron a tomar como rehenes a policías que fueron retenidos en la iglesia, y luego en una finca, en una de las comunidades eventualmente afectadas. Los policías secuestrados sirvieron para ser intercambiados por miembros del Comité y la Coordinadora que habían sido capturados por la policía a lo largo de las protestas. El Gobierno sabía que al tratarse la Panamericana de una carretera de gran importancia, su flujo no podía cortarse por mucho tiempo. Es así que, al tercer día de cierre, la fuerza pública ingresó violentamente por aire y tierra para dispersar a los manifestantes. El Estado, inclusive, utilizó avionetas de fumigación privadas, comúnmente utilizadas para aspersiones aéreas de monocultivos, para lanzar bombas lacrimógenas sobre el pueblo. Este paro tuvo mucha atención de la prensa y difusión a través de las ONG involucradas. Varios líderes recuerdan esta protesta, en particular, con mucho orgullo, tal como lo anota Galo: «¡Fue la única lucha en el país que se ha ganado, porque se formó desde abajo!».

Después de este evento, la política de los gobernados, materializada hasta entonces en protestas y reclamos de distinta índole, tuvo resonancia en los oídos y planes de los proponentes del proyecto. Antes de finalizar el año, la CEDEGE decidió que el megaproyecto multipropósito Baba cambiaría sus diseños para atender los reclamos de las comunidades. Así lo advertía un titular del diario *Hoy*:

Presa Baba cambia su diseño. El número de hectáreas expropiadas baja de 4420 ha a 1012 ha con nuevo proyecto. [Se] reduce el impacto social y ambiental en la zona. [...] [Sobre todo el desalojo de personas del área afectada se reducirá en un 90%.¹⁴⁸

Estos cambios marcan un hito en este conflicto. Para muchos habitantes de Patrica Pilar, la adopción de diseños alternativos ya fue un éxito. Tal como lo recuerda el sacerdote de Patricia Pilar:

148. Diario *Hoy*. 12 de diciembre de 2005.

El prefecto dijo que cambiarían el diseño de la represa; [...] cuando escuché eso yo me di por ganado ese día. ¡Ya ganamos! A partir de ahí ya no me metí más. Sabía que el proyecto había cambiado de rumbo y no afectaría a los campesinos.¹⁴⁹

O como lo reconoce el secretario del Comité, al resaltar una de sus estrategias de lucha: «La vía fue un elemento clave para ganar la lucha. Si hubiésemos estado en una zona retirada en el campo, no creo que hubiéramos tenido tanto éxito». Sin duda, la gran presión ejercida desde los gobernados en Patricia Pilar tuvo sus efectos. A pesar de que la respuesta de la CEDEGE no fue descartar el proyecto, la reconsideración de sus diseños era un gran paso para los intereses de miles de comuneros y campesinos. No obstante, el diseño alternativo tendría efecto directo sobre la movilización social, la protesta y la vida de las comunidades afrodescendientes, que recientemente habían perdido a su líder.

Adopción del diseño alternativo: el orden hidráulico y el debilitamiento de la sociedad política (2006 al presente)

Diseño alternativo

¿Me pregunta si influenciaron las protestas de Patricia [Pilar] en el proyecto? ¡Sí! Claro que incidió la protesta y las demandas racionales de la población. [...] Costó más, sí, pero en cambio se disminuyó la afectación (alto directivo de la CELEC, exfuncionario de la CEDEGE).¹⁵⁰

La presión social que ejercieron las comunidades de Patricia Pilar tuvo una influencia importante sobre las decisiones tecnocráticas y el diseño alternativo de la tecnología. Después de las protestas más fuertes, la CEDEGE y el CHL modificaron el diseño original y optaron por implementar uno alternativo. El diseño alternativo difiere del original en varios aspectos infraestructurales (cuadro 4) y de localización geográfica. La CEDEGE, acogiendo los principales argumentos de reclamo de las comunidades agrupadas en el Comité y la Coordinadora respecto a las posibles afectaciones, intentó evitar, en el nuevo diseño, el aislamiento de las comunidades, la inundación de

149. Entrevista, 28 de noviembre de 2015.

150. Entrevista, 27 de noviembre de 2015.

CUADRO 4
AFFECTACIONES SOCIOAMBIENTALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL DISEÑO ALTERNATIVO SEGÚN LOS PLANES OFICIALES

| DESCRIPCIÓN | CIFRAS |
|--|---|
| Impactos sobre la población desplazada y receptora | 191 habitantes |
| Viviendas afectadas por el embalse | 41 viviendas (incluye caseríos) |
| Infraestructura afectada por la creación del embalse | 1 escuela |
| Área de inundación del embalse y expropiaciones | 1099 hectáreas |
| Seguridad de la población aguas abajo (altura de presa) | 20 metros |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 110 hm ³ |
| Potencia instalada para la generación eléctrica | 42Mw |
| Calidad del agua del embalse e impacto en la salud pública | Embalse de vertido constante sin compuertas. Impacto en la salud minimizado |
| Riego | Propiedades al borde del embalse |
| Agua potable | No especificado |

Fuente: Caminosca (2004a); Efficacitas (2006, 2013).

Elaboración: propia.

las tierras productivas, la propagación de lechuguín y las afectaciones en la salud pública. Esto lo ratifica la constructora mediante un boletín de prensa:

Los cambios introducidos fueron definidos con base en las opiniones y sugerencias de las personas afectadas, es decir: reducción del área del embalse para evitar que fueran afectados pueblos, puentes, escuelas y carreteras; cambio de tipo de vertedero para evitar la proliferación de lechuguínes y maleza acuática; construcción de la ruta «entrelagos», garantizando la comunicación en la zona del proyecto (Odebrecht s. A. s/f).

Las visiones sociales de las comunidades locales se materializaron en el diseño alternativo del megaproyecto. Tal como se muestra en el mapa 4, se cambió el sitio de la presa 15 kilómetros al sur de Patricia Pilar. Esto hizo que la mayor parte de las comunidades involucradas en las protestas quedaran fuera de la afectación directa del proyecto.

También se disminuyó la altura de la presa de 55 a 20 metros. Se modificó el diseño hidráulico de la represa: de uno regulado con compuertas con agua semiestancada y con vertedero transversal, a uno sin compuertas de regulación, con vertido constante, y un vertedero «pico de pato» (figura 4).

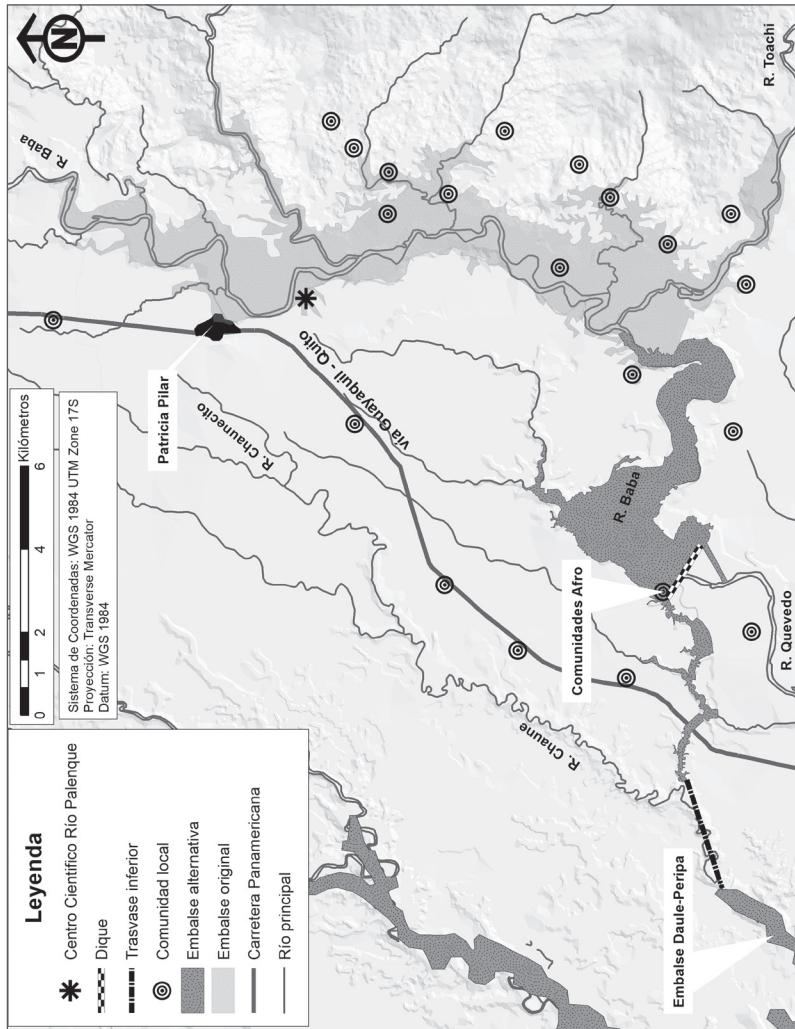
Estas reformas permitieron, a más de inundar menos de un tercio del área planificada originalmente, contar con un embalse de agua en permanente movimiento, lo que ayudaría a evitar la proliferación masiva de lechuguín y a mantener, relativamente, una buena calidad de agua. Esto lo ratifica el EIA:

El vertedero de lámina libre en la presa principal presenta ventajas respecto a la calidad del agua [...] comparado con la descarga regulada por compuertas.

El vertido constante va junto con el tamaño reducido del embalse y contribuye a minimizar los impactos sobre la salud pública por la proliferación de vectores (Efficacitas 2006, VIII-11).

A pesar de no ser totalmente claro *cómo* se tomaron las decisiones al interior de la CEDEGE, y su relación con los proponentes —CHL— para cambiar los diseños, y *qué* otros intereses se pusieron en juego en la toma de tal decisión, sin duda, la afectación a las tierras campesinas fue significativamente menor con el diseño alternativo. Esta disminución se dio no solo porque el diseño de la obra cambió, sino también porque fue ubicada en otro sitio (mapa 4).

Según los testimonios de mis entrevistados y la constatación directa a través de los recorridos de campo, el diseño original afectaba solo a dos haciendas grandes, el resto eran tierras de pequeños y medianos agricultores. En contraste con el diseño alternativo, tal como se muestra en la figura 4, la mayor parte de las tierras inundadas son de grandes haciendas y empresas agroindustriales, incluidas las haciendas del grupo Wong y otros terratenientes como Carlos Méndez. El correspondiente 2% (figura 5) afecta fundamentalmente a tierras en manos de las comunidades afrodescendientes (mapa 4). Es interesante notar que, contrariamente a la mayor parte de estudios acerca de impactos sobre megareservas en donde los principales afectados son grupos sociales vulnerables (Khagram 2004; Lynch 2006; Leslie 2007; Dye 2016; Einbinder 2017), en el caso de Baba, la mayor parte de tierra afectada bajo



Mapa 4. Diseño alternativo de proyecto Baba y principales caseríos.
Fuente: Archivos HidroPacífico.
Elaboración: propia.

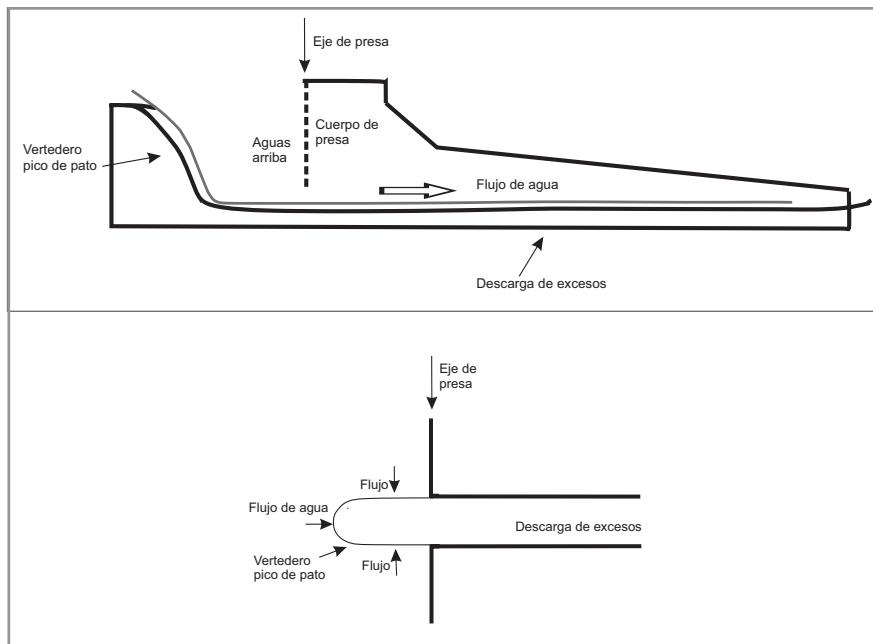


Figura 4. Vertedero pico de pato. Corte transversal (arriba) y vista superior (abajo).
Elaboración: propia.

el diseño alternativo estaba en manos de actores poderosos. Estos grupos negociaron compensaciones muy elevadas y lucrativas.

Debilitamiento de la lucha social

Estos cambios fueron cruciales, tanto para dar un nuevo aire a la implementación del proyecto, como para cohesionar el movimiento social de Patricia Pilar. En enero de 2006 se adjudicó la obra a Odebrecht s. a. (parte accionaria del CHL) y, en mayo de 2006, se firmó el contrato de capitalización accionaria con las empresas privadas, en la central hidroeléctrica Marcel Laniado. En ese evento anunciaron que «prevé[n] iniciar la construcción del plan multipropósito Baba a más tardar a finales de septiembre. [...] [E]speran recibir la licencia que debe otorgar el Gobierno nacional para el ejecútese de la obra». En ese evento, además, se conoció que «una vez lista [la represa], el consorcio operará la nueva central hidroeléctrica durante 35 años, tiempo en el cual podrá consumir la generación de electricidad para sus empresas y su sobrante podrá ser comercializado [al Estado]. Cumplido el plazo, la obra

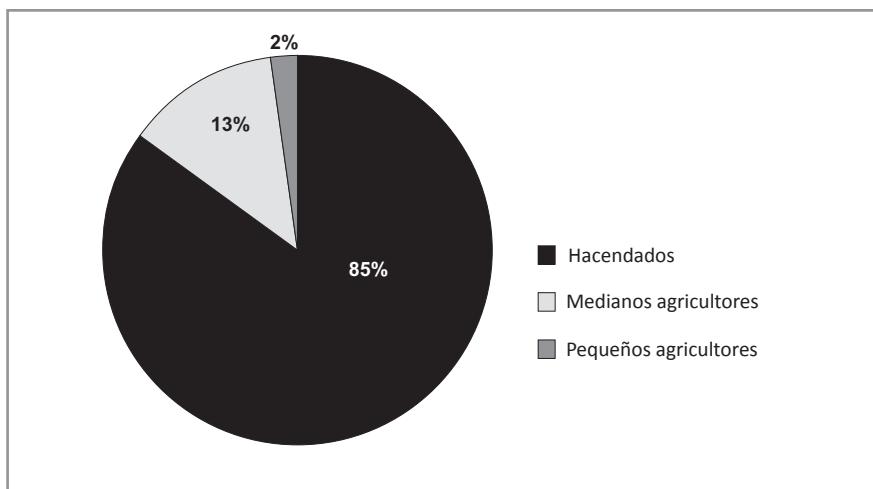


Figura 5. Tipos de propiedades afectadas por el diseño alternativo del proyecto Baba.
Fuente: IDB (2007).

retornará al Estado».¹⁵¹ Las presiones económicas y políticas de estos anuncios demuestran que la aprobación del estudio de impacto ambiental estaba en gran medida «garantizada» y que se trataba de un mero trámite burocrático. El megaproyecto estaba destinado a construirse a cualquier precio. Además, se evidencia que el proyecto, contrariamente a la justificación de constituirse en una solución para el problema energético del país, se estaba construyendo para abastecer de energía eléctrica a gran parte de las empresas privadas que formaban parte de CHL.

El cambio de diseño provocó una sensación de éxito y satisfacción en la mayoría de comunidades en protesta. En ese contexto, los nuevos bloqueos de vías no tuvieron mucho éxito. Tal como lo recoge esta nota de prensa: «Comunidades de Patricia Pilar no apoyaron al paro por falta de difusión de los organizadores».¹⁵² Así también lo admite con desilusión el secretario del Comité: «El Comité ya no nos reuníamos mucho».¹⁵³ En este punto, el sentido de solidaridad moral o sentido de comunidad desapareció.

Mientras el megaproyecto avanzaba con paso firme, a partir del año 2006, la cohesión de las comunidades locales y su participación en el Comité mermó significativamente. Así lo recuerda Andrés con algo de frustración:

151. Diario *Expreso* (Guayaquil). 10 de mayo de 2006. http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--33868

152. Diario *La Hora*. 22 de agosto de 2006.

153. Entrevista, 13 de octubre de 2015.

Cuando la bajan [a la represa] fue estratégico para ellos, porque no teníamos cómo movilizar más a la gente de Patricia Pilar; [...] entonces reconstruir un nuevo discurso para la dirigencia fue un poco difícil (testimonio de Andrés Jobo).¹⁵⁴

A pesar de que la protesta era por la no construcción de la represa, los cambios propuestos en el diseño —en donde dejaba fuera del área de inundación a la mayor parte de comunidades campesinas en protesta—, hicieron que estas últimas perdieran el interés para seguir en la lucha. «Como ya dijeron que no van a afectar las comunidades, que no serían afectadas, ya no salían a luchar»,¹⁵⁵ recuerda el secretario del Comité.

Los rezagos de la organización social antirepresa continuaba, pero ya no contaba con el apoyo multitudinario de los años anteriores. Gran parte de los campesinos y pobladores del casco urbano de la parroquia Patricia Pilar fueron abandonando poco a poco la lucha. En las notas de prensa ya no aparecían más fotos de multitudinarias manifestaciones. Las voces y rostros solitarios de los líderes como Galo, Andrés y Lorena, junto a unos cuantos que fueron sumándose a lo largo de la lucha, eran las voces de la oposición que quedaron. De igual manera, el nombre del Comité se desvaneció poco a poco.

El liderazgo de algunos intelectuales populares, ONG locales y organismos internacionales mantuvo viva la lucha por unos meses más. Dada la disminución del apoyo popular, las estrategias de protesta también cambiaron. Pasaron de las calles a las oficinas judiciales nacionales y organismos internacionales. En esta etapa, los reclamos más importantes giraban en torno al acceso a la información oficial sobre el nuevo diseño, su socialización, el derecho a la consulta previa y el derecho a una compensación justa. Para entonces, las acciones de los opositores al proyecto, que ya se identificaban solo como Coordinadora, eran débiles y desarticuladas. Una de ellas fue, por ejemplo, el robo de información técnica oficial a un grupo de ingenieros de la constructora, a través de una estrategia ideada entre varios líderes. Así lo recuerda Galo con cierta picardía:

Aquí les robamos información. Aquí en el hotel [de Patricia Pilar] estaban alojados unos técnicos de Odebrecht y nosotros les robamos. Varios de los nuestros les convocaron a una reunión [argumentando] que era para conversar amigablemente. Mientras los ingenieros estaban en la cita

154. Entrevista, 16 de octubre de 2015.

155. Entrevista, 13 de octubre de 2015.

con los dirigentes, otros compañeros fueron y les robaron planos, computadoras, todo, todo. Entonces ellos, [los técnicos] salieron corriendo, asustados. Incluso ellos [los ingenieros] mentían en el hotel diciendo que no eran de Odebrecht.¹⁵⁶

El resultado de esta acción fue el acceso a varios documentos en donde constaban los diseños de la represa. El objetivo era socializar con las comunidades los nuevos planes gubernamentales, ya que los procesos de socialización organizados por la CEDEGE y la empresa no eran lo suficientemente accesibles. Este objetivo no se consiguió, ya que los documentos extraídos no fueron analizados más que por los dirigentes de la Coordinadora.

Este hecho evidencia tres aspectos: primero, la materialización de un cambio de estrategia de lucha, una más relacionada con la idea de formas cotidianas de resistencia (Scott 1985) que con la idea inicial (colectiva), propia de la contienda política —característica común de los movimientos sociales antirespresa—. Segundo, la búsqueda de la reconstrucción de un discurso que pudiese generar nuevamente un sentido de solidaridad moral, similar al de años anteriores. Y tercero, la debilidad del movimiento social, en parte, debido a que el poder estaba mayormente alojado en los líderes de la Coordinadora, y no en los campesinos y demás pobladores, como sucedió en el primer momento de la lucha. Pero, sobre todo, porque muchas de las comunidades ya no iban a ser inundadas con el diseño alternativo, y perdieron su interés en la lucha antirespresa.

El debilitamiento del movimiento social estuvo acompañado de una disminución al rechazo de los técnicos de la CEDEGE y la constructora. Es así que, a partir del cambio de diseño, a los proponentes del proyecto se les facilitó el acceso a varias comunidades y a sus líderes, con el fin de socializar el nuevo proyecto y negociar posibles compensaciones económicas. Estos procesos de socialización incluyeron la negociación de tierras con campesinos, en especial con las comunidades afrodescendientes que, bajo el diseño alternativo, eran las únicas a ser afectadas directamente. «El problema es que Odebrecht entró a convencer a la gente de las comunidades», recuerda Andrés. En su gran mayoría, las negociaciones se realizaban a nivel individual, lo cual empezó a develar la fragmentación social latente, que era el aspecto estructural de la organización.

En esta etapa, otros actores también tomaron, como los políticos locales, un aunque efímero protagonismo. Presidentes parroquiales, alcaldes y

156. Entrevista, 13 de octubre de 2015.

el prefecto de Los Ríos saltaron a la palestra para defender a los opositores. Su apoyo fue relativamente importante para mostrar que la lucha campesina tenía apoyo político. Sin embargo, muchos de ellos, de acuerdo con los rumores de los campesinos, después de ganar protagonismo recibieron coimas de la empresa constructora y favores políticos a cambio del apoyo al mega-proyecto. En esa coyuntura los rumores de haberse «vendido» involucraron a líderes como Andrés y Galo, dejando al descubierto la desconfianza y celos presentes desde el inicio de la lucha. Así lo recogía, por ejemplo, el diario *La Hora* en un artículo del 25 de agosto de 2006: «Autoridades están divididas». En el contenido de este resalta que se realizó una asamblea «[p]ara despejar algunas diferencias entre dirigentes y pobladores de la parroquia Patricia Pilar». Dada la evidente desconfianza en los líderes, Carlos ya había sido deslegitimado por las comunidades por, supuestamente, haber recibido un pago con sobreprecio por sus tierras que se inundaron bajo el nuevo diseño.

En la misma edición de *La Hora* se mencionan comentarios del entonces gobernador provincial, en los cuales se refería a varios intelectuales y líderes populares: «Dirigentes politizados. [L]os que dicen ser defensores de los pobladores de Patricia Pilar, ni siquiera viven en la parroquia, ellos participan con fines políticos». Al margen de considerar o no este tipo de noticias como tendenciosas o manipuladas por grupos dominantes y oficialistas, son, sin duda, un reflejo de lo que las bases campesinas percibían:

Nosotros los afectados luchábamos con cuerpo y persona [...]. Los que venían del centro agrícola de Quevedo y de otros lados solo eran unos dos. Ellos solo nos utilizaban para negociar y decir que tenían un gran apoyo.¹⁵⁷

Así también lo recuerda otro de los campesinos que iba a perder sus tierras con el diseño original: «Después [del paro de tres días], los líderes fueron cediendo, o los mataron como a Patricio Hurtado, o se dieron de baja por su cuenta, en cambio nosotros los verdaderos afectados quedamos». Añade diciendo: «Mi sospecha era que muchos dirigentes no tenían ni tierra por acá, ¿entonces, cuál era su interés? ¡Yo les dije que yo sí tengo tierras! Yo sí voy a perder». ¹⁵⁸ En esa coyuntura, en 2006, la joven lideresa Lorena también se desvinculó de la lucha. Una enfermedad la obligó a ausentarse por

157. Entrevista 28 de octubre de 2015.

158. Entrevista 28 de octubre de 2015.

varios meses y, más tarde, cuando trató de regresar, la lucha había pasado a otro momento. Según ella, «ya la organización se había fragmentado por los intereses de los dirigentes». Asegura que «en una reunión, [entre los líderes y varios proponentes] en Buena Fe, me di cuenta que muchos dirigentes se habían vendido ya».

Como he mencionado, esto muestra que, a pesar de haberse mostrado una cohesión social fuerte durante los primeros años, tras el cambio de diseño de la represa, el movimiento social se debilitó. Tal como se aprecia en el mapa 4, la reubicación de la presa y la reducción del área de inundación (con el vertedero pico de pato) previno la afectación directa de la mayor parte de comunidades involucradas en la lucha. Esto hizo que estas pierdan interés en seguir con la movilización. El argumento principal de la lucha: el miedo a perder la tierra. Así como sucedió en el proyecto Daule-Peripa, desapareció y con él la solidaridad moral. Esto desconcertó a los líderes populares y permitió abrir las grietas del Comité y la Coordinadora para facilitar el trabajo de promoción del proyecto. Sin duda, para los líderes como Andrés y los representantes de las ONG locales, fue difícil rearmar la lucha.¹⁵⁹ Además, estos cambios en el diseño dejaron al descubierto distintos intereses que residían al interior del movimiento social. Primero, estaban los líderes como Carlos que, con el cambio de diseño, la represa le inundaba tierras. En ese momento se separó de la lucha y prefirió hacer una buena negociación con la CEDEGE. Segundo, estaban líderes e intelectuales populares que venían de «fuera» como Andrés que, al no tener tierras en la zona y no contar con apoyo social para rearmar la lucha, también se desvinculó y se produjeron rumores de que recibió coimas de los proponentes del proyecto. Tercero, los afectados con el nuevo diseño, como las comunidades afrodescendientes, quedaron solos y disminuidos en su poder de negociación con los proponentes. Los afrodescendientes tuvieron que recibir las compensaciones que les ofrecía la CEDEGE y los otros proponentes del proyecto. Cuarto, las grandes haciendas localizadas en el perímetro del embalse fueron las grandes beneficiarias

159. Varios de los aliados supralocales seguían movilizando las estrategias que estaban a su alcance. Por ejemplo, el Tribunal Latinoamericano del Agua condenó al proyecto Baba por sus potenciales daños socioambientales. Acción Ecológica, por su lado, junto a los líderes de la Coordinadora, presentaron observaciones al EIA ante el Ministerio del Ambiente y se reunieron con representantes del BID —financista de una parte del proyecto— para solicitarles que detengan el préstamo para esta obra. En el ámbito internacional, la ONG International Rivers intercedió por la Coordinadora frente al BID, para exigir el retiro de la institución del proyecto. Todas estas acciones hicieron, inclusive, que Jean Ziegler, relator de Naciones Unidas para la alimentación, criticara el proyecto y solicitara su paralización. Sin embargo, ninguna de estas gestiones tuvo mayor trascendencia.

del proyecto, por tener acceso gratuito al agua para riego y, eventualmente, por recibir indemnizaciones económicas excesivas por sus tierras inundadas. A diferencia de la población afrodescendiente, evidentemente, su economía no dependía de la parte de su propiedad que, con el diseño alternativo, se iba a inundar. Finalmente, tal como sucedió con los afectados en Daule-Peripa, la intensidad y larga lucha terminó agotando a muchos campesinos y líderes. Así lo recuerda Andrés: «la lucha también se debilitó por el cansancio físico de la gente, por la intensidad de la lucha. Faltó relevo». Mientras la tecnocracia podía ser revelada y su bienestar material (por ejemplo: salario, comida, casa, etc.) no se veía afectado por su participación en el conflicto, los pobladores debían sacrificar aspectos estructurales de su vida que limitaban su bienestar. Su participación en la lucha social significaba, por ejemplo, inversión de tiempo y energías en las protestas, en desmedro de sus cultivos, fincas y trabajos. Así, mientras que para los tecnócratas y funcionarios públicos el conflicto era de lunes a viernes, en horario de oficina, para las comunidades era una lucha permanente.

Mientras los rezagos de la organización social trataban de navegar el nuevo contexto de decaimiento, el Gobierno aprovechó el momento y con rapidez avanzó con el proceso de implementación del proyecto. En un intento por legitimar y «transparentar» los temas socioambientales, en mayo de 2006, la constructora firmó un convenio con una universidad de Quevedo para que hicieran los términos de referencia para realizar el EIA. Enseguida, se contrató a la consultora Efficacitas Cía. Ltda. Y en julio de 2006 se puso en funcionamiento el primer centro de información pública sobre el proyecto, en la cabecera cantonal de Buena Fe. Al mes siguiente se firmó el contrato de construcción del proyecto con la constructora brasileña. En noviembre, el Ministerio de Ambiente aprobó la licencia ambiental junto al EIA y el Plan de Manejo Ambiental, y en el mismo mes se inició, en terreno, la construcción del proyecto.

Bajo el discurso progresista del nuevo Gobierno liderado por Rafael Correa, en el ámbito local se revitalizaron las esperanzas de detener el proyecto. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. A inicios de 2007, el ministro de Energía, Alberto Acosta, visitó Patricia Pilar y criticó abiertamente el proyecto. No obstante, su voz fue ignorada al interior del nuevo Gobierno, y la construcción del megaproyecto continuó. Para entonces, el proyecto había empezado a construirse bajo la agenda del cambio de matriz energética que abanderaba el nuevo Gobierno. Así, en junio de 2013, la represa fue inaugurada por el entonces presidente Correa con el nombre de Proyecto Multipropósito Baba.

Este hecho marcó, aparentemente, el fin de este conflicto; sin embargo, el cambio de diseño de la represa no solo dividió la protesta. Desveló cómo el desbalance de las relaciones de poder, al interior del movimiento social, terminó por afectar diferenciadamente a los distintos integrantes de la movilización social de Patricia Pilar. Bajo el diseño alternativo, las comunidades afrodescendientes, antes lideradas por Patricio, quedaron divididas y sumergidas por las aguas del embalse.

A pesar de que las comunidades afrodescendientes tuvieron una representación importante al inicio de la lucha a través de su líder, después de su muerte, en el 2005, y de la adopción del diseño alternativo pasaron a ser los actores más vulnerables del debilitado movimiento social. Por un lado, los campesinos de otros sectores de Patricia Pilar, que en los inicios de las protestas marchaban junto a las comunidades afrodescendientes, ahora los acusaban de haberse vendido y que, en gran medida, por su culpa se había llegado a construir la represa. Sin embargo, al analizar cómo quedó la situación de los afrodescendientes después del cambio de diseño, la alternativa de esas comunidades para tener «éxito» era alcanzar, oportunamente, una buena negociación por sus tierras con la empresa constructora. Estas comunidades ya no tenían apoyo popular para resistir y, además, los técnicos de la empresa amenazaban: «si no negocian pronto se quedarán sin nada». En ese contexto, las comunidades afrodescendientes negociaron sus tierras. Tal como lo recuerda una campesina afrodescendiente:

Escuchamos que en Patricia Pilar habían ya cogido plata, entonces no íbamos a quedarnos el único recinto en contra [de la represa] como pendejos. Ahí es que nosotros también negociamos.¹⁶⁰

Por otro lado, a pesar de que la mayoría recibió una compensación económica por la pérdida de las tierras y cultivos, importantes medios de producción y subsistencia se perdieron. Junto a la tierra, se perdió la pesca. Así lo recuerda una campesina que permanece en el sitio, junto a la represa:

Antes si pescábamos porque cuidábamos pozas para pescar. Ahí si sacábamos para vender. Cogíamos Guaña, Bocachico ¡todo! Ahora ya no se coge nada porque es muy hondo y ya no hay peces como antes. El pescado de la represa ha cambiado el sabor. Sabe como a lodo. ¡Antes era rico! Antes nosotros cogíamos el pescado, ahora ya nos toca comprar, ¡imagínese!

160. Entrevista con familias afrodescendientes en la Ceiba y Peripa del Baba. Octubre de 2015, septiembre de 2017.

A pesar de haber quedado con un gran embalse a pocos metros de sus casas, muchas familias no tienen acceso al agua: ni potable, ni para riego. Las grandes plantaciones de banano y haciendas son las únicas que extraen el agua del embalse para riego, con grandes bombas. Las paradojas del Daule-Peripa se han repetido en sus vidas. En la actualidad, estas comunidades navegan entre los esquivos beneficios ofrecidos por el departamento de relaciones comunitarias de la empresa que opera la hidroeléctrica, y los impactos negativos que dejó esta. Este caso refleja el modo en que a pesar de que mediante la movilización social se logra, eventualmente, influenciar sobre las decisiones tecnológicas de los megaproyectos hídricos en beneficio de las comunidades locales, comúnmente, la tecnocracia logra prevalecer a través de la adaptación al contexto y sus características de resiliencia institucional.

Discusión y reflexiones finales

En este capítulo he presentado cómo los afectados también «hablan» y hasta qué punto la tecnocracia se adapta. Muestro el contexto en el que surgió el movimiento social; y, cómo y hasta qué punto las comunidades locales de Patricia Pilar lograron influenciar sobre el desarrollo de la tecnología. Si bien el sistema multipropósito Baba fue planificado, inicialmente, durante el período desarrollista, su rediseño y gran parte de su construcción e implementación se dieron, principalmente, durante el final del período neoliberal. Este contexto socioeconómico y político informó, en parte, las contingencias de cómo se retomó y ejecutó esta megaobra. Por un lado, el retiro del Estado y la crisis, como resultado de las políticas neoliberales, abrieron las puertas para que la empresa privada tenga una importante participación (por lo menos en las fases iniciales). Por otro lado, el «vacío» dejado por el Estado, la visibilidad de los impactos socioambientales ocasionados por otros megaproyectos hídricos como el sistema Daule-Peripa, y el descontento social fueron los precursores de un *boom* de organizaciones no gubernamentales ambientalistas y movimientos sociales. Estas últimas, a diferencia de la época desarrollista, tuvieron un mayor protagonismo en el desarrollo de los megaproyectos hídricos.

A partir de este último aspecto, gran parte del capítulo lo he ocupado para describir y analizar el proceso de organización y contestación que protagonizó la población de Patricia Pilar y las comunidades vecinas en contra de la construcción de la represa multipropósito Baba. Similar a lo que muestran Sanchis-Ibor, Boelens y García-Mollá (2017), para el caso de remoralización y

desnaturalización tecnológica en sistemas de riego en Senyera (España), a través del estudio del caso del megaproyecto Baba, demuestro que la tecnología hídrica no es solo una expresión del conocimiento «experto» y tecnocrático. Por el contrario, las tecnologías, como este megaproyecto, son manifestaciones materiales híbridas, que pueden ser influenciadas de manera estructural por actores más vulnerables también. Este caso señala, desde la propuesta de SCOT, cómo la fuerte interrelación que distintos y muchas veces antagónicos grupos sociales relevantes influencian sobre los procesos de flexibilidad interpretativa, y de cierre y estabilización de este tipo de tecnologías. Esto pone en evidencia que los megaproyectos hídricos pertenecen a la esfera de lo político, en donde distintos tipos de actores —tecnócratas, políticos, campesinos, intelectuales, marginalizados, etc.— se constituyen en agentes políticos con capacidad de participar como tal en procesos de toma de decisiones y de cambio. Desde esa misma perspectiva, el estudio del megaproyecto Baba contribuye, además, a reflexionar sobre, ¿cómo y cuándo las comunidades locales se movilizan?, ¿hasta qué punto los resultados de tal movilización podrían ser considerados «exitosos»?, ¿cómo los gobernados se relacionan con los gobernantes?, y ¿hasta qué punto los cambios logrados tras la movilización representan una adaptación o un cambio estructural?

Sin duda, la política de los gobernados tuvo un efecto significativo en el desarrollo del llamado proyecto multipropósito Baba. La presión ejercida mediante la movilización social y la resistencia logró el rediseño de la infraestructura de toda la obra. Primero, se ubicó el eje de presa en un sector con menor densidad poblacional que con el diseño original. Se redujeron 35 metros de altura de la presa, lo cual, a su vez, disminuyó en más de dos mil hectáreas el área inundable y expropiable. Además, el diseño hidráulico, que cuenta con la implementación de un vertedero en forma de «pico de pato», posibilita bajar el nivel del agua y permite que el embalse tenga un flujo continuo. Esta modificación evita el semiestancamiento del agua y los problemas de salud y proliferación de maleza acuática en el espejo del embalse, a diferencia del modo en que estaba planificado en el diseño original y común en otros proyectos como en el multipropósito Daule-Peripa. No obstante, estas «ganancias» sociales, reflejadas en el hierro y cemento, son discutibles.

En este punto me permito discutir una de las críticas o limitantes que trae Gudavarthy (2012) a la propuesta de sociedad política de Chatterjee. Esta crítica señala que la idea de sociedad política no permite generar cambios estructurales. Es decir, plantea que la sociedad política no ofrece una narrativa que da paso a alternativas frente al desarrollo dominante o capitalista. Por tanto, afirma que la sociedad política, a través de una política de

los gobernados, permite un proceso de «adaptación» a la estructura, más no un desafío medular a esta. No obstante, una lectura desde el caso Baba, ofrece algunos matices a tal crítica. Si bien la presión de los gobernados sobre el megaproyecto no logró detener el proyecto por completo, ni permitió un cambio de 180 grados en la estructura que informa a este tipo de políticas hídricas en general, sí logró la generación de un precedente interesante para los promotores, tecnócratas, expertos, activistas, campesinos y la sociedad en su conjunto. Fue un logro muy importante para cientos de campesinos que no perdieron sus tierras y formas de vida. La anécdota presentada sobre la influencia de la lucha local de Baba, de luchas internacionales, sistematizadas en el reporte de la Comisión Mundial de Represas y en el libro *Ríos silenciados*, o el intercambio de experiencias con los afectados por el Daule-Peripa, son ejemplos concretos de cómo la resistencia desde la sociedad política tiene el potencial de generar una memoria colectiva que, en el mediano y largo plazo, tiene el potencial innegable de generar cambios estructurales importantes sobre la gobernanza de megaproyectos y del agua. De tal manera, lo que durante la construcción del Daule-Peripa casi no era cuestionado, en Baba fue altamente contestado. La experiencia y memoria colectiva de los afectados del Daule-Peripa y vecinos en Patricia Pilar muestra que la aparente dureza estructural de la tecnología hídrica no está grabada sobre piedra. La activación de la sociedad política en Patricia Pilar, en torno a la amenaza del proyecto multipropósito Baba y su influencia transformadora, muestra que la tecnología no es autónoma (apolítica), ni tampoco ajena al contexto en el que se circscribe, sino que esta se encuentra profundamente informada por valores sociales, políticos y culturales.

La trayectoria de la movilización en contra de este proyecto multipropósito presenta cómo aquellos, mediante su participación en la sociedad política, han logrado materializar, en parte, sus reclamos y replantear al Estado-nación su reconocimiento como «ciudadanos». En este sentido, podría entenderse a la lucha de la sociedad política como utilitaria o clientelar, cuyo fin último es el intercambio de beneficios entre las ofertas estatales y las necesidades de los gobernados. Sin embargo, lo que muchos líderes y campesinos reclaman es respeto a sus formas de vida y reproducción social. Así lo planteaba, por ejemplo, Galo al referirse a la esencia de las protestas: «¡Lo que nosotros queríamos es que nos *respeten!* Nuestra posición frente a todo [el proyecto Baba] era esa». Si bien esta situación muestra que, en el fondo, la sociedad política se involucra en una política de los gobernados para reclamar derechos y tratar de ampliarlos, el objetivo fundamental es cuestionar la gubernamentalidad. A través de este objetivo, los gobernados quieren,

en efecto, contestar las normas y valores con los cuales los gobernantes pretenden gobernar. Utilizando la experiencia previa en el Daule-Peripa, lograron innovar repertorios de lucha y consolidar, gracias también al contexto sociopolítico, un movimiento social con capacidad de reclamos de cambio o programa.

Este caso contribuye con algunas reflexiones sobre cómo y cuándo las comunidades (eventualmente) afectadas por los megaproyectos se movilizan. Primero, es importante construir un sentido de «solidaridad moral» o de «comunidad» como pegamento del movimiento social. Esto es claro si comparamos entre el momento de la organización bajo el diseño original, y el momento bajo el diseño alternativo. En el segundo momento se produjo una ruptura de esa solidaridad, lo cual llevó al paulatino debilitamiento y desgaste del movimiento social en su conjunto. La segunda reflexión está atada a las estrategias de protesta o de motivación para protestar. Si argumento que la construcción de un sentido de identidad colectiva es importante, es casi inescapable preguntarse sobre el *cómo* y *qué* genera esa unión e identificación. A pesar de que los habitantes de Patricia Pilar no tenían una larga historia en común sobre la cual construir esa identidad colectiva, el conocimiento acerca de la amarga experiencia de los afectados por el sistema multipropósito Daule-Peripa produjo una toma de conciencia que, eventualmente, produjo su unión. Este caso denota la importancia de transmitir la historia ambiental y de resistencia en el tiempo y en el espacio: las luchas sociales del futuro se construyen en gran medida sobre aquellas precedentes. La tercera reflexión viene informada por la idea de una geografía de la movilización social. La ubicación geográfica de Patricia Pilar fue clave para lograr ejercer presión sobre los gobernantes. El cierre de una de las principales vías de comunicación entre la costa y la sierra fue fundamental para potenciar las capacidades de negociación y contestación del Comité y la Coordinadora. Este capítulo muestra que la ubicación geográfica de las protestas es crucial, ya que pueden ser factores determinantes para el éxito o fracaso de las luchas sociales en la medida que «incomodan» al poder gubernamental (Tilly 2000).

El éxito que lograron las protestas fue muy importante en el campo socioambiental y tecnológico para miles de familias, pero también fue un éxito parcial para otras que fueron perjudicadas con el diseño alternativo. En este capítulo señalo que no solo la tecnología es influenciada por el contexto político en el cual se circumscribe, sino que la tecnología misma es importante porque da forma al contexto político mismo. Chatterjee afirma que cuando el contexto político cambia, la capacidad de la sociedad política de alcanzar el «éxito» también se altera. En este sentido demuestro que en conflictos en

torno a los megaproyectos hidráulicos, como Baba, la tecnología también importa ya que sus modificaciones afectan directamente al contexto político y, a través de ella, podemos entender el desenvolvimiento y la capacidad de reclamo y negociación de la sociedad política. Bajo el diseño alternativo (ubicación distinta de la presa y diminución del área del embalse), gran parte de los campesinos perdieron el interés en seguir movilizándose, tras conocer que sus tierras ya no serían inundadas. Si bien, el cambio de diseño es un logro muy importante y fundamental de la lucha social, ya que logró disminuir de manera sustancial los impactos socioambientales para la mayoría de las comunidades, no logró paralizar por completo la construcción del megaproyecto. La continuación del megaproyecto bajo el diseño alternativo recayó sobre las comunidades afrodescendientes que, al estar disminuidas en número, no pudieron resistir la imposición del embalse sobre sus tierras. Por lo tanto, los cambios en la tecnología, al disminuir el número de afectados, resquebrajó el sentido de solidaridad moral y con ello las capacidades de movilización de la sociedad política. Por otro lado, bajo el diseño alternativo, la capacidad de los «mediadores» para rearmar el marco discursivo de la movilización social fue un gran desafío. El proceso de acceder a nueva información, redefinir el discurso y recrear con ello una unidad fue una empresa muy compleja en tiempo y recursos. Los proponentes del proyecto tuvieron la ventaja de conocer, de primera mano, la nueva información sobre los cambios en el diseño de la represa: altura, ubicación, tipo, etc. Esta información les permitió crear espacios de negociación a su favor en la frágil cohesión del movimiento social.

Al desarrollar la idea de sociedad política, Chatterjee presenta varios actores. La diversidad dentro de ella y sus acciones; sin embargo, subestima las relaciones de poder entre sus actores y las implicaciones de estas sobre el éxito de la movilización social. Al subestimar estas relaciones de poder se corre el riesgo de esencializar la política de los gobernados y, a través de ello, ocultar formas internas de marginalización. El proceso de lucha es más intrincada y compleja de lo aparente. El capítulo muestra, por ejemplo, pugnas por la legitimidad, reconocimiento y participación. ¿Quién tiene la legitimidad para ser líder? ¿Quién o qué factores reconocen el derecho para formar parte de la «comunidad» de la sociedad política? Con base en ello, ¿cómo es la participación de cada uno de sus actores, tanto al interior del movimiento social como fuera de él? Existen varios factores que pueden dar respuestas, que se definen por la propiedad de la tierra, la localización geográfica de esa tierra, el poder económico y político, y la temporalidad. Por ejemplo, en los primeros meses de la lucha, tener o no tierra en Patricia Pilar no era, al

parecer, muy importante para ser parte del movimiento social. Mientras tanto, en épocas más álgidas, muchos campesinos empezaron a desconfiar de los líderes y personas «de fuera» sin tierra o vivienda en la parroquia. Otro aspecto rescatable es la clara división de los roles del Comité y la Coordinadora y de sus integrantes. Mientras el primero hacía frente a los paros y manifestaciones, la segunda participaba en debates supralocales como ruedas de prensa y congresos internacionales. Si bien, esta estrategia tuvo resultados positivos, en cierto punto, estas mismas diferencias incidieron, más adelante, directamente sobre quién podía participar de la lucha, quién tenía legitimidad, en cuál espacio y cómo se reconocía su legitimidad. Bajo el diseño alternativo, estas diferencias tuvieron un peso significativo para el mantenimiento de la cohesión social y la solidaridad moral. Una manifestación concreta de esas diferencias de poder, al interior del movimiento social, se materializan en el poco o nulo respaldo que tuvieron las comunidades afrodescendientes al final de la lucha —cuando la mayoría de comunidades campesinas ya no iban a ser afectadas por la represa—, y en los crecientes rumores sobre coimas recibidas por varios líderes. Respecto al tema de las relaciones de poder desiguales dentro del movimiento social, el capítulo muestra también que, mientras las ONG y otros actores «externos» se van tan pronto, el conflicto aparentemente termina o las condiciones de protesta cambian, los afectados (p. ej.: campesinos, afrodescendientes, etc.) viven ahí, permanecen y tienen que seguir lidiando con los problemas.

Este capítulo también extiende las fronteras de la sociedad política hacia actores no necesariamente pobres y marginalizados, como define Chatterjee a los gobernados. Muestra el rol que tienen otros actores como los intelectuales y líderes populares (mediadores, en términos de la sociedad política). A pesar de que muchos de ellos no «pertenecen» a los gobernados, comúnmente llegan a formar parte estratégica de la sociedad política. Ellos o ellas son principalmente actores capaces de trascender y navegar los límites de la política formal de la sociedad civil y la sociedad política, convirtiéndose así en vínculos fundamentales entre estos dos ámbitos. De su carisma (Rap 2007), capacidad de mediación, discursiva y de negociación depende, en cierta medida, el éxito de las luchas. Complementariamente a lo mostrado por Bose (2004), en donde los intelectuales populares provienen de «fuera» del movimiento social, el caso de Baba evidencia que tales actores también provienen de su «interior».

Finalmente, este capítulo resalta la importancia del estudio de la trayectoria tecnológica, a la par de aquella política ecológica en este tipo de conflictos. En términos analíticos, nos permite entender la tecnología como un

mediador importante de las relaciones de poder y transformaciones político-ecológicas. Y en términos políticos, la *repolitización de la tecnología* ofrece espacios interesantes de empoderamiento para los gobernados, que comúnmente no tienen cabida en los procesos formales de planificación de este tipo de tecnologías (apolitizadas y naturalizadas), y que luchan por un espacio deliberante (como ciudadanos) en las decisiones gubernamentales. El empoderamiento evidenciado durante el período neoliberal por los movimientos sociales, y el aprendizaje tecnocrático en torno al desarrollo de megaproyectos hídricos se pone a prueba durante el período progresista, liderado por un Gobierno con un fuerte discurso de participación «ciudadana», pero cargado por contradicciones en sus prácticas y políticas.

CAPÍTULO 5

CONTROLANDO EL AGUA, GOBERNANDO LA SOCIEDAD: El caso del sistema multipropósito Chone*

Una mañana calurosa de noviembre del 2015 fue la primera vez que logré entrar a las instalaciones de la represa libremente, sin que los guardias me vieran mal y sin que me inunden con preguntas interminables e incómodas. Solo por ese día las puertas estaban abiertas para todos. El entonces presidente Correa «entregaba» una de las obras emblemáticas de su Gobierno a los choneros y al país. Desde el campamento de la empresa constructora, ubicada sobre la margen derecha del río Grande, yo subía caminando junto a decenas de choneros y choneras. Todos empacados en nuestras mejores galas. Avanzábamos con paso lento para no sudar el vestido. Conforme nos acercábamos a la parte más alta de la presa, tanto el bochorno como la música: una mezcla de salsa y «patria, tierra sagrada...»,¹⁶¹ se intensificaban. Funcionarios públicos nos ofrecían de forma «gratuita» sándwiches y agua embotellada. Al acercarme a la tarima, todavía sin sus protagonistas, reconocí a uno de mis excolegas. Nos saludamos con un abrazo y me invitó a sentarme en la quinta fila. Después de media hora de espera bajo las carpas blancas de lona, comenzó el acto. Uno tras otro pasaron por el micrófono: gobernadora, gerentes, campesinos, niños de la nueva escuela, etc. Cuando le tocó el turno al presidente, parecía que nos estaba impartiendo

-
- * Este capítulo corresponde a una versión extendida de los artículos Hidalgo-Bastidas (2019) e Hidalgo-Bastidas y Boelens (2018).
161. La canción «Himno a la Patria» o conocido popularmente como «Patria Tierra Sagrada» fue entonada por primera vez en 1929. Con el pasar del tiempo cayó en desuso, pero en los años del Gobierno de la Revolución Ciudadana se retomó con fuerza y se convirtió en una especie de himno del Gobierno liderado por Rafael Correa. Su letra y su música evocaban sentimientos profundos de patriotismo y orgullo nacional, que fueron aspectos centrales del Gobierno «revolucionario». Véase la nueva versión producida exclusivamente para el Gobierno en <https://www.youtube.com/watch?v=erYaPGIKHl4>

una lección de economía del desarrollo: «[S]in inversión no hay desarrollo, si no controlamos la naturaleza y nos ahogamos en invierno y nos morimos de sed en verano, el país no saldrá del subdesarrollo. [...] Si no tenemos represas como esta [...], jamás podremos ser competitivos, jamás podremos salir de la pobreza, jamás podremos salir del subdesarrollo!». Cada frase retumbaba los parlantes y se llevaba los aplausos del respetable, mientras yo, sentado en la quinta fila, continuaba tomando nota.¹⁶²

Introducción

El fragmento de este discurso podría haber sido pronunciado por cualquier político al inaugurar una represa durante el período desarrollista. Sin embargo, fue dicho por el expresidente progresista a finales del año 2015, en la inauguración del proyecto multipropósito Chone. En este período se experimentó en Ecuador una nueva colusión entre el poder estatal y la tecnocracia: el impulso de este tipo de obras no tenía únicamente un discurso desarrollista, sino que vino acompañado de uno ideológico. Tal como lo menciona el expresidente en su discurso: el control del agua —a través del megahidraulismo— fue piedra angular para los planes gubernamentales de alcanzar el Buen Vivir. En ese contexto, el proyecto multipropósito Chone fue una de las obras emblemáticas del Gobierno de la llamada Revolución Ciudadana durante el período posneoliberal o progresista. El *boom* de megaproyectos hídricos, el impulso a la megaminería y la revitalización del sector petrolero (Van Teijlingen 2016; Lu, Valdivia, y Silva 2017; Valladares y Boelens 2017; y Van Teijlingen *et al.* 2017) fueron la espina dorsal de su ambiciosa política de cambio de matriz productiva y energética (Villavicencio 2014; Acosta *et al.* 2013).

A pesar de las fuertes críticas que enfrentaron este tipo de proyectos (capítulo 4) (Sasso Rojas 2008; Acosta *et al.* 2013; Andrade y Nicholls 2016) y los evidentes impactos socioambientales causados por su implementación (CAIC 2008b), la Revolución Ciudadana, a través de una serie de estrategias gubernamentales (coercitivas y no coercitivas), justificó y legitimó su desarrollo. Así, en un contexto sociopolítico y económico distinto, los megaproyectos como el multipropósito Chone ganaron vigor y actualidad sin precedentes (capítulo 2). El proyecto multipropósito Chone es una ilustración de cómo el Estado ha aprendido a implementar este tipo de proyectos de manera

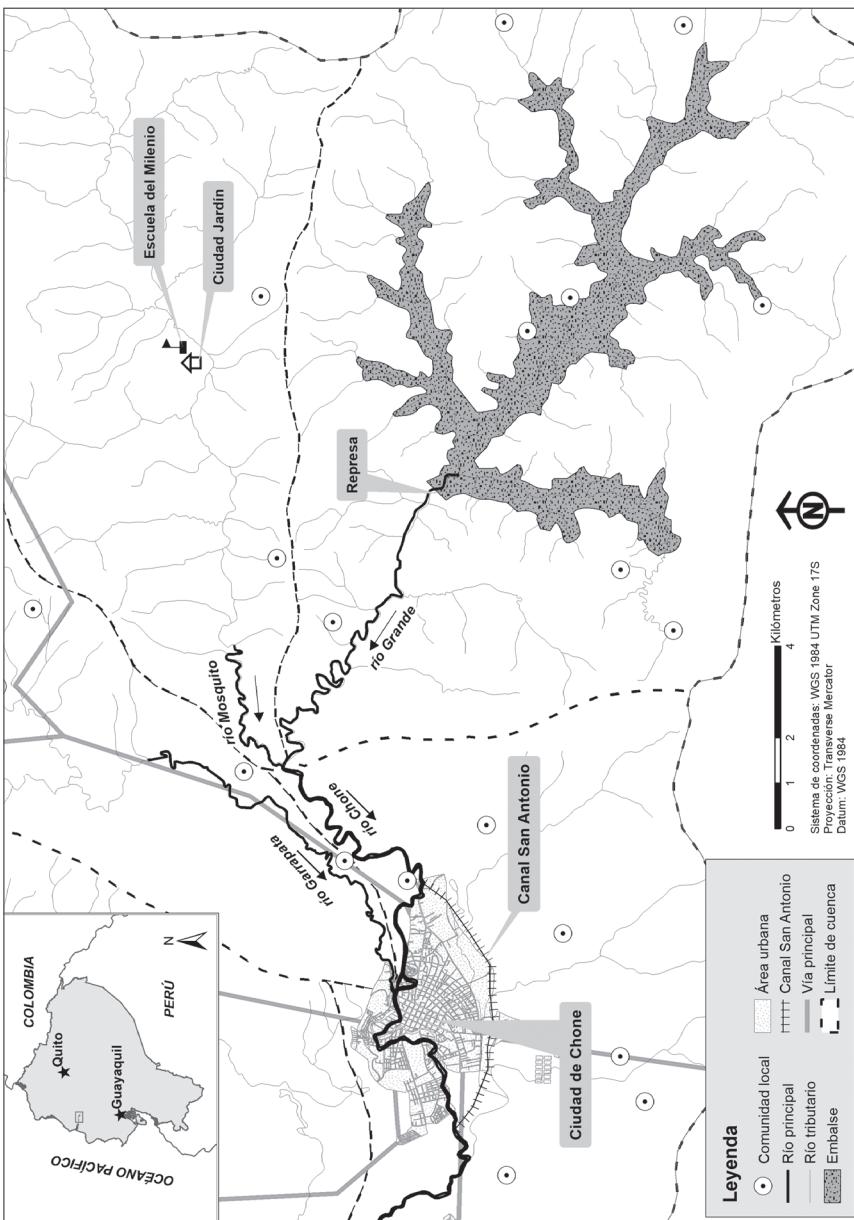
162. Fragmento del discurso de inauguración del sistema multipropósito Chone. 24 de noviembre de 2015.

distinta. A la luz de esta problemática, el objetivo de este capítulo es entender cómo y a través de qué discursos y prácticas, el Gobierno de la Revolución Ciudadana llevó a cabo la construcción e implementación de este megaproyecto. A diferencia de los anteriores casos presentados en el presente libro, este analiza cómo, durante la llamada etapa posneoliberal, la sociedad civil y la tecnocracia del siglo XXI «negociaron» el desarrollo de megaproyectos hídricos. Además, el capítulo muestra hasta qué punto está megaobra ha trascendido el ámbito exclusivo del control del agua, ya que se inmiscuye directamente con el «ordenamiento» o gobierno de la sociedad. Para estudiar las contingencias en torno al desarrollo del proyecto multipropósito Chone (mapa 5), se profundizará en el marco de la gubernamentalidad (Foucault 1991) y el abordaje sobre la construcción política de la «sobreabundancia de agua» (Alatout 2009).

El capítulo se organiza de la siguiente manera. Primero se presenta un complemento teórico a lo introducido en el primer capítulo acerca de la gubernamentalidad y la noción de orden. Segundo, se introduce el contexto histórico y contemporáneo local sobre el estudio de caso. Tercero, se presenta la justificación y el desarrollo del proyecto multipropósito Chone. Cuarto, se muestra el proceso de resistencia protagonizado por las comunidades de Río Grande en contra de la megaobra, y en esta sección también se analiza, a través del caso de la comunidad del milenio «Ciudad Jardín», las estrategias gubernamentales implementadas, que en gran medida permitieron construir la megaobra. Quinto, se presenta una discusión y las reflexiones finales.

El «ordenamiento» de las aguas rurales y la gubernamentalidad para el Buen Vivir

A través del caso de Chone se ilustra el desbalance de poder entre las distintas nociones acerca del territorio hidrosocial (capítulo 1). Uno de ellos es percibido por los gobernantes con mayores privilegios («lo urbano», «lo moderno»), y el otro se percibe como vulnerable o incluso indeseable («lo rural», «lo premoderno»). En el caso ecuatoriano, la Revolución Ciudadana, también concebida por algunos como una «revolución de la ciudad» (Lu, Valdivia y Silva 2017, 12) a través de sus políticas, programas y proyectos, mostró explícitamente «una preferencia por ciertos tipos de organización del espacio que promovía el progreso junto a la urbanización» (Lu, Valdivia y Silva 2017, 12). De ahí que, tal como se presenta a continuación, su afán de llevar «orden» a aquellos espacios considerados como «atrasados» y/o «desorganizados».



Desde este enfoque se plantea que, históricamente —no solo en Ecuador sino en gran parte del mundo—, el campo es comúnmente presentado entre la categoría de lo «diferente» y al mismo tiempo de lo «potencialmente igual»; diferente por su percibida condición de «atraso» con respecto al imaginario de los gobernantes, pero con potencialidad de «ponerse al día» y volverse «igual», mediante la «adopción» de modelos, valores e identidades (Boelens 2015b). Así, Las nociones dominantes de expertos y tecnócratas intentan reproducir un «ideal» moldeado desde sus propias necesidades, posiciones, conocimientos e intereses, que no solo tienen efecto sobre el agua, sino también sobre la sociedad.

A partir de ello mi planteamiento es que las relaciones entre agua, sociedad y tecnología van mucho más allá de la simple idea de «seres humanos gobernando el agua, sino *la de gobernar a los seres humanos a través del agua*, como formas de organizar poder y toma de decisión para llevar a cabo un control ambiental y social simultáneamente» (Boelens 2015a, 13, traducción propia). Con este argumento elimino la tendencia a entender la producción de orden como la relación jerárquica y unidireccional entre sociedad y naturaleza (véase también Swyngedouw 2015; Boelens 2015b). Por el contrario, enfatizo la idea de «coproducción» para entender las formas de gobierno y del modo en que se pretende ordenar la sociedad (Jasanoff 2004). De esta manera hago explícito mi deseo de alejarme de un determinismo social, tecnológico y sociotécnico de ordenar el mundo. Tal proceso de orden (y gobierno) no es parte de una trayectoria neutral y lineal, sino que está profundamente mediado por relaciones de poder y elecciones específicas sobre *cómo debe ser* la gobernanza del agua y, en último término, *la conducta o comportamiento* de la sociedad misma. Tal como dice Margreet Zwarteeveen: «construcciones ontológicas y elecciones conceptuales particulares, tales como ciertas tecnologías y opciones de política, provienen de, y están relacionadas para favorecer o ayudar a la concreción de ciertas formas de ordenar el mundo [...]» (Zwarteeveen 2015, 10, traducción propia).

Por tanto, la producción de orden y las formas de gobernar están íntimamente relacionadas. Así lo argumenta Foucault: «Gobernar es la disposición correcta de las cosas, dispuestas para alcanzar un fin conveniente» (1991, 93, traducción propia). Desde la visión estatal, ese «fin conveniente» trata, respecto a las nociones liberales de democracia, de alcanzar el bienestar universal de los ciudadanos. Sin embargo, tal como he mostrado en el capítulo anterior, tales nociones, a menudo, previenen del anhelado bienestar a la mayoría de personas que habitan el territorio que administra el Estado-nación (Chatterjee 2007). En el caso del control del agua, las diferentes formas de

poder —no siempre coercitivas, sino desplegadas y promocionadas como formas productivas y positivas de poder—, e imaginarios hidrosociales, se movilizan para establecer o mantener un cierto orden político, económico y cultural (Baghel 2014). Con esto se sugiere que ese «fin conveniente» (p. ej.: Buen Vivir) —intencionado o no— se puede alcanzar a través del control del agua y del uso discursivo de la tecnología. Mi propósito, por tanto, es «mostrar cómo la producción de discursos está conectada a regímenes de intervención» (Dean 2010, 5, traducción propia), como la construcción e implementación del proyecto multipropósito Chone. Con la finalidad de indagar la relación entre orden, gobierno y las distintas formas de poder en torno al desarrollo del megaproyecto hídrico Chone, se extiende lo presentado en el capítulo 1 acerca del poder, y se propone considerar tres formas de gubernamentalidad como categorías de análisis: soberana (Foucault 2008; Fletcher 2010), disciplinaria (Foucault 1978) y neoliberal (Fletcher 2010; Boelens, Hoo gesteger y Baud 2015).

La primera forma de gubernamentalidad está vinculada con la concepción tradicional del Estado soberano (Foucault, 2008: 312). Esta forma intenta conducir la conducta a través de técnicas coercitivas de poder, propias del poder visible. «[I]nvolucra el ejercicio directo de poder soberano [...] que se dirige a la gobernanza racional de un territorio, a través de reclamar la obediencia de los sujetos al deseo soberano mediante amenaza o castigo» (Fletcher 2010, 176, traducción propia; Foucault 2002). Si bien, esta última forma de gubernamentalidad puede ser interpretada como un oxímoron frente al principio del poder capilar, en su obra *El nacimiento de la biopolítica*, el filósofo francés asume el poder soberano como una forma de gubernamentalidad en sí misma. A partir de esta es que Foucault elabora las otras formas de poder.

La segunda forma de poder gubernamental se basa en entender el proceso disciplinario del ser. Para esta forma, los individuos son considerados como sujetos «desviados» de la normalidad. Para corregir a ese sujeto «anormal», el poder opera mediante normas sobre lo que es o debería ser considerado un comportamiento adecuado (p. ej.: «buenas» prácticas de gobernanza propias del desarrollo, lo urbano, el buen ciudadano, el Buen Vivir, etc.). Esta forma principalmente ejerce un poder a través de valores morales y la culpa, incentivando de esta manera a la autocorrección, el disciplinamiento o la normalización. Esta forma de gubernamentalidad es aplicada mediante técnicas y procedimientos propios del poder capilar. Esta es la forma de poder más eficiente para el Estado-nación moderno, ya que permite ordenar y/o gobernar a las personas sin la necesidad de que sea percibido por estas como

formas represivas o coercitivas. Y también porque es el «punto donde el poder alcanza la esencia misma de los individuos, toca sus cuerpos y se inserta dentro de sus acciones y [pensamientos] mismos, en sus discursos, en sus procesos de aprendizaje y en sus vidas diarias» (Foucault, 1980, 39, traducción propia). No actúa a través de la represión, sino mediante la «inclusión» colectiva y el disciplinamiento individual.

La tercera forma de poder es la neoliberal (Foucault 2008). Esta se basa en promover un régimen de verdad a través de entender o tratar a los individuos como sujetos racionales que, basados en un deseo utilitarista de alcanzar la felicidad, basan estratégicamente sus decisiones en el cálculo beneficio-costo particular (Binkley 2009). Esta forma no ejerce tampoco un poder coercitivo sobre el individuo, sino que actúa simultáneamente al poder disciplinario. Es decir, el sujeto internaliza normas propias del mercado (p. ej.: eficiencia, maximización de ganancias individuales, desarrollo, etc.), y a partir de ello toma decisiones. Es decir, esta forma de poder intenta gobernar a través de la creación de incentivos ligados al mercado (p. ej.: propiedad privada, compensaciones económicas, indemnizaciones, etc.).

Estas tres formas de gubernamentalidad, que ahora se ha presentado como categorías de análisis separadas en el proceso de construcción e implementación del megaproyecto Chone, están superpuestas y en tensión. No se excluyen mutuamente, por el contrario, se complementan y entrelazan. A continuación, se presenta el contexto histórico y contemporáneo de la región donde se desarrolló este megaproyecto hídrico: Chone y Río Grande.

Chone y Río Grande: contexto histórico y contemporáneo

Una historia de arraigo

La relación de las personas con el río y la tierra fueron determinantes en la configuración socioterritorial en Chone. En esta zona, por un lado, las personas se asentaron cerca de los ríos para cultivar la tierra, regar, pescar, transportarse y recrearse. Tal como da cuenta Rosa Ferrín-Schettini: «el surgimiento de la ciudad de Chone estuvo ligado a la explotación de las montañas circundantes [...]. Por otra parte, la existencia del río Chone, navegable gran parte del año, tuvo una importancia capital en tanto significó una vía permanente hacia el puerto de embarque» (1991, 130). Los relatos de historiadores y novelistas locales también muestran la relación de los choneros con el río (Hidrovo-Velásquez 1957; Delgado-Coppiano 2012). De acuerdo con

sus relatos, cada vez que se inundan las zonas bajas del valle, sin duda, hay daños. No obstante, tales recuentos también atribuyen la fertilidad de los suelos y la alta productividad de sus cosechas, precisamente, a los eventos anuales de inundación, que arrastran nutrientes de las montañas y los depositan en el fondo del valle (Hidrovo-Velásquez 1957).

Desde la época de la Colonia, paulatinamente, la tierra empezó a adquirir importancia mercantil por las actividades agrícolas y ganaderas que se emprendieron con mayor intensidad y extensión, como producto de la demanda del mercado externo (Ferrín-Schettini 1991; Deler 1994; Delgado-Coppiano 2012). Mientras el cacao proliferó como un cultivo de exportación extensivo, la tagua y caucho se mantuvieron como productos de recolección campesina, llevada a cabo en las llamadas «tierras incultas» o bosques en donde se ubicaban las fincas de los campesinos. El cacao estaba relacionado con la gran propiedad: estancias y haciendas,¹⁶³ mientras la tagua y el caucho, aunque muy importantes en el ámbito socioeconómico, seguían siendo un producto campesino poco domesticado (Chiriboga 1980).

Estas actividades inyectaron progresivamente una dinámica comercial diferente en la economía local, que hasta entonces se fundamentaba en la comercialización del sombrero de paja toquilla, controlada por élites comerciales locales (Dueñas de Anhalzer 1991; Ferrín-Schettini 1991). Pronto, los cultivos emergentes y el flujo comercial entre Chone y el mercado externo, a través del puerto de Bahía de Caráquez, configuraron la nueva estructura agraria de la zona: en el valle se consolidaron las grandes haciendas y estancias, y en las cordilleras y mesetas se ubicaron las fincas campesinas de pequeño y mediano tamaño (Chiriboga 1980). El valor de la tierra también cambió. Junto al ingreso de estas nuevas dinámicas económicas y comerciales, la propiedad de la tierra fue adquiriendo un valor monetario, dejando atrás las formas de acceso libre.¹⁶⁴ Se empezaron a legalizar las tierras y a cuidar con mayor celo.¹⁶⁵ Estos cambios no solo incluyeron las tierras de los grandes comerciantes-hacendados, sino también la de los campesinos. Para los últimos, el control y acceso a las llamadas tierras baldías fueron cruciales para

163. Las estancias eran un tipo de explotación rural dedicada a la ganadería extensiva en pastos naturales, en donde la tierra tenía poco o ningún valor económico. De acuerdo con Carmen Dueñas de Anhalzer, los estancieros no eran grandes propietarios, «se trató más bien de estancieros dedicados al comercio» (1991, 22).

164. De acuerdo con Dueñas de Anhalzer, «En Chone se registraron las primeras transacciones mercantiles con respecto a la tierra» (1991, 53).

165. Debido a este celo sobre la «propiedad» de la tierra y la falta de linderos definidos, Chone protagonizó los primeros conflictos por la tierra (Dueñas de Anhalzer 1991).

resistir los procesos de proletarización, explotación laboral y para mantenerse resilientes ante la crisis económica de las grandes propiedades a inicios del siglo xx (Ferrín-Schettini 1991).

La relación con la tierra, la conquista española y los vínculos productivos-comerciales dieron forma, en gran medida, a las relaciones de arraigo e identidad que se encuentran hasta la actualidad en Chone. Antes de la conquista española, la tierra era de acceso libre, las cordilleras, mesetas y valles, poblados por un espeso bosque húmedo tropical y subtropical, estaban también ocupados por campesinos que se dedicaban a la caza, la pesca, prácticas de recolección y al cultivo de la tierra de forma individual (Ferrín-Schettini 1986). La tierra no era sujeto de propiedad legal, no tenía linderos establecidos y tampoco tenía un valor comercial, pero sí existía una forma de propiedad comunitaria (Dueñas de Anhalzer 1991). Si bien la estructura agraria de Manabí tenía vigente un régimen comunitario de tenencia de tierra, su usufructo era individual. Es decir, la existencia de propiedad comunitaria sobre la tierra no significaba que existiera trabajo colectivo, ni repartición de cosechas. Las «tierras comunes» eran destinadas fundamentalmente para pastoreo de ganado (Dueñas de Anhalzer 1991). Por tanto, el acceso a la tierra con derecho de usufructo estaba mayoritariamente determinado por el trabajo que la familia campesina invertía en ella (Chiriboga 1980). Existían formas de trabajo solidario (p. ej.: presta-brazo);¹⁶⁶ sin embargo, el usufructo era individual (Ferrín-Schettini 1986). Para varios administradores del Estado (gobernantes) y colonizadores nacionales y extranjeros, estas prácticas de acceso a la tierra eran consideradas como «ineficientes»; por tanto, para ellos, gran parte de las tierras campesinas eran consideradas tierras baldías e incultas.

En esta coyuntura, las relaciones laborales también se transformaron. Los comerciantes-hacendados crearon formas precarias de trabajo como el «concertaje» para garantizar la suficiente mano de obra barata en sus propiedades (Dueñas de Anhalzer 1991).¹⁶⁷ A pesar de que gran parte de la dinámica económica de la época giraba en torno a ellos, las relaciones productivas y

166. Pesta-brazo es una relación laboral productiva en la que un campesino trabaja de manera recíproca en la propiedad de otro; es decir, trabaja sin compensación económica a cambio, con la condición de que el beneficiario, cuando se le requiera, entregue de vuelta el mismo número de jornadas de trabajo que recibió en su oportunidad.

167. El concertaje era un mecanismo precario de trabajo utilizado por los terratenientes para hacerse de mano de obra. Consistía en endeudar engañosamente a los conciertos (campesinos) con sumas de dinero imposibles de pagar o interminables, lo que llevaba a estos y, en varios casos, a sus familias a trabajar bajo condiciones de explotación indefinidamente para el terrateniente (Dueñas de Anhalzer 1991).

culturales, construidas antes de la llegada de los colonizadores —recolección de productos del bosque, caza y trabajo individual en sus fincas—, mantenían a muchos campesinos con cierto nivel de autonomía frente a las relaciones laborales dominantes (Chiriboga 1980; Ferrín-Schettini 1986). Estos campesinos, que eventualmente trabajaban en las haciendas, mantenían algo de poder de decisión sobre su seguridad social, ya que contaban con los medios necesarios, aunque modestos (alimento e ingresos económicos) para subsistir. Es de esta forma cómo a finales del siglo XIX e inicios del XX las relaciones sociales, productivas y económicas estuvieron influenciadas por la colonización de tierras, el boyante comercio exterior y las distintas formas de relacionamiento laboral que surgían de esta interacción.

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, las relaciones comerciales basadas en la agroexportación gozaban de su época dorada, pero entrados los años treinta este sector empezó a debilitarse debido a la crisis europea por la Primera Guerra Mundial (Chiriboga 1980; Núñez-Sánchez 2011). A raíz del cambio de las relaciones comerciales de exportación por la falta de demanda europea de los productos locales, sobrevino la llamada «crisis de la gran propiedad de Manabí». Esta crisis afectó diferenciadamente a los campesinos y hacendados. Los hacendados empezaron a caer en deuda y muchos tuvieron que vender o embargar sus propiedades (Ferrín-Schettini 1991), que en muchos casos se dividieron, consolidándose una estructura agraria dominada por la pequeña y mediana propiedad. Aquellos campesinos y asalariados que se mantuvieron con cierta independencia productiva, basada en la producción de sus fincas y la recolección de tagua y caucho, lograron sobrellevar de mejor manera la crisis (Ferrín-Schettini 1991). De este modo, las economías familiares lograron consolidarse.¹⁶⁸ Junto a la abolición legal de formas coercitivas de trabajo (Prieto 2004), entre finales del siglo XIX y principios del XX, gran parte de los campesinos, de manera contraria a sus antiguas costumbres de agricultura nómada, decidieron establecer sus fincas de manera permanente, lo cual profundizó el arraigo a la tierra y su propiedad. Tal como lo presenta Ferrín-Schettini en sus estudios, al hacer alusión al arraigo individual en torno al acceso a la tierra: «La existencia de tierra como mercancía, desde hace mucho tiempo [...] ha influido para que el acceso a la tierra [en la zona] tenga un carácter muy arraigado de propiedad privada, libre e individual» (1986, 242). Este creciente arraigo

168. A diferencia de gran parte de la costa ecuatoriana en donde las grandes haciendas dominan la estructura agraria hasta la actualidad, en la zona de Chone y gran parte de Manabí la producción agrícola campesina es muy importante, tanto para la seguridad alimentaria rural como para la urbana.

CUADRO 5

**TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA DE INUNDACIÓN DE LA PRESA
EN RÍO GRANDE, CHONE**

| TAMAÑO DE UPA | % PROPIETARIOS | % SUPERFICIE |
|---------------|----------------|--------------|
| 0 a 10 ha | 15 | 3 |
| 11 a 50 ha | 65 | 48 |
| 51 a 100 ha | 13 | 27 |
| > 100 ha | 6 | 22 |

Fuente: SENAGUA (2012).

e individualismo, construido a lo largo de los años, ha sido reforzado por formas de traspaso de la propiedad de la tierra como mediante la herencia.

A pesar del valor monetario introducido y asignado a la tierra en la época colonial y principios de la poscolonial, la relación de los campesinos con la tierra, en muchos casos, trasciende lo material como única forma de valoración. En Chone y Río Grande, zona de predominancia campesina, la herencia ha sido uno de los principales mecanismos de transferencia de la tierra y de su propiedad entre generaciones. Así lo demuestran los siguientes datos: entre 1954 y 1974, la tenencia de la tierra estaba marcada por un 87% de fincas con tamaños que variaban entre 0,1 y 20 hectáreas, es decir pequeñas y medianas propiedades. De esas propiedades, entre el 57 y el 62% fueron transferidas mediante herencia.¹⁶⁹ En otras palabras, se evidencia que la mayoría de las familias (o miembros de ellas) han permanecido en el mismo sitio durante un período prolongado de tiempo.

Comunidad Río Grande en la actualidad

En el año 2011, antes de la construcción del proyecto multipropósito, la estructura agraria y las relaciones laborales en la zona de Río Grande presentaban varias similitudes a las configuradas históricamente. Por un lado, la mayor parte de las fincas era de pequeños y medianos campesinos; y, por otro lado, su acceso y usufructo era individual y a través de la herencia. Así, por ejemplo, los pequeños y medianos finqueros representaban el 80% de los propietarios (cuadro 5). Gran parte de los herederos no poseía título de propiedad.

169. Según datos presentados por Ferrín-Schettini (1986) tomados de PRONAREG-Orstrom (1978).

Producto de las relaciones de configuración socioterritorial históricas, en Río Grande se mantienen distintas formas de relacionamiento laboral. Río Grande es un sector que agrupa a varias familias alrededor del río homónimo. Esta zona es parte de la parroquia Santa Rita del cantón Chone. La primera modalidad de relación laboral en este sector es el contrato de un trabajador a cambio de reconocimiento económico por cada día trabajado y, frecuentemente, es de corta duración (jornalero). La segunda modalidad es el contrato asalariado de largo plazo del jornalero y, frecuentemente, de su familia. En esta modalidad, los trabajadores administran la finca, cuyo propietario vive en la ciudad. La tercera modalidad de relacionamiento laboral es una figura no asalariada de trabajo que es bastante popular en la zona: prestabrazo. La última es una forma de acceso a la tierra a través de contribuir a medias en el proceso productivo. Cada parte aporta con lo que cuente como medio de producción (p. ej.: tierra, trabajo, capital). La contribución varía y depende de la negociación entre las partes. Así, todas estas actividades se fundamentan en la reciprocidad. Sin embargo, no significa que son formas colectivas de acceso y uso de la tierra, y de trabajo. Cada campesino guarda control sobre su propia tierra o forma de reproducción de manera individual. A pesar de que en algún momento existió un régimen de propiedad comunitaria, las relaciones laborales y las distintas formas de acceso a la tierra plantean que «lo colectivo» no ha sido una construcción necesariamente adecuada de relacionamiento entre los campesinos de esta zona.

Antes de la llegada del embalse, casi todas las fincas tenían una salida al río en la parte baja y un área con bosque en la parte alta. Esto permitía a los campesinos diversificar su producción agrícola en zonas bajas y expandir la frontera agrícola hacia las partes altas, para implementar principalmente cítricos y pastizales. Las fincas tenían cultivos de cacao, plátano y mandarina en las zonas medias; arroz, maíz, maní, hortalizas, verduras en las zonas bajas; y ganado en las zonas altas. Otra actividad importante para la seguridad alimentaria familiar era la pesca y recolección de camarón de río. Las mujeres se dedicaban a la cría de animales menores y al cultivo de plantas en el terreno junto a la vivienda. Dada la diversa y abundante producción agropecuaria, tanto de las microcuencas de río Grande como de los otros tributarios (Garrapata y Mosquito) tenían un gran impacto económico y alimentario en Chone y otras ciudades manabitas.¹⁷⁰

170. De acuerdo con los campesinos de Río Grande, agrupados en el Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande (CCRG), la producción agropecuaria anual de la microcuenca de río Grande era de USD 14 millones, aproximadamente. Comunicación difundida por el Comité el 26 de abril 2011. El CCRG fue creado por los habitantes de las

La ciudad de Chone

La ciudad de Chone es la capital del cantón del mismo nombre. Es una ciudad de mediano tamaño que ocupa el 0,5% de la superficie cantonal, con cerca de 52.000 habitantes. La mayoría de la población se distribuye en las áreas rurales que ocupan más del 99% de la superficie cantonal.¹⁷¹ Alrededor del 70% de la población depende de la agricultura o ganadería, consolidando al campo como el principal espacio de ocupación socioeconómica del cantón y de la misma ciudad. El efecto de «lo rural» en la ciudad se evidencia los días domingos, cuando la ciudad es visitada por los campesinos de los alrededores que se acercan a los comercios para vender y comprar productos. Ese día la ciudad y sus habitantes experimentan un vertiginoso incremento en sus ventas y los negocios se abastecen de productos del campo para su venta durante la semana. Cuando los campesinos regresan a sus labores agropecuarias cotidianas, la actividad de la ciudad disminuye considerablemente.

Una característica particular de esta ciudad es que se asienta a orillas del río Chone, en la parte más baja del valle (mapa 5). Su ubicación la ha hecho susceptible a sufrir inundaciones anuales durante la época lluviosa (desde diciembre a mayo), en especial, por el desborde del río Chone y sus tributarios: río Grande, río Garrapata y río Mosquito. En este contexto social y productivo, históricamente contingente desde el año 2008, el Gobierno nacional le dio impulso al proyecto multipropósito Chone, que controlaría las inundaciones en la ciudad y sus alrededores.

El sistema multipropósito Chone: su justificación y desarrollo sociotécnico

Aquí la solución definitiva es el proyecto múltiple Chone: que solo por el control de inundaciones ya tendría razón de ser, pero además de eso habilita hectáreas para agricultura con riego [...], ¡vamos a hacer ese proyecto!

comunidades de Río Grande con la finalidad de garantizar el orden social y seguridad en la zona. Sobre todo, fue creado para evitar y sancionar el robo de ganado que desde los años ochenta había crecido significativamente. El Comité fue reconocido por el Ministerio de Bienestar Social mediante Acuerdo N.º 2410, el 13 de marzo de 1997.

171. Información del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2010. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Memorias/memorias_censo_2010.pdf

Tomará varios años construirlo, pero lo vamos a hacer compañeros (Presidente Rafael Correa).¹⁷²

Estas palabras las pronunció el entonces presidente Correa en la ciudad de Chone, días después de que esta ciudad y zonas aledañas sufrieran una gran inundación en febrero de 2008. Según los representantes del Gobierno, la Revolución Ciudadana «rescató» el sistema multipropósito Chone del cajón de los proyectos olvidados del CRM. A la postre se convirtió en una de las obras emblemáticas de su proyecto político progresista. El anuncio del exmandatario, realizado en un contexto de desastre y consternación local, revivió también el valor simbólico muy potente que la sociedad chonera había construido en torno a esta megaobra durante años.

Desde las primeras discusiones en torno al proyecto, a finales de los años setenta, la ciudad de Chone recibió gran parte de la atención como el área de mayor afectación: la ciudad como polo de desarrollo. La opinión pública y los gobernantes, desde espacios como el CRM y el Gobierno central, buscaban poner fin a las inundaciones e impulsar, simultáneamente, el desarrollo de la ciudad. Así lo resalta el diario de mayor circulación nacional en noviembre de 1979, cuando este tema se presentó por primera vez como algo trascendental para el bienestar de Chone:

Atenderán pedidos del cantón Chone. Se realizará una reunión ampliada en el CRM. Por su parte el gobernador de la provincia manifestó que el desvío del río Chone era la obra de mayor importancia, pues si se demora en solucionar el asunto, esta *ciudad* podría verse inundada nuevamente en el invierno.¹⁷³

De igual forma, más tarde, lo colocaba en cifras el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI):

El impacto sobre la economía cantonal fue del orden de los 8,3 millones de dólares, correspondiendo 7 millones de pérdidas en la economía urbana y 1,3 en la economía rural. [...] La protección contra inundaciones de *la ciudad* de Chone ha sido objeto de estudios y diseños desde 1980.¹⁷⁴

172. Rueda de prensa, del 24 de febrero del 2008. <https://www.youtube.com/watch?v=6qS8OtRWd-o>.

173. *El Comercio*, 26 de noviembre de 1979.

174. Tríptico Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI): «Proyecto de control de inundaciones de la ciudad de Chone». 1998.

A pesar de que las zonas rurales también eran afectadas por las inundaciones, a lo largo de los años se fortaleció un discurso que posicionaba a la ciudad como el mayor afectado o muchas veces el único. Tal como lo refleja uno de los titulares de la prensa, después de una gran inundación: «Inundaciones afectan la ciudad de Chone». ¹⁷⁵ De esta forma, la urbe y el riesgo de inundaciones fue el justificativo más importante para legitimar el megaproyecto desde sus inicios. A pesar de este énfasis casi exclusivo en solucionar los problemas de la ciudad, lo rural todavía no era contrapuesto como espacio de «atraso» frente a lo urbano. Como se muestra más adelante, esto se haría explícito durante el Gobierno de «la revolución de la ciudad». A continuación presento un breve recuento del desarrollo tecnocrático del megaproyecto.

Tal como sucedió en el caso de Daule-Peripa y Baba, la realización de los estudios para esta megaobra tardaron casi tres décadas. Como era costumbre en la época, bajo la influencia de las experiencias españolas y de la TVA (capítulo 3), se encomendaron los estudios a un consorcio español, que en 1983 entregó el proyecto a nivel de factibilidad al CRM. En este primer esfuerzo tecnocrático se recomendó la construcción de una presa de regulación sobre el río Grande, un sistema de riego y el canal de desagüe del río Chone a la altura de la ciudad. Tras la aprobación del CRM con base en estos estudios de factibilidad, en 1986, se formularon los diseños definitivos. Por razones económicas y falta de apoyo político, la construcción e implementación del proyecto quedaron parados por varias décadas.

Más tarde, el MIDUVI, cartera del Estado encargada del desarrollo urbano, se interesó en el proyecto. Este Ministerio contrató estudios en 1998 y en 2002 para evaluar las alternativas de menor costo económico y, a partir de ello, plantear soluciones definitivas para los problemas de inundación. Así, en el 2002, se construyó parte del canal de desagüe junto a la ciudad; sin embargo, el proyecto integral se volvió a paralizar. Como parte de los estudios contratados por el MIDUVI, se propusieron otras alternativas para el control de inundaciones como la construcción de represas más pequeñas —«cortapicos»— para los ríos Grande, Garrapata, Mosquito y Santo. A pesar de que este tipo de presas causa menos impacto ambiental y social, la tecnocracia manabita y nacional las descartó, según el testimonio de uno de los ingenieros a cargo de la evaluación de la propuesta, entre otras razones, «por ser una opción con altísimo impacto ambiental, y porque se perdía el objeto multipropósito del proyecto inicial, que incluía riego y agua potable, ya que [las

175. *Diario Manabita*, 12 de febrero de 1987.

presas cortapicos] no tendrían un volumen de agua regulado».¹⁷⁶ Su apoyo era claro para la opción de la megarepresa sobre el río Grande: «uno de los caballos de batalla no solo de Chone, sino de Manabí, ha sido la construcción del sistema multipropósito Chone, no solo uno de control de inundaciones». De hecho, este proyecto durante su período de vida en el papel, y a pesar de haber estado paralizado por varios años, tomó gran importancia porque no era un esfuerzo aislado. El sistema multipropósito Chone formó parte del llamado Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Provincia de Manabí (PHIMA), en 1989,¹⁷⁷ el mismo que, según extécnicos del CRM y ahora funcionarios de la SENAGUA, contaba con la credibilidad de haber sido diseñado por técnicos extranjeros (españoles), considerados portadores de un conocimiento «serio, moderno y responsable»¹⁷⁸ sobre el tema.

A pesar de que a inicios de la década de los años 2000, el proyecto multipropósito en sí todavía era una ficción, su uso político-electoral lo convirtió en algo muy real.¹⁷⁹ Tal como lo recuerda una de las campesinas de Río Grande: «Cada vez que habían campañas políticas, todos los candidatos cogían el ofrecimiento del proyecto multipropósito Chone como un ofrecimiento».¹⁸⁰ Es decir, en cada campaña electoral local, el proyecto era provisto de una especie de «vida» propia. De esta forma, la premura de su construcción, que era cada vez recreada e impregnada en el imaginario social chonero, se convirtió en parte importante de su historia reciente. Así lo recuerda uno de los viejos impulsores del proyecto en la ciudad de Chone: «Las inundaciones en Chone son históricas, con cada año eran más graves porque la ciudad crecía. Había que evitar las inundaciones. ¡Por eso nuestra lucha casi obsesiva!».¹⁸¹ Así lo recordaba y reclamaba el expresidente Correa, comulgando con ese sentimiento local: «¡Esta es la obra que esperaron por más de treinta años, y aquí está tu Gobierno cumpliendo con Manabí y con la Patria!».¹⁸²

176. Entrevista, 17 de agosto de 2015.

177. Este plan fue ejecutado entre el entonces CRM, INERHI y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) bajo un convenio marco entre el Gobierno ecuatoriano y la Organización de Estados Americanos.

178. Entrevista, 17 de agosto de 2015. Ingeniero a cargo de la evaluación de las alterativas para el control de las inundaciones en Chone.

179. Para ver el uso político de proyectos tecnológicos y su trayectoria como una ficción, véase Latour (1996).

180. Entrevista, 3 de septiembre de 2015.

181. Entrevista, 22 de agosto de 2015.

182. Discurso de inauguración del sistema multipropósito Chone. 24 de noviembre de 2015.
<https://www.youtube.com/watch?v=QfSxzNJuvc>



Foto 9. Volante promocional
«100% chonero».

Fuente: archivo propio.

De igual manera, con un tinte utópico y casi altruista, muy similar al evidenciado por tecnócratas del período desarrollista (capítulo 3), el exsecretario del agua explicaba la trascendencia del megaproyecto sobre el río Grande: «Mujeres de buena voluntad, patriotas de buena voluntad, nos juntamos para buscar soluciones que tienen un alcance nacional, un alcance social incommensurable».¹⁸³

La SENAGUA, ya en 2008, supo entender y explotar ese nexo simbólico que tenía el megaproyecto con la historia chonera reciente, por lo menos aquella historia cercana a la ciudad. Así lo muestran los primeros letreros de promoción y boletines volantes «100% chonero», utilizados para promocionar el proyecto (foto 9).

Después del anuncio presidencial, en el 2008, en el cual dio su apoyo al proyecto, el gobierno provincial de Manabí contrató la actualización de los estudios. A pesar de ser en apariencia un asunto meramente «técnico», fue utilizado como plataforma política por políticos locales. El trabajo contratado

183. Video promocional del sistema multipropósito Chone preparado por el municipio de Chone, 25 de marzo de 2011. <https://www.youtube.com/watch?v=6LMkhOlmd-Q>

por el Gobierno provincial consistió únicamente en «la actualización de precios, digitalización de planos y [preparación] de documentos para la licitación». ¹⁸⁴ No incluyó actualización ni ampliación de aspectos técnicos. La entrega al presidente Correa, de la supuesta actualización, fue llevada acabo en un acto público de las manos del prefecto de la provincia. Por supuesto que no se mencionó durante dicho evento el verdadero alcance de los estudios de actualización.

La popularidad con la que gozaba el expresidente Correa en ese momento, junto a la construcción histórica del proyecto como la solución para controlar las inundaciones en la ciudad, generó la oportunidad de presentar esta megaobra como incuestionable y absolutamente necesaria.¹⁸⁵ Esta coyuntura avizoraba un camino expedito para el proceso de construcción e implementación.

La megaobra, a pesar de haber sido contratada durante un gobierno autodenominado distinto al pasado, guardaba características técnicas muy similares a las construidas en el pasado desarrollista y neoliberal. Sus características guardan relación con una megarepresa, con las potenciales afectaciones socioambientales experimentadas en el pasado. Según la concepción de los diseñadores, el espacio en donde se construiría la obra era un espacio «vacío», muy similar al proyectado por la CEDEGE en la década de los ochenta para el sistema Daule-Peripa. A través de los miembros de la comunidad epistémica (tecnócratas), presentes en el Gobierno de PAÍS, se devela que los diseños de la obra se basan en la continuidad de una forma de conocimiento dominante acerca del control del agua durante un Gobierno con discurso progresista.

No obstante, las dudas e inconformidades surgieron en las comunidades de Río Grande que iban a ser inundadas por «el sueño de Chone». Al igual que en el caso de Baba, estas dudas fueron alimentadas por la memoria socioterritorial de otras luchas sociales (capítulos 4 y 5). A continuación describo tal proceso de memoria y resistencia.

184. Esto fue comunicado el 28 de septiembre del 2012, mediante oficio, por el gerente de la empresa que realizó la «actualización» al fiscalizador del sistema multipropósito Chone.

185. Según la empresa encuestadora Cedatos, para marzo del 2008, la popularidad del entonces presidente bordeaba el 67%. <https://www.eluniverso.com/2008/04/03/0001/8/02D-296B94C2A4B5BBEA8FC482E00D596.html>. Véase también, Conaghan (2008).

El proceso de resistencia en Río Grande en el contexto de la Revolución Ciudadana

La política de los gobernados en Río Grande

A pesar de no tener estudios debidamente actualizados, la SENAGUA contrató la construcción del megaproyecto. El contrato se firmó el 24 de julio del 2010, precisamente durante las fiestas de cantonización, orgullo de los choneros. Con este evento, tanto el Gobierno municipal de Chone como la SENAGUA pretendían asociar el proyecto con ese sentimiento festivo y, a la vez, deslegitimar las primeras protestas de los campesinos de Río Grande en contra de la megaobra, que empezaron a surgir a finales del año 2009. En este acto, la SENAGUA contrató a la empresa estatal china Tiesijú Engineering Group Co. Ltda., bajo un modelo de negocio que incluía también financiamiento. De hecho, con la prioridad otorgada por SENPLADES, la construcción se inició con un presupuesto de USD 8 millones, financiado por PetroChina.¹⁸⁶

Bajo un Gobierno progresista, que llegó al poder en gran medida, gracias al apoyo de los movimientos sociales (Becker 2013), se esperaba que los reclamos y preocupaciones de las comunidades campesinas de Río Grande fueran atendidas. Tal como el exsecretario del Agua lo afirmó durante la firma del contrato: «Los afectados no se deben preocupar porque recibirán justas remuneraciones por la afectación de sus propiedades».¹⁸⁷ Según estas declaraciones, al parecer, el Estado había aprendido de las malas experiencias del pasado (p. ej.: Daule-Peripa). Así también lo ratificaba la SENAGUA en uno de sus primeros trípticos de socialización del proyecto:

El Gobierno de la Revolución Ciudadana pagará indemnizaciones justas a familias afectadas por la construcción de este megaproyecto, a diferencia de Gobiernos anteriores que jamás se preocuparon.

La disconformidad y las dudas en las comunidades rurales de Río Grande eran cada vez más grandes. Como se mencionó anteriormente, la base social de la resistencia fue el CCRG, que venía funcionando hace varios años como una organización campesina. A partir de esta base se estableció el Comité de Defensa de Río Grande. Similar al proceso organizativo constituido

186. Oficio N.º SENPLADES-RM-2009-14, firmado por el entonces secretario nacional de Planificación y Desarrollo, René Ramírez. 1 de diciembre del 2009.

187. Diario *El Comercio*. 25 de julio de 2010. <http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/plan-multiproposito-chone-firmo-ayer.html>.

años atrás en contra del proyecto multipropósito Baba, las comunidades en Río Grande recibieron apoyo y tuvieron la participación activa de académicos críticos, ONG ambientalistas como Acción Ecológica, políticos locales y nacionales (p. ej.: CONAIE, Pachakutik, Sociedad Patriótica),¹⁸⁸ campesinos afectados por otros embalses e intelectuales populares. El proceso organizativo construido desde las comunidades de Río Grande se alimentó de actores y estrategias similares a las desplegadas en Baba. Tal como sucedió en el caso del megaproyecto Baba, la tragedia socioambiental del Daule-Peripa fue un ejemplo que motivó el rechazo a este «nuevo» megaproyecto. Así lo deja en claro el titular de un artículo de prensa del diario *El Comercio*: «Comuneros sufren doble “destierro” en Río Grande». ¹⁸⁹ La resistencia movilizó su reclamo mediante varios medios: jurídicos, marchas en la ciudad de Chone y Quito, manifestaciones simbólicas de rechazo, artículos de prensa, redes sociales y prohibición de ingreso de tecnócratas de SENAGUA y empleados, y maquinaria de la empresa constructora a la zona de Río Grande.

El CCRG ubicó su bastión de resistencia en la propiedad de uno de los líderes de la resistencia: Antonio Salazar. Este dirigente era oriundo de un pueblo cercano a Río Grande y compró su propiedad a mediados de los años ochenta. Tal como en Baba, aunque con mejor organización y experiencia, el movimiento en Río Grande tuvo varios líderes con diferentes procedencias e intereses. Por ejemplo, contrató a uno de los líderes de los afectados del Daule-Peripa para que les ayude a motivar a los comuneros. Junto a otros líderes, estos recibían un sueldo de unos USD 100 mensuales. De igual manera, las ONG como Acción Ecológica, representantes de partidos políticos opositores al régimen y actores críticos apoyaban con recursos económicos y capacitación a los comuneros. En este caso, las ONG jugaron un rol importante. Mientras la SENAGUA y sus técnicos intentaban convencer a los campesinos de abandonar la resistencia, las ONG proponían contraargumentos para llevar a los campesinos hacia «su lado». Tal como lo recordaba uno de los campesinos: «esos ofrecimientos [de la SENAGUA] no son verdad, los van a dejar sin nada como en el Daule-Peripa».¹⁹⁰

Entrado el año 2011, el movimiento de resistencia se negaba a abandonar el sitio donde estaban agrupados. Su trinchera era la finca de Antonio. Su propiedad estaba ubicaba precisamente en el lugar donde se erigiría el eje

188. Sociedad Patriótica es un partido político fundado por el expresidente Lucio Gutiérrez, que fue derrocado el 20 de abril de 2005. Rafael Correa, sin ser todavía un personaje público, participó activamente de las protestas que ocasionaron la caída de Gutiérrez.

189. Diario *El Comercio*, 23 de octubre de 2011.

190. Entrevista, 10 de febrero del 2015.

de la presa, por tanto, era un punto geográfico estratégico. Así como en Baba, el movimiento quería utilizar la localización geográfica de su lucha para condicionar al Gobierno y a los demás proponentes de la obra. Con el uso de una cadena cerraron la principal entrada a la microcuenca: una carretera lastreada. La entrada tenía vigilancia permanente gracias a que los campesinos se turnaban día y noche para hacer guardia. El objetivo era prevenir el ingreso de técnicos de la SENAGUA que venían para medir las fincas, y evitar el ingreso de las maquinarias de la empresa constructora. El sentido de comunidad en Río Grande era significativo, ya que casi todos los campesinos organizados en el CCRG tenían la tierra y sus fincas como un tema en común.

Paralelo al cierre de la entrada, en asambleas dominicales los campesinos decidían sobre otras acciones como querellas legales a nivel nacional e internacional, marchas en la ciudad de Chone y Quito, cierres simbólicos de la carretera Chone-Quito, publicación de artículos de prensa y el uso de las redes sociales. Para realizar todas estas actividades se unieron también otros actores de fuera. Uno de ellos era un artesano, Boris Loor, autodeclarado ecologista y profesor de colegio de la ciudad de Chone. Vivía en la ciudad y tenía una gran capacidad de oratoria. Además, era autoeducado en aspectos ambientales y políticos. Era un reconocido intelectual popular de Chone. En varias ocasiones participó en debates públicos organizados por la radio o televisión local con autoridades del Gobierno nacional y local. Su capacidad de argumentación tanto oral como escrita permitió al CCRG elevar sus reclamos en varios niveles. Otro ejemplo es la participación de un reconocido abogado y político local, Carlos Espinel. Con la ayuda de él se presentaron varias querellas legales. La más grande fue la presentada frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al igual que en Baba y en Daule-Peripa, los campesinos no querían dejar sus tierras y tampoco querían quedar aislados y con problemas de transporte. En su lugar, tenían propuestas técnicas para reemplazar la opción de la megapresa. Entre las propuestas cuentan el desazolve del río Chone, la construcción de las pequeñas presas cortapiés y el desmantelamiento de una pequeña represa ubicada aguas abajo de la ciudad. Según los campesinos, y el asesoramiento de un académico crítico de la Universidad de Berkeley (California) que convivió con los campesinos varios meses, esa represa empeoraba los eventos de inundación. Una de las propuestas más importantes era mejorar el sistema de alcantarillado de la ciudad, ya que con fuertes lluvias colapsaba.¹⁹¹ A pesar de que las protestas no tenían tantos adherentes como en el caso de Baba, ni tampoco se daban en

191. Información proveniente de entrevistas y archivos del CCRG.

un punto geográfico tan estratégico como la carretera Panamericana Quito-Guayaquil, las acciones de resistencia lograron paralizar el inicio de la construcción de la represa por más de un año.

Pronto, las autoridades de Gobierno señalaron esta serie de acciones de resistencia como el regreso al país del «pasado», aquel al que la Revolución Ciudadana había ofrecido nunca más volver. Así lo dejaba en claro el entonces vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, encargado de los sectores estratégicos: «No vamos a detener la obra. Seguiremos enfrentando las adversidades y los desafíos que pueda representar un proyecto de esta naturaleza». ¹⁹² En la misma misiva, haciendo alusión de que los campesinos de Río Grande habían llevado al Estado ecuatoriano a las cortes internacionales, advirtió:

Todo, [las protestas son protagonizadas] por los mismos de siempre, que prefieren que Chone siga sufriendo inundaciones antes de apoyar una decisión política que busca el bienestar de los ecuatorianos [...]. Prohibido olvidar. Nos defendimos [de esas demandas] para poder seguir con esta obra. [...] A los que sufren porque el Ecuador avanza, pues que sigan sufriendo, ya que seguiremos construyendo proyectos multipropósitos, [...] a pesar de que algunos quieran que el Ecuador se quede en el pasado.

El fuerte proceso de oposición al proyecto obligó al Gobierno nacional al despliegue de un variado conjunto de estrategias gubernamentales que iban desde el uso de la violencia explícita, hasta otras formas más persuasivas.

El ímpetu megahidraúlico de la Revolución Ciudadana y sus estrategias gubernamentales

Así como las comunidades locales han aprendido a defender sus territorios de experiencias pasadas, el Estado también aprendió a adaptar sus discursos y prácticas en torno al desarrollo de megaproyectos hidráulicos. Con el afán de desarrollar el proyecto multipropósito Chone, el Gobierno, con marcado discurso socialista y progresista, dejó ver sus contradicciones.

Dadas las grandes capacidades de propaganda política mostradas por el Gobierno de Correa (Espinosa Villagómez 2015), una de sus primeras estrategias fue tratar de persuadir a los ciudadanos de Chone mediante propa-

192. Boletín de prensa de la vicepresidencia de la República del Ecuador. <https://www.vicepresidencia.gob.ec/vicepresidente-jorge-glas-proyecto-multiproposito-chone-es-histórico-para-el-ecuador/>. 4 de noviembre del 2013.



Foto 10. Cartel de promoción del sistema multipropósito Chone ubicado en la ciudad de Chone.

Fuente: archivo propio.

ganda. La intención era prevenir que más gente se uniera a las protestas. Durante los primeros años del proyecto, el oficialismo, con el apoyo del Gobierno municipal, instaló en toda la ciudad de Chone una serie de fotos de inundaciones pasadas.

El objetivo principal no era solo legitimar el proyecto (control de inundaciones), sino ligarlo, explícitamente, a una de las propuestas que había motivado la gran aceptación del Gobierno en las urnas: no volver al pasado y, en contraposición, promover el Buen Vivir. A más de colocar en las principales calles de la ciudad gigantografías que recordaban las inundaciones y su tragedia, se expusieron letreros tanto en la zona urbana como rural, que fortalecían el vínculo entre el megaproyecto y el ofrecido Buen Vivir (foto 10). Es así que el megaproyecto no solo se proyectaba como una tecnología «técnica» de control de inundaciones, sino, sobre todo, se presentaba como portadora o el camino hacia el proyecto político gubernamental.

A diferencia del discurso de participación social impulsado por el oficialismo, en la práctica, el afán de construir el proyecto multipropósito hizo que los procesos fundamentales de participación e inclusión ciudadana, garantizados por la constitución (capítulo 2), sean pasados por alto y subestimados. Una ilustración al respecto es el proceso de implementación del EIA y su tardío proceso de «participación social». Primero, todo el proceso se dio

de forma extemporánea y utilitaria. En evidente contradicción con el discurso oficial, la misma SENAGUA (2012) reconoce, en uno de sus informes, que el proceso de licenciamiento ambiental y participación social tuvo lugar casi cinco meses después de haber sido firmado el contrato de construcción del proyecto. Mientras el contrato de construcción fue firmado en julio del 2010, el proceso de participación social se activó formalmente a finales del mes de noviembre del mismo año, y la licencia ambiental se obtuvo apenas a inicios del año 2011. Así lo recuerda indignado uno de los campesinos de Río Grande: «El punto de ellos [SENAGUA] es hacer el embalse aquí y de ahí recién ver cómo nos van a reubicar [...] no tienen un plan». ¹⁹³ O como lo expresó el administrador del contrato durante una de las sesiones de «socialización» del EIA: «Hay que pensar en el beneficio de 15.000 familias [de la ciudad de Chone], 230 familias [de río Grande] están supeditadas a las 15.000». ¹⁹⁴ Con esto se evidencia que una de las únicas herramientas o espacios que podrían haber facilitado un proceso real de participación social fue utilitario al proyecto político gubernamental. El proceso de licenciamiento ambiental estuvo más motivado por el cumplimiento de obligatorios trámites burocráticos, que por llevar a cabo una real participación social de las comunidades de Río Grande. Muchos de los técnicos mostraron gran sensibilidad sobre los impactos socioambientales que causaría este megaproyecto. Ellos sabían las afectaciones que causaría el proyecto:

Nosotros [choneros y manabitas] somos aquí apegados a nuestras cosas a nuestras montañas, a nuestras fincas, a nuestros ríos, [...] entender un río en donde usted se baña, donde usted coge camarones en el invierno, donde usted le da agua al caballo, donde ha estado toda su vida a lado del río, y ahora quitarle su río es muy duro. Son cosas invaluables.¹⁹⁵

Aun así, el proceso de construcción e implementación de la obra alcanzó niveles de gran indiferencia. Los técnicos y tecnócratas siguieron adelante. Al tiempo que estos técnicos mostraban, por un lado, empatía con el arraigo y los valores incommensurables que están inmiscuidos en las formas de vida de los habitantes de Río Grande, por otro lado, subestimaban sus capacidades políticas e intelectuales para participar en un proceso real de toma de decisiones como el del licenciamiento ambiental:

193. RTU Noticias, 16 de agosto del 2011. <https://www.youtube.com/watch?v=Cg2kpmFMrF8>.

194. Audiencia pública del EIA. 1 de diciembre del 2010.

195. Entrevista, 1 de septiembre 2015.

No había nada que consensuar, eso [la represa] iba porque iba, así lo dijo el presidente. [Además], esas cosas técnicas las puedo socializar con ingenieros, con academia, pero la comunidad [campesina] no lo entiende.

De esta forma la justificación del proyecto y la subordinación de los campesinos caminaron de la mano. A pesar de la aparente sensibilidad presentada por este funcionario, en la práctica, la visión tecnocrática —que evoca el proceso de construcción del sistema Daule-Peripa— prevalecía en sus declaraciones.

Dada la fuerte cohesión social del movimiento de resistencia en sus inicios, el Gobierno optó por implementar estrategias de debilitamiento premeditadas. «El objetivo era dividir la resistencia», recordaba uno de los asesores políticos de la SENAGUA.¹⁹⁶ Una de las estrategias principales usadas por el Gobierno para desarmar la resistencia fue la expropiación de los predios que se ubicaban en el eje. Así lo recordaba uno de los ingenieros a cargo de la obra:

La situación era compleja, entonces yo le dije al ministro: lo único que necesito para construir el cuerpo de la presa son los terrenos que están en el eje, expropiemos cuatro predios, pague y empezamos a construir el cuerpo de la presa. Cuando comience a construirse el cuerpo de la presa, todas las personas obligatoriamente tienen que venir porque les vamos a inundar. Así de rápido.¹⁹⁷

La posición del ingeniero me recuerda la que tuvieron los técnicos que implementaron el proyecto Daule-Peripa. Sin embargo, a diferencia del Daule-Peripa, el proceso de expropiación tomó más trabajo del esperado inicialmente por el Gobierno. Un aspecto clave en este «retraso» era que el principal predio a ser expropiado era el de Antonio. Sin este predio, la SENAGUA no podía avanzar con la construcción. Mientras Antonio permaneció fuerte en su posición, los demás campesinos tampoco accedieron a negociar sus fincas. En efecto, Antonio no negoció su finca a pesar de haber recibido amenazas y jugosas ofertas económicas por parte del Gobierno. Al referirse a este caso, el exsecretario del Agua lo confirma:

Sí, en reunión privada le ofrecimos un buen pago por sus tierras al líder de la oposición, pero estaba necio». Así lo recuerda, el mismo Antonio, dueño

196. Entrevista, 5 de marzo del 2015.

197. Entrevista, 27 de noviembre del 2014.

de la finca en donde se ubicó el bastión de la resistencia: «Al inicio el mismo ministro me ofrecía 400.000, después 500.000 y hasta 800.000 al último a través de mis hijos...pero yo no cogí nada».

A la luz de este inconveniente, lo primero que hizo la SENAGUA, tal como recomendaba uno de los ingenieros a cargo de la obra, fue utilizar el poder soberano del Estado. Primero la SENAGUA procedió a declarar varias fincas como propiedad de utilidad pública. A partir de esa acción, un juez de Chone ordenó a la fuerza pública dar apoyo y garantías para la ocupación inmediata y violenta del predio de Antonio, donde se agrupaba la resistencia.

En Río Grande corrían las 4:30 de la madrugada del 17 de octubre del año 2011. Decenas de campesinos ubicados en la finca de Antonio pernoctaban para proteger lo que ellos consideraban justo: sus propiedades como formas de vida y base de su subsistencia. En tanto, bajo el liderazgo de la gobernación de la provincia de Manabí, cerca de 250 efectivos policiales y varios tractores todavía en tinieblas, iniciaron un sorpresivo y violento desalojo. Junto a los policías, quienes se abrían paso frente a la resistencia desesperada de los todavía somnolientos campesinos, los tractores barrián con todas las construcciones de madera y guadua que habían sido levantadas por los protestantes. Campesinos y campesinas corrían asustados de un lado para otro, muchos empuñando sus machetes intentaban protegerse de la vespertina agresión. Así me lo confesó una mujer afectada, con lo ojos llorosos debido al recuerdo: «Yo no olvido esa madrugada, aay señor fue bien feo [suspiro]... hasta ahora me han quedado esos miedos. Siento que ya no soy la misma». ¹⁹⁸ Producto de la «pacífica» incursión, una mujer campesina abortó, un niño resultó perdido por varias horas y decenas sufrieron agresiones producto del gas lacrimógeno esparcido de forma directa en sus rostros.

Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la región, Río Grande ya era otro. Varios campesinos fueron apresados, criminalizados y llevados a la cárcel de Manta, Antonio había sido esposado y llevado a la fuerza al retén policial de la ciudad de Chone. El espacio en donde se ubicaría el cuerpo de la represa lucía lleno de tractores y policías caminando sobre las ruinas de madera y vegetación. Tanto en la ciudad como en el campo se respiraba una profunda consternación. Para justificar este evento, el Gobierno hizo su propio video sobre el desalojo. Con la finalidad de presentar su «respeto» a los derechos humanos, incluso involucró en el evento de desalojo a

198 Entrevista, 3 de septiembre del 2015.

representantes de la Cruz Roja. Para reforzar esta imagen de «incursión pacífica», en la primera emisión del noticiero nacional de uno de los canales de televisión estatal, un funcionario afirmó: «[este tipo de organismos] dan fe que no hubo ningún tipo de violencia [...]. Hemos cumplido con el debido proceso y la ciudad de Chone se beneficiará ahora sí de este proyecto tan importante.¹⁹⁹

Esta acción coercitiva logró su objetivo, así se la reconoció tanto en el informe policial del operativo, que formaba parte de un documento interno de la SENAGUA, como por la propia SENAGUA, respectivamente:

Con el apoyo del personal policial [...] se procedió a ingresar a dichos predios para la ocupación inmediata ordenada por la autoridad competente, al tener un numérico superior a los opositores, se les pudo disuadir y hacer abandonar los terrenos con el uso progresivo de la fuerza (SENAGUA 2012, 267).

Es necesario resaltar el logro obtenido con la incursión [policial] a la zona de construcción del cuerpo de la presa... lo que dio como resultado la adhesión de los propietarios de la zona de Río Grande que se encontraban en oposición (SENAGUA 2012, 247).

Horas después del desalojo, mientras la maquinaria de la empresa constructora ingresaba a la zona para seguir desmontando la vegetación, en Quito, el uso de la fuerza fue legitimado a través del poder soberano del Estado que selló su estrategia. El presidente Correa firmó el Decreto Ejecutivo N.º 914, mediante el cual se declaró a la zona de influencia del proyecto como área de seguridad nacional. Por tanto, Río Grande pasó a ser resguardada por la fuerza pública por cuatro kilómetros a la redonda, lo cual permitió «garantizar» la entrada de la maquinaria de la empresa constructora, además de prevenir a los opositores de organizar reuniones dentro del área delimitada por el decreto. Este evento fue un momento crucial para el debilitamiento de la resistencia campesina y el inicio de la construcción e implementación del proyecto multipropósito Chone.

Este tipo de estrategias explícitamente concertadas, expresión común de formas soberanas de gubernamentalidad, no fueron las únicas formas en las

199. Esta historia ha sido reconstruida a partir de varias entrevistas realizadas a campesinos y campesinas de Río Grande. Una entrevista profunda realizada a la entonces gobernadora de Manabí, varios artículos de prensa y boletines de prensa publicados por la ONG como Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH). Además, se utilizó el video presentado en televisión nacional (17 de octubre de 2011) que reposaba en los archivos de la Dirección de Comunicación Social de la SENAGUA.

que el oficialismo trataba de implementar el multipropósito Chone, y su noción de desarrollo. El Gobierno además utilizó su poder económico para persuadir a los campesinos en resistencia, practicando una forma de gubernamentalidad neoliberal. Un ejemplo de ello es la manera en cómo se utilizaron los procesos de indemnización y compensación económica. A pesar de que los campesinos proclamaban colectivamente que «las tierras de Río Grande no estaban en venta», debido a la persuasión del Gobierno, varios campesinos decidieron negociar individualmente sus propiedades —muchas veces a escondidas de los otros opositores—, lo que contribuyó a resquebrajar la confianza interna del movimiento. Una de las mujeres del CCRG explica cómo, después de recibir su compensación, empezó interesarse por el proyecto:

Yo estando en la oposición estuve en la SENAGUA, yo sí fui a averiguar lo que fue, que me explicaran lo de la maqueta, qué más se pensaba hacer, que si se construía la represa qué cosas iban hacer, a averiguar todo.²⁰⁰

Esta situación se podría explicar por varios aspectos. Primero, la estrategia oficialista de utilizar lazos familiares y de amistad que existían en la zona entre «opositores» y «no opositores» (incluidos funcionarios de la SENAGUA) fue efectiva. Segundo, similar a lo evidenciado en el caso del proyecto multipropósito Baba (capítulo 4), a pesar de la cohesión social, al interior del movimiento de resistencia había un cierto nivel de desconfianza porque, según varios entrevistados, las decisiones de este obedecían a ambiciones particulares de los líderes y no buscaban el beneficio colectivo. Bajo estas dudas, varios campesinos accedieron a negociar sus tierras de manera individual debido a una desilusión con los líderes. Y tercero, debido a la criminalización de los líderes sociales en otras partes del país (Amnistía Internacional 2012), varios campesinos tenían miedo de ser también encarcelados o enjuiciados por protestar, o temían ser desalojados de sus tierras por la fuerza como sucedió con Antonio.

La urgencia de la SENAGUA, de construir la represa, motivó la utilización del poder económico que tiene el Estado para ofrecer pagos extraordinarios por las tierras en disputa. Los pagos estaban directamente relacionados con la urgencia de desmovilizar la resistencia. Esto se evidencia al comparar el precio final que pagó la SENAGUA por dos fincas de similar ubicación y características que fueron negociadas en diferentes épocas. La primera negociación fue durante el período de mayor resistencia, y la segunda después del desalojo, cuando la intensidad de la resistencia había bajado y varios campesinos renuentes habían cedido a las ofertas gubernamentales. Ambas

200. Entrevista, 3 de septiembre de 2015.

propiedades estaban ubicadas en el sitio donde se levantaría el eje de la presa. En el primer caso, el propietario de la finca aceptó negociar con la SENAGUA y obtuvo un pago aproximadamente de USD 10.000 por hectárea; mientras que en el segundo caso, el campesino (Antonio), líder del CCRG que no aceptó negociar, recibió un pago de cerca de USD 4900 por hectárea. Después del desalojo en la propiedad de Antonio, realizado por la fuerza pública, el proceso de negociación fue más fácil. La resistencia se fue debilitando hasta desaparecer. Las únicas acciones que seguían adelante eran las querellas legales; no obstante, incluso, estas acciones no tuvieron éxito.

Simultáneamente al uso de las formas de poder gubernamental soberano y neoliberal, se desplegaron, también, formas más sutiles, propias del poder disciplinario. Estas fueron las estrategias más efectivas, ya que el Estado había aprendido de las formas de resistencia en los otros proyectos. Los discursos de las autoridades y de los programas de compensación social estaban bañados de un proceso de moralización tecnológica. Así lo expresaba frecuentemente el exvicepresidente de la República, cuando condenaba públicamente a los campesinos de Río Grande, haciendo uso de un conferido estatus de «abnormales» o «irracionales»:

Deberíamos estar unidos todos buscando el desarrollo, y no es así, todavía hay los que se oponen a todo [...] quieren que vivamos en las cavernas [...] los atrasapueblos, los que no quieren que nos desarrollemos.²⁰¹

A partir de esta relación entre el megaproyecto y el discurso del Buen Vivir, se legitimaban las acciones gubernamentales (violentas o no) «necesarias» para su implementación. A través de relacionar el megaproyecto con el Buen Vivir, automáticamente, aquellos en contra de la megaobra quedaban señalados como «atrasapueblos», y en contra de su propio desarrollo. Así, en busca de la internalización de esta relación en la sociedad chonera, el Gobierno impulsó este proyecto. Tal como lo evidencia la experiencia de uno de los voceros más activos del movimiento social: «Cuando iba en bicicleta por Chone, algunas personas me gritaban: “¡Atrasapueblos!” “¡Deja que se construya el multipropósito!”». ²⁰² De esta manera, el discurso y el lenguaje de desarrollo asociado al sistema multipropósito Chone llegó a formar parte de la idiosincrasia de muchas personas. El desarrollo de este proyecto es una ilustración de cómo, en el caso ecuatoriano, el control del

201. *Enlace ciudadano* 346, 2 de noviembre de 2013.

202. Entrevista, 8 de febrero de 2015.

agua también envuelve el modo de gobernar la sociedad. A continuación se presenta, con mayor detalle, una de las estrategias del Gobierno que ilustra este último aspecto.

«Recursos que construyen felicidad»: Ecuador Estratégico y su gubernamentalidad

Querer transformar [la sociedad] vía política pública y vía eficiencia no es posible porque la transformación verdadera está en el ser humano: debemos decodificar patrones premodernos y codificar nuevos patrones modernos para la construcción del Buen Vivir (exministro de la Secretaría Nacional del Agua).²⁰³

Con esta frase el exministro ensayaba una explicación a la «irracional» oposición de los campesinos de Río Grande, mientras hacía explícito lo que, según su visión, era uno de los ejes orientadores del proyecto político de la llamada Revolución Ciudadana. Así, el antagonismo entre «el viejo país» y «el moderno» se estaba materializando en el conflicto surgido en torno a este proyecto emblemático. Gracias al fuerte vínculo creado entre el proyecto multipropósito, como símbolo y medio para alcanzar el Buen Vivir, fue posible extender el alcance de la obra hidráulica más allá del control del agua.

La empresa pública Ecuador Estratégico (EEEP) desempeñó un papel político crucial en la implementación de este modelo de gobernanza del agua y de la sociedad. EEEP fue creada en el 2011, como el brazo ejecutor del entonces Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE). Surgió como una propuesta institucional del Gobierno con el fin de materializar el discurso del Buen Vivir en las poblaciones afectadas por los proyectos de los llamados sectores estratégicos (capítulo 2). Su trabajo se fundamentó en el uso del 12% de las regalías mineras y de utilidades petroleras, del 12% de los excedentes generados por las empresas estatales petroleras, y del superávit (hasta del 30%) de la generación eléctrica privada.²⁰⁴

La ventaja de la EEEP radicó en que recibía los recursos económicos directamente del Banco del Estado. Fue un ente autónomo financiera y administrativamente. Esto hizo que hasta el 2016 invirtiera cerca de USD 850 millones en aproximadamente 1200 proyectos de infraestructura. Si bien la empresa

203. Entrevista, 21 de julio de 2016.

204. *Ecuador Estratégico EP*. Folleto resumen de «Rendición de Cuentas 2016». <http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2016-2/>

se creó para agilitar la implementación del Plan Amazonía, pronto extendió su influencia a doce provincias del país, en donde existían o se estaban ejecutando «proyectos estratégicos» como el sistema multipropósito Chone. Sus obras incluían la planificación, contratación y construcción de carreteras, proyectos de saneamiento ambiental y alcantarillado, parques creativos y de regeneración urbana, centros de salud y entre sus propuestas estrella estaban la construcción de las llamadas «escuelas y comunidades del milenio». Estas eran «instituciones modelo» inspiradas en visiones centralistas y urbanas de organizar el espacio y la sociedad. La manera de ejecución de sus proyectos era de forma directa y/o, en algunos casos, mediante coordinación con los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales (GAD). A pesar de que las tensiones políticas entre los GAD y el Gobierno central sobrepasan el interés de este libro, es preciso señalar que la EEEP con sus obras se convirtió, en muchos casos, en la herramienta con la que el Gobierno central podía tener presencia directa a nivel local. Esto se daba particularmente en donde los GAD no estaban alineados al proyecto político oficialista. Con frecuencia se desencadenaban pugnas políticas a nivel local, pero también una superposición de competencias que, eventualmente, terminaba afectando a los beneficiarios de las obras construidas por la EEEP. Un ejemplo de esto se muestra más adelante.

En Chone, las obras de compensación social de la EEEP involucraron, principalmente, la construcción de dos vías asfaltadas que comunican las comunidades rurales con la carretera principal Chone-Quito, la construcción de una escuela del milenio, la ampliación de la planta de agua potable de la ciudad de Chone, la instalación de un nuevo cementerio y la implementación de la comunidad del milenio Ciudad Jardín (mapa 5). Esta última está ubicada en el sitio conocido como la Tablada de Sánchez, que sirvió para reasentar a 81 familias afectadas,²⁰⁵ además incluyó la entrega de la administración de dos fincas a los reasentados sin títulos de propiedad: La Arabia, de aproximadamente 100 hectáreas, y La Esperanza, con una superficie de alrededor de 80 hectáreas. De acuerdo con los planes del Gobierno (MAGAP y EEEP), los reasentados debían trabajar ambas fincas de forma colectiva.

Legitimados por tales obras, los técnicos de la SENAGUA aseguraban que el proyecto multipropósito, lejos de ser un perjuicio, ha sido una «bendición» para los campesinos de Río Grande. Estaban convencidos de que los

205. De acuerdo con la SENAGUA, la construcción de la represa afectó directamente a 181 familias; sin embargo, la comunidad del milenio solo tiene capacidad para 81. Es decir, cerca del 55% (100 familias) de los afectados no habían sido reubicados hasta mediados de 2018.

campesinos saldrían del «atraso» y que, eventualmente, «llegarían a ser» un pueblo más desarrollado. Así lo expresó uno de los técnicos a cargo del área socioambiental del megaproyecto:

Su calidad de vida ya estaba así [mal] cuando llegamos, ¡nosotros estamos más bien ayudando a los campesinos a mejorar! El múltiple Chone no trajo los problemas, ellos ya vivían aislados... sin vías, sin escuelas ni casas dignas.²⁰⁶

No obstante, esas «mejoras» debían estar bajo las normas, valores y reglas de los técnicos de la SENAGUA, la EEEP y el MAGAP. Una ilustración de esto se muestra al analizar el criterio detrás de la selección del sitio en donde se ubicó la Ciudad Jardín y su planificación territorial. Durante las primeras etapas del proyecto multipropósito, la SENAGUA contrató a una empresa local para que realizara la planificación de los tipos de viviendas y del lugar del reasentamiento. En esos planes se contemplaba crear tres nuevos reasentamientos en sitios cercanos a las áreas de afectación del embalse. En esa propuesta, cada casa tendría acceso a una o dos hectáreas de tierra de propiedad familiar, lo cual permitiría a los reasentados continuar con sus formas de vida.

La finalidad era ubicar a los afectados cerca de su antigua vivienda y rodeados de los mismos vecinos para que el impacto social sea menor. Sin embargo, en el 2011, durante el punto más álgido de la protesta y la reciente creación de la EEEP, el Gobierno decidió cambiar los planes de reasentamiento. La intención era implementar una nueva lógica, un ordenamiento territorial que preserve la calidad del agua del embalse y regenere los bosques de alrededor a este. Por lo tanto, la microcuenca río Grande (mapa 5), en donde se ubica la represa, debía ser planificada y reordenada como un espacio «vacío» o «vaciable».

De esta manera, los técnicos vieron la construcción de la represa como una oportunidad para traer «orden» a ese territorio rural. Así lo expresó uno de ellos, quien estaba a cargo del manejo socioambiental de la obra:

Lo ideal es tener esto [la microcuenca de río Grande] vacía de gente, [...] se decidió cambiar y hacer el reasentamiento fuera de la microcuenca para evitar afectar la calidad del agua del embalse, por el tema de los desechos, básicamente por problemas ambientales. El presidente [Correa] quería que

206. Entrevista, 1 de septiembre de 2015.

este fuera un *modelo* de reasentamiento vinculado con un megaproyecto en América Latina.²⁰⁷

Esta fue una de las mayores razones por la que la comunidad del milenio se construyó fuera de la microcuenca del río Grande. Se la ubicó en la microcuenca del río Mosquito (mapa 5), al igual que la escuela del milenio destinada a aglomerar a gran parte de niños y niñas de los alrededores. Además, a decir de los técnicos del área socioambiental, «la disminución de costos económicos y la facilidad para proveer servicios básicos» fueron parte de los criterios para haber decidido cambiar los planes del reasentamiento de tres comunidades a una sola. Esto sugiere que, a más de aplicar las recetas universalizadas de gobernanza de embalses sobre el manejo de las áreas circundantes a estos (ICOLD 2017), se quería replicar un modelo urbano de organización del espacio y, con ello también, promover un cambio de la «premodernidad» a la «modernidad». Esto demuestra cómo el proyecto multipropósito, en el discurso y en la práctica, no era únicamente un medio para controlar la naturaleza (el agua), sino también para «ordenar» y gobernar la sociedad.

Considerando que la comunidad del milenio inició su construcción durante los momentos más fuertes de la resistencia —además, partiendo del hecho de que cerca de cien familias afectadas directamente no han sido reasentadas en una comunidad del milenio; e interpretando las respuestas indiferentes y esquivas obtenidas por parte de los ingenieros a cargo del proyecto, cuando les preguntaba sobre, ¿qué pasó con los demás afectados?—, mi argumento es que la comunidad del milenio fue utilizada, más que como una medida de compensación social, como un medio de desmovilización campesino. Después de que el conflicto en Río Grande menguó, la urgencia por reasentar a todos los afectados también disminuyó. La estrategia de desmovilización a través de la comunidad del milenio funcionó en base al vínculo que el Gobierno creó entre el proyecto multipropósito Chone, el Buen Vivir y la comunidad del milenio (foto 11). Esto implicaría que los opositores al proyecto sean vistos también como opuestos al Buen Vivir, y al desarrollo.

A lo largo de la etapa de planificación de la comunidad del milenio, los técnicos de la SENAGUA se acercaban a los campesinos, de forma individual, para ofrecerles casas con la condición de que apoyen el proyecto y que persuadan a más gente de abandonar la protesta. A la larga, esta estrategia dio los resultados esperados. Sin intención de calificarlos como cooptados,

207. Entrevista, 1 de septiembre de 2015.



Foto 11. Letrero ubicado en la entrada del futuro reasentamiento Ciudad Jardín.

Fuente: archivo propio.

varios campesinos aceptaron la propuesta gubernamental.²⁰⁸ Así lo comenta un exlíder del CCRG y el primer dirigente de la comunidad del milenio:

Nosotros nos oponíamos, [...] pero una noche un ingeniero de SENAGUA me llamó y me dijo: «sabe, el presidente les va a construir un pueblito. Tal fecha traiga a toda la gente para que firmen para darles las casas». Entonces ahí conversé primero con mi familia y me fui. Me pasé de la oposición a favor del Gobierno. Nosotros cedimos. Nosotros estábamos ciegos y otros de la oposición, que ahora viven aquí en estas casas, también. Ahora todas las casas están con gente.²⁰⁹

Una vez construida la comunidad del milenio, la EEEP mediante un programa de «capacitación» estableció e introdujo reglas y normas sociales para vivir acorde con la nueva configuración del espacio físico. Así lo recuerda uno de los reasentados:

Cuando nos reasentaron, la EEEP nos mandó unos técnicos de ellos. Dos veces a la semana nos hacían reunir para capacitarnos sobre cómo vivir: manejo,

208. Para un debate más extenso sobre las críticas frente a los que no resisten en las luchas por recursos naturales, véase a Fletcher (2001, 2007).

209. Entrevista, 10 de diciembre de 2014.



Foto 12. Vista panorámica de la Comunidad del milenio Ciudad Jardín.

Fuente: archivo propio.

cuidado, limpieza, con los niños y todo eso. O sea, cómo convivir. Es que nosotros no sabíamos nada. Imagínese los primeros días, los mismos niños no sabían qué hacer, se hacían locos, subiéndose a los tejados, todo eso.²¹⁰

Contrario a las costumbres locales, la comunidad fue concebida y construida por el Gobierno como un modelo de Buen Vivir, en relación con la noción de «lo urbano», o una «ruralidad permitida» (Hale 2004) bajo normas urbanas. Antes del reasentamiento, las fincas estaban ubicadas muy lejos una de otra. Esto les daba mayor independencia. Lo más importante eran sus costumbres en relación con el trabajo. Comúnmente, las mujeres tenían huertas y animales menores junto a sus casas y los hombres salían a cazar y a mantener ganado y cultivos más extensos. Gran parte de su alimentación diaria provenía de sus fincas. Ciudad Jardín, por el contrario —de manera similar a cualquier ciudadela urbana— está organizada en manzanas, pero de una forma sobrenormalizada: con señales de tránsito y límites de velocidad cada diez metros. También cuenta con espacios comunitarios: parque, mercado, iglesia, centro de cómputo, canchas deportivas (fotos 12, 13 y 14). Entre las nuevas reglas de convivencia de la comunidad estaban: la organización por manzanas para mantener los espacios comunes, la prohibición de

210. Entrevista, 11 de diciembre de 2014.



Foto 13. Letrero de entrada a la Comunidad del milenio.

Fuente: archivo propio.

hacer fiestas pasada la media noche, la limitación para criar animales de corral o cerdos, y no dejar inhabitada la casa por más de quince días, de lo contrario, la EEEP analizaría la posibilidad de otorgarle la vivienda a otra familia. El Gobierno quería mostrar con eso que el modelo propuesto era un éxito.

Como parte del proceso de «capacitación», la EEEP desarrolló e implementó un juego de mesa, con el fin de «enseñar» a los reasentados el camino «correcto» —de acuerdo con el proyecto político oficialista— hacia la felicidad y el Buen Vivir. Este juego fue implementado en la comunidad a través de promotores comunitarios, con varias sesiones de capacitación y visitas de los reasentados a otros proyectos estratégicos (agrícolas, trasvases de agua, represas, hidroeléctricas) construidos por el Gobierno. El juego tiene tres versiones, cada una dedicada a cada sector estratégico: minería, hidrocarburos y megaproyectos hidroeléctricos. Durante mis estancias en la comunidad, jugamos, sobre todo el de los sectores de minería e hidroeléctrica. La lógica del juego es similar al popular Juego de la Oca. En la foto 15, el juego incluye colores, dibujos y cartillas informativas en lenguaje sencillo y directo. Incluye datos y una trayectoria a seguir, sobre la base de casilleros que «premian» o «castigan» según la elección del jugador y a su suerte. Con este razonamiento, si el jugador tiene la suerte de caer en el casillero donde se ejecuta un proyecto estratégico, este avanza más rápidamente.



Foto 14. Vista nocturna de calles y casas al interior de la Comunidad del milenio.

Fuente: archivo propio.

Esto último es «una clave del juego», me comentaba emocionado uno de los campesinos reasentados. «Todos queremos ganar, cierto?». En la versión sobre la minería y el petróleo, parte fundamental del juego es que, conforme el jugador avanza en el tablero, este debe ir contestando una serie de preguntas que están escritas en grupos de tarjetas. Por ejemplo, una tarjeta pregunta: «¿En Ecuador, las actividades petroleras protegen los recursos hídricos?», la respuesta categórica es «Sí». Otra interroga: «¿Para qué se utiliza el dinero proveniente de los recursos estratégicos?». La respuesta sin más explicación es: «Para generar desarrollo en el país». Una de las más sugestivas es: «¿Qué significa el petróleo para el Ecuador?». La única respuesta posible es: «Desarrollo, prosperidad y bienestar».

De esta forma, los valores y verdades del Gobierno son presentados a los habitantes de la comunidad de forma lúdica. No obstante, los reasentados, conscientes de sus decisiones, aceptaban o rechazaban lo que a su criterio era mejor para su bienestar: las casas, los juegos, los viajes. Varios de ellos, a pesar de la disciplinariedad aplicada por el Gobierno, criticaban y/o se resistían a aceptar todo lo ofrecido.

Ninguna casa tiene un terreno extra para cultivar ni criar animales; en su lugar, el Gobierno adquirió las fincas La Arabia y La Esperanza, con la finalidad de promover el trabajo colectivo de los reasentados. Como parte

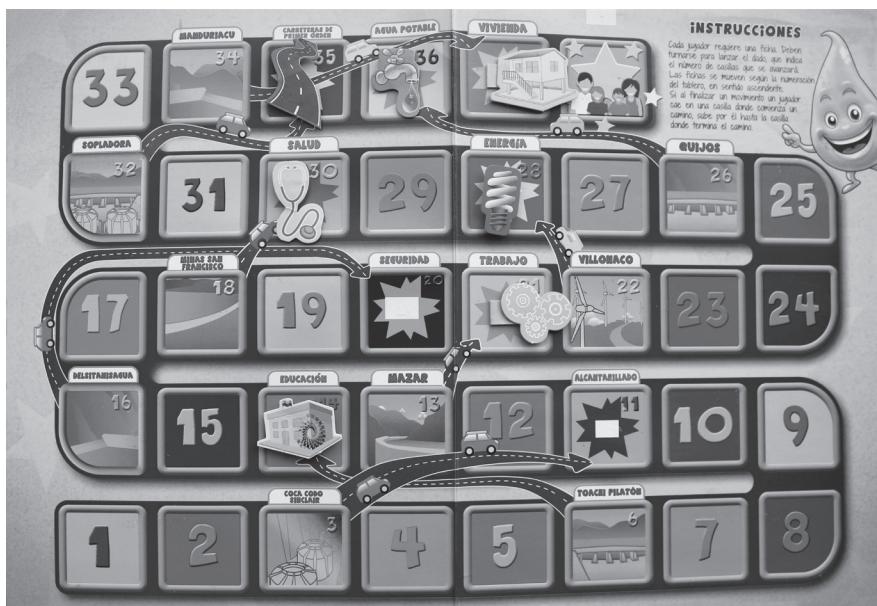


Foto 15. Cartilla de juego de EEEP diseñado para el módulo sobre hidroeléctricas.

Fuente: archivo propio.

de la «reactivación» productiva, el MAGAP contrató la construcción de un sistema de riego para La Arabia. La EEEP creó también una Junta de Regantes en Ciudad Jardín. Ambas iniciativas estaban pensadas para agrupar y organizar a todas las familias afectadas en torno a los trabajos agrícolas comunales. No obstante, pronto, este modelo de «comunalización» de trabajo rural empezaría a tener problemas. Tal como lo expresa uno de los dirigentes de la junta:

Aquí la gente casi no le gusta sembrar en comunidad. Están acostumbrados a tener lo propio. No es lo mismo que usted se quiera agrupar a que lo obliguen a estar [agrupado]. [Además] la gente de aquí es desplazada y hay gente opositora, [...] la gente de aquí viene de diferentes lados. Es que las autoridades no saben que la gente viene de lugares sólidos, [aislados], no estábamos acostumbrados a trabajar asociativamente, era cada cual por su lado. Es que ellos [EEEPEP y MAGAP] nos decían: «ustedes tienen que trabajar en comunidad, en conjunto, así como en otros lados». Ellos nos venían con sus propias reglas.²¹¹

211. Entrevista, 10 de octubre de 2015.

Estos desencuentros no son extraños si consideramos cuales han sido las prácticas de producción y de acceso a la tierra que los campesinos habían practicado por siglos (Ferrín-Schettini 1986). Con esta reflexión no pretendiendo una esencialización de «lo tradicional»; sin embargo, mi intención es resaltar los desencuentros entre los ideales tecnócraticos y las formas de vida de los campesinos.

Uno de los dirigentes de la comunidad del milenio me comentó que para «superar estos problemas de adaptación», la EEEP junto al MAGAP y al MICSE organizaron una visita a una experiencia de comunalización que era liderada por el MAGAP en la provincia de Santa Elena.²¹² El objetivo de la visita fue «enseñar» a los campesinos reasentados «cómo se debe trabajar comunalmente». Así lo recordaba con entusiasmo el presidente de la junta de regantes de Ciudad Jardín:

A nosotros nos llevaron a Santa Elena a ese proyecto PIDASSE, si ha visto como esa gente trabaja allá? Eso da gusto como tienen allá. Ellos hacen uso de los terrenos comunales. [...] Allá los cubanos les capacitaron muy bien, hasta contabilidad hacen. Ellos saben, por ejemplo, guiando la sandía, nosotros no sabíamos. Todo eso saben en Santa Elena.²¹³

Sin embargo, después de la visita los resultados de vuelta en casa no fueron los esperados ni por el Gobierno, ni por los dirigentes de la comunidad del milenio. Un factor que diferenciaba a los campesinos de Santa Elena con los reasentados en Ciudad Jardín es que en el primer caso tenían una historia de propiedad y acceso a la tierra comunal, y que su organización no tenía raíces en un proceso de desalojo forzoso.

A pesar de los esfuerzos de la EEEP para hacer cumplir las reglas de convivencia, durante mi segunda estancia en la comunidad observé que, después de casi dos años de su inauguración, los espacios comunales estaban deteriorándose y que varias familias empezaban a desobedecer reglas y normas de convivencia.

212. El Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible del Ecuador (PIDAASSE) fue una iniciativa como producto de la relación del Gobierno ecuatoriano con el cubano, liderada por el MAGAP. El objetivo era *habilitar* cerca de 5700 hectáreas de tierras comunales ubicadas en la península de Santa Elena. A pesar de que hasta mediados de 2013 el proyecto no había obtenido los resultados esperados, para el Gobierno nacional se había convertido en un referente sobre la *adecuada manera* de hacer agricultura.

213. Entrevista, 11 de diciembre de 2014.

Las mujeres y algunos hombres preocupados por no tener trabajo y no contar con un pedazo de tierra junto a la vivienda, empezaron a criar gallinas y unos pocos cerdos en los reducidos patios de las casas. Otras mujeres, con el apoyo del Gobierno municipal y la asociación de ingenieros agrónomos del cantón, empezaron a instalar huertos orgánicos en sus reducidos patios. Varias familias comenzaron a tomar la tierra comunal fuera de sus casas para cultivar. La creciente desobediencia de las reglas incomodaba a los dirigentes de la comunidad que, a pesar de conocer los motivos de tales comportamientos, afirmaban: «la gente no cumple con las reglas porque el problema es que no están acostumbrados a vivir bien».

Los inconvenientes no se quedaron únicamente en la convivencia dentro de la comunidad del milenio, también se manifestaban en el trabajo en las fincas comunales. A pesar de que existía una junta de regantes, y que el MAGAP intentó capacitar a los campesinos sobre la experiencia de Santa Elena, la acogida de esta modalidad laboral colectiva fue incipiente. Así lo reconoce uno de los directivos de la junta de regantes sobre el trabajo en una de las fincas:

En el período de fumigación del maíz vi a la gente que no colaboraba... son vagos y no entienden. En la bomba no mezclaban el químico con el agua, solo llenaban con agua a la mitad la bomba y se hacían como que fumigaban, pero el líquido o el fertilizante se robaban, se llevaban en las tarrinas del almuerzo.²¹⁴

Esto podría explicarse, según los mismos campesinos, en parte, porque muchos reasentados mantenían todavía relaciones laborales con sus antiguos empleadores o vecinos, o todavía tenían un remanente de tierra en el lugar de su antigua vivienda. Muchos preferían viajar en mula por más de una hora hacia las tierras expropiadas (aquellos terrenos todavía no inundados), para continuar trabajando ahí, en lugar de participar del trabajo colectivo en las nuevas fincas. Otro aspecto que asusta a los campesinos sobre esta modalidad de trabajo es que ninguno tiene todavía título de propiedad sobre la tierra. «Nadie quiere invertir por miedo a perder, todavía no tenemos formalizadas las propiedades», me comentaba preocupado uno de los dirigentes.²¹⁵ El capital semilla, con el que había nacido la junta de regantes, cada vez disminuía más. Los campesinos presentaron una propuesta al MAGAP en la cual

214. Entrevista, 10 de octubre de 2015.

215. Entrevista, 6 de enero de 2018.

proponían una parcelación de las fincas: cada familia con su propia parcela. Sin ningún resultado hasta la finalización de este libro, casi tres años después de haber sido reasentados, los campesinos están empezando a parcelar la tierra de manera «ilegal» y a repartir la tierra a cada familia.

Durante el proceso de construcción e implementación del proyecto multipropósito, el discurso oficialista de una política de participación social y consecuente con el Buen Vivir, que en gran medida representaba Ciudad Jardín, poco a poco perdió importancia. En la época en que el Gobierno todavía necesitaba mostrar a la comunidad del milenio como un modelo exitoso, días previos a una visita presidencial a esta comunidad, la EEEP solicitó a la constructora que pintara las paredes y arreglara los jardines. Después de la inauguración del proyecto, en noviembre de 2015, las visitas disminuyeron y con ellas los tarros de pintura. Los espacios comunales de Ciudad Jardín se fueron deteriorando por acción del clima y la falta de mantenimiento. Además, el sistema de riego ofrecido para La Arabia, el sistema de tratamiento de aguas residuales para el reasentamiento, la entrega de títulos de propiedad de las tierras, y las casas para el centenar de afectados restantes, no se hizo realidad.

En la actualidad, a pesar de que el proyecto multipropósito está operativo, las inundaciones en la ciudad de Chone y sus alrededores continúan —pero según los promotores del proyecto, «las inundaciones ya no son como antes, ahora, en algunos sectores, el agua no supera el metro de altura»—. Sin duda, las inundaciones son menos severas en algunos sitios de la ciudad. No se puede afirmar lo mismo sobre las zonas más marginales de la ciudad y las áreas rurales que desde el inicio del proyecto, en los años ochenta, fueron subestimadas. Así lo evidencian dos reportes de la prensa local durante la época lluviosa. El primero realizado en el 2007 (antes de la construcción del megaproyecto), y el segundo en el 2017 (después de la construcción del megaproyecto). Esto demuestra la insuficiencia del proyecto para controlar las inundaciones:

«PRIMERA INUNDACIÓN FUE SEVERA EN CHONE». La mitad de la ciudad de Chone amaneció inundada ayer debido a que su río [...] se desbordó. Las casas de los sitios [rurales] *El Guabal* y *San Andrés* fueron las más perjudicadas. El caudal del río aumento debido a un inusual aporte del río *Garrapata* (Diario *La Hora*, 10 de marzo del 2007, mi énfasis).

«EL RÍO GARRAPATA INUNDA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN CHONE». El hecho se dio cuando el [...] río Garrapata subió e ingresó a varios sectores

del cantón. Algunas de las zonas más afectadas son el sitio *San Andrés*, El Mate, *El Guabal*, [...]. Entre los habitantes de la zona hay preocupación por los cultivos (*Diario Manabita*, 12 de febrero del 2017, mi énfasis).

Estos reportes muestran, además, cómo la construcción social del «riesgo de inundación», en la práctica, está dirigida principalmente a proteger la ciudad como polo de desarrollo. En tanto, el ámbito rural (zonas aledañas a la ciudad de Chone: San Andrés, El Guabal, El Mate, etc.) sigue inundándose, y Río Grande ha quedado permanentemente inundado bajo las aguas del embalse. Además del impacto ambiental causado por el megaproyecto, un centenar de familias campesinas no han sido reasentadas. Muchas han quedado aún en condiciones más precarias que antes de la llegada del proyecto. De manera similar a lo sucedido en el megaproyecto Daule-Peripa, los afectados tienen problemas de transporte por la presencia acumulada de lechuguín en el espejo del embalse y, en consecuencia, se han incrementado los costos de transporte, paradójicamente, sin la posibilidad de «gozar» de los beneficios del megaproyecto. Por otro lado, los ofrecimientos de mejorar el servicio de agua potable y riego, a partir del agua almacenada detrás de la represa, no están en ejecución.²¹⁶ Con esto, el objetivo de «aprovechar» el agua almacenada durante el invierno, para suplir la «escasez» en verano, también son ofrecimientos discutibles.

Discusión y reflexiones finales

En este capítulo se ha dado a conocer cómo y a través de qué discursos y prácticas, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha negociado e impulsando la construcción e implementación del sistema multipropósito Chone. Este caso muestra una nueva colusión entre el poder estatal, la tecnocracia y las respuestas campesinas o resistencias. El megaproyecto, retomado, construido e implementado durante el período posneoliberal o progresista, es la representación de cómo el Estado ha aprendido a lo largo del tiempo (desde el período desarrollista). Por un lado, ha aprendido —aunque de forma cuestionada— a reducir los impactos socioambientales comúnmente ocasionados

216. Este tema sobrepasa el interés de este estudio; sin embargo, es preciso señalar que debido a la transferencia de competencias de riego y agua potable a los GAD provinciales y municipales, respectivamente, los beneficios ofrecidos son aún más difíciles de cumplir. El motivo es que ambos proyectos, tanto de riego como de agua potable, sobreponen las capacidades técnicas y administrativas de los GAD de Chone y Manabí.

sobre las comunidades afectadas, y, por otro lado, a desplegar estrategias gubernamentales que han legitimado y promovido de manera sutil el proyecto político oficial. En este período, el Gobierno movilizó formas de gubernamentalidad disciplinaria y, también, formas neoliberales y soberanas de manera estratégica. Las formas disciplinarias no fueron suficientes para persuadir; fue necesario el uso de la fuerza como complemento. A través de ello, se ha mostrado cómo esta megaobra trasciende el ámbito exclusivo del control del agua. Es un medio poderoso para intentar reordenar o gobernar la sociedad mediante la tecnología.

Tal como comúnmente sucede en el desarrollo de este tipo de obras, en otras partes de la región el régimen progresista utilizó abiertamente la violencia y el poder estatal (soberano). Pero, además, el régimen liderado por Correa usó las medidas de compensación como medios de moralización social y autocorrección. El Gobierno, a través del establecimiento de una asociación directa entre el megaproyecto y el Buen Vivir oficialista, promovió la idea de que todo aquel que estuviese en contra del proyecto multipropósito Chone, no solo estaba en contra del Gobierno, sino, sobre todo, en contra de su propio desarrollo y bienestar. Esto funcionó en la medida que, junto al desalojo forzado, se debilitó el proceso de resistencia en Río Grande. Este caso es clave para entender cómo el Estado posneoliberal aprendió a lidiar e impulsar, pese a las contingencias sociales que involucran el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador. A partir de esto, se fundamenta, en parte, el argumento de que desde que se inició el megahidraulismo en Ecuador, como una empresa tecnocrática, este nunca se ha ido, pero se ha adaptado a los albores de cada período sociopolítico y económico del país.

Si bien las obras y medidas de compensación (carreteras, comunidad y escuelas), implementadas por el Gobierno, alivian relativamente el gran impacto negativo que ocasionó la construcción de esta megaobra, tales reparaciones han sido parciales debido a que la mayor parte de los afectados no han sido reasentados y sus formas de organización social y productiva han sido gravemente perjudicadas. Las medidas de compensación también son discutibles por el uso político que le dio el Gobierno con el fin de impulsar su noción de bienestar y modernidad.

A través de este caso se ha mostrado que, durante el período progresista, los actores involucrados en la construcción e implementación de los megaproyectos hídricos en Ecuador cambiaron. A diferencia de los períodos desarrollista y neoliberal, en donde primaron las constructoras y los financieros españoles y norteamericanos, durante el Gobierno de la Revolución

Ciudadana, las empresas estatales chinas y sus modelos de negocio fueron los protagonistas. Los recursos económicos provenientes de un segundo *boom* petrolero y extractivista estuvieron directamente relacionados con el desarrollo de megaproyectos hídricos, como el construido en Chone.

El capítulo también muestra cómo la historia social y agraria de Chone y Río Grande ayudan a entender mejor el proceso de resistencia en contra del megaproyecto y por qué los planes de compensación gubernamental presentan dificultades para que los reasentados los implementen y «acepten». Por un lado, el gran arraigo de los campesinos hacia su tierra, junto a la experiencia vivida en el sistema Daule-Peripa, hizo más grande el miedo a perder sus fincas y fortaleció la resistencia. Por otro lado, la tradición mayormente individualista en la forma de trabajar y producir sus fincas hizo que el proyecto agrario, basado en la presumida ideología colectivista del Gobierno, se minara paulatinamente. Mediante las normas y discursos vinculados a la represa, no solo el paisaje y su ecología han sido reconfigurados, sino también las relaciones sociales, agroproductivas y laborales de las comunidades locales. A través del sistema multipropósito Chone y sus programas de compensación social, el Gobierno pretendió implementar ideas y formas homogéneas de organización social y productiva, sin observar el contexto preexistente y la diversidad local. Así, nociones dominantes sobre el territorio hidrosocial y el «otro» (sobre lo rural = premoderno) se materializaron mediante la implementación de la represa. Se movilizaron diversas formas de poder gubernamental no solo para debilitar la resistencia local y promover la implementación del proyecto multipropósito, sino que han tratado de reproducir una «ruralidad permitida» (compárese, Hale 2004) bajo las normas y visión del Estado, y, en gran medida, ajena a los protagonistas locales.

El argumento de este estudio, a través del caso de Chone, es que no solo —como ocurre en muchas otras intervenciones hidráulicas modernistas— la construcción social de la *escasez de agua* es usada para justificar la ejecución de megaproyectos hídricos; también se produce el fenómeno de la construcción de la *sobrabilidad de agua*. Primero, se produce socialmente como un riesgo con matices muy específicos y sesgados, es decir, fue en especial el riesgo para la ciudad —sector de privilegio frente al ámbito rural— lo que promovió la construcción e implementación de este sistema multipropósito. Pero, contrariamente a lo ofrecido por los promotores del megaproyecto, este únicamente ha logrado disminuir la severidad de las inundaciones que sufre la ciudad, sin poder controlarlas por completo. En tanto, los sectores rurales aledaños a la ciudad siguen siendo anegados por las aguas de otros ríos como el Garrapata, por lo que comunidades enteras de

Río Grande han quedado permanentemente inundadas; es decir, las inundaciones se han desplazado al ámbito rural. Segundo, es por decisiones políticas, y no por la «naturaleza», que ahora se han inundado de manera permanente grandes áreas de las fincas rurales de las poblaciones campesinas más pobres. De este modo, se ha desplazado la sobreabundancia eventual y temporánea del agua, en la zona urbana, hacia una sobreabundancia permanente en las zonas rurales sumergidas bajo el embalse. Esto indica, por un lado, que a pesar de que el Estado ha aprendido a implementar de manera distinta estos proyectos, continúan generando impactos socioambientales negativos. Simultáneamente, el espacio rural se ha desvalorizado frente a lo urbano.

Por último, el caso muestra que a pesar de la intención disciplinaria y de autocorrección implementada por el Gobierno, los habitantes de la comunidad del milenio siguen buscando y practicando sus propias formas de vivir y crear vida (Scott 2003). Siguiendo a Chatterjee, el desarrollo reciente de este megaproyecto hídrico revela que los gobernados se infiltran en el Estado no solo para acceder a beneficios de ciudadanía ofrecidos por el Estado-nación, sino que lo hacen para contradecir la gubernamentalidad y enseñar a los gobernantes acerca de cómo ellos quieren ser gobernados.

CAPÍTULO 6

DISCUSIÓN COMPARATIVA Y CONCLUSIONES GENERALES

Introducción

Se planteó entender cómo las relaciones de poder se han empotrado y han influenciado en el diseño, construcción e implementación de los megaproyectos hídricos Daule-Peripa, Baba y Chone; y a partir de tales ilustraciones develar qué continuidades y discontinuidades se han presentado en el desarrollo de este tipo de proyectos, desde mediados del siglo xx en Ecuador. Para atender estas inquietudes parto de un contexto nacional específico; tomando como inspiración y a su vez como punto de llegada el Gobierno progresista de la llamada Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa, entre el año 2007 y 2017. Con el fin de comprender mejor sus paradojas entre el discurso y la práctica en torno al desarrollo de los megaproyectos hídricos, los estudié desde una perspectiva histórica. En tal virtud, parte de mi análisis crucial es una comparación diacrónica del fenómeno y desarrollo de los megaproyectos hídricos en tres períodos políticos. Se incluyó no solo la política reciente de la Revolución Ciudadana, sino también el estudio de la herencia político-hidráulica ecuatoriana, legado de gobiernos y períodos sociopolíticos y económicos anteriores. Además de estudiar el sistema multipropósito Chone, emblema del Gobierno liderado por Correa, el análisis de los sistemas Daule-Peripa y Baba me permitió dar una mirada al pasado hidráulico de los períodos desarrollista y neoliberal, y así poner en perspectiva lo realizado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Por tanto, cada sistema multipropósito ha sido tomado como estudio de caso ilustrativo de distintos, pero enlazados y contingentes, períodos sociopolíticos,

institucionales, ambientales y económicos de la historia ecuatoriana reciente. En tal contexto, la investigación ha mostrado la trayectoria de la tecnocracia y la tecnología relacionada con el desarrollo de los megaproyectos hídricos, pasando por distintas épocas, ideologías y sistemas políticos, y el surgimiento y rol de los movimientos sociales. Con base en estos planteamientos, el presente libro permite entender mejor, tanto el momento de cada megaproyecto hídrico en la historia, su contexto y comparación, como los discursos, prácticas y políticas del Gobierno de la Revolución Ciudadana.

En este capítulo se propone algunos elementos de discusión y mis conclusiones generales. Primero, se toman los tres estudios de caso —embebidos en sus respectivos períodos históricos— para identificar las continuidades y discontinuidades que se han presentado en el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador. En esta sección se discute los aprendizajes y la transformación del Estado, de los tecnócratas y movimientos sociales involucrados en el desarrollo de los megaproyectos hídricos, y cómo tales cambios han afectado los procesos de diseño, construcción e implementación de estas obras a través del tiempo. Segundo, más allá del caso ecuatoriano, a partir de los debates teóricos abordados a lo largo del libro se destila algunas reflexiones y contribuciones frente al estudio crítico de los megaproyectos hídricos. Y tercero, se presentan las conclusiones generales del libro.

Continuidades y diferencias en el desarrollo de megaproyectos en Ecuador: una discusión comparativa

En Ecuador, por un lado, la política en torno a los megaproyectos hídricos ha pasado por tres períodos con características singulares. Durante el período *desarrollista* (1954-1984), la utopía del «desarrollo», afanosamente implementada mediante un Estado fuerte, apadrinó la planificación y ejecución inicial de este tipo de megaobras en el país. Durante el *neoliberalismo* (1985-2006), el retiro del Estado y la desregulación del mercado, impulsó la construcción de otros tantos megaproyectos hídricos. Y, durante el *progresismo* (2007-2017), a través del entusiasta «regreso» del Estado, se volvió a incitar la idea del desarrollo y a retomar gran parte de los megaproyectos hídricos planificados en el pasado, pero bajo una gubernamentalidad distinta. Durante estos tres períodos se evidencia una continuidad en el desarrollo de este tipo de megaproyectos, pero también una aparente impasibilidad de este tipo de tecnologías ante el contexto ideológico, político, social, económico y geográfico en el cual han tenido lugar. Por otro lado, los gobernados y sus redes

también se han organizado a través del tiempo. Su participación como agentes políticos también ha moldeado la política megahidráulica y el impacto de este tipo de proyectos en sus territorios.

A través de los tres estudios de caso desarrollados en este libro se ha mostrado el importante rol que han tenido los megaproyectos hídricos en la vida social, cultural, económica y política ecuatoriana, en especial en sus áreas de influencia, desde mediados del siglo anterior hasta el presente. Los megaproyectos hídricos como los investigados han transformado —y siguen transformando— la vida de miles de personas en comunidades rurales y centros urbanos. No obstante, el estudio crítico de estos y sus estrategias de desarrollo, salvo contadas excepciones (Foro Recursos Hídricos 2017; Corral 2006; CAIC 2008a; Sasso Rojas 2008; Cevallos 2006), no ha sido significativo en Ecuador. Gran parte de los estudios existentes analizan, desde un enfoque técnico y apolítico, los aspectos hidrológicos, hidráulicos y biofísico-ecológicos de tales tecnologías (p. ej.: Nguyen *et al.* 2015; Gelati, Madsen y Rosbjerg 2014). A la luz de este vacío, este libro contribuye a entender las continuidades y diferencias que han implicado las políticas de los megaproyectos hídricos y las transformaciones socioterritoriales asociadas a ellas en el Ecuador.

Se aborda esta sección comparativa a partir de dos temas: el primero presenta y discute los cambios experimentados en el Estado, sus instituciones y tecnocracia(s), y cómo tales cambios han informado las políticas de megaproyectos hídricos a través del tiempo. El segundo tema aborda el surgimiento y evolución de los procesos organizativos, movimientos sociales y las ONG críticas (política de los gobernados y sus redes) en torno al desarrollo de este tipo de políticas y proyectos, colocando en el centro a las comunidades locales y sus redes socioterritoriales.

Los cambios en el Estado y la adaptación de las políticas de megaproyectos hídricos

Este libro muestra que en la política de los megaproyectos hídricos, el Estado ecuatoriano ha sido un ente dinámico. Desde mediados del siglo anterior, las instituciones a cargo de la planificación y ejecución de los más importantes megaproyectos hídricos han presentado transformaciones en sus nombres, estructura, prácticas y discursos. Muchos de esos cambios han estado informados por aprendizajes de sus protagonistas (tecnócratas, técnicos), pero también por el contexto socioeconómico y político en el cual están inmersos. El afán de impulsar e implementar los megaproyectos hídricos se ha

adaptado para mantenerse vigente (Warner, Hoogesteger e Hidalgo 2017). Para profundizar al respecto, a continuación se analiza algunos aspectos (discursos, prácticas, institucionalidad y tecnocracia) que muestran cómo la política de los megaproyectos hídricos se ha transformado desde los años sesenta.

El primero es la política que ha orientado el papel del Estado y su relación con la sociedad y la naturaleza en torno al desarrollo de los megaproyectos hídricos. En Ecuador existen marcadas diferencias entre los distintos períodos sociopolíticos y cómo estos han informado las políticas del Estado, la percepción de la naturaleza y las formas de relacionarse del Estado (actores estatales) con comunidades locales (y sus redes) en torno al desarrollo de los megaproyectos hídricos.

El desarrollismo fue un momento que intentó solucionar los problemas del «subdesarrollo» a través de una relación paternalista entre el Estado y la sociedad. Esta relación se basó, en gran medida, en las divisas que entraron a la economía nacional por el *boom* bananero y petrolero, y en los créditos externos desde organismos como el BM y BID. Siguiendo los modelos cepalino y TVA, a través de sus instituciones, el Estado fundamentó sus acciones en el paradigma de que el ser humano, como superior a la naturaleza, es llamado a controlarla para propiciar el beneficio social. Por tanto, en este período, el Estado estaba llamado a ser protagonista en la provisión de bienestar. Las instituciones creadas para tal fin en el sector hídrico —p. ej., el INERHI, la CEDEGE y el CRM— orientaron, bajo sus verdades «técnicas» y universalistas, el camino hacia el desarrollo mediante el uso «racional» del agua. Debido al prestigio ganado por estas instituciones —basado en su proclamado conocimiento técnico—, dichas verdades se presentaron como incuestionables desde otros sectores de la sociedad. Por tanto, durante el desarrollismo, período en el cual se inició la construcción del sistema Daule-Peripa (1982), las políticas sobre megaproyectos hídricos eran prácticamente incontrovertibles para los actores directamente afectados por estas, como las comunidades locales. En lo que al desarrollo de megaproyectos respecta, el Estado —y sus aliados: instituciones financieras y de experticia hidráulica— imponía su lógica y la sociedad comúnmente la aceptaba. Tal aceptación no necesariamente obedecía a la presencia de regímenes extremadamente opresivos, como lo experimentado en otros países latinoamericanos bajo dictaduras cruentas. Ecuador más bien experimentó dictaduras «blandas». Por tanto, la «aceptación» de las políticas en torno a los megaproyectos hídricos, por parte de la población, se explica, en gran medida, porque durante el período desarrollista todavía no se experimentaban los grandes impactos socioambientales de este tipo de megaobras. Además, los embrionarios o casi inexistentes

movimientos sociales no tenían repertorios consolidados de lucha y las circunstancias sociales no les favorecían para unificarse y fortalecerse. Por lo menos a nivel supralocal y nacional no existía una conciencia (basada en la experiencia) acerca de los efectos negativos que conlleva la implementación de un megaproyecto hídrico. El sistema Daule-Peripa, por ejemplo, todavía estaba en construcción (1982-1988) y el discurso que lo legitimaba estaba ligado al desarrollo agrícola y al aprovechamiento «racional» del agua de la cuenca del río Guayas. El objetivo, según la CEPAL, era progresar al nivel de los países del centro o desarrollados. En esa medida, los impactos socioambientales (en caso de manifestarse) fueron subestimados o, inclusive, percibidos como «necesarios». Es decir, el desarrollismo enmarcó la política de los megaproyectos hídricos desde un punto de vista técnico y de desarrollo económico.

Contrario al primer período, durante el neoliberalismo se evidenció un paulatino retiro del Estado y con ello se presentaron cambios en el modo en que las relaciones de poder influenciaron en el desarrollo de los megaproyectos hídricos. Durante este período, el modelo económico y político obedecía a la idea de que el dominio de la naturaleza debía ser en beneficio del crecimiento económico —y a través de ella para el de la sociedad—. Debido a la crisis bananera y petrolera, y al crecimiento excesivo de la deuda pública —que experimentó el Ecuador durante el desarrollismo—, a mediados de los ochenta el país empezó a experimentar una incipiente crisis económica y política. Entidades como el Banco Mundial impulsaron la implementación de ajustes estructurales privatizadores y de desmantelamiento del Estado, con el fin de «orientar» al Ecuador a superar la crisis, y como «requisito» para garantizarse para sí el pago de la deuda adquirida por el Estado. De esta manera, la transición a la democracia en Ecuador significó también una transición a un nuevo modelo económico-político. En este contexto, de relativa ausencia del Estado, surgieron y se fortalecieron otros actores como las ONG, organizaciones sociales locales, movimiento indígena y el sector privado.²¹⁷ Desde estos actores se nutrieron protestas en contra de los pocos megaproyectos hídricos que se lograron retomar durante el neoliberalismo. Este último aspecto marca una primera diferencia importante con el período desarrollista. Los espacios dejados por la retracción del Estado y llenados por otros actores permitieron, en alguna medida, que actores subalternos lograran influenciar sobre el desarrollo de los megaproyectos hídricos.

217. Para el sector de riego, véase Hoogesteger *et al.* (2017).

Otra diferencia se configuró en torno a la institucionalidad. Durante el neoliberalismo, instituciones referentes del Estado centralista y desarrollista como el INERHI fueron descentralizadas en múltiples y diversas instituciones de desarrollo regional con limitada capacidad de gestión. El importante rol que tuvo el INERHI en diseño y construcción de infraestructura hídrica desapareció, dando paso al CNRH con sus agencias de agua, que tenían funciones más administrativas y también una limitada capacidad de gestión, con la función explícita de facilitar el buen funcionamiento del «mercado». Por tanto, en este contexto, el diseño y construcción de la gran infraestructura hídrica desde el Estado central tuvo un significativo decaimiento. No obstante, las organizaciones regionales descentralizadas (en sintonía con la receta neoliberal) como la CEDEGE y CRM se mantuvieron e inclusive se fortalecieron. Sus políticas y prácticas se adaptaron a la nueva coyuntura socioeconómica. Parte de su adaptación estuvo relacionada con el hecho de abandonar el paternalismo del Estado central para implementar proyectos de infraestructura, lo cual les permitió relacionarse directamente (sin intermediación del Estado central) con actores del mercado nacional e internacional, como compañías constructoras y/o empresas privadas. Por ejemplo, en el caso de Baba, se evidencia la relación de la CEDEGE con importantes grupos económicos locales vinculados a la agroindustria (p. ej.: grupo Wong). De esta forma, estas instituciones regionales (parte también del Estado) siguieron ejecutando su política megahidráulica con base en proyectos planificados anualmente, con el apoyo del Estado central. De la mano de esta adaptación, los funcionarios públicos (técnicos y tecnócratas) que ingresaron durante el desarrollismo, como funcionarios de planta, también permanecieron, llevando consigo la herencia megahidráulica y también los aprendizajes adquiridos en torno a las protestas sociales surgidas durante el neoliberalismo como, por ejemplo, aquellas experimentadas alrededor del megaproyecto Baba.

A pesar de los discursos de beneficio social, durante el neoliberalismo, las megaobras fueron abiertamente diseñadas para el beneficio de los actores poderosos. Tal como se muestra en el caso de Baba, los grandes beneficiarios fueron empresas privadas que, al mismo tiempo, «financiaban» la obra mediante cuestionados fideicomisos privados con base en créditos públicos. Gran parte de la energía generada estaba destinada para el beneficio de unas pocas empresas privadas, que a la vez formaban parte de los fideicomisos de construcción; y aquellos que obtuvieron los mejores precios por la venta de las tierras inundadas y el mayor acceso a riego fueron los hacendados agrocapitalistas ubicados en el perímetro del embalse (Hidalgo-Bastidas y Boelens 2019a).

Otra gran diferencia con el período anterior es que, durante el neoliberalismo, ya se empezaban a visibilizar los impactos negativos de las megaobras como los del sistema Daule-Peripa. Tal como se muestra al final del tercer capítulo y a lo largo del cuarto, las comunidades locales junto a varios aliados (ONG locales e internacionales, movimientos sociales, líderes populares, etc.) empezaron a reclamar al Estado una mayor participación política en los procesos de toma de decisiones en torno a los megaproyectos hidráulicos, influidos, también, por otros procesos internacionales de protesta antirespresa. Tanto con la experiencia nacional como por la influencia internacional, los actores locales empezaron a innovar sus repertorios de protesta. Es importante resaltar que, aunque de manera incipiente, en 1996 se creó el Ministerio de Ambiente y que durante el período se instauraron la legislación y el reglamento ambientales, lo cual promovió la creación de espacios de participación o interacción formal entre el Estado y las comunidades locales. Contrario al período desarrollista, la CEDEGE y las empresas constructoras estaban obligadas a «socializar» (no consensuar) los beneficios e impactos de los nuevos proyectos, como la megarespresa Baba, con las comunidades locales. De esta manera, contrariamente a las prácticas impositivas del Estado desarrollista, el Estado neoliberal procuró, aunque de manera bastante utilitaria, crear espacios de participación social para comunidades locales y sus aliados. Por otro lado, durante este período —a diferencia del período anterior— los técnicos y tecnócratas, a cargo de implementar los megaproyectos hidráulicos, aprendieron y adaptaron sus acciones con base en la experiencia del Daule-Peripa. En definitiva, durante el período neoliberal se continuaron implementando megaproyectos hidráulicos (aunque sin el mismo protagonismo e ímpetu del Estado central), en donde se presentaron las primeras protestas significativas contra los megaproyectos hidráulicos y en donde los principales beneficiarios fueron abiertamente las empresas privadas industriales y agroempresarios.

Por su lado, durante el tiempo que duró el progresismo, se implementaron varias reformas legales e institucionales encaminadas a recuperar el rol del Estado. Similar al desarrollismo, en el posneoliberalismo, el Estado debía jugar un papel central en la carrera hacia el desarrollo. Sin embargo, una gran diferencia de este último período con respecto al primero fue la inclusión de una fuerte carga ideológica antineoliberal, «incluyente» y moralista-culturalista, en sus políticas y prácticas. La idea de dominar la naturaleza para el beneficio humano seguía presente, pero se amplió con un discurso ambientalista; sin embargo, bajo esta idea, el ser humano era la parte más importante de la naturaleza. La sociedad, liderada por el Gobierno, debía utilizarla «eficientemente» para alcanzar el Buen Vivir. Contrariamente al

desarrollismo, que provino en gran medida de una organización tecnocrática como la CEPAL, el Buen Vivir tiene muchas fuentes culturales e intelectuales que en parte emanó de las cosmovisiones de los pueblos y las nacionalidades indígenas de los países de la región. Por tanto, este aspecto marcó una importante diferencia y peso discursivo en la percepción social del desarrollo progresista respecto del cepalino; lo cual, como muestro en el caso del sistema multipropósito Chone, tuvo una función especial para el desarrollo de megaproyectos hídricos.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, paradójicamente, retomó y construyó varias de las megaobras que fueron diseñadas durante el desarrollismo, parcialmente relegadas durante el neoliberalismo. El desafío del Estado radicó en mantenerse coherente con los discursos progresistas, «inclusivos» y participativos, mientras implementaba los megaproyectos hídricos altamente perjudiciales para las comunidades locales.

Este período progresista tuvo dos momentos importantes que influyeron directamente en el modo en que el Estado retomaría e impulsaría su política de megaproyectos hídricos. Considerando que el retiro del Estado, durante el neoliberalismo, había dejado organizaciones sociales y otros actores no gubernamentales fuertes, la Revolución Ciudadana, en un primer momento, optó por asociarse y hacer eco de los reclamos sociales, incorporándolos al Estado desde un Gobierno «para» los ciudadanos, con la adopción del concepto Buen Vivir. Así, en el discurso y la práctica inicial (durante el primer año de Gobierno), la Revolución Ciudadana intentó ser consistente y coherente con su eslogan político. En ese primer momento, Correa criticó los megaproyectos hídricos del pasado y apoyó los reclamos sociales provenientes de las comunidades locales, como aquellas afectadas por el sistema Daule-Peripa y las que estaban en pie de lucha en contra de la construcción del megaproyecto Baba. No obstante, el proyecto de retomar el rol central del Estado pronto empezó a develar contradicciones entre sus discursos progresistas y participativos iniciales y la política estatal de megaproyectos.

Un segundo momento, en este período, fue el que tuvo lugar a partir de la aprobación de la Constitución en 2008, y el paulatino descontento de los actores sociales que no compartían la ideología oficialista. En este momento se estableció la SENAGUA como un esfuerzo para «(re)crear la presencia del INERHI», es decir, el Estado como rector y omnipresente en el manejo del agua. Con esta medida desaparecieron las instituciones descentralizadas poderosas como la CEDEGE y el CRM. Todos sus bienes, proyectos, responsabilidades y funcionarios públicos fueron absorbidos por la SENAGUA. El reto de esta nueva institucionalidad era incluir la diversidad de las demandas sociales

en torno al agua y a los distintos actores (junto a sus intereses), en un Estado con intensiones homogeneizadoras. Al igual de lo que sucedió durante el neoliberalismo, esta nueva institucionalidad incorporó a técnicos y tecnócratas, presentes desde el desarrollismo en la CEDEGE, CRM o CNRH, pero también contrató nuevos funcionarios. En la práctica, esto permitió conjugar los aprendizajes del pasado que acarreaban los funcionarios viejos, con ideas nuevas sobre cómo deben implementarse los megaproyectos hídricos.

Los megaproyectos hídricos fueron revestidos por un discurso de cambio de matriz energético-productiva y fueron legitimados con la idea de que estas obras eran precursoras o *portadoras del Buen Vivir*, beneficiando a «todos», no solo a las élites, sino al pueblo y la nación. Tal como se refleja en una declaración del expresidente Correa:

Básicamente, estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa para todos.²¹⁸

A través del nexo entre el Buen Vivir y los megaproyectos hídricos se pretendió mantener una coherencia entre el discurso y la práctica. A partir de esto, hay una destacable diferencia entre el desarrollismo y progresismo: durante el primero, los megaproyectos hídricos (iniciativa exclusivamente tecnocrática) estaban totalmente desconectados del pueblo; mientras que durante el posneoliberalismo, los mismos proyectos fueron empotrados con un discurso político-ideológico que los hizo ser más identificables para las personas comunes y no solo para los tecnócratas.

Dadas las exigencias de la protesta social y la presencia de la legislación ambiental, implementada desde el neoliberalismo, durante este período se integraron prácticas mixtas para llevar adelante la implementación de los megaproyectos hídricos. Los experimentados técnicos y tecnócratas de la SENAGUA (ex CEDEGE, ex CRM y ex INERHI) retomaron los viejos megaproyectos del desarrollismo sesentero, pero bajo nuevas formas de justificación, legitimación e implementación. Utilizaron mecanismos impositivos (desalojo forzado) y herramientas del mercado (p. ej.: compensaciones económicas), como los desplegados durante los períodos desarrollista y neoliberal; también incorporaron la culpa o moral (p. ej.: buen ciudadano *versus* mal ciudadano); y la criminalización de la protesta como medios de implementación, tal como

218. Diario *El Telégrafo*, 15 de enero de 2012.

muestro en el caso del sistema multipropósito Chone. Durante este período se creó, por ejemplo, la EEEP que, a diferencia de la CEDEGE o CRM, fue establecida exclusivamente para compensar social y económicamente a las poblaciones locales afectadas por los proyectos estratégicos, pero al mismo tiempo cumplía una labor de normalización, y de disuasión de los procesos locales de resistencia, a través del uso de discursos y estrategias disciplinarias de autocorrección (Hidalgo-Bastidas 2019; Hidalgo-Bastidas y Boelens 2019b).

Con base en lo señalado, la presente investigación permite ubicar el papel de la Revolución Ciudadana y de su movimiento Alianza PAÍS en perspectiva histórica. Si bien este Gobierno se inició con un fuerte discurso incluyente, en la práctica, evidenciada a través del desarrollo de los megaproyectos hídricos, se manifiestan características del pasado. La continuidad con el pasado se manifestó en la (re)adopción de un fuerte modelo tecnocrático de manejo del agua (megaproyectos), el fortalecimiento institucional con el fin de dirigir tal política tecnocrática (SENAGUA similar al INERHI), y un discurso en donde el conocimiento «técnico» era incuestionable. No obstante, las estrategias de legitimación e implementación de megaproyectos se innovaron, incluyendo formas de poder disciplinario. Es decir, en este período sobrevino una *gubernamentalización* de megaproyectos hídricos, que incluyó características de los tres tipos de gubernamentalidad abordados en este libro. Además, en la mayoría de los megaproyectos retomados, ingresó un nuevo actor: China. Durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana tanto empresas como financieras chinas dominaron la construcción, implementación y financiarización de este tipo de obras. Tal como muestra en los capítulos 2 y 5, las empresas constructoras y fondos chinos (p. ej.: Tiesijú-Manabí y Petrochina, en el caso del sistema múltiple Chone) tuvieron un rol protagónico durante este período. China aprovechó la coyuntura en la cual Ecuador cerró sus puertas al endeudamiento, con instituciones multilaterales de financiamiento tradicionales (p. ej.: BM, BID, etc.).

En suma, las continuidades y diferencias en torno al rol del Estado (institutionalidad, discursos, tecnocracia, prácticas de implementación), desde la década de los sesenta, develan que la política de megaproyectos hídricos se ha adaptado para legitimar su construcción e implementación. Este tipo de proyectos pasaron de ser utopías tecnocráticas, durante el desarrollismo, a constituirse en emprendimientos abiertamente beneficiosos para los actores del mercado, durante el neoliberalismo, hasta ser símbolos del Buen Vivir cercanos al pueblo en el progresismo. Los actores fundamentales de tal dinamismo han sido los tecnócratas de las instituciones públicas y privadas

que han llevado consigo, de institución en institución y de época en época, la memoria megahidráulica del Ecuador. Otro aspecto clave ha sido la influencia que han tenido los sistemas epistemológicos (p. ej.: la hidraúlica, la tecnológica, la infraestructura multipropósito) y sociopolíticos dominantes (p. ej.: los planes hidraúlicos basados en la construcción de infraestructura) en el impulso de los megaproyectos hídricos. Por estos motivos es que los megaproyectos recientes han obedecido a similares criterios técnicos del pasado, pero debido a procesos de aprendizaje y visiones sociales, tanto de la tecnocracia como de los movimientos sociales, tales emprendimientos «técnicos» han sido presentados e implementados bajo prácticas gubernamentales diferentes. Las tecnologías, en este caso, megahidráulicas, son distintas por haber sido constituidas por relaciones sociales distintas.

El surgimiento y evolución de movimientos sociales antireservas y sus redes

Esta investigación muestra que el desarrollo de los tres megaproyectos hídricos estudiados y la tecnología misma también están influenciadas por la acción de los movimientos sociales y sus redes supralocales. Tales procesos se constituyen por una diversidad de actores que emergen en distintos espacios, tiempos y escalas geográficas. Abarcan desde comunidades locales, líderes populares, políticos, académicos críticos, hasta organizaciones sociales no gubernamentales transnacionales. En Ecuador, desde la década del sesenta, tal constelación de actores ha venido aprendiendo, organizando redes e innovando repertorios que han luchado por la creación de espacios de participación política (formal, informal, legal y/o ilegal) frente a la política dominante de los megaproyectos hídricos. Para discutir este tema, se presenta a continuación aprendizajes comparativos que deja el estudio de los tres casos abordados en esta investigación.

Esta comparación se basa en i) la emergencia de los procesos organizativos locales y su relación con la temporalidad, ii) la capacidad de conectar horizontal y verticalmente las experiencias de lucha y de las personas, iii) la ubicación geográfica de las luchas, y iv) la influencia del Estado (desarrollista, neoliberal, progresista) y el contexto sociopolítico sobre los procesos de organización social.

La emergencia de los procesos organizativos y acciones de resistencia local tienen relación con los aprendizajes de distintivo temporal. El caso del sistema Daule-Peripa muestra que, durante la implementación de las primeras megaobras (período desarrollista), no se presentaron procesos organizativos desde las comunidades locales que cuestionaran abiertamente o resistieran

colectivamente la construcción e implementación del proyecto. Solo a partir de la entrada en operación de la represa, al experimentar la inundación y los impactos ulteriores, es que empezó a surgir la organización de las comunidades locales para reclamar que se materialice el pago de sus tierras, el cumplimiento de los ofrecimientos realizados por la CEDEGE y/o la empresa constructora, o el acceso a los servicios básicos y transporte. Tales organizaciones locales se han mantenido (aunque escuálidas) luchando por décadas por sus propios derechos e informando a otras luchas similares (p. ej.: Baba y Chone) sobre los impactos de las megaobras. Contrariamente a lo ocurrido en este caso, durante el proceso de ejecución del sistema multipropósito Baba (período neoliberal), las comunidades locales, junto a diversos tipos de actores provenientes de otros lugares y escalas, lograron organizarse, consiguiendo parar, por un extenso período de tiempo, la construcción del megaproyecto e influir sobre su diseño hidráulico. A pesar de la desaparición del fuerte proceso de resistencia en contra de la obra, esta llegó a construirse siguiendo un nuevo diseño, que disminuyó los impactos socioambientales sobre la mayoría de las comunidades locales. Esta experiencia tuvo influencia en las luchas futuras como la vivida durante el inicio de la construcción del sistema multipropósito Chone (período progresista). Aprendiendo de la experiencia de Daule-Peripa y Baba, las comunidades locales en Chone se organizaron para defender sus tierras. Lo interesante es que, a pesar de utilizar las mismas estrategias y la participación de los mismos actores que en Baba, su resistencia no logró influenciar el cambio o suspensión definitiva de la obra. Muchos comuneros que criticaban la obra y al Gobierno, después de varias acciones de disuasión del Gobierno, aceptaron parcialmente sus discursos de Buen Vivir. El estudio histórico del proceso de organización social permite evidenciar que las comunidades locales han aprendido de las experiencias de otras comunidades afectadas por los megaproyectos hídricos, y las han utilizado para fortalecer sus propios procesos organizativos. Varios otros factores dan explicación al surgimiento de los procesos organizativos locales.

Este estudio muestra que las diferencias evidenciadas en el surgimiento y evolución de los distintos procesos de resistencia están, en gran medida, relacionadas con la capacidad de las comunidades locales y los líderes populares de transmitir experiencias y testimonios de los impactos socioambientales. Mediante la transferencia de experiencias, las poblaciones ubicadas en las inmediaciones de los proyectos Baba y Chone tuvieron herramientas para dar forma a sus propias luchas. Esto demuestra que la capacidad que tienen las organizaciones sociales, de conectar «horizontalmente» experiencias de lucha (entre los actores locales), es un factor importante para entender cómo

las relaciones de poder subalternas también informan el desarrollo de los megaproyectos hidráulicos.

El vínculo horizontal o socioterritorial construido entre los actores subalternos, evidenciado en los tres proyectos, responde, en gran medida, a la relativa cercanía física entre los tres megaproyectos hidráulicos (mapa 1). Esto presenta una gran potencialidad para el fortalecimiento de los procesos organizativos locales antirepresas, ya que los ríos y cuencas hidrográficas alrededor del mundo son controladas, no solo por una megarepresión, sino por un conjunto interconectado de megaproyectos hidráulicos.²¹⁹ Tal como se muestra en este estudio con los casos de Baba y Daule-Peripa, cuando se planifica y construye una megaobra, a menudo se requiere de otras localizadas relativamente cerca, para que suplan las deficiencias de las primeras o que complementen sus potenciales beneficios. A partir de ello, este libro muestra que la conexión hidráulica e hidroterritorial entre las megaobras, también conlleva, potencialmente, una conexión socioterritorial entre las personas afectadas, lo cual permite fortalecer sus luchas sociales en contra de este tipo de proyectos.

A lo largo del tiempo, a más de la capacidad de las comunidades locales (y sus aliados) para establecer conexiones horizontales, la construcción de redes verticales ha sido clave para el surgimiento de procesos organizativos proclives a cambiar las relaciones de poder que informan este tipo de megaobras. Tal como se muestra en el capítulo 2, desde mediados de la década de los ochenta empezaron a surgir organizaciones ambientalistas y antirepresas en todo el mundo. Junto a los procesos organizativos locales y nacionales (las ONG), que iban creciendo también en Ecuador, se dio paso a una transnacionalización de las luchas. Por tanto, con el apoyo (aunque a veces cuestionado) de las ONG nacionales, internacionales y otros actores supralocales, se han transmitido por generaciones y diferentes geografías, las experiencias y aprendizajes sobre los procesos organizativos y de resistencia en contra de las megarepresas. De esta manera, el contacto de las organizaciones locales con los actores del ámbito supralocal permitió enriquecer las capacidades organizativas de los primeros. El caso de Baba muestra cómo líderes e intelectuales populares fueron eslabones o mediadores clave de este tipo de conexiones. A través del lobby con las ONG nacionales, estos actores locales pudieron conectar la comunidad local con los discursos internacionales antirepresas y viceversa. Además, tal intercambio posibilitó, a estos mediadores sociales, involucrarse en otras esferas legales, en espacios institucionales, tanto

219. Ejemplos de tal patrón de control y planificación abundan en todo el mundo. Una ilustración de Asia está en el río Mekong (Bakker 1999). Un ejemplo de Estados Unidos de América se muestra en el trabajo realizado por el TVA (Lilienthal 1944; Ekbladh 2002).

nacionales como internacionales, y acceder a recursos financieros y redes de conocimiento subalterno. Tales espacios y herramientas les permitió modificar, dinamizar, diversificar y fortalecer sus repertorios de protesta, tanto para motivar a sus pares como para comunicarse convincentemente y enfrentarse con interlocutores de otras escalas como Estado, tecnócratas y/o empresas constructoras.

Otro elemento que ha jugado un papel importante, tal vez no tanto en el surgimiento, pero sí en el fortalecimiento y mantenimiento de las luchas locales en contra de los megaproyectos en Ecuador, ha sido la ubicación geográfica de las luchas. Si comparamos el caso de resistencia que se dio en Baba con el de Chone, esta variable ha tenido un nivel de influencia sobre el (relativo) «éxito» o no de la lucha. En ambos casos, los procesos fueron bastante similares en varios aspectos. Muchos líderes e intelectuales populares, ONG nacionales e internacionales, discursos y estrategias de resistencia fueron comunes en ambos procesos organizativos. Por ejemplo, ambos casos utilizaron la estrategia de interrumpir el paso de los vehículos por la vía terrestre, para llamar la atención de las autoridades estatales, prensa y opinión pública y, de ese modo, incrementar su poder de negociación. Las comunidades locales organizadas en contra de la construcción del megaproyecto Baba estaban estratégicamente ubicadas sobre la carretera Panamericana, una de las principales vías de comunicación entre la sierra y la costa. Esto les permitió llamar la atención pública nacional e internacional. Mientras que las comunidades de Río Grande en Chone estaban ubicadas varios kilómetros «adentro», en las montañas. En su caso, la carretera más cercana no era de gran importancia nacional, por lo que no lograron el mismo impacto que sus vecinos. Esto significa que la ubicación de las luchas sociales, en geografías estratégicamente importantes para la nación, es un factor importante que determina, en parte, la capacidad de éxito de esas luchas sobre la política megalahídrica estatal. Además, este aspecto permitió, al movimiento social, cuestionar y desafiar a los grupos dominantes, sus propuestas de desarrollo y estrategias de implementación.

Un aspecto que marcó la diferencia y afectó el proceso organizativo local fue el papel y presencia del Estado. Como muestro en la sección anterior, el rol del Estado cambió a lo largo del tiempo, y con ello no solo se transformaron sus instituciones y discursos, sino que tales cambios se expresaron en diferentes formas de gobernar la sociedad, a través de la ejecución de megaproyectos hídricos. Por ejemplo, la esencia tecnocrática-ideológica, característica del período progresista (con una mayor presencia del Estado), legitimó la criminalización de la protesta, la represión y desestimación de los reclamos

populares que eran contrarios a la visión y moral oficialista. El caso de Chone muestra con claridad cómo el Estado afectó el proceso organizativo local a través de la combinación de todas estas estrategias de gobierno. En tanto, el caso de Baba muestra que, con un Estado débil, durante el neoliberalismo, se habían creado espacios en donde actores subalternos podían participar más activamente en la toma de decisiones. Con esto, no sugiero que se necesita un Estado neoliberal para posibilitar una mayor participación política de los actores subalternos, sino que el rol del Estado (sus instituciones y funcionarios) tiene influencia sobre la forma en que las relaciones de poder subalternas influyen sobre el desarrollo de los megaproyectos hídricos.

El caso ecuatoriano muestra también que la etapa de desarrollo del megaproyecto —diseño, construcción, implementación u operación—, en el cual el movimiento social ejerce presión, tiene relevancia sobre el nivel de influencia que los actores locales tienen sobre el megaproyecto hídrico y sobre la eventual distribución de los impactos ulteriores. Mientras más temprano se ejerce presión o resistencia en el proceso de ejecución de un megaproyecto hídrico, mayor es la probabilidad de que los que protestan alcancen cambios significativos en el diseño tecnológico de la megaobra y en la disminución de los impactos socioambientales. No obstante, el alcance de tal influencia no necesariamente implica la adopción, por parte del Estado (y sus aliados), de cambios tecnológicos duraderos en el transcurso del tiempo y en la ejecución de otros megaproyectos hídricos.

Por ejemplo, en el caso del sistema Daule-Peripa, las comunidades locales solo empezaron a organizarse y reclamar en las etapas de implementación y operación del sistema. No lograron influenciar en cómo la obra fue diseñada ni construida y, con ello, los impactos socioambientales afectaron significativa e irreversiblemente a las comunidades locales. Si lo comparamos con el caso del proyecto multipropósito Baba —el proceso organizativo local adquirió relevancia durante la etapa de diseño—, observamos que, si bien, no se logró detener por completo la ejecución del proyecto, se consiguió disminuir significativamente el alcance de los impactos socioambientales. Sin duda, el reclamo de las comunidades de Patricia Pilar, en etapas tempranas de ejecución del proyecto, cuando, por ejemplo, todavía no había demasiados compromisos adquiridos con financieras y empresas constructoras, por parte del Estado, permitió a los tecnócratas incorporar importantes cambios en la tecnología misma. Si bien es cierto que la etapa de desarrollo ha sido relevante en los primeros dos casos, otros factores como el contexto político nacional y local han tenido una influencia estructural sobre los resultados alcanzados por la organización social o movimiento de resistencia. Esto

se muestra en el caso de Chone, que bajo un contexto sociopolítico distinto al de Baba, y a pesar de haber iniciado la protesta en contra del proyecto durante la etapa de diseño, los campesinos no lograron influenciar sobre la tecnología ni sobre los impactos causados por la represa. A diferencia de los Gobiernos de los períodos desarrollista y neoliberal, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, como discutí anteriormente, aprendió el modo de movilizar el poder coercitivo, los incentivos mercantiles, y estrategias disciplinarias para ejecutar el proyecto multipropósito sobre el río Grande.

En suma, para el caso ecuatoriano, este libro muestra que no solo los actores dominantes o proponentes de megaproyectos son capaces y tienen la oportunidad de aprender de experiencias pasadas e influenciar sobre el desarrollo tecnológico. Los actores subalternos, como las comunidades locales (y sus redes), también se enriquecen de experiencias pasadas. Las utilizan para motivar la formación de procesos organizativos a nivel local, pero también para atraer el apoyo e involucramiento de los actores supralocales. A través de ello, las comunidades locales, eventualmente afectadas por los procesos de diseño, construcción e implementación de megaproyectos hidráulicos, logran intercambiar conocimientos y estrategias de acción para reclamar reconocimiento y generar espacios de participación política que, potencialmente, tienen una gran influencia sobre el desarrollo de estas megaobras.

Reflexiones y contribuciones teórico-conceptuales

Desde la ecología política posestructuralista y, particularmente, desde aquella dedicada al estudio de la gobernanza del agua (Mollinga 1998; Bakker 2012; Linton 2014; Swyngedouw 2015; Boelens *et al.* 2018;), este libro se propuso entender las relaciones de poder entre la sociedad, la naturaleza y la tecnología (Leff 2012) que informan el desarrollo de los megaproyectos hidráulicos en Ecuador. A partir de este eje y varios conceptos que lo alimentan, como la concepción productiva del poder (Foucault 1980; Dean 2010), la resistencia (Scott 1985; Pickett 1996; Chatterjee 2007) y algunos elementos del amplio debate de SCOT (p. ej.: Law 1991; Pfaffenberger 1992a; Bijker, Hughes y Pinch 2012) es que se retoma el propósito de esta investigación.

La ecología política del agua, los megaproyectos hidráulicos y la justicia hídrica

Si bien se ha venido desarrollando cada uno de los conceptos utilizados (más o menos) por separado, en las páginas del libro, su contribución al mejor

entendimiento del fenómeno investigado es necesariamente entrelazado e indisoluble. Así, este estudio muestra que la construcción genealógica del conocimiento en torno al «agua moderna» (Linton 2014, 111), y a los fenómenos «naturales» y discursivos formulados alrededor de ella (p. ej.: escasez o sobreabundancia) (Erensu 2013), están conectados íntimamente con la producción histórica de conocimiento y discursos acerca de las tecnologías modernas de control de agua (p. ej.: megaproyectos hídricos). Tales formas de conocimiento y construcción social acerca del agua, sus fenómenos «naturales» y las posibles «soluciones» tecnológicas son, a su vez, producidas y reproducidas por diversos tipos de actores.

El Estado, los expertos, las empresas constructoras y los tecnócratas, por un lado, promueven nociones dominantes de territorialidad hidrosocial, en tanto, las comunidades locales y otros actores aliados a ellas (p. ej.: intelectuales populares) defienden nociones distintas y muchas veces antagónicas. Esto es evidente a lo largo del libro: desde el afán de controlar las inundaciones que motivó a Orellana a impulsar la formación de la CEDEGE (TVA ecuatoriana) y, con ella, la construcción del sistema Daule-Peripa a mediados del siglo xx, pasando por el utilitarismo hidráulico y económico del sistema Baba, hasta el Buen Vivir del Gobierno tecnoideológico modernista que promovió el multipropósito Chone en años recientes. De esta manera, demuestro que el agua y su control no está desconectado de las nociones más estructurales que informan nuestra convivencia entre sociedad, tecnología y naturaleza. Avanzando un paso más allá a lo señalado por María Kaika (2006) y Dye (2016), en otras partes de mundo, la presente investigación ha mostrado cómo los megaproyectos hídricos —formas materiales y discursivas de poder y conocimiento—, presentados y legitimados como artefactos para el exclusivo y modernista control del agua, son en esencia representaciones materiales de ideología que (eventualmente) sirven para gobernar la sociedad (Zwarteeveen 2015; Mohamud 2016; Saraiva 2016).

La esencia social del agua (Bakker 2009) y la constitución política de los megaproyectos hídricos (Bijker 2007) muestran que estas obras son artefactos muy atractivos para el arte de gobernar. A diferencia de las megaobras en otros sectores de control y manejo de los recursos naturales, como en la extracción del gas, el bombeo del petróleo o la explotación de metales mediante la minería a gran escala, el megaproyecto hídrico se centra en el agua, que es en sí misma un recurso vital y, por tanto, profundamente social. El diseño, construcción e implementación de este tipo de infraestructuras, por tanto, implica discursivamente (y a veces también en la práctica) un «beneficio social» directo para comunidades locales. A menudo, el agua se queda (aun-

que no necesariamente signifique que es de fácil acceso) en las poblaciones locales, mientras el gas, el cobre o el petróleo salen de las zonas de extracción hacia el extranjero, para su refinación y beneficio. En consecuencia, para los gobernantes es más difícil justificar un proyecto que no visibiliza sus beneficios directamente en la sociedad, que aquel que los hace palpables. Es por esta razón que esta característica social e intrínseca de los megaproyectos hídricos y del agua es utilizada, con mayor frecuencia por los gobernantes, para justificar el desarrollo de este tipo de megaobras.

Este libro muestra, además, que los conflictos en torno al desarrollo de los megaproyectos hídricos son problemas de justicia (Zwarteeven y Boelens 2014). En los tres megaproyectos, las preguntas sobre quién se beneficia y quién es afectado (distribución), quién y qué normas, reglas y formas organizativas se consideran legítimas en la gestión del agua, y cómo debe ser manejada (reconocimiento), y sobre quién tiene la autoridad legítima para decidir cuál conocimiento es válido para manejar el agua (participación) (Schlosberg 2011) son transversales. En el sistema Daule-Peripa, el reconocimiento y la participación de los directamente afectados fue totalmente pasiva. Esto derivó en que por más de treinta años los afectados hayan cargado con la peor parte de una distribución de impactos y beneficios totalmente injusta (Hidalgo-Bastidas, Boelens e Isch 2018). En el sistema Baba, gracias, en parte, a los procesos de aprendizaje, pero también a la coyuntura sociopolítica, las comunidades afectadas lograron reclamar mayor reconocimiento y participación en la toma de decisiones acerca del megaproyecto. Su reconocimiento y participación se logró a través de la resistencia y movilización colectiva (Hidalgo-Bastidas y Boelens 2019a). Esto derivó en una distribución de impactos y beneficios más equitativa que en el primer caso. En tanto, en el proyecto Chone, el reconocimiento y la participación fueron bastante utilitarios y moldeados consciente o inconscientemente a los intereses del oficialismo (Hidalgo-Bastidas y Boelens 2018). Bajo este formato se redujeron, en alguna medida, los impactos sobre las familias que cedieron a los amedrentamientos u ofrecimientos del Estado, pero han sido severos con las familias que se mantuvieron en oposición al proyecto (Hidalgo-Bastidas 2019). En los tres casos se distinguen diferentes niveles de injusticia hídrica, pero varían dependiendo del contexto sociopolítico, de la capacidad de movilización y reclamo de los movimientos sociales y del momento histórico.

Aprendizaje, tecnocracia, resistencia y gubernamentalidad

Tal como se ha presentado en la primera sección de este capítulo, el presente libro

muestra que tanto para los grupos que promueven el diseño, la construcción e implementación de los megaproyectos hídricos (p. ej.: tecnócratas, expertos, constructores y financieristas), como para los movimientos sociales organizados o críticos (p. ej.: campesinos, intelectuales y activistas populares, académicos críticos, ONG), para este tipo de emprendimientos existen aprendizajes. Tales procesos de aprendizaje obedecen, en parte, a una trayectoria acumulativa de experiencias territoriales que han sido traspasadas entre distintos espacios geográficos, instituciones y personas, y que están condicionados por aspectos relacionados con el contexto sociopolítico, cultural y económico. El aprendizaje tanto entre actores dominantes como subalternos evoluciona. El aprendizaje, entonces, puede ser entendido como una forma de movilización de poder y de construcción de conocimiento que alimenta al gobernador como al gobernado.

En esta línea de argumentación, el presente libro muestra que si bien el desarrollo de este tipo de proyectos tecnocráticos tiene su propia lógica «técnica» e ideológica (Kaika 2006), su desarrollo es afectado por la capacidad local de contestación. Ambas circunstancias se alimentan de procesos de aprendizaje. Por tanto, los procesos de diseño, construcción e implementación en torno al megahidraulismo, en Ecuador, se adaptan de acuerdo con las agendas político-ideológicas gubernamentales y/o institucionales de turno (Warner, Hoogesteger e Hidalgo 2017), y con las capacidades de movilización y contestación de la sociedad civil o, en palabras de Chatterjee, de la sociedad política. El control y manejo del agua, desde la propuesta megahidráulica, se salvaguarda y adapta a lo largo del tiempo (en gran medida) debido a las personas (tecnócratas) que «creen» y defienden sus beneficios, pero, también, debido a la epistemología y conocimiento «técnico» ligado a este tipo de obras y redes sociotécnicas.

En este punto cabe preguntarse si los resultados del aprendizaje de la sociedad política tienen un efecto estructural sobre el modo en el que el Estado y los tecnócratas diseñan e implementan megaproyectos hídricos o son únicamente logros aislados y de corto plazo. Mi respuesta en base a lo encontrado en esta investigación es que los esfuerzos de la sociedad política, como lo evidenciado primero en Daule-Peripa (adaptación y resistencia individual), segundo en Baba (resistencia colectiva), y tercero en Chone (resistencia colectiva con acción gubernamental desde el Estado), tienen un grado de influencia sobre las propuestas tecnocráticas estructurales. Sin embargo, su alcance es limitado. No cabe duda que muchos de los esfuerzos de movilización social, como el evidenciado en Baba, son logros muy importantes. Esta experiencia y sus logros alimentaron el proceso de resistencia en

Chone, pero tal como se muestra en el proceso de la Revolución Ciudadana, los cambios logrados por los gobernados (y sus aliados), en este caso, no evitaron la suspensión definitiva del megaproyecto ni su modificación. Esto demuestra que el Estado y sus tecnócratas aprendieron cómo implementar «mejor» este tipo de obras, pero también aprendieron cómo debilitar y desarmar las protestas. En otras palabras, los logros de los gobernados sí tienen la capacidad de cambiar la estructura en el mediano y largo plazo, pero su verdadero alcance estará mediado por el contexto sociopolítico e institucional en el que sucedan.

De esta manera, el aprendizaje experimentado desde el Estado y los tecnócratas no significa íntegramente un compromiso de estos actores, de cambiar el paradigma sobre las formas modernas de control y manejo del agua. Si bien el aprendizaje puede ser utilizado, en parte, para reducir o disminuir los impactos socioambientales causados por la construcción de una mega-rempresa, como en el caso de Chone, también es visto como una oportunidad para reordenar la sociedad y gobernarla bajo nociones dominantes de territorialidad hidrosocial. A partir de esto podemos afirmar que con el pasar del tiempo, en Ecuador, y muy posiblemente en otras partes del mundo (véase, por ejemplo, Moore, Dore, y Gyawali 2010), los procesos de construcción e implementación de los megaproyectos hídricos han «evolucionado» en formas sofisticadas de gubernamentalidad.

Finalmente, este libro muestra que los conflictos acerca de los megaproyectos hídricos son luchas también por conocimiento. Estas luchas y proyectos tratan sobre, ¿cuál es el conocimiento «válido» en el desarrollo de los megaproyectos hídricos? ¿Quién es un agente legítimo como para generar tal o cual conocimiento? ¿Cómo cierto tipo de conocimiento logra ser percibido como «verdadero», como piedra angular de cierto «régimen de verdad»? Para entender estos conflictos desde distintas dimensiones de poder, tanto actores dominantes como subalternos se conjugan en los estudios de caso abordados. Actores poderosos movilizan estas dimensiones, para generar y legitimar un conocimiento dominante y la construcción de este tipo de obras; en tanto, las mismas formas de poder son muchas veces utilizadas por actores subalternos, desde sus espacios de movilización y resistencia para hacer frente al megahidraulismo en sus territorios.

La primera dimensión es aquella en donde el poder es «visible», y en donde el conocimiento es utilizado para promover y legitimar el desarrollo de megaproyectos hídricos (Boelens, Shah y Bruins 2019). Esta dimensión de poder y conocimiento está arraigada en instituciones, expertos y organizaciones que promueven este tipo de obras a través del conocimiento experto. Sin em-

bargo, también está presente en varias luchas subalternas que utilizan esta misma dimensión de poder para defender sus nociones hidrosociales. Por ejemplo, tanto en el multipropósito Baba como en Chone, los contraargumentos desplegados por los movimientos sociales, para hacer frente al discurso experto del oficialismo, estaban fundamentados, en gran medida, en información robada de los mismos técnicos del Estado, como sucedió en Baba. En el caso de Chone, el movimiento social recibió ayuda de un doctor en hidráulica de la Universidad de Berkeley, para generar información técnica que sirviera para fortalecer sus repertorios de protesta.

La segunda dimensión está relacionada con un poder «invisible» (Gaventa 2006), en donde el conocimiento es sesgado de manera consciente y es utilizado a propósito para «mantener algunos temas y actores fuera de la mesa de discusiones» (Gaventa y Cornwall 2001, 71, traducción propia) a lo largo del proceso de diseño, construcción e implementación de los megaproyectos hídricos. Esto comúnmente se refleja en el sobredimensionamiento de los beneficios y la subestimación de los impactos por muchos promotores de este tipo de obras. Desde los movimientos sociales, por su lado, responden a través del empoderamiento y la búsqueda de espacios de participación y de debate, para colocar sus nociones acerca de la tecnología y del territorio hidrosocial sobre la mesa. Un ejemplo de esto se muestra en los tres casos. En cada caso sucede en distintas etapas del desarrollo del megaproyecto. En el Daule-Peripa, la búsqueda de voz y voto se da con insistencia durante la etapa de operación; ya cuando los daños socioambientales habían ocurrido. En tanto, en Baba y Chone esta dimensión de poder movilizada desde los subalternos se dio en las etapas de diseño y construcción, respectivamente. En los tres casos, esta suerte de empoderamiento se da a través de la consolidación de las redes locales y supralocales de colaboración y resistencia.

La tercera dimensión de poder es aquella a la que Lukes (2005) se refiere como «conquistar los corazones y las mentes». En especial, se trata de silenciar e influenciar sobre la conciencia de aquellos sujetos en una posición de vulnerabilidad o subyugación (Boelens, Shah y Bruins 2019, 19). Esto se refleja con claridad en los tres casos estudiados. Por ejemplo, desde el Gobierno se intentó controlar la diseminación de información (conocimiento) certera acerca de los proyectos. En Daule-Peripa y Baba, en particular, solo se decía verdades a medias. En el caso de Chone se construyeron narrativas de manera intencional y discursos poderosos prorepresa. Tales narrativas incluyeron, además, atractivos programas de «compensación social»: escuelas y comunidades del milenio. La idea del Buen Vivir junto a la construcción de la represa y los programas sociales intentaron influenciar, de manera pre-

meditada, en la conciencia de las personas; en alguna medida, reificando una hegemonía gramsciana. Lo interesante es que, tanto en Baba como en Chone, los movimientos sociales, haciendo uso de la misma dimensión de poder, intentaron dar la vuelta a la producción de conocimiento para ponerla en función de sus intereses. Con el uso de distintos repertorios de resistencia y lucha, intentaron crear conciencia y pensamiento crítico en sus pares, principalmente, utilizando la experiencia trágica de sus vecinos en el mega-proyecto Daule-Peripa, e incluyendo en sus narrativas y argumentos experiencias de otras partes del mundo.

Finalmente, está una cuarta dimensión de poder. A diferencia de las tres anteriores que entienden al poder como una posesión de actores dominantes y como un elemento para oprimir a los vulnerables, esta es una dimensión en donde el poder es relacional y productivo (Foucault 1980; 2002), tal como se le define en el capítulo introductorio de este libro. El poder, el conocimiento y la verdad se relacionan para formar discursos cargados de moralidad, que a su vez intentan gobernar a través de la autocorrección de los individuos. De esta manera, los megaproyectos hídricos llegan a internalizarse en la cotidianidad de las personas como artefactos positivos y beneficiosos. Los movimientos sociales, como los establecidos en torno a los megaproyectos Baba y Chone, intentan romper, colectivamente, con esa normalización y moralización tecnológica mediante su cuestionamiento. Parte de su ruptura o cuestionamiento, tanto en Baba como en Chone, incluye el cuestionamiento al modelo de desarrollo universalista que impulsa este tipo de obras, frente a nociones hidrosociales locales y contextualizadas, inspiradas en otros «Buen Vivires».

La construcción social de la tecnología y las relaciones de poder

Este libro acogió una perspectiva constructivista para entender los megaproyectos hídricos como artefactos tecnológicos social y políticamente informados (Law 1991; Pfaffenberger 1992a; Winner 1993; Bijker 2010). A partir de esto se ha planteado dos premisas en torno a la construcción social de este tipo de tecnologías. La primera es que el estudio de artefactos utilizados para el manejo y control del agua, eventualmente, nos ayudaría a entender mejor las sociedades en donde esas tecnologías se implementan (Bijker 2007), y la segunda es, que los megaproyectos hídricos son resultado y están embebidos de relaciones de poder.

El presente estudio muestra que el proceso de diseño, construcción e implementación de megaproyectos hídricos es el resultado no solo de luchas so-

ciales, sino también epistemológicas. En menor o mayor medida, tales luchas se ven materializadas en el cemento, hierro y agua estancada que caracterizan a estos «templos de la modernidad» (Baviskar 1995). Por ejemplo, en el caso del sistema Daule-Peripa en donde hubo una (casi) nula participación de los afectados en el desarrollo del megaproyecto, tanto el diseño de la infraestructura como los efectos de esta en las formas de vida local obedecieron, exclusivamente, a las nociones hidrosociales tecnocráticas. En el caso del sistema Baba sucedió algo distinto. Gracias a las protestas de las comunidades locales, tanto el diseño de la tecnología como los efectos que esta tuvo en la sociedad fueron diferentes. Gran parte de las nociones acerca del territorio hidrosocial de los afectados se materializaron en los diseños alternativos de la infraestructura (p. ej.: evitar la inundación de sus fincas, evitar la proliferación de maleza acuática, disminución de la altura de la presa, etc.) y en la reubicación de la represa. Estas ilustraciones demuestran que, en el primer caso, las relaciones de poder presentes en la sociedad se materializaron a plenitud a través de la construcción del megaproyecto. En tanto, en el segundo caso, a pesar de que las relaciones de poder eran también desiguales, la lucha social hizo que esa brecha de desigualdad disminuyera ostensiblemente. Esto demuestra que la capacidad de movilización social y de lucha, expresada en la infraestructura hidráulica, da cuenta sobre la composición de la sociedad y de la importancia de contar con una sociedad organizada. A partir de estos tres casos, en especial, desde lo evidenciado en el sistema Baba, este libro concluye que los megaproyectos hídricos —bajo condiciones sociopolíticas, territoriales y culturales específicas— son tecnologías que también son embebidas e influenciadas por nociones hidrosociales subalternas. Pueden llegar a ser tecnologías híbridas que no solo reflejan el resultado de las luchas sociales, sino también de aquellas luchas epistemológicas comúnmente antagónicas.

De acuerdo con Bijker, Hughes y Pinch (2012), la flexibilidad interpretativa, el grupo social relevante, y los conceptos de cierre y estabilización están relacionados, en donde el «consenso» es asumido como una etapa crucial. Al respecto, en este libro se concluye que asumir que el proceso de construcción social de la tecnología en el desarrollo de megaproyectos hídricos se estabiliza tras el arribo a un consenso, es limitado, ya que desconoce las diferencias de poder que existen entre los distintos grupos sociales relevantes, y que no todos tienen la misma capacidad de influencia sobre las decisiones que informan el diseño final de la tecnología (Klein y Kleinman 2002).²²⁰ Este

220. Tal debilidad se muestra en la forma de representar una asumida igualdad de los grupos sociales relevantes frente al proceso de construcción social de la tecnología. En la

libro muestra que el proceso de consenso en sí mismo podría ser entendido como una construcción utilizada para moralizar la tecnología, presentando al poder en su forma inclusiva y productiva. En la construcción de consenso se incluyen normas y valores sobre la tecnología, que grupos dominantes proponen normalizar (p. ej.: desarrollo, energía limpia, bienestar de las mayorías, adaptación al cambio climático, etc.), que, eventualmente, motivan una autocorrección moral, lo cual, en última instancia, permitiría el arribo a un «consenso» sobre la tecnología y su diseño. En este sentido, considerar el consenso como algo apolítico podría eclipsar las relaciones de poder que están influenciando en el proceso de desarrollo tecnológico.

La perspectiva histórica proporciona una mirada dinámica al estudio de los megaproyectos hídricos. En este libro no solo ha sido útil tal dinamismo para entender mejor la información empírica colectada, sino que nos sirve para plantear algunas reflexiones sobre los conceptos (más o menos estáticos) que utilizamos para entender tal realidad. El concepto de «cierre y estabilización», planteado por Bijker, Hughes y Pinch (2012), no se cumple en el caso de los megaproyectos hídricos multipropósito, como los estudiados en este libro. Esta investigación muestra que los tres megaproyectos hídricos son tanto el origen o una parte de un sistema hidráulico más grande. Son parte de un sistema de sistemas (capítulo 3), que no concluye: siempre tiene otro componente para ser construido en el futuro. Una represa es el origen de otra, una deficiencia creada por esta es el justificativo para el desarrollo de otro tipo de infraestructura hidráulica que supla tal deficiencia (capítulo 4). Casi siempre se conoce la fecha de inicio de un megaproyecto hídrico, pero casi nunca se conoce su cierre y estabilización.

Dos características distinguen a la tecnología estudiada, a lo largo del libro, de otras utilizadas para controlar el agua. La primera es lo multipropósito. Debido a los múltiples beneficios que ofrece, se presenta como un artefacto que beneficiaría a todos: campesinos, agroindustriales, ciudades, indígenas, entre otros. Esto, en apariencia, hace de estos proyectos muy atractivos, tanto para gobernantes, por sus potenciales réditos políticos, como para gobernados y otros actores subalternos, debido a que representan la «esperanza» o el «sueño» de acceder al agua y varios servicios básicos como el agua potable, riego, control de inundaciones, electricidad, navegabilidad, etc. Lo multipropósito, en este sentido, no es únicamente una expresión tecnopolítica, materializada en los diseños mismos de la tecnología, sino que es un discurso o forma de poder y conocimiento productivo, que sirve para autolegitimar

abstracción gráfica presentada en el anexo 2 de este libro se asume que no existe diferencias entre los distintos grupos relevantes para influenciar la tecnología.

su diseño, construcción e implementación frente a proponentes y opositores. La segunda característica está en torno al prefijo del *megaproyecto*. Este tipo de proyectos necesariamente requiere de conocimiento «experto» para su realización. No necesita e inclusive prescinde de otros tipos de conocimiento, como el local o subalterno. Demanda inmensos flujos de dinero del mercado nacional e internacional que terminan endeudando a los países de manera crítica. En la misma línea, lo que va de la mano del siempre excesivo financiamiento de grandes firmas constructoras. Estas características dificultan el control social o transparencia, tanto en el uso de los fondos como en el cumplimiento de la calidad de las construcciones. Los megaproyectos necesariamente transforman la ecología y sus efectos son irreversibles. Su forma de gestión es a través del control o intervención estatal y el establecimiento de redes sociotécnicas, económicas, multiescalares y políticas muy complejas; tan complejas que invisibilizan los pasivos socioambientales para solo accentuar los cuestionados beneficios. Por su complejidad y tamaño, los diseños de los megaproyectos multipropósito son casi siempre sobredimensionados y la probabilidad de tener un correcto funcionamiento es improbable. En definitiva, este tipo de obras se guían, comúnmente, por principios de universalidad y replicabilidad, ignorando otras soluciones o posibles alternativas menos invasivas y violentas.

Otro aspecto que se corrobora a través de los hallazgos de este estudio es que la construcción social de la tecnología no es una construcción con efectos de una sola vía (sociedad → tecnología), sino que es un proceso interactivo e iterativo con influencias mutuas permanentes. Por ejemplo, la construcción de la represa del sistema multipropósito Baba, bajo el diseño alternativo, influenciada, en parte, por la movilización social, afectó a la fracción más débil de la movilización social. Después del cambio de diseño, las comunidades afrodescendientes quedaron sin apoyo de la mayoría de comunidades campesinas que ya no siguieron protestando, debido a que sus tierras ya no serían perjudicadas. Esta modificación en el diseño y ubicación de la represa develó el fraccionamiento interno del movimiento social. Esta característica acerca de la tecnología, como una construcción social, a su vez, aporta al concepto de política de los gobernados de Chatterjee: permite revelar las relaciones de poder que están presentes al interior de los movimientos sociales antirepresas, y sus eventuales efectos socioambientales.

En una línea similar, este libro hace una contribución al pensamiento de Chatterjee. Mientras Chatterjee afirma que, cuando el contexto político cambia, la capacidad de la sociedad política de alcanzar éxito también varía. Esta investigación evidencia que, en conflictos en torno a los megaproyectos

hídricos, como el de Baba, ese «contexto político» no es únicamente un tema de relaciones sociales y de poder, ya que el contexto político está embebido en el diseño tecnológico. Es decir, el contexto político no es únicamente social, sino que es también material. La tecnología debe ser entendida como conocimiento, moralidad, normatividad y relaciones sociales materializadas en un artefacto, que afecta de manera significativa el desarrollo y la capacidad de reclamo de protestantes—tanto en términos del contenido de los artefactos como en el proceso mismo del diseño, construcción e implementación.

A manera de conclusión final

Inicié este libro con un relato sobre las prácticas del Gobierno de la Revolución Ciudadana en torno a la política de promoción e implementación de los megaproyectos hídricos. Bajo un discurso progresista, el Gobierno implementó en la provincia de Manabí uno de sus proyectos emblemáticos: el multipropósito Chone. Si bien, ese relato sirvió como inspiración para iniciar mi investigación doctoral, su explicación hubiese sido limitada sin la mirada histórica que proporcionó el estudio de los otros dos casos: los megaproyectos Baba y Daule-Peripa. Ahora, en un intento de revivir los hechos sucedidos en la audiencia de Chone y en los eventos en torno a ella, y aquello que marcó el desarrollo de los otros dos megaproyectos estudiados, extraigo varios aprendizajes finales sobre esta investigación.

Un primer aprendizaje se refiere a que los megaproyectos hídricos son cadenas incrementales materiales e inmateriales. En tanto un megaproyecto inicia su desarrollo, este es apenas el inicio de una larga sucesión de desarrollos hidráulicos «anexos» al primero. Se inicia como ideal o proyecto inmaterial tecnocrático, ligado a una suerte de «ideología» hidráulica, para luego materializarse en sistemas interminables.

Un segundo aprendizaje es acerca de los megaproyectos hídricos con artefactos tecnológicos y políticos susceptibles a la influencia del contexto. Los megaproyectos, comúnmente, llevan consigo un aire de universalidad atemporal casi inevitable. Sin embargo, este libro demuestra que, al analizarlos desde una perspectiva diacrónica, considerando las historias de vida de personas y organizaciones involucradas en su desarrollo, esa supuesta universalidad es cuestionada. El contexto sociopolítico y geográfico «natural», en el cual son implementados estos proyectos, determinan su desarrollo tecnológico (p. ej.: diseño hidráulico) y el alcance de sus impactos socioambientales. Parte de este aspecto es la capacidad de aprendizaje que tienen los

distintos actores involucrados en el desarrollo de los megaproyectos. Tanto tecnócratas como (posibles) afectados por los megaproyectos hídricos condicionan la universalidad de estas obras. Si bien, estas obras son modelos que han viajado por todo el mundo, se modifican y adaptan de acuerdo con el contexto en el que se implementan. Por tanto, la capacidad de organización social, resistencia, comunicación, solidaridad entre las poblaciones afectadas, combinado con un contexto sociopolítico favorable, es determinante para modificar estas obras en su beneficio.

Un tercer aprendizaje está relacionado con el tamaño y alcance social de estas obras. Mientras más grande es el proyecto, mayor es su atracción para los actores poderosos (p. ej.: políticos y élites locales, grandes financieras, empresas constructoras transnacionales, etc.), quienes con frecuencia están inmiscuidos en redes de corrupción. La razón es que, a mayor tamaño del proyecto, existe una menor capacidad de control social y transparencia. Además, políticamente, son muy atractivos ya que sus potenciales beneficios sociales son importantes (p. ej.: agua para consumo, control de inundaciones, riego, turismo, etc.). Para los actores con poder económico y político, estos aspectos hacen muy atractivos estos emprendimientos tecnológicos.

Con base en estos aprendizajes, para alcanzar una gobernanza del agua socialmente justa y ambientalmente sustentable, mediante la implementación de proyectos multipropósito de agua, se debe, por un lado, explorar la posibilidad de planificar e implementar obras de menor tamaño, que permitan un mejor nivel de transparencia y control social, y que provoquen un menor impacto socioambiental. Por otro lado, y de manera fundamental, se necesita reconocer la participación política de los individuos, familias, organizaciones y movimientos sociales eventualmente afectados por este tipo de obras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACHTERHUIS, H. (2002). Borgmann, Technology and the Good Life? and the Empirical Turn for Philosophy of Technology. *Techné: Research in Philosophy and Technology*, 6(1), 64-75.
- ACOSTA, A. (2001). El proceso de sucretización en el Ecuador. *América Latina en movimiento*.
- ACOSTA, A. (2012). *Breve historia económica del Ecuador*. Corporación Editora Nacional.
- ACOSTA, A. (2014). «La iniciativa Yasuní ITT: Una crítica desde la economía política». *Coyuntura*, 16, 31-46.
- ACOSTA, A., CUVI, J., OSPINA, P., UNDA, M., DE LA TORRE, C., VILLAGÓMEZ, G., ÁVILA R., ÁLVAREZ, F., MELO, M., y MACHADO, D. (2013). *El correísmo al desnudo*. Montecristi Vive.
- ACOSTA, A., y MARTÍNEZ, E. (Eds.). (2010). *El agua, un derecho humano fundamental*. Abya-Yala-Fundación Rosa Luxemburgo.
- ACOSTA, A., y VILLAVICENCIO, A. (2007). *Agenda Energética 2007-2011. Hacia un sistema energético sustentable*. Ministerio de Energía y Minas.
- AGAMBEN, G. (1998). *Homo sacer: Sovereign power and bare life*. Stanford University Press.

AGUDO, P., y NAREDO, J. (1997). *La gestión del agua en España y California*. Colección Nueva Cultural del Agua. Coagret-Bakeaz.

AGUILERA-KLINK, F., PÉREZ-MORIANA, E., y SÁNCHEZ-GARCIA, J. (2000). The social construction of scarcity. The case of water in Tenerife (Canary Islands). *Ecological economics*, 34 (2), 233-245.

AHLERS, R., BUDDS, J., JOSHI, D., MERME, V., y ZWARTEVEEN, M. (2014). Framing hydropower as green energy: Assessing drivers, risks and tensions in the Eastern Himalayas. *Earth Systems Dynamics*, 6, 195-204.

ALATOUT, S. (2009). Bringing abundance into environmental politics: Constructing a Zionist network of water abundance, immigration, and colonization. *Social Studies of Science*, 39 (3), 363-394.

ALIANZA PAIS. (S.f.). *Manifiesto ideológico, Programa de acción y Régimen Orgánico Alianza PAIS*. Alianza PAIS.

ALIANZA PAIS. (2013). *Programa de gobierno 2013-2017. Propuestas para el Socialismo del Buen Vivir*. Alianza PAIS.

ALVARADO, M. (2009). *El territorio de los recintos inundados por la represa Daule Peripa*. FIAN-Ecuador.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2012). Para que nadie reclame nada. ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?. Amnistía Internacional.

ANDRADE, P., y NICHOLLS, E. (2016). *Capacidad y autoridad estatal, el caso ecuatoriano visto desde la teoría del Estado*. Universidad Andina Simón Bolívar.

ARAUJO-MORENO, M. (1994). La reforma del Estado ecuatoriano: por un país moderno. Revista *Martes Económico* del diario *El Comercio* e ILDIS, 13-53.

ARSEL, M., HOOGENBOOM, B., y PELLEGRINI, L. (2016). The extractive imperative in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, 3 (4), 880-887.

ASAMBLEA NACIONAL (2007). Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2010. Registro Oficial.

- ASAMBLEA NACIONAL. 2008. «Constitución de la República del Ecuador». Registro Oficial.
- ASAMBLEA NACIONAL. (2014). Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Registro Oficial.
- ATKINS, E. (2018). Building a dam, constructing a nation: “The drowning” of Capel Celyn. *Journal of Historical Sociology*, 1-14.
- AYALA, E. (1993). *Nueva Historia del Ecuador. Cronología Comparada de la Historia Ecuatoriana*, 14. Corporación Editora Nacional.
- AYALA, E. (1993b). *Resumen de Historia del Ecuador*, 1. Corporación Editora Nacional.
- BAGHEL, R. (2014). *River Control in India: Spatial, Governmental and Subjective Dimensions*. Springer.
- BAGHEL, R., y Nüsser, M. (2010). Discussing Large Dams in Asia after the World Commission on Dams: Is a Political Ecology Approach the Way Forward?. *Water Alternatives*, 3 (2), 231-248.
- BAKKER, K. (1999). The Politics of Hydropower: Developing the Mekong. *Political Geography*, 18 (2), 209-232.
- BAKKER, K. (2009). Water. En N. Castree, D. Demeritt, D. Liverman, y B. Rhoads (Eds.), *A companion to environmental geography*, (pp. 515-532). Blackwell companions to geography. Wiley-Blackwell.
- BAKKER, K. (2010). *Privatizing water: governance failure and the world's urban water crisis*. Cornell University Press.
- BAKKER, K. (2012). Water: Political, biopolitical, material. *Social Studies of Science*, 42 (4), 616-623.
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2016). Reporte de pobreza, ingreso y desigualdad. Banco Central del Ecuador.
- BANISTER, J. (2014). Are you Wittfogel or against him? Geophilosophy, hydro-sociability, and the state. *Geoforum*, 57, 205-214.

BARNES, J., y ALATOUT, S. (2012). Water worlds: Introduction to the special issue of Social Studies of Science. *Social Studies of Science*, 42(4), 483-488.

BARSKY, O., DÍAZ, E., FURCHE, C., y MIZRAHI, R. (1982). *Políticas agrarias, colonización y desarrollo rural en Ecuador: reflexiones sobre el Proyecto de Desarrollo Rural Integral Quininde-Malimpia-Nueva Jerusalén*. Organización de Estados Americanos; Centro de Planificación y Estudios Sociales.

BAUD, M. (2007). Indigenous Politics and the State: The Andean Highlands in the Nineteenth and Twentieth Centuries. *Social Analysis*, 51(2), 19-42.

BAUD, M., y RUTTEN, R., (Eds). (2004). *Popular intellectuals and social movements: Framing protest in Asia, Africa, and Latin America*. Cambridge University Press.

BAVISKAR, A. (1995). National Development, Poverty and the Environment. En A. Bawiskar (Ed.), *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley*, (pp. 19-33). Oxford University Press.

BECKER, M. (2010). *Pachakutik: Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador*. Rowman & Littlefield Publishers.

BECKER, M. (2011). Correa, indigenous movements, and the writing of a new Constitution in Ecuador. *Latin American Perspectives*, 38(1), 47-62.

BECKER, M. (2013). The stormy relations between Rafael Correa and social movements in Ecuador. *Latin American Perspectives*, 40(3), 43-62.

BECKER, M., y TUTILLO, S. (2009). *Historia agraria y social de Cayambe*. FLACSO, sede Ecuador.

BIJKER, W. (1995). *Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change*. MIT Press.

BIJKER, W. (2007). Dikes and dams, thick with politics. *Isis*, 98(1), 109-123.

BIJKER, W. (2010). How is technology made? -That is the question! *Cambridge Journal of Economics*, 34(1), 63-76.

BIJKER, W. (2015). Technology, Social Construction Of. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 24, 135-140.

- BIJKER, W., HUGHES, T., y PINCH, T., (Eds). (2012). *The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology And History of Technology*. MIT Press.
- BINKLEY, S. (2009). The Work of Neoliberal Governmentality: Temporality and Ethical Substance in the Tale of Two Dads. *Foucault Studies*, 6, 60-78.
- BLAIKIE, P. (1985). *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. Longman.
- BLAIKIE, P., y BROOKFIELD, H. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.
- BOELENS, R. (2008). *The rules of the game and the game of the rules: Normalization and resistance in Andean water control*. PhD Thesis. Wageningen University.
- BOELENS, R. (2015a). *Water Justice in Latin America. The Politics of Difference, Equality, and Indifference*. Universidad de Amsterdam.
- BOELENS, R. (2015b). *Water, Power and Identity: The Cultural Politics of Water in the Andes*. Earthscan and Routledge.
- BOELENS, R. (2017). *Rivers of Scarcity. Utopian Water Regimes and Flows Against the Current*. University of Wageningen.
- BOELENS, R., HOOGESTEGER, J., y BAUD, M. (2015). Water reform governmentality in Ecuador: Neoliberalism, centralization, and the restraining of polycentric authority and community rule-making. *Geoforum*, 64, 281-291.
- BOELENS, R., HOOGESTEGER, J., SWYNGEDOUW, E., Vos, J., y WESTER, P. (2016). Hydrosocial territories: A political ecology perspective. *Water International*, 41 (1), 1-14.
- BOELENS, R., SHAH, E., y BERT, B. (2019). Contested knowledges: large dams and mega-hydraulic development. *Water*, 11 (3), 1-27.
- BOELENS, R., PERREAULT T., Vos, J., y ZWARTEVEEN, M., (Eds). (2018). *Water Justice*. Cambridge University Press.
- BOELENS, R., y POST, N. (2013). Hydraulic Heroes: The Ironies of Utopian Hydraulism and its Politics of Autonomy in the Guadalhorce Valley, Spain. *Journal of Historical Geography*, 41, 44-58.

BOSE, P. (2004). Critics and experts, activists and academics: Intellectuals in the fight for social and ecological justice in the Narmada Valley, India. En M. Baud y R. Rosanne (Eds.), *Popular Intellectuals and Social Movements. Framing Protest in Asia, Africa, and Latin America*, (pp. 133-157). Cambridge University Press.

BRASSEL, F., HERRERA, S., y LAFORGE, M., (Eds.). (2008). ¿Reforma Agraria en el Ecuador? *Viejos temas, nuevos argumentos*. SIPAE.

BRIT, S. (2000). Oral History Interviews. Harold G. Arthur. Interview. Bureau of Reclamation.

BRYANT, R., y BAILEY, S. (1997). *Third world political ecology*. Routledge.

BUDDS, J. (2009). Contested H2O: Science, policy and politics in water resources management in Chile. *Geoforum*, 40(3), 418-430.

BUNKER, S. (1985). *Underdeveloping the Amazon: Extraction, Unequal Exchange, and the Failure of Modern State*. University of Chicago Press.

BURAWOY, M. (1998). The extended case method. *Sociological Theory*, 16(1), 4-33.

CADMAN, L. (2010). How (not) to be governed: Foucault, critique, and the political. *Environment and Planning D*, 28(3), 539-556.

CAIC (2008a). Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana. Ministerio de Finanzas.

CAIC (2008b). Programa de Concesión al sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Ministerio de Finanzas.

CAMINOSCA (2004a). Diseños definitivos de la Central Hidroeléctrica del Proyecto Quevedo-Vinces (Presa Baba). Informe Final Provisional. Informe General. CEDEGE.

CAMINOSCA (2004b). Diseños definitivos de la Central Hidroeléctrica del Proyecto Quevedo-Vinces (Presa Baba). Informe Final Provisional. Informe General. CEDEGE.

CAMPAGNA PER LA RIFORMA DELLA BANCA MONDIALE (2008). *El Proyecto Daule Peripa. Las responsabilidades italianas en la deuda ilegítima de Ecuador*. Tipolitografía 5M.

- CARRILLO, P., BELLETTINI, O., y COOMBS, E. (2007). Stay Public or Go Private?: A Comparative Analysis of Water Services between Quito and Guayaquil. Grupo FARO.
- CEDEGE (1999). Proyecto de Propósito Múltiple Quevedo-Vinces. Primera etapa: Presa Baba y Trasvase hacia Daule-Peripa. CEDEGE.
- CEDEGE (1974). La cuenca del Guayas y su relación con el desarrollo urbano de Guayaquil. CEDEGE.
- CEDEGE (1985). Informativo n.º 2. CEDEGE.
- CEDEGE (1995). Misión Cumplida. CEDEGE.
- CEDEGE (2002). Plan Integral de Gestión Socio Ambiental de la Cuenca del río Guayas y Península de Santa Elena-PIGSA. CEDEGE.
- CEDEÑO, J., y DONOSO, M. (2010). *Atlas pluviómetro del Ecuador*. UNESCO.
- CELEC-EP (2013). *25 Años de la Presa Daule-Peripa (1988-2013)*. CELEC-EP.
- CENTENO, M., y SILVA, (Eds). (1998). *The Politics of Expertise in Latin America*. Macmillan Press Ltd.
- CEPAL (1954). El desarrollo económico del Ecuador. Reedición E/CN.12/295, Serie Historia de la Política Económica del Ecuador. Secretaría de la Comisión Económica para América Latina.
- CEPAL (2012). *Diagnóstico de las estadísticas del agua en el Ecuador*. CEPAL-GIZ-SENAGUA.
- CEPAL/CEDEGE (1982). Plan regional de desarrollo de la cuenca del río Guayas y de la península de Santa Elena. Diagnóstico integrado. Tomo II. CEPAL-CEDEGE.
- CEPAL/CEDEGE (1983). Plan regional integrado de la cuenca del río Guayas y la península de Santa Elena: Orientación para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Tomo III. CEPAL.
- CEVALLOS, M. (2006). Análisis de la Situación actual y perspectivas de los proyectos de uso múltiple: represas y trasvases en el Ecuador. Foro de Recursos Hídricos-Ecuador.

CHATTERJEE, P. (2004). *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World*. Columbia University Press.

CHATTERJEE, P. (2007). *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*. IEP-CLACSO-SEPHIS.

CHIRIBOGA, M. (1980). *Jornaleros y gran propietarios en 135 años de exportación caotera*. Consejo Provincial de Pichincha.

CONAGHAN, C. (2008). Ecuador: Correa's plebiscitary presidency. *Journal of Democracy*, 19(2), 46-60.

CORRAL, L. (2006). *Sembrando desiertos. La deuda social y ecológica generada por el endeudamiento externo en el Proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera*. Segunda. Acción Ecológica.

CORREA, R. (2009). *Ecuador: de Banana Republic a la no república*. Debate.

CREMERS, L., OOIJEVAAR, M., y BOELENS, R. (2005). Institutional reform in the Andean irrigation sector: Enabling policies for strengthening local rights and water management. *Natural Resources Forum*, 29, 37-50.

CROW, B. (2018). Urban water and sanitation injustice: an analytic framework. En R. Boelens, T. Perreault y J. Vos, (Eds.), *Water Justice*, (pp. 89-106). Cambridge University Press.

CROW-MILLER, B., WEBBER, M., y ROGERS, S. (2017). The techno-politics of big infrastructure and the chinese water machine. *Water Alternatives*, 10(2), 233-249.

CROW-MILLER, B. (2013). *Water, Power, and Development in Twenty-First Century China: The Case of the South-North Water Transfer Project*. University of California.

DALY, E. (2012). The Ecuadorian exemplar: the first ever vindications of constitutional rights of nature. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 21 (1), 63-66.

DAVIDSON, A. (2012). Elogio de la contraconducta. *Revista de Estudios Sociales*, 35 (43), 152-164.

- DE LA TORRE, C., y SALGADO, M. (2008). *Galo Plaza y su época*. FLACSO, sede Ecuador.
- DEAN, M. (2010). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. Sage Publications.
- DELER, J. (1994). Transformaciones regionales y organización del espacio nacional ecuatoriano entre 1830 y 1930. En J. Maiguashca, (Ed.) *Historia y región en el Ecuador, 1830-1930*, (pp. 295-353). Corporación Editora Nacional.
- DELGADO-COPPIANO, E. (2012). *Fulgores de Chone*. Hechos Editores.
- DÍAZ-BAUTISTA, A. (2005). *Experiencias internacionales en la desregulación eléctrica y el sector eléctrico en México*. Plaza y Valdés.
- DITTO, J. (1986). *Leyes y sangre en el agro*. Universidad de Guayaquil.
- DOUROJEANNI, A. (2001). *Water Management at the River Basin Level: Challenges in Latin America*. ECLAC.
- DOUROJEANNI, A., y LEE, T. (1981). Aspectos ambientales de la gestión de grandes obras de infraestructura. CEPAL-PNUMA.
- DUARTE-ABADÍA, B., BOELENS, R., y ROA-AVENDAÑO, T. (2015). Hydropower, encroachment and the re-patterning of hydrosocial territory: The case of Hidrosogamoso in Colombia. *Human Organization*, 74(3), 243-254.
- DUEÑAS DE ANHALZER, C. (1991). *Soberanía e insurrección en Manabí*. Abya-Yala.
- DUKPA, DOMA, R., JOSHI, D., y BOELENS, R. (2018). Hydropower development and the meaning of place. Multi-ethnic hydropower struggles in Sikkim, India. *Geoforum*, 89, 60-72.
- DYE, B. (2016). The return of «high modernism»? Exploring the changing development paradigm through a Rwandan case study of dam construction. *Journal of Eastern African Studies*, 10(2), 303-324.
- EFFICACITAS. (2013). Auditoría de Cierre de Etapa Constructiva Proyecto Multi-propósito Baba. Resumen Ejecutivo. HidroLitoral EP.

EFFICACITAS, UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO (2006). TDRS del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Proyecto Multipropósito Baba. HidroLitoral EP.

EINBINDER, N. (2017). *Dams, displacement and Development: Perspectives from Río Negro, Guatemala*. Springer.

EKBLADH, D. (2002). «Mr. TVA»: grass-roots development, David Lilienthal, and the rise and fall of the Tennessee Valley Authority as a symbol for US Overseas Development, 1933-1973. *Diplomatic History*, 26(3), 335-374.

ELWOOD, S., BOND, P., MARTÍNEZ, C., y RADCLIFFE, S. (2016). Learning from Postneoliberalisms. *Progress in Human Geography*, 41(4), 676-695.

ERENSU, S. (2013). Abundance and scarcity amidst the crisis of «modern water»: the changing water-energy nexus in Turkey. En L. Harris, J. Goldin y C. Sneddon, (Eds.), *Contemporary Water Governance in the Global South: Scarcity, Marketization and Participation*, (pp. 61-78). Routledge.

ESCOBAR, A. (1996). Construction nature: Elements for a post-structuralist political ecology. *Futures*, 28(4), 325-343.

ESPINEL, R., y HERRERA, P. (2008). Acumulación perversa: comuneros, agua y tierra en la península de Santa Elena. En F. Brassel, S. Herrera y M. Laforge, (Eds.), *¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos*, (pp. 49-63). SIPAE-OXFAM-IRD-AVSF.

ESPINOSA, M. (2015). *La construcción de la imagen de Rafael Correa en comerciales políticos*. Master Thesis. Londres School of Economics and Political Science.

EVERARD, M. (2013). *The Hydropolitics of Dams: Engineering or Ecosystems?* Zed Books.

FEARNSIDE, P. (2016). Environmental and social impacts of hydroelectric dams in Brazilian Amazonia: Implications for the aluminum industry. *World Development*, 77, 48-65.

FERRÍN-SCHETTINI, R. (1986). *Economías campesinas, estructura agraria y formas de acumulación: el caso de Manabí a partir de la Revolución Liberal*. PUCE-CONUEP.

- FERRÍN-SCHETTINI, R. (1991). *Crisis de la gran propiedad en Manabí, 1920-1940*. PUCE-Instituto de Investigaciones Económicas.
- FINER, M., y JENKINS, C. (2012). Proliferation of Hydroelectric Dams in the Andean Amazon and Implications for Andes-Amazon Connectivity. *PLOS ONE*, 7(4), e35126.
- FITCH, J. (1988). *Hacia un modelo democrático en las relaciones civiles-militares*. CORDES.
- FLETCHER, R. (2001). What are we fighting for? Rethinking resistance in a Pewenche community in Chile. *The Journal of Peasant Studies*, 28(3), 37-66.
- FLETCHER, R. (2007). *Beyond resistance: The future of freedom*. Nova.
- FLETCHER, R. (2010). Neoliberal environmentality: Towards a poststructuralist political ecology of the conservation debate. *Conservation & Society*, 8(3), 171-181.
- FLYVBJERG, B. (2017). *The Oxford Hanbook of Megaproject Management*. Oxford University Press.
- FLYVBJERG, B., BRUZELIUS, N., y ROTHENGATTER, W. (2003). *Megaprojects and risk: An anatomy of ambition*. Cambridge University Press.
- FORO RECURSOS HÍDRICOS (2017). Noveno Encuentro Nacional Foro de los Recursos Hídricos - Conclusiones y Propuestas. Foro Recursos Hídricos.
- FORSYTH, T. (2003). *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge.
- FOUCAULT, M. (1978). *The History of Sexuality: An Introduction*. Trad. por R. Hurley. Vintage.
- FOUCAULT, M. (1980). Power/knowledge. Pantheon.
- FOUCAULT, M. (1991). Governmentality. En G. Bursell, C. Gordon y P. Miller, (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, (pp. 87-104). University of Chicago Press.
- FOUCAULT, M. (1995). ¿Qué es la crítica? [Crítica y Aufklärung]. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 11, 5-26.

- FOUCAULT, M. (2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores.
- FOUCAULT, M. (2007). *Security, territory, population*. Cham: Springer.
- FOUCAULT, M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures At The College De France, 1978-1979*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- FOUCAULT, M., y MISKOWIEC, J. (1986). Of other spaces. *Diacritics* 16(1): 22-27.
- FRASER, N. (1981). Foucault on modern power: Empirical insights and normative confusions. *Praxis International*, 1(3), 272-287.
- FRASER, N. (2012). *Sobre la Justicia. Lecciones de Platón, Rawls e Ishiguro*. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
- GAGO, V. (2014). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Tinta Limón.
- GALARZA, J. (1972). *El Festín del petróleo*. Editorial Sol.
- GARCÍA, D. (2006). *El agua: patrimonio y derecho*. Foro de Recursos Hídricos.
- GAVENTA, J., y CORNWALL, A. (2001). Power and Knowledge. En P. Reason y H. Bradbury, (Eds.), *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*, (pp. 70-80). Sage Publications.
- GAVENTA, J. (2006). Finding the spaces for change: a power analysis. *IDS Bulletin*, 37 (6), 23-33.
- GAYBOR, A. (2011). Acumulación en el campo y despojo de agua en el Ecuador. En R. Boelens, L. Cremers y M. Zwarteveld, (Eds.), *Justicia hídrica: acumulación, conflicto y acción social*, (pp. 195-207). Instituto de Estudios Peruanos.
- GELATI, E., MADSEN, H., y ROSBJERG, D. (2014). Reservoir operation using El Niño forecasts: case study of Daule Peripa and Baba, Ecuador. *Hydrological Sciences Journal*, 59 (8), 1559-1581.
- GELLERT, P., y LYNCH, B. (2003). Mega-projects as displacements. *International Social Science Journal*, 55(175), 15-25.

- GOLDMAN, M. (2007). «How Water for All!» Policy became hegemonic: The power of the World Bank and its transnational policy networks. *Geoforum*, 38(5), 786-800.
- GÓMEZ, A., WAGNER, L., TORRES, B., MARTIN, F., y ROJAS, F. (2014). Social resistance against hydraulic megaprojects in Latin America. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 97, 75-96.
- GRUGEL, J., y RIGGIROZZI, P. (2012). Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and reclaiming the State after crisis. *Development and Change*, 43(1), 1-21.
- GUDAVARTHY, A., (Ed.). (2012). *Re-framing Democracy and Agency in India*. Anthem Press.
- GUDYNAS, E., y ACOSTA, A. (2010). ¿Si eres tan progresista, por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas. *Ecuador Debate*, 79(5), 61-82.
- GUDYNAS, E., y ACOSTA, A. (2011). El buen vivir o la disolución de la idea del progreso. *La medición del progreso y del bienestar. Propuestas de América Latina*, 103-110. Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
- HAAS, P. (1992). Introduction: epistemic communities and international policy coordination. *International Organization*, 46(01), 1-35.
- HALE, C. (2004). Rethinking indigenous politics in the era of the «indio permitido». *NACLA Report on the Americas*, 38(2), 16-20.
- HAYEK, F. (2016). The meaning of competition. *Eco Journal Watch*, 13(2), 360-372.
- HECHT, S. (1985). Environment, development and politics: capital accumulation and the livestock sector in eastern Amazonia. *World Development*, 13(6), 663-684.
- HECKATHORN, D. (1997). Respondent-driven sampling: a new approach to the study of hidden populations. *Social Problems* 44(2), 174-199.
- HERRERA, M., y LEE, P. (2017). *La relación China-Ecuador en el siglo xxi*. Instituto de Altos Estudios Nacionales.
- HEY, J., y KLAK, T. (1999). From protectionism towards neoliberalism: Ecuador across four administrations (1981-1996). *Studies in Comparative International Development*, 34(3), 66-97.

HIDALGO-BASTIDAS, J. P. (2018). La floricultura, una manifestación agroindustrial del despojo del agua. El caso de la acequia Tabacundo en la sierra ecuatoriana. En J. Budds y M. Roa (Eds.), *Equidad y justicia hídrica. El agua como reflejo de poder en los países andinos*, (pp. 211-226). PUCP-Justicia Hídrica.

HIDALGO-BASTIDAS, J. P. (2019). Agua, tecnología y gubernamentalidad: reconfiguración territorial en torno al megaproyecto hídrico multipropósito Chone, Ecuador. *Revista Estudios Atacameños*, en imprenta.

HIDALGO-BASTIDAS, J. P., y BOELENS, R. (2018). Inundaciones políticamente construidas. El megaproyecto hídrico Chone en Ecuador. *Cuadernos de Geografía de la Universitat de Valencia*, 101, 127-148.

HIDALGO-BASTIDAS, J. P., y BOELENS, R. (2019a). Hydraulic order and the politics of the governed. The Baba Dam in coastal Ecuador. *Water*, 11, 409.

HIDALGO-BASTIDAS, J. P., y BOELENS, R. (2019b). The political construction and fixing of water overabundance: rural-urban flood-risk politics in coastal Ecuador. *Water International*, 44(2), 169-187.

HIDALGO-BASTIDAS, J. P., BOELENS, R., e ISCH, E. (2018). Hydro-territorial configuration and confrontation. The Daule-Peripa Multipurpose Hydraulic Scheme in coastal Ecuador. *Latin American Research Review*, 53(3), 517-534.

HIDALGO-BASTIDAS, J. P., BOELENS, R., y VOS, J. (2017). De-Colonizing Water. Dispossession, Water Insecurity, and Indigenous Claims for Resources, Authority, and Territory. *Water History*, 9, 1-19.

HIDROVO-VELÁSQUEZ, H. (1957). *Un hombre y un río*. Gráficas Ramírez.

HOMMES, L., y BOELENS, R. (2017). Urbanizing rural waters: Rural-urban water transfers and the reconfiguration of hydrosocial territories in Lima. *Political Geography*, 57, 71-80.

HOMMES, L., BOELENS, R., y MAAT, H. (2016). Contested hydrosocial territories and disputed water governance: Struggles and competing claims over the Ilisu Dam development in southeastern Turkey. *Geoforum*, 71, 9-20.

HOOGESTEGER, J. (2013). *Movements against the current: Scale and social capital in peasants' struggles for water in the Ecuadorian Highlands*. Tesis de doctorado. Wageningen University.

- HOOGESTEGER, J. (2014). *Los nuevos sujetos del agua: organización social y la democratización de la gestión del agua en los Andes ecuatorianos*. Justicia Hídrica-IEP-Abya Yala.
- HOOGESTEGER, J., TIAGUARO-REA, Y., RAP, E., e HIDALGO, J. (2017). Scalar Politics in Sectoral Reforms: Negotiating the Implementation of Water Policies in Ecuador (1990-2008). *World Development*, 98, 300-309.
- HOUSTON, K. (1981). Hydraulic model study of Daule-Peripa spillway and outlet works. Division of Research Engineering. Bureau of Reclamation.
- HUGHES, T. (1983). *Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930*. Johns Hopkins University Press.
- ICOLD (2017). International Commission on Large Dams. International Commission on Large Dams.
- IDB. (2007). Environmental and Social Management Report (ESMR). EC-L 1026. Inter-American Development Bank.
- JANSEN, K., y VELLEMA, S. (2011). What Is Technography?. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, 57(3-4), 169-177.
- JASANOFF, S. (Ed.). (2004). *States of Knowledge: The Co-Production of Science and the Social Order*. Routledge.
- JENKINS, D. (1979). Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Propósito Múltiple Daule-Peripa del Ecuador. Inter-American Development Bank.
- JOHNSTON, B. (2003). The political ecology of water: an introduction. *Capitalism Nature Socialism*, 14 (3), 73-90.
- JOURAVLEV, A. y CHÁVEZ, G. (2002). *Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica*, 1. United Nations Publications.
- KAIKA, M. (2006). Dams as symbols of modernization: the urbanization of nature between geographical imagination and materiality. *Annals of the Association of American Geographers*, 96(2), 276-301.

- KHAGRAM, S. (2004). *Dams and Development: Transnational Struggles for Water and Power*. Cornell University Press.
- KIEN, G. (2008). Technography= technology+ ethnography. *Qualitative Inquiry*, 14 (7), 1101-1109.
- KIRCHHERR, J. (2018). Strategies of successful anti-dam movements: Evidence from Myanmar and Thailand. *Society & Natural Resources*, 31(2), 166-182.
- KLEIN, H., y KLEINMAN, D. (2002). The Social Construction of Technology: Structural Considerations. *Science, Technology, & Human Values*, 27(1), 28-52.
- LARREA, C. (2006). *Hacia una historia ecológica del Ecuador: propuestas para el debate*, 15. Corporación Editora Nacional-UASB-EcoCiencia.
- LARREA, C., y WARNARS, L. (2009). Ecuador's Yasuni-ITT Initiative: Avoiding emissions by keeping petroleum underground. *Energy for Sustainable Development*, 13 (3), 219-223.
- LATOUR, B. (1996). *Aramis, or, the Love of Technology*. Harvard University Press.
- LAW, J., (Ed). (1991). *A sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination*, 171. Routledge.
- LEFF, E. (2012). Political Ecology-A Latin American Perspective. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 35, 29-64.
- LEMKE, T. (2002). Foucault, governmentality, and critique. *Rethinking Marxism*, 14 (3), 49-64.
- LESLIE, J. (2007). *Deep Water: the Epic Struggle over Dams, Displaced People, and the Environment*. Macmillan.
- LEWIS, T. (2016). *Ecuador's Environmental Revolutions: Ecoimperialists, Ecodependents, and Ecoresisters*. MIT Press.
- LI, T. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

- LILIENTHAL, D. (1944). *TVA-Democracy on the March*. Harper & Brothers Publishers.
- LINTON, J. (2010). *What is water?: The History of a Modern Abstraction*. UBC Press.
- LINTON, J. (2014). Modern water and its discontents: a history of hydrosocial renewal. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 1(1), 111-120.
- LOFTUS, A. (2009). Rethinking political ecologies of water. *Third World Quarterly*, 30(5), 953-68.
- LONG, N. (1990). From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-oriented sociology of development. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 3-24.
- LU, F., VALDIVIA, G., y SILVA, N. (2017). *Oil, Revolution, and Indigenous Citizenship in Ecuadorian Amazonia*. Palgrave Macmillan.
- LUCAS, K. (2007). *Rafael Correa: un extraño en Carondelet*. Grupo Planeta.
- LUDWIK, T. (1967). *The River Basin in History and Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- LUKES, S. (2005). Power and the Battle for hearts and minds. *Millennium - Journal of International Studies*, 33(3), 477-493.
- LYNCH, B. (2006). The Chixoy Dam and the Achí Maya: violence, ignorance, and the politics of blame. *Center for International Studies*, Working paper series 10-06, 1-23.
- LYNCH, B. (2013). River of contention: scarcity discourse and water competition in highland Peru. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 42, 69.
- MACKENZIE, D. (1990). *Inventing Accuracy: a Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance*. MIT Press.
- MAGAP. (2011). *Censo de riego*. MAGAP.
- MAHONEY, J., y RUESCHEMAYER, D., (Eds.). (2003). *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*. Cambridge University Press.

- MARTINEZ-ALIER, J., y SCHULPMANN, K. (1987). *Ecological Economics*. Blackwell.
- McCULLY, P. (2001). *Silenced Rivers: the Ecology and Politics of Large Dams*. Zed Books.
- MEHTA, L. (2006). *Water and Human Development: Capabilities, Entitlements and Power*. Institute for Development Studies.
- MENA-VÁSCONEZ, P., BOELENS, R., y Vos, J. (2016). Food or flowers? Contested transformations of community food security and water use priorities under new legal and market regimes in Ecuador's highlands. *Journal of Rural Studies*, 44, 227-238.
- MENGA, F. (2015). Building a nation through a dam: the case of Rogun in Tajikistan. *Nationalities Papers*, 43(3), 479-494.
- MENGA, F., y SWYNGEDOUW, E. (2018). *Water, Technology and the Nation-state*. Routledge.
- MICSE. (2015). Informe de rendición de cuentas. MICSE.
- MITCHELL, T. (2002). *Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity*. University of California Press.
- MOHAMUD, M., y VERHOEVEN, H. (2016). Re-Engineering the State, Awakening the Nation: Dams, Islamist Modernity and Nationalist Politics in Sudan. *Water Alternatives*, 9(2), 182-202.
- MOLLINGA, P. (1998). *On the Waterfront: Water Distribution, Technology and Agrarian Change in a South Indian Canal Irrigation System*. Tesis de doctorado. Wageningen University.
- MOLLINGA, P., y MOOIJ, J. (1989). Cracking the code: Towards a conceptualization of the social content of technical artefacts. *Occasional Paper* n.º 18. The Open University: Milton Keynes.
- MOORE, D., DORE, J., y GYAWALI, D. (2010). The World Commission on Dams+ 10: Revisiting the large dam controversy. *Water Alternatives*, 3(2), 3.
- NGUYEN, T., BOETS, P., LOCK, K., DAMANIK, M., EURIE, M., SASHA, P., DOMINGUEZ-GRANDA, L., THI, T., EVERAERT, G., y GOETHALS, P. (2015). Habitat suitability of the invasive water hyacinth and its relation to water quality and macroinvertebrate

- diversity in a tropical reservoir. *Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters*, 52, 67-74.
- NIXON, R. (2010). Unimagined communities: developmental refugees, megadams and monumental modernity. *New Formations*, 69(1), 62-80.
- NÚÑEZ-SÁNCHEZ, J. (2011). *El Ecuador en la Historia*. Vol. cxxxviii. Archivo General de la Nación.
- ODEBRECHT S. A. (S.f.) *Verdades y mentiras sobre el Proyecto Baba*. Gráficas sx.
- O'DONNELL, G. (1973). *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American politics*. University of California.
- OJEDA, L. (2013). *Planificación ecuatoriana: visión retrospectiva*. Instituto de Investigación; UNAP.
- OLSON, R. (2015). *Scientism and Technocracy in the Twentieth Century: The Legacy of Scientific Management*. Lexington Books.
- ORELLANA, F. (2008). *Como Nació la CEDEGE. Evolución histórica del proyecto de desarrollo de la cuenca del Guayas y la creación de la CEDEGE*. Imprenta Arcos.
- OSPINA, P. (2013). Estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo antes que cambiarlo. La revolución ciudadana en Ecuador (2007-2012). *Promesas en su laberinto: Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*, 117-271. IEE; Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario; Centro Internacional Miranda.
- OSPINA, P. (2016a). El surgimiento de las organizaciones estatales de control ambiental en Ecuador (1930-1960). En P. Andrade, (Ed.), *La gobernanza ambiental en Ecuador. Historia, presente u desafíos*, (pp. 55-99). Corporación Editora Nacional; Universidad Andina Simón Bolívar.
- OSPINA, P. (2016b). Grandes empresas, crisis económica y revolución ciudadana. Revista digital *Plan V*.
- OSTI, G. (2017). The Anti-Flood Detention Basin Projects in Northern Italy. New Wine in Old Bottles?. *Water Alternatives*, 10(2), 265-282.

- PACARI, N. (1996). Ecuador taking on the neoliberal agenda. *NACLA Report on the Americas*, 29(5), 23-32.
- PARENTI, C. (2016). Environment-Making in the Capitalocene. En J. Moore, (Ed.), *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism*, (pp. 166-183). PM Press.
- PEET, R., y WATTS, M., (Eds.). (1996). *Liberation Ecologies: Environment, Development and Social Movements*. Routledge.
- PELUSO, N. (1992). *Rich Forests, Poor People: Forest Access and Control in Java*. University of California Press.
- PERKINS, J. (2005). *Confesiones de un gánster económico*. Editrens.
- PERREAULT, T. (2014). What kind of governance for what kind of equity? Towards a theorization of justice in water governance. *Water International*, 1-13.
- PERREAULT, T., BRIDGE, G, y McCARTHY, J., (Eds). (2015). *The Routledge handbook of political ecology*. Routledge.
- PFAFFENBERGER, B. (1988). Fetishised objects and humanised nature: towards an anthropology of technology. *Man*, 236-252.
- PFAFFENBERGER, B. (1992a). Social anthropology of technology. *Annual review of Anthropology*, 491-516.
- PFAFFENBERGER, B. (1992b). Technological dramas. *Science, Technology & Human Values*, 17(3), 282-312.
- PICKETT, BRENT. (1996). «Foucault and the Politics of Resistance». *Polity*, s/n: 445-466.
- POATS, S., ZAPATTA, A, y CACHIPUENDO, C. (2006). Estudio de caso: la acequia Tabacundo y las microcuencas de los ríos Pisque y la Chimba en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, provincia del Pichincha, en el norte del Ecuador. Proyecto Visión Social del Agua. Agua Sustentable Bolivia; IDRC; CRDI.
- POLANYI, K. (1957). *The Great Transformation*. Beacon Press.

- PRIETO, M. (2004). *Liberalismo y temor: imaginando los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial, 1895-1950*. Abya Yala.
- PRONAREG-ORSTOM. (1978). *Diagnóstico socio-económico del medio rural ecuatoriano*. PRONAREG.
- RABINOW, P. (1991). *The Foucault reader*. Penguin.
- RAP, E. (2007). Cultural performance, resource flows and passion in politics: A situational analysis of an election rally in Western Mexico. *Journal of Latin American Studies*, 39(3), 595-625.
- RÉCALT, C. (2011). *Entre división y exclusión, políticas del agua en Ecuador: el ejemplo andino de Pillaro*. SIPAE.
- REIS, N. (2014). Coyotes, concessions and construction companies: Illegal water markets and legally constructed water scarcity in central Mexico. *Water Alternatives*, 7 (3), 542-560.
- RIAZ, K. (2002). Tackling the issue of rural-urban water transfers in the Ta'iz region, Yemen. *Natural Resources Forum*, 26, 89-100.
- ROBBINS, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction*. John Wiley & Sons Ltd.
- Rocheleau, D. (1995). Gender and biodiversity: A feminist political ecology perspective. *IDS Bulletin*, 26(1), 9-16.
- RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, J., y BOELENS, R. (2015). Payment for Environmental Services: mobilising an epistemic community to construct dominant policy. *Environmental Politics*, 24(3), 481-500.
- ROY, A. (2010). *The cost of living*. Vintage.
- SALGADO, G. (1989). *El Estado ecuatoriano: crisis económica y Estado desarrollista*. CORDES.
- TOBOSO, P. (2007). Empresarios y política en la dictadura de Franco. *Ayer*, 143-173.
- SANCHIS-IBOR, C., BOELENS, R., y GARCÍA-MOLLÁ, M. (2017). Collective irrigation reloaded. Re-collection and re-moralization of water management after privatization in Spain. *Geoforum*, 87, 38-47.

SANDOVAL, P. (2010). *Repensando la subalternidad: Miradas críticas desde/sobre América Latina*. IEP.

SARAIVA, T. (2016). Fascist Modernist Landscapes: Wheat, Dams, Forests, and the Making of the Portuguese New State. *Environmental History*, 21(1), 54-75.

SARMIENTO, M. (2013). *La muerte de Jaime Roldós. El largo silencio de un país*. Documental. La Maquinita-M&S Producciones.

SASSO, M. (2008). *Represas: disputas sobre el desarrollo y la sustentabilidad. El Proyecto Multipropósito Baba a la luz de la sociología de la crítica*. FLACSO, sede Ecuador.

SCAZZA, M. (2015). *The Reconfiguration of the Hydrosocial Territory of the Peninsula of Santa Elena, Ecuador a Threat to Ancestral Land*. Tesis de Maestría. Utrecht University.

SCHETTINI, R. (1991). *Crisis de la gran propiedad en Manabí, 1920-1940*. PUCE-Instituto de investigaciones económicas.

SCHLOSBERG, D. (2004). Reconceiving environmental justice: global movements and political theories. *Environmental Politics*, 13(3), 517-540.

SCHLOSBERG, D. (2011). Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario. *Ecología Política*, 41, 25-35.

SCOTT, J. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.

SCOTT, J. (1987). Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe. *Comparative Studies in Society and History*, 29(3), 417-452.

SCOTT, J. (2003). *Los dominados y el arte de la resistencia*. Ediciones Era.

SENAGUA (2012). *Informe detallado de los puntos solicitados por la Procuraduría General del Estado para la defensa del Estado ecuatoriano ante la CIDH*. SENAGUA.

SENAGUA (2014). Gestión de la Secretaría del Agua. SENAGUA.

SENAGUA y MAGAP (2013). *Proyecto agropecuario de reasentamiento «La Arabia»*. SENAGUA.

- SENPLADES (2007). *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Planificación para la revolución ciudadana.* SENPLADES.
- SENPLADES (2013). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.* SENPLADES.
- SHAH, E. (2003). *Social Design: Tank Irrigation Technology and Agrarian Transformation in Karnataka, South India.* Tesis de doctorado. Wageningen University.
- SHANIN, T. (1970). *Peasant and Peasant Societies.* Penguin.
- SILVA, P. (1997). Ascenso tecnocrático y democracia en América Latina. *Nueva Sociedad*, 152, 68-77.
- SILVA, P. (2010). *En el nombre de la razón: tecnócratas y política en Chile.* Ediciones Universidad Diego Portales.
- SIMON, M. (2013). *The Challenge of Legal Pluralism: Local Dispute Settlement and the Indian-State Relationship in Ecuador.* Tesis de doctorado. Utrecht University.
- SWYNGEDOUW, E. (1995). The Contradictions of Urban Water Provision: A Study of Guayaquil, Ecuador. *Third World Planning Review*, 17(4), 387-405.
- SWYNGEDOUW, E. (1997). Power, nature, and the city. The conquest of water and the political ecology of urbanization in Guayaquil, Ecuador: 1880-1990. *Environment and Planning A*, 29, 311-332.
- SWYNGEDOUW, E. (2004). *Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power.* Oxford University Press.
- SWYNGEDOUW, E. (2007). Technonatural revolutions: the scalar politics of Franco's hydro-social dream for Spain, 1939-1975. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 32(1), 9-28.
- SWYNGEDOUW, E. (2009). The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social Cycle. *Journal of Contemporary Water Research & Education*, 142(1), 56-60.
- SWYNGEDOUW, E. (2015). *Liquid Power: Contested Hydro-Modernities in Twentieth-Century Spain.* MIT Press.

TAMS-AHT-INTEGRAL. (1980). *Informe de los Impactos Ambientales del Embalse Daule-Peripa. Proyecto de Propósito Múltiple Daule-Peripa. Etapa de Diseño Definitivo.* TAMS-AHT-INTEGRAL.

TERÁN, J. (2005). *La sequedad del ajuste: implicaciones de la gobernanza global del agua para la seguridad humana en Ecuador.* Centro Andino de Estudios Internacionales-Universidad Andina Simón Bolívar.

TILLY, C. (1986). *The Contentious French.* Harvard University Press.

TILLY, C. (2000). Spaces of contention. *Mobilization: An International Quarterly*, 5 (2), 135-159.

TILLY, C. (2006). *Regimes and Repertoires.* Chicago University Press.

TILT, B. (2015). *Dams and Development in China: The Moral Economy of Water and Power.* Columbia University Press.

DE LA TORRE, C. (2013). El tecnopopulismo de Rafael Correa: ¿Es compatible el castrismo con la tecnocracia?. *Latin American Research Review*, 48(1), 24-43.

VALLADARES, C., y BOELENS, R. (2017). Extractivism and the rights of nature: governmentality, «convenient communities» and epistemic pacts in Ecuador. *Environmental Politics*, 26(6), 1015-1034.

VAN DIJCK, P. (2013). *The Impact of the IIRSA Road Infrastructure Programme on Amazonia.* Routledge.

VAN TEIJLINGEN, K.. (2016). The «will to improve» at the mining frontier: Neo-extractivism, development and governmentality in the Ecuadorian Amazon. *The Extractive Industries and Society*, 3(4), 902-911.

VAN TEIJLINGEN, K., LEIFSE, E., FERNÁNDEZ-SALVADOR, C., y SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, L., (Eds). (2017). *La Amazonía minada. Minería a gran escala y conflictos en el sur del Ecuador.* Universidad San Francisco de Quito-Ediciones Abya-Yala.

VAYDA, A., y RAPPAPORT, R. (1967). Ecology, cultural and non-cultural. En J. Clifton, (Ed.), *Introduction to Cultural Anthropology*, (pp. 477-497). Houghton & Mifflin.

- VELA, E., BECERRA, M., GARCÍA, S., RUIZ, G., y ROCA, P. (2014). Tecnocracias sociales: El surgimiento de una tecnocracia en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. *Politai*, 5(9), 85-106.
- VERBEEK, P. (2011). *Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things*. University of Chicago Press.
- VILLAVICENCIO, A. (2014). Un cambio neodesarrollista de la matriz energética. Lecturas críticas. En J. Cuvi (Ed.), *La restauración conservadora del correísmo*, 267-287. Arcoiris Producción Gráfica.
- Vos, J., y BOELENS, R. (2014). Sustainability Standards and the Water Question. *Development and Change*, 45(2), 205-230.
- WARNER, J., HOOGESTEGER J., e HIDALGO, J. (2017). Old Wine in New Bottles: The Adaptive Capacity of the Hydraulic Mission in Ecuador. *Water Alternatives*, 10(2), 322-340.
- WATKINS, K., CARVAJAL L., COPPARD D., FUENTES, R., GHOSH, A., y GIAMBERARDINI, C. (2006). *Human Development Report 2006: Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis*. United Nations Development Programme.
- WATTS, M. (1983). On the poverty of theory: Natural hazards research in context. En K. Hewitt (Ed.), *Interpretations of Calamity from the Viewpoint of Human Ecology*, 231-62. Allan & Unwin.
- WATTS, M. (2000). Political ecology. *A Companion to Economic Geography*, 257-274.
- WATTS, M. (2015). The origins of political ecology and the rebirth of adaptation as a form of thought. En T. Perreault, G. Bridge y J. McCarthy (Eds.), *The Routledge Hand Book of Political Ecology*, (pp. 19-50). Routledge.
- WCD (2000). *Dams and Development: A New Framework for Decision-making: the Report of the World Commission on Dams*. Earthscan.
- WEBER, M. (2007). *Sociología del poder: los tipos de dominación*. Alianza Editorial.
- WEISS, R. (1994). *Learning from Strangers*. The Free Press.

WESTER, P., RAP, E., y VARGAS-VELÁZQUEZ, S. (2009). The hydraulic mission and the Mexican hydrocracy: Regulating and reforming the flows of water and power. *Water Alternatives*, 2(3), 395-415.

WINNER, L. (1980). Do artifacts have politics?. *Daedalus*, 109(1), 121-136.

WINNER, L. (1993). Upon opening the black box and finding it empty: Social constructivism and the philosophy of technology. *Science, Technology, & Human Values*, 18(3), 362-378.

WINNER, L. (2014). Technologies as Forms of Life. En R. Sandler (Ed.), *Ethics and Emerging Technologies*, (pp. 48-60). Palgrave Macmillan.

WITTOGEL, K. (1981). *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. Vintage Books.

YATES, J., y BAKKER, K. (2013). Debating the «post-neoliberal turn» in Latin America. *Progress in Human Geography*, 38(1), 62-90.

ZAPATTA, A. (2006). *Elementos en torno a la institucionalidad para la gestión del agua en Manabí*. Foro de Recursos Hídricos de Manabí.

ZIBECHI, R. (2006). IIRSA: la integración a la medida de los mercados. *Ecología política*, 31, 19-26.

ZWARTEVEEN, M. (2015). *Regulating Water, Ordering Society: Practices and Politics of Water Governance*. University of Amsterdam.

ZWARTEVEEN, M. (2017). Hydrocracies, Engineers and Power: Questioning Masculinities in Water. *Engineering Studies*, 9(2), 78-94.

ZWARTEVEEN, M., y BOELENS, R. (2014). Defining, researching and struggling for water justice: some conceptual building blocks for research and action. *Water International*, 39(2), 143-158.

ANEXOS

ANEXO 1

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA CADA ESTUDIO DE CASO, REFLEXIONES METODOLÓGICAS FINALES Y RECOMENDACIONES PARA UNA INVESTIGACIÓN FUTURA

Metodología por cada estudio de caso

Investigación en el sistema multipropósito Daule-Peripa

El trabajo de campo para este caso se realizó en dos períodos. El primero fue entre finales de junio y agosto del 2014, y el segundo, entre agosto e inicios de octubre del 2015. Debido a mi experiencia laboral previa, ya contaba con un conocimiento general sobre este sistema desde la experiencia del Estado y con varios contactos en la tecnocracia. Por esta razón decidí que mi punto de partida fuesen las comunidades locales ubicadas en el interior del embalse, sobre quienes apenas conocía, a través de informes de ONG, artículos de prensa y una corta visita que hice a finales del 2010 con el equipo de la SENAGUA. Entré a la zona a través del contacto que me facilitó un amigo activista ambiental, quien había trabajado en procesos de denuncia y reparación socioambiental con los afectados. Una vez establecido el primer contacto en Barraganete (mapa 1), los demás informantes fueron escogidos por el método de «bola de nieve». Durante casi todo el tiempo de campo, mi base fue Barraganete. Solamente una semana permanecí en el recinto El Mate acompañando a un profesor rural. Desde Barraganete me movilicé a seis otras comunidades: Paloma de Salazar, El Mate, La Mina, Tres Gritos, Pescadillo y Carlos Julio Arosemena. Debido a lo extenso del embalse y sus laberinticos brazos, siempre estaba acompañado de un guía local. Durante los meses de campo acompañé a campesinos, comerciantes y líderes comunitarios en sus actividades diarias y a reuniones en la Junta Parroquial de Barraganete o en las otras comunidades.

Además, realicé varias visitas a oficinas de la SENAGUA y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) para las entrevistas con altos funcionarios y recolección de información. En total realicé cuarenta y cinco entrevistas y conversaciones informales con técnicos y altos funcionarios del Gobierno, representantes del Gobierno parroquial de Barraganete, representantes de ONG ambientalistas, habitantes afectados por la represa dentro del embalse y líderes locales. Para conocer la realidad e historia de la península de Santa Elena trabajé en la cosupervisión de la tesis de maestría de Margherita Scazza, Universidad de Utrecht (Scazza 2015). La variedad de actores con la que interactué me permitió triangular información y validarla en un taller realizado en la Universidad Central del Ecuador, con participación de líderes locales y, otro, en Paloma de Salazar. Para este caso la información fue organizada y analizada en base a dos ejes focales: i) cómo el sistema fue una construcción sociotécnica con base en principios y visiones tecnocráticas y ii) los efectos socioambientales ocasionados, tanto en las comunidades ubicadas en el embalse, y en otros componentes como sistemas de riego de la península de Santa Elena.

Investigación en el sistema multipropósito Baba

Para realizar el trabajo de campo de este caso tuve como base la parroquia rural Patricia Pilar (mapa 1) y las comunidades campesinas y afrodescendientes cercanas. Entre las comunidades y recintos visitados están La Ceiba, Peripa del Baba, Corriente Grande, La Morena, Cristo Rey, Angostura, Santa Rosa, Poza Honda, Aguas Frías, Tigre Alto y Fátima. La estancia de investigación fue entre octubre del 2015 y abril 2016, y un mes adicional en septiembre 2017. En este caso no tuve un guía local. A diferencia del anterior caso, sobre este no tenía casi ningún conocimiento. No obstante, inicié con parte de los resultados preliminares de la tesis de maestría de Louisa Nelle de la Universidad de Wageningen, en la cual participé como cosupervisor. Este caso incluyó treinta y seis entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales. Incluyeron campesinos que formaban parte del movimiento de resistencia, campesinos a favor del megaproyecto, familias reasentadas, dirigentes, técnicos, representantes de ONG, políticos y académicos críticos. En las comunidades locales, los informantes fueron escogidos mediante «bola de nieve» y aquellos vinculados a instituciones públicas como CELEC-EP o políticos fueron seleccionados a través de contactos de mi experiencia laboral previa. Parte del proceso investigativo incluyó la realización de un documental con una familia afrodescendiente. La sistematización y análisis de la

información se fundamentó en tres aspectos focales: i) los cambios en los diseños del proyecto a lo largo del tiempo, ii) el proceso de organización del movimiento social antirepresa y iii) el grado influencia que este tuvo sobre los diseños finales del proyecto.

Investigación en el sistema multipropósito Chone

En el año 2011 colecté información técnica, de gestión del proyecto y socioambiental mediante participación directa en reuniones oficiales sobre el proyecto multipropósito en las oficinas de la SENAGUA en Quito y Chone. Entre diciembre del 2014 y abril 2015 realicé trabajo de campo con base en la ciudad de Chone (mapa 1). Durante este período visité varias familias en el área que ahora está sumergida bajo las aguas del embalse, entre ellas estuvieron: El Jobo, Platanales, Limón, Sánchez, Sol esté, La Ñarusa, El Aguacate, El Ceibo, El Achiote, Cañitas y Juan Callo. Este período incluyó una estancia de quince días en la casa de una familia campesina ubicada frente al sitio de presa y una de tres semanas en la comunidad del milenio Ciudad Jardín. El sistema multipropósito Chone, a diferencia de los otros casos que involucraron un proceso de reconstrucción histórica importante, estaba en construcción e implementación durante mi período de investigación de campo. Esto exigió un registro etnográfico más extenso y detallado sobre la experiencia de las comunidades locales, pero también de la tecnocracia gubernamental. En julio del 2016 realicé un proceso de validación y complementación mediante entrevistas a actores clave. Mis entrevistados fueron seleccionados con base en la revisión de información secundaria y al método bola de nieve. Con un total de cuarenta y dos entrevistas, la investigación incluyó información tanto de actores en oposición, a favor de la represa y «neutrales». El análisis se basó en tres ejes focales: i) análisis discursivo de legitimación y contestación en torno al megaproyecto, ii) proceso organizativo del movimiento de resistencia, y iii) estrategias gubernamentales de implementación del megaproyecto. Al final del período de campo coorganicé, junto al Foro de Recursos Hídricos de Manabí, un conversatorio sobre el proyecto en la Universidad Laica Eloy Alfaro (con sede Chone), con participación de pobladores, profesores universitarios, representantes de ONG y los técnicos encargados del área socioambiental del megaproyecto.

Reflexiones sobre la metodología y mi posicionamiento

Cada investigación involucra un proceso continuo de toma de decisiones acerca de la metodología, los métodos y sobre la posicionalidad del investigador/a. Tales decisiones, sin duda, tienen influencia sobre la forma de recolección de información, su análisis y como se presentan los resultados. Con el fin de transparentar dicho proceso de toma de decisiones, a continuación presento algunas reflexiones metodológicas y sobre mi posicionalidad «dentro» y/o «frente» a «lo» investigado.

Como primer aspecto a considerar es mi experiencia profesional como funcionario público de la SENAGUA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, antes del inicio de la investigación. Esa experiencia, como funcionario público, tuvo una importante influencia en el inicio de mi investigación, en la forma cómo interactuaba con varios de mis interlocutores durante el proceso investigativo y en la forma de aproximación a la problemática. Ante todo, considero que fue una posición privilegiada. Sin bien es cierto, en los inicios yo no estaba decidido sobre mi investigación. Los eventos en los que participé como reuniones con comunidades «beneficiarias» de los futuros megaproyectos, con organismos multilaterales de financiamiento, otros órganos de gestión y acceso a información coadyuvaron a definir mi interés en el tema. Cuando se realiza una investigación crítica comúnmente es muy difícil acceder a información y actores con gran capacidad de movilización de poder. En mi caso, este aspecto, no fue un problema. Mi decisión fue aprovechar al máximo esa experiencia para enriquecer mi entendimiento «desde adentro» sobre el desarrollo de megaproyectos. Sin embargo, a veces me cuestionaba acerca de la ética detrás de utilizar información muchas veces «confidencial» y aprovechar la familiaridad que tenían mis interlocutores para acceder a entrevistas largas y muy interesantes. Por otro lado, el ingreso a otro tipo de organizaciones a veces se me complicó; por ejemplo, con actores clave de la resistencia y organizaciones ecologistas no gubernamentales. Para superar tanto mis cuestionamientos éticos frente a mis excolegas como con los actores subalternos, mi decisión fue ser lo más transparente posible acerca de mi interés investigativo y mi experiencia previa. Esto permitió que en ambos espacios, mi presencia no sea totalmente rechazada: construir y demostrar confianza fue la clave para avanzar con mi trabajo.

El segundo aspecto que merece una reflexión es cómo mi simpatía por grupos vulnerables y cómo el ser académico crítico influyen en el proceso investigativo. En el desarrollo de megaproyectos hídricos sin cuestionamientos,

incluso sus más acérrimos promotores reconocen que existen impactos negativos que recaen sobre ciertos grupos poblacionales. Muchas veces, durante el trabajo de campo como a lo largo del proceso de escritura, me detuve ansioso para cuestionarme acerca de mi posición como una persona con apego hacia las luchas de los grupos marginados. No quería que tal posición represente un sesgo en mi proceso analítico y presentación de resultados; sin embargo, tal posición sin duda, tiene una influencia sobre mi trabajo investigativo. En alguna medida, en mi caso, tal influencia se ha visto balanceada debido a que en algún momento estuve del lado de los «promotores» y del oficialismo. A lo largo de mi investigación aprendí que ser tecnócrata pro-megaproyectos hídricos no excluye estar inclinado a las luchas de los más vulnerables: los seres humanos, que trabajamos en torno a temas de «desarrollo», no dejamos de tener sensibilidad ante la injusticia; pero, por supuesto, orientada por diversos y variados puntos de vista. Por ejemplo, uno de los jefes socioambientales de uno de los proyectos investigados estaba convencido de que mediante la construcción de la megaobra ayudaría a aquellas personas, en posición de marginalidad, a salir de tal situación. Si bien creo que mi investigación y el enfoque que seleccioné para entender la realidad (ecología política, poder y SCOT) son altamente influenciados por mi apego hacia transparentar las injusticias socioambientales, considero que, a través de mi investigación, he logrado presentar ciertos matices, porque conozco de cerca o «desde adentro» los distintos lados de la problemática.

El tercer aspecto es sobre mis propios aprendizajes sobre la realización de un estudio histórico y comparativo en la temática de megaproyecto hídricos. Aunque este punto ya lo he venido abordando a lo largo del libro, creo que merece un espacio particular de reflexión metodológica. Frecuentemente los estudios de megaproyectos hídricos son tomados de manera individual y muchas veces descontextualizados. Esto hace que el entendimiento del proyecto sea limitado a su espacio y tiempo específicos. El abordaje histórico, no de solo uno sino de varios megaproyectos, ha permitido interconectar instituciones, personas, epistemología y «lógicas» que guían, informan y transforman tales proyectos. Al mismo tiempo ha permitido entender no solo la problemática en torno a la tecnología, sino al contexto sociopolítico en el cual está inmersa. Una perspectiva histórica, por tanto, permite encontrar mayores sustentos para explicar fenómenos que surgen en el pasado pero que continúan en el presente.

El aspecto final es acerca de seguir las trayectorias de vida de los participantes de la investigación y sus redes. Este estudio se ha enriquecido mucho de las historias de vida y trayectoria de individuos y sus redes epistémicas, y

de lucha social. Muchas veces, hacer investigación en nuestro campo del conocimiento involucra hacer entrevistas a varios actores, pero frecuentemente son encuentros de una sola vez o máximo dos. Con varios de mis interlocutores decidí seguirlos a lo largo de la investigación, lo cual involucró mi participación activa en sus actividades y la realización de múltiples entrevisitas. Esto me permitió conocer su trayectoria en conexión con aspectos más amplios de lucha social, en el caso de actores de movimientos sociales; y sueños megahidráulicos, en el caso de añosos ingenieros hidráulicos. En ambos casos, sus historias de vida permiten entender, de manera personificada, los procesos socioambientales más amplios, que de otro modo quedarían sin cara, sin nombres y apellidos. Tanto las políticas megahidráulicas, los movimientos sociales que las cuestionan y aquellas personas afectadas por tales interacciones tienen como protagonistas a personas individuales y sus redes de conocimiento y verdad; por tanto, el trabajo profundo con historia de vida y trayectorias se vuelve fundamental.

Recomendaciones para una investigación futura

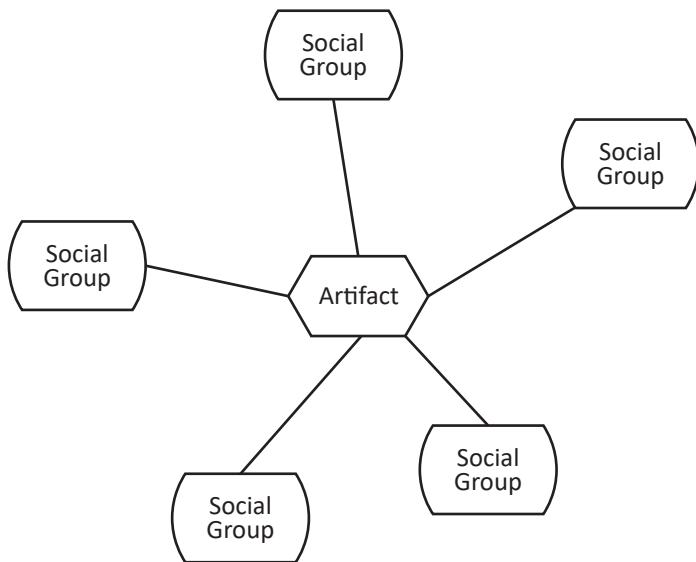
A lo largo de este proceso de investigación, los diferentes actores que intervienen, desde el Estado y sus aliados, han sido investigados, así como los actores subalternos, las comunidades locales, ONG e intelectuales populares. Sin embargo, es necesario profundizar más en el rol y capacidad de influencia de los actores así como la gran agroindustria monocultural sobre el desarrollo de las megaobras como las represas, trasvases de agua, grandes sistemas de riego, etc. A partir de las observaciones preliminares de esta investigación parece que estos actores pueden tener una posición difícil de definir, pero que pueden ser muy importantes en el impulso y desarrollo de las megaobras hídricas. Por un lado, son actores que pueden jugar a apoyar, en cierta medida, las luchas locales y, por otro lado, están dentro de instituciones con poder de decisión sobre las políticas gubernamentales. Se necesita realizar investigación de tipo etnográfica y con enfoque histórico de este tipo de actores, en relación con su capacidad de influencia sobre el desarrollo de megaproyectos hídricos. Tal como muestra el caso ecuatoriano, a lo largo de los años, los actores que financian este tipo de obras han variado (Warner, Hoogesteger e Hidalgo 2017). En la región, un actor importante ha sido y sigue siendo China, tanto con sus bancos como con sus empresas constructoras. Con el giro hacia la derecha de la mayoría de los Gobiernos de la región, entender cómo el gigante asiático financia y promueve este tipo de obras

es crucial. Profundizar en sus capacidades de influencia y de inmiscuirse en la política nacional megahidráulica, así como en sus consecuencias, es una tarea pendiente para las próximas investigaciones.

En investigaciones futuras recomiendo estudiar la relación entre los megaproyectos hidráulicos y la expansión de la frontera extractivista en la Amazonía ecuatoriana. En los últimos diez años, gracias al *boom* de las *commodities*, el Ecuador ha experimentado un incremento en la construcción de megaproyectos hidráulicos (en especial hidroeléctricas) y la proliferación de conflictos por industrias extractivas en esta nueva frontera (Arsel, Hoogenboom y Pellegrini 2016; Van Teijlingen *et al.* 2017). Existen estudios más generales que engloban esta problemática en toda la cuenca amazónica (p. ej.: Finer y Jenkins 2012); sin embargo, estudios históricos, etnográficos y contextuales del caso ecuatoriano todavía son escasos. Finalmente, el abordaje histórico utilizado en este libro ha probado ser útil para entender los matices, actores y factores que han informado el desarrollo de los megaproyectos hidráulicos en Ecuador. Por ejemplo, haber conocido cómo, quiénes y de qué manera se desarrollaron este tipo de proyectos, antes del Gobierno de la Revolución Ciudadana, permitió darme cuenta de una crítica matizada de sus políticas y prácticas, de sus continuidades y discontinuidades. Por este motivo, en estudios futuros realizados desde la ecología política del agua, recomiendo incluir este abordaje, incluso si «únicamente» se quiere entender un fenómeno en el «presente».

ANEXO 2

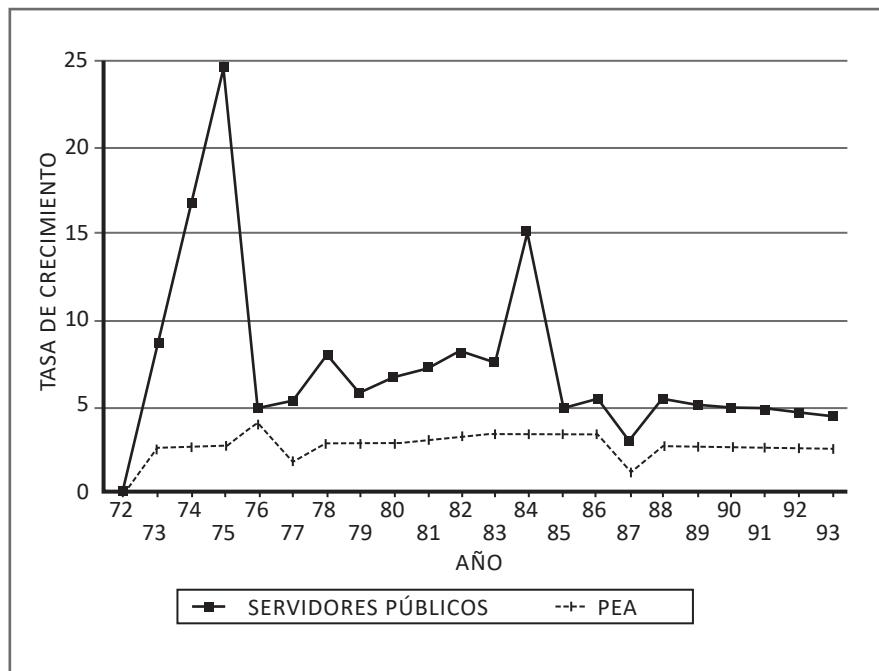
LA RELACIÓN ENTRE EL ARTEFACTO Y LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES RELEVANTES EN BIJKER¹



1. Hughes y Pinch (2012, 29).

ANEXO 3

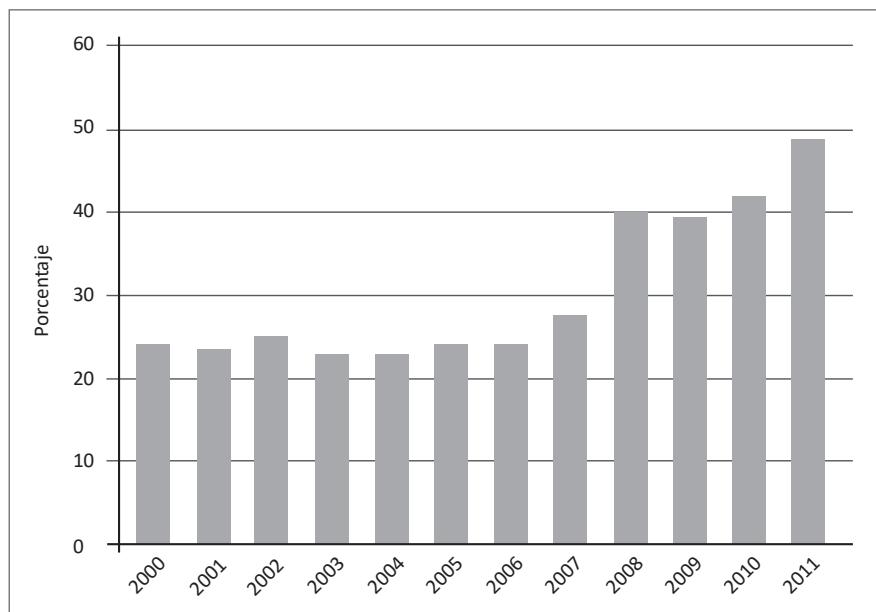
**TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO
DURANTE GRAN PARTE
DEL PERÍODO DESARROLLISTA**



Fuente: Araujo-Moreno 1994, 23.

ANEXO 4

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (PORCENTAJE DEL PBI) DURANTE EL PERÍODO PROGRESISTA¹



1. Fuente: (Ospina Peralta 2013, 200).

ANEXO 5

PERFILES DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS DE ESTADO MÁS IMPORTANTES DURANTE EL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

| NOMBRE | CARGO | FORMACIÓN |
|-----------------------------|--|---|
| Nathalie Cely Suárez | Ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, embajadora en EEUU. Además, fue ministra coordinadora de Desarrollo Social. | Economista (Universidad Católica de Guayaquil); maestría en Administración Pública (Universidad de Harvard, EEUU.). |
| Jorge Glas | Ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Vicepresidente. | Ingeniero en Electricidad y Electrónica (Universidad Politécnica del Litoral, Ecuador). |
| Fernando Bustamante | Ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa. | Sociólogo (Universidad Católica de Chile); maestría en Planificación Económica y Social (Universidad de Harvard). |
| Diego Borja | Ministro Coordinador de Política Económica. | Economista (Universidad Católica del Ecuador); maestría en Universidad Católica de Louvain-la-Neuve, Bélgica. |
| Ricardo Patiño | Ministro en varias carteras de Estado y canciller. | Economista (Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, México); máster en desarrollo económico (Universidad Internacional de Andalucía, España). |
| María de los Ángeles Duarte | Ministra en varias carteras de Estado entre ellas Transporte, Vivienda e Inclusión Económica y Social. | Arquitecta y máster en administración de empresas constructoras e inmobiliarias (Universidad Católica de Guayaquil). |

| | | |
|------------------|--|---|
| Esteban Albornoz | Ministro de Electricidad y Energía Renovable. | Ingeniero eléctrico (Universidad de Cuenca); PhD en ingeniería eléctrica (Universidad Nacional de San Juan, Argentina). |
| Fander Falconí | Secretario nacional de Planificación y Desarrollo, ministro de Relaciones Exteriores. | Economista (Universidad Católica del Ecuador); maestría en Economía (FLACSO) y PhD en Economía Ecológica (Universidad Autónoma de Barcelona). |
| René Ramírez | Secretario nacional de Planificación y Desarrollo; y de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | Economista. Máster en Economía (Universidad Erasmus de Rotterdam, iss); PhD en Sociología con especialización en Relaciones de Trabajo, Desigualdades Sociales y Sindicalismo (Universidad de Coimbra, Portugal). |
| Walter Solíz | Secretario nacional del Agua. | Ingeniero civil (Universidad de Guayaquil); máster en Gestión Ambiental (Fundación Universidad Iberoamericana). |

Elaboración: propia.

ANEXO 6

IDEOLOGÍA Y MOTIVACIONES DEL DESARROLLO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL GUAYAS CON RELACIÓN A LA TVA

EL COMERCIO

DIARIO INDEPENDIENTE

Fundado el 1º de Enero de 1906

Publicación de la Cia. Anónima "EL COMERCIO"

CARLOS MANTILLA, Director-Fundador
CARLOS MANTILLA ORTEGA, Subdirector-Gerente
JORGE MANTILLA ORTEGA, Subdirector-Gerente

ANO LVIII — QUITO, MARZO 4 DE 1963 — Nº 21.336

El desarrollo integrado de la cuenca del Guayas

Por Felipe Orellana Albán,
Economista Agrícola

En diversas oportunidades he expresado la idea de que el desarrollo integrando de la Cuenca del Guayas debe merecer la más alta prioridad del Poder Público, y me siento complacido de que, después de haber puesto en manos del Ministro de Fomento del Ecuador en la reunión que tuvo lugar en Punta del Este en agosto de 1961, un documento que contenía los lineamientos generales sobre cómo se iba a implementar una forma concreta. Ahora, una Misión de la Organización de los Estados Americanos se ha encargado de preparar los términos de referencia para un detallado estudio de los problemas económicos, sociales y de ingeniería que se presentan. Una serie de gestiones conducirán a la obtención de la asistencia técnica y del financiamiento necesarios para su ejecución.

Así, después de una serie de gestiones que probablemente se iniciaron en 1959 o principios de 1960, la afortunada coincidencia de encontrarse ocupando la Presidencia de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica un ciudadano de penetrante visión como es Don Clemente Yerovi, ideó el desarrollo integrado de la Cuenca del Guayas convirtiéndose ya en una aspiración ecuatoriana.

No cabe lamentar la postergación que ha recibido este importantísimo proyecto, postergación que sería preferible atribuirla a la falta de conocimiento del planificado que tiene el desarrollo integrado de una Cuenca Hidrográfica. De otra manera, el Ecuador, siguiendo los múltiples ejemplos que ofrecen otros países, lo hubiera concedido la prioridad que realmente merece para una nación que hasta ahora no ha descubierto el hecho de que el sistema hidrográfico del Guayas es el más importante del Ecuador y de toda la Costa Occidental de América del Sur.

En 1956, el Consejo Económico

de las Naciones Unidas y Social de las Naciones Unidas constituyó un grupo de expertos de renombre mundial para que estudiase las consecuencias de los cambios administrativo, económico y social del aprovechamiento coordinado de las cuencas fluviales". Desde entonces, en el ámbito internacional se reconoce que el aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas implica que han de realizarse los siguientes objetivos de una manera coordinada, teniendo en cuenta las posibilidades de riego y drenaje, la producción de electricidad, los usos industriales, el mejoramiento de la navegación fluvial, la defensa contra las inundaciones y las sequías, las relaciones entre los recursos naturales, los usos domésticos de las aguas y otras más que, en conjunto, permiten el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y, consecuentemente, el progreso económico y social de un país. Pero en la letra de fondo del informe del Comité de Planeamiento de la Cuenca del Guayas, sin duda del Ecuador, puesto que su desarrollo ejercerá sin duda efectos dinámicos de naturaleza económica y social que trascenderán más allá de las fronteras, a todas las regiones del país.

De manera que ahora ya no cabe tampoco discutir si la Cuenca del Guayas, que es un ejemplo típico de zona hidrográfica de vastas posibilidades de desarrollo integrado, merece o no atención. Debemos, sin embargo, aceptarlo de que la Cuenca del Guayas, como proyecto de desarrollo regional, debe recibir la más alta prioridad del Poder Público y, por lo tanto, deben tomarse las medidas conducentes a su ejecución coordinadas con las demás obras. ¿Cuáles serían esas medidas? En primer lugar, una vez que la Alianza de la OEA ha preparado los términos de referencia, el Gobierno debe proceder a solicitar a los organi-

mos de la Alianza para el Progreso la asistencia técnica y el financiamiento para los estudios, y digo que a los organismos de la Alianza para el Progreso, porque la Caja de Pensiones del Estado, que es el documento que se contempla, entre las medidas a corto plazo para el progreso económico y social, el apoyo a la ejecución de nuevos proyectos, considera el caso de desarrollo de la cuenca hidrográfica del Guayas.

En segundo término, sería conveniente que el Ejecutivo proceda a organizar una Autoridad, similar a la Autoridad del Puerto de Guayaquil, para que se encargue de realizar los estudios y elaborar los planes para las obras de desarrollo integral de la Cuenca del Guayas. En esa organización, que podría llamarse Autoridad de la Cuenca del Guayas podrían tener representación todas las autoridades comprendidas en ella, incluyendo la propia Caja de Pensiones, y además las autoridades de las obras de desarrollo integral de la Cuenca del Guayas.

Una vez establecida la Corporación para la ejecución de los estudios económicos y de ingeniería con la participación del Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento y de algunas firmas de consultores de reconocido prestigio.

En la actualidad, después de 8 años de trabajo, se ha creado la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Esta corporación nació para un grupo de ciudades del Departamento del Valle del Cauca, en Colombia, a cargo de la Corporación Autónoma Regional del mismo nombre establecida en octubre de 1954. La creación de esta Corporación convirtió a la región en la corporación más grande que existe en el mundo, y constituyó una experiencia que el Ecuador debería aprovechar sin dilaciones. El desarrollo integrado de la Cuenca del Guayas debe ser pues, no solamente una aspiración ecuatoriana sino una responsabilidad que el Poder Público debe cumplir para beneficio económico y social de la población.

Washington, D. C., 13 de febrero de 1963.

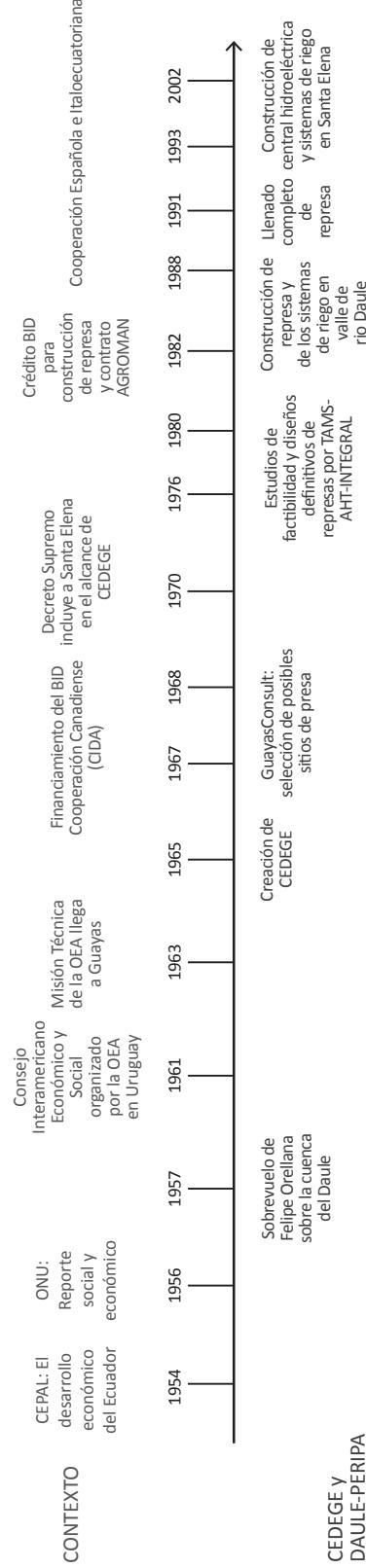
de los Estados Unidos: David E. Lilienthal. Invitado por el Gobierno de Colombia, el señor Lilienthal, llegó a la conclusión de que Colombia debía proceder para un proceso integrado de la cultura, la industria y del bienestar social, no solamente del Valle sino de toda Colombia; residieron en la creación de una Corporación o Autoridad de Desarrollo Regional que aproveycharía los recursos naturales y modernizara los recursos naturales del Valle". Inmediatamente, el Gobierno colombiano designó un Comité de Desarrollo del Valle, que se encargó de redactar los estatutos de la Corporación Autónoma y someterlos al Congreso, y de establecer la autoridad de la República, y de preparar un programa de actividades de la nueva organización, en consulta con los Departamentos de Caldas, Valle y Cauca.

Una vez establecida la Corporación para la ejecución de los estudios económicos y de ingeniería con la participación del Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento y de algunas firmas de consultores de reconocido prestigio.

En la actualidad, después de 8 años de trabajo, se ha creado la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Esta corporación nació para un grupo de ciudades del Departamento del Valle del Cauca, convenciones de la potencialidad de desarrollo integrado de la zona y su contribución al fortalecimiento económico de Colombia. La creación de esta corporación nació para una autoridad que se creó en 1954 y constituyó una experiencia que el Ecuador debería aprovechar sin dilaciones. El desarrollo integrado de la Cuenca del Guayas debe ser pues, no solamente una aspiración ecuatoriana sino una responsabilidad que el Poder Público debe cumplir para beneficio económico y social de la población.

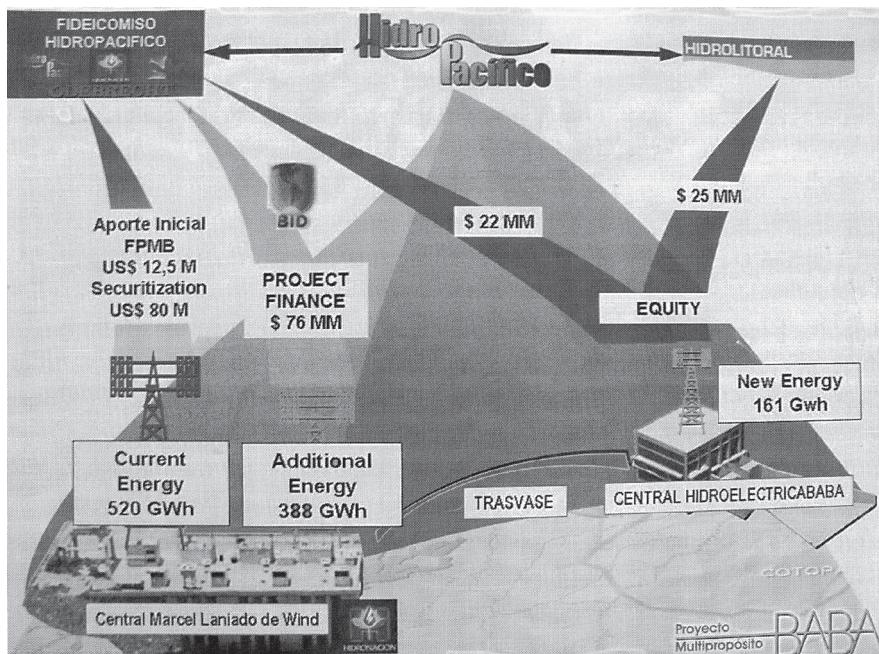
ANEXO 7

ASPECTOS CLAVES DE LA HISTORIA DE LA CEDEGE Y DEL SISTEMA DAULE-PERIPA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL



ANEXO 8

MODELO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO-PRIVADO DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA DURANTE EL PERÍODO NEOLIBERAL



Fuente: archivo CELEC-EP.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

| | |
|--|--|
| AE: Acción Ecológica | CMR: Comisión Mundial de Represas |
| AIDA: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente | CMS: Coordinadora de Movimientos Sociales |
| ARCA: Agencia de Regulación y Control del Agua | CNRH: Consejo Nacional de Recursos Hídricos |
| AVSF: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. | CODELORO: Corporación de Desarrollo de El Oro |
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | CODERECH: Corporación de Desarrollo Regional de Chimborazo |
| BM: Banco Mundial | CODERECO: Corporación de Desarrollo Regional de Cotopaxi |
| BNDES: Banco de Desarrollo de Brasil | CONADE: Consejo Nacional de Desarrollo |
| CAF: Corporación Andina de Fomento | CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador |
| CAIC: Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público del Ecuador | CONFENASSC-CNC: Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina |
| CCRG: Comunidades Campesinas de Río de Grande | COORDENAGUA: Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Naturaleza en la Cuenca del Río Guayas |
| CDES: Centro de Derechos Económicos y Sociales | CORSICEN: Corporación Sierra Centro |
| CEDEGE: Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas | CORSINOR: Corporación Regional de Desarrollo de la Sierra Norte |
| CEDENMA: Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente | CRD: Corporaciones Regionales de Desarrollo |
| CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España | CRM: Centro de Rehabilitación de Manabí |
| CEH: Centro de Estudios Hidrográficos de España | EEEP: Empresa Pública Ecuador Estratégico |
| CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador | EIA: Estudios de Impacto Ambiental |
| CEPAL: Comisión Económica para América Latina | ELAW: Alianza Mundial para el Desarrollo Ambiental (por sus siglas en inglés) |
| CHL: Consorcio Hidroenergético del Litoral | EPA: Empresa Pública del Agua |
| CIDA: Agencia Canadiense de Cooperación para el Desarrollo | FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (por sus siglas en inglés) |
| CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos | FIAN: FoodFirst Information and Action Network (por sus siglas en inglés) |
| CISPDR: Changjiang Institute Survey, Planning, Design & Research de China | |

| | |
|---|--|
| FMI: Fondo Monetario Internacional | OEA: Organización de Estados Americanos |
| FOCUR: Federación de Organizaciones Campesinas y Urbanas de Los Ríos | ONG: Organización No Gubernamental |
| GAD: Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador | PAIS: Patria Altiva i Soberana |
| H2O: Símbolo químico del agua | PHIMA: Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Provincia de Manabí |
| ICOLD: Comisión Internacional de Megarepresas (por sus siglas en inglés) | PIB: Producto Bruto Interno |
| IERAC: Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización | PMA: Planes de Manejo Ambiental |
| IGM: Instituto Geográfico Militar | PREDESUR: Programa Regional para el Desarrollo del Sur |
| IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana | REDLAR: Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua |
| INECEL: Instituto Ecuatoriano de Electrificación | SCOT: Teorías sobre la construcción social de la tecnología (por sus siglas en inglés) |
| INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre | SEGURA: Asociación de Trabajadores Agrícolas Afroecuatorianos SEGURA |
| INERHI: Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos | SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua |
| INREDH: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos | SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador |
| ISI: Política Nacional de Industrialización por Sustitución de Importaciones | SODENA: Sociedad de Defensa de la Naturaleza |
| JUNAPLA: Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica | STS: Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (por sus siglas en inglés) |
| MAB: Movimiento de Afectados por Represas (Por sus siglas en portugués) | TVA: Tennessee Valley Authority. |
| MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador | TYPSA: Técnica y Proyectos S.A. |
| MICSE: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos | USAID: Agencia Estadounidense de Apoyo al Desarrollo Internacional (Por sus siglas en inglés) |
| MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador | USAID: Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Por sus siglas en inglés) |
| | USD: Dólares americanos (por sus siglas en inglés) |

NOTA SOBRE EL AUTOR

JUAN PABLO HIDALGO BASTIDAS es ingeniero agrónomo por la Universidad Central del Ecuador. Es doctor en Ecología Política por la Universidad de Ámsterdam y es máster en Gestión Internacional de Agua y Tierra por la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Actualmente es profesor de Gestión de Agua, investigador y coordinador del programa de maestría en Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la Universidad Central del Ecuador. Juan Pablo es además miembro del Foro de Recursos Hídricos del Ecuador y consultor en política pública y gestión comunitaria de gestión de agua y riego. Su investigación gira en torno al estudio crítico de la gobernanza del agua y de las relaciones de poder que condicionan su control, acceso y distribución. Su trabajo particularmente abarca el estudio de conflictos socioambientales, el papel de las hidrocracias y de los movimientos sociales, y el rol de la tecnología hídrica en las relaciones sociedad-naturaleza. Desde esta perspectiva sus aportes buscan contribuir a una gestión del agua más justa y equitativa. Juan Pablo ha publicado artículos y capítulos de libros en Cambridge University Press, World Development, Water Alternatives, International Water, Water, Editorial Abya-Yala, Water History, Cuadernos de Geografía, entre otros. Es además revisor de varias revistas nacionales e internacionales, y es miembro investigador de la Alianza Justicia Hídrica (<http://justiciahidrica.org/>) y de la Red Water-Lat-Gobacit (<http://waterlat.org/es/>).

Correos electrónicos: juanhidalgo_b@hotmail.com / jphidalgob@uce.edu.ec



LA ALIANZA «JUSTICIA HÍDRICA»



Parece que el agua fluye en dirección al poder, acumulándose muchas veces en manos de unos cuantos usuarios dominantes en sectores favorecidos. La distribución injusta del agua se manifiesta no solo en términos de pobreza, sino que también constituye una grave amenaza para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Justicia Hídrica tiene como objetivo contribuir a la justicia en el tema del agua, en forma de políticas hídricas democráticas y prácticas de desarrollo sostenibles que apoyen una distribución equitativa del agua. Consta de una amplia alianza internacional de investigación, capacitación y acción política que conecta estratégicamente la investigación comparativa e interdisciplinaria sobre los mecanismos de acumulación y conflictos de agua. También busca traducir estos conocimientos hacia la capacitación y concientización de un conjunto crítico de profesionales de agua, líderes de usuarios de agua y hacedores de políticas. Además, como fin principal, quiere acompañar a las estrategias de la sociedad civil enfocadas a mejorar la posición de los grupos con menos derecho y voz en el tema del agua.

Uno de los componentes claves de la alianza es la realización de investigaciones comparativas y estimular procesos de aprendizaje interactivo a través de una red de investigación-acción multiactor. Esto se hace en colaboración con organizaciones de usuarios de agua indígenas y campesinas, en contextos concretos. De esta manera se busca adquirir un conocimiento más profundo sobre:

- ♦ la dinámica y los mecanismos de los procesos de acumulación de agua y de derechos de agua, en términos de clase, género y etnidad;

- ◆ el contenido, la naturaleza, la dinámica y las contradicciones estructurales de los conflictos resultantes; y
- ◆ las oportunidades para las estrategias multiescala de organizaciones de base y actores de la sociedad civil que buscan maneras de hacer frente a la injusticia hídrica y resolver conflictos relacionados con el agua, relacionando diferentes ámbitos institucionales y políticos.

El proyecto teórico y político-social de la alianza consiste en estudios de caso comparativos de varios países de América Latina, pero también de Asia, África, Europa y América del Norte. El afán es buscar una combinación de trabajo teórico de vanguardia con la capacitación, la difusión y la incidencia política, para identificar, entender y hacer frente a los procesos de acumulación y conflictos de agua, apoyando al diseño interdisciplinario de estrategias de desarrollo de agua, que apoyen a los grupos de usuarios política y económicamente más vulnerables, y al desarrollo más equilibrado a más largo plazo.

Página Web: <www.justiciahidrica.org>